

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

El paisaje periurbano: transformaciones, complejidad, percepciones e imaginarios en la localidad de Usme

Diana Paola Cano Malaver

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Económicas, Instituto de Estudios Ambientales IDEA
Bogotá, Colombia
2017

El paisaje periurbano: transformaciones, complejidad, percepciones e imaginarios en la localidad de Usme

Diana Paola Cano Malaver

Trabajo final de maestría presentado como requisito parcial para optar al título de:

Magister en Medio Ambiente y Desarrollo

Directora:

Ingeniera Geógrafa, MSc en recursos hídricos, PhD (c) en Geografía

Susana Barrera Lobatón

Codirector:

Doctor en Ingeniería Ambiental, Magister en Medio Ambiente y Desarrollo, Especialista

en Gestión Ambiental

Javier Toro Calderón

Línea de Investigación:

Gestión Ambiental del Territorio

Grupo de Investigación:

Espacio, Territorio y Paisaje ESTEPA

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Económicas, Instituto de Estudios Ambientales IDEA

Bogotá, Colombia

2017

Agradecimientos

La construcción de un trabajo de grado no es un proceso fácil ni corto. Pero cuando contamos con el apoyo de los demás, puede que las cosas no sean más sencillas, pero sí, más tolerables. Es claro que no podemos avanzar en ningún momento de nuestras vidas sin ese apoyo. El aprendizaje que obtuve con este trabajo fue tan inmenso que no hubiera sido posible sin estas personas a las que agradezco infinitamente. Siempre serán el motivo y el soporte para proponerse nuevas metas y alcanzarlas.

Gracias a mi mamá por su constante apoyo, amor, motivación, comprensión y paciencia durante la construcción de este trabajo y a lo largo de mi formación profesional, sentando en mí, bases de responsabilidad y deseos de superación. Gracias a Andrés e Iván, mis hermanos. Éste es un logro de todos como familia.

Gracias a la Profesora Susana Barrera, por sus brillantes ideas, paciencia, su guía, sus aportes siempre oportunos, por su tiempo y su acompañamiento constante en la realización de este trabajo y su mente siempre abierta a nuevas perspectivas.

Gracias a Carolina Posada, Paloma Rubio y Javier Aguilar por sus consejos y apoyo incondicional, por estar ahí siempre, muchas gracias. A mis compañeros de Geografía 2009-II. Gracias a Daniel Santana y Giovanny Avendaño por animarme con su ejemplo, a continuar por los hermosos caminos de la geografía.

Gracias a Erick Bonilla, Javier Enríquez, Cristian Robles y Jaime Beltrán por aportar con sus experiencias a este trabajo. Gracias a la comunidad del barrio el Progreso en la localidad de Usme: este trabajo es de y para la comunidad. Gracias al Profesor Daniel Arriaga por su valiosa colaboración. A los compañeros de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo y al Profesor Javier Toro por sus consejos y puntos de vista durante el seminario. Gracias a quienes se me quedan en el camino y a quien lea este trabajo.

Resumen

La Interfase periurbana (IPU) es una configuración territorial y ambientalmente compleja. En el caso de la IPU de Usme, se identifican efectos ambientales y cambios de uso del suelo en el paisaje periurbano, a partir de la normativa histórica analizada mediante las metodologías MERAP y GTP. Estos análisis se respaldan con datos demográficos de la localidad. Las percepciones e imaginarios (Anexo AK) de la comunidad son importantes para la comprensión de la transformación del paisaje periurbano, obtenidas a través del cuestionario y cartografía participativa. La normativa y crecimiento poblacional han generado gran parte de los cambios ambientales y usos del suelo, ante lo cual han surgido resistencias comunitarias que luchan por la apropiación ambiental y cultural del territorio. Los habitantes urbanos de la Interfase periurbana desconocen en gran medida la zona rural y las dinámicas inherentes a IPU. Es urgente establecer diálogo de saberes entre las comunidades rurales, urbanas y las instituciones.

Palabras clave: Interfase Periurbana, paisaje, cambios en el uso del suelo, territorio, expansión urbana, resistencias, Usme

Abstract

The Peri-Urban Interface (IPU) is a territorial and environmentally complex configuration. In the case of Usme's IPU, environmental effects and land use changes are identified in the periurban landscape, based on the historical normative analyzed using the MERAP and GTP methodologies. These analyzes are supported by demographic data from the locality. The perceptions and imaginary of the community are important for the understanding of the transformation of the periurban landscape, obtained through the questionnaire and participative cartography. Normative and population growth have generated much of the environmental changes and land uses, before which have emerged community resistances that fight for the environmental and cultural appropriation of the territory. The urban inhabitants of the peri-urban interface are largely unaware of the rural area and the dynamics inherent in IPU. It is urgent to establish a dialogue of knowledge between rural and urban communities and institutions.

Keywords: Peri-urban interface, landscape, changes in land use, territory, urban expansion, community resistances, Usme

Contenido

Introducción	11
1.1 Justificación.....	13
1.2 Objetivos	14
1.2.1 Objetivo Principal	14
1.2.2 Objetivos Específicos	14
1.3 Alcances	15
1.4 Acerca de este documento.....	15
2 La interfase periurbana y otros conceptos sobre la franja urbano-rural	17
2.1 Abordaje de la Interfase periurbana desde otros contextos	17
2.2 La interfase periurbana: configuraciones territoriales y sus factores incidentes	20
2.2.1 La periferia: introducción a las configuraciones de borde y su diferencia conceptual (periurbano, rururbano, conurbano, bordes)	21
2.2.2 La Interfase Periurbana.....	29
2.2.3 Espacio geográfico, lugar, territorio y no lugar: resistencias desde la IPU.	36
2.2.3.1 El espacio Geográfico	36
2.2.3.2 El Territorio	37
2.2.3.3 El Lugar y el No lugar.....	38
2.2.4 El concepto de Nueva Ruralidad	42
2.3 Metodología para el Análisis del paisaje periurbano en Usme: La MERAP y la GTP.....	45
2.4 Descripción de la Interfase Periurbana de Usme: La Realidad ecológica y el crecimiento poblacional, como elementos dialógicos en la configuración de sus dinámicas	49
3 El papel de la normatividad en el ordenamiento ambiental y en el cambio de uso de suelo de la interfase periurbana de la localidad de Usme	59

3.1	La IPU y su relación con los Bordes o Franjas de Transición Urbano-Rural (FTUR) en la normatividad de Bogotá.....	63
3.2	Eventos regulatorios y los cambios de uso del suelo en la IPU de Usme	66
3.2.1	Anexión de Usme al Distrito Capital	67
3.2.2	Creación de la Alcaldía menor del municipio de Usme.....	69
3.2.3	El primer Plan de Desarrollo Integrado: Usme como el “Sur” de Bogotá ...	70
3.2.4	La reforma Urbana y la preocupación ambiental global.....	72
3.2.5	El primer POT de Bogotá, la Franja de Borde Sur y el Plan de Ordenamiento Zonal para Usme	74
3.2.6	La Franja de Transición Urbano-Rural de Borde Sur: Usme.....	75
3.2.7	Plan de Ordenamiento Zonal (POZ) Usme, Macroproyecto del Rio Tunjuelo y Operación Estratégica Nuevo Usme: ¿Mecanismo de participación?	78
3.3	Eventos regulatorios y la Gestión ambiental en la localidad de Usme	83
3.3.1	El Plan de Ordenamiento Físico de Bordes	83
3.3.2	El Plan de Borde Sur Oriental	87
3.3.3	Eje de Integración Llanos/Nuevo Usme.....	89
4	La IPU en el contexto de Usme	90
4.1	Problemas y oportunidades en la IPU	93
4.2	Pobreza y población en la IPU	96
4.3	Fragmentación institucional.....	99
4.4	Enfoques para la planificación de la IPU	101
4.5	Realidades locales y globalización	105
4.6	El sector rural de la IPU de Usme y sus procesos de planificación.....	108
4.7	Nueva vía al Llano (Eventos infraestructurales)	114
5	Imaginarios y percepciones sobre la IPU de Usme	118
5.1	Resistencias.....	118
5.2	Imaginarios y percepciones (Eventos simbólicos)	122
6	Conclusiones y recomendaciones.....	131
6.1	Conclusiones.....	131
6.2	Recomendaciones.....	134
7	Referencias bibliográficas	135

Lista de Figuras

Figura 2-1. Clasificación de los espacios periféricos según González Plazas (2009)	24
Figura 2-2. Clasificación de espacios periféricos A) Según García Ramón citado por Cardoso y Fritschy (2012) B) A partir de Entrena (2004)	25
Figura 2-3. Distribución y evolución de los espacios periféricos. Elaboración propia.	27
Figura 2-4. Red de relaciones. Cambio de objetos (A) a relaciones (B). Tomado de Capra (1996, p.58)	31
Figura 2-5. A. Rizoma. B. Rizomas en la naturaleza.	31
Figura 2-6. Interacciones rurales y urbanas a partir de flujos. Realizado y modificado a partir de Allen (2003b)	32
Figura 2-7. Representación fractal del espacio, el territorio, el lugar y el no lugar. Elaboración propia.	42
Figura 2-8. Articulación de las propuestas GTP y MERAP para el análisis del paisaje.	47
Figura 2-9. Herramientas metodológicas para el análisis del paisaje periurbano de Usme.	49
Figura 2-10. Paisaje lineal Interfase periurbana de Usme. Fuente: Elaboración propia a partir del perfil topográfico de Google Earth, 2017.	51
Figura 2-11. Razones de migración hacia la zona de Usme. Elaboración propia a partir de RETADAM (DANE)	57
Figura 3-1. Normas incidentes en la configuración del paisaje periurbano de Usme	62
Figura 3-2. Línea de tiempo sobre normativa de bordes incidente en la localidad de Usme.	64
Figura 4-1 Características de la IPU. Elaboración Propia a partir de Allen (2003b); Aguilar y Escamilla (2011)	91
Figura 4-2. Complejidad de la IPU de Usme. Fuente: Elaboración propia a partir de rizoma (Noguera, 2004) y red de relaciones (Capra, 1996)	92
Figura 4-3. Actores incidentes en la IPU de Usme. Fuente: Elaboración propia a partir de Lozano Ducuara (2005) y Alcaldía Mayor (2009)	94

Lista de Tablas

Tabla 2-1 Composición de los espacios en la IPU. Realizado a partir de Allen, 2003b; Pellicer (1998) citado por Entrena, 2005; Santos, 1996.....	35
Tabla 2-2. Sistema GTP (Geosistema, territorio y paisaje), a partir de Frolova y Bertrand (2006) y Metodología MERAP, a partir de Barrera-Lobatón (2014).	46
Tabla 2-3. Totales de población de Usme y municipios anexados a Bogotá en 1954. Elaboración propia a partir de DANE, Población ajustada de Bogotá D.C. y Censos de población 1951 y 1964.	55
Tabla 2-4. Crecimiento total e intercensal de Usme y los municipios anexados a Bogotá en 1954. (Cifras en porcentaje) Elaboración propia a partir de la tabla 3-2.....	55
Tabla 2-5 Cifras históricas población de la localidad de Usme.....	58
Tabla 2-6. Crecimiento poblacional total y anual de las UPZ de Usme 2005-2015 (Cifras en porcentaje). Elaboración propia a partir de DANE y SDP.	59
Tabla 3-1. Áreas protegidas de orden distrital para la Localidad de Usme. Fuente: SDP y Universidad Distrital (2010).....	77
Tabla 4-1. Enfoques para la planificación de la IPU. Realizado a partir de Allen (2003a)	103

Lista de Símbolos y abreviaturas

Abreviaturas

Abreviatura	Término
<i>BUR</i>	Borde Urbano Rural
<i>CAN</i>	Centro Administrativo Nacional
<i>CEYS</i>	Comité de Educación y Salud
<i>DAMA</i>	Departamento Administrativo de Medio ambiente
<i>DAPD</i>	Departamento Administrativo de Planeación Distrital
<i>DNP</i>	Departamento Nacional de Planeación
<i>DRP</i>	Diagnóstico Rural Participativo
<i>EEP</i>	Estructura Ecológica Principal
<i>FTUR</i>	Franja de Transición Urbano Rural
<i>IIRSA</i>	Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana
<i>IPU</i>	Interfase periurbana
<i>ONU</i>	Operación Nuevo Usme
<i>OENU</i>	Operación Estratégica Nuevo Usme
<i>POT</i>	Plan de Ordenamiento Territorial
<i>SDP</i>	Secretaría Distrital de Planeación
<i>SENA</i>	Servicio Nacional de Aprendizaje
<i>SITP</i>	Sistema Integrado de Transporte Público
<i>UPR</i>	Unidad de Planeamiento Rural
<i>UPZ</i>	Unidad de Planeamiento Zonal
<i>VIP</i>	Vivienda de Interés Prioritario
<i>VIS</i>	Vivienda de Interés Social

Introducción

Según Allen (2003b), la interfase periurbana (IPU) es una configuración espacial compleja, en constante presión, muy susceptible ambientalmente¹, e incluye zonas de transición entre lo urbano y lo rural que obedecen a dinámicas diversas y reúnen problemas y oportunidades de las unidades territoriales campo y ciudad. Lo anterior se manifiesta en una configuración espacial heterogénea, con actores, dinámicas ambientales, ecológicas, económicas e institucionalidad que giran principalmente alrededor del uso del suelo, el cual se caracteriza por una transformación acelerada, generada por obras de infraestructura y establecimientos residenciales, comerciales o industriales, en medio de un paisaje todavía rural (Aguilar y Escamilla, 2011).

Dematteis (1996), explica que las periferias, en este caso la IPU, tienen un significado valorativo, en donde estas son dependientes del centro (lo urbano) y por ello en dichas zonas se aloja lo que el centro rechaza, por lo que es allí donde existen los más altos índices de marginación y exclusión; Dematteis denomina a esta fase *fordista*. No obstante, la periferia también posee elementos positivos que el centro no tiene, esto es valores ambientales y autonomía, los cuales hacen de estas zonas verdaderos “laboratorios” sociales y territoriales donde se generan otras formas de habitar y gestionar el territorio. El autor denomina ésta fase como *posfordista*, al tener un enfoque complejo y dejando de lado la dicotomía centro – periferia; es decir, surgen periferias independientes del centro, o ciudades sin centro, con altos valores ambientales y de calidad de vida, diversas y con un alto arraigo de sus habitantes hacia el territorio.

Por la complejidad que refleja esta configuración territorial, múltiples estudios interpretan este fenómeno desde diferentes perspectivas. Algunos autores lo explican desde el lente

¹Entiéndase ambiente como “el tejido de relaciones e interacciones que ocurren en la naturaleza, de la que el ser humano forma parte integral, y que hacen posible la permanencia de la vida en condiciones de calidad” (Moreno, 2008).

de las comunidades, otros desde el campo de los riesgos naturales o desde la degradación de las zonas de conservación; algunos desde la complejidad ambiental o desde el análisis de las causas y consecuencias de la expansión urbana, provocada generalmente, por decisiones institucionales. A su vez, se establecen los bordes urbano-rurales como entidades complejas, dejando atrás la clásica dicotomía urbano - rural, cultura - naturaleza (Cardoso y Fritschy, 2012; Entrena, 2004; Noguera, 2004).

En este orden de ideas resulta interesante analizar el enfoque y efecto que la normatividad tiene sobre el uso y manejo de estas áreas, ajustado muchas veces a intereses particulares, por ejemplo, los mercados de la tierra y la vivienda. La IPU de Usme está incluida en los Planes de Ordenamiento Territorial como Franja de Borde Urbano-Rural, y a su vez se establece como zona de expansión urbana en “armonía con las zonas rurales y protegidas”, buscando frenar principalmente los procesos de urbanización ilegal (Dec. 619 de 2000; Reina y Rojas, 2004). No obstante, en esta área se permite la construcción de infraestructura de utilidad regional y global (Dec. 619 de 2000; IIRSA, s.f.), evidenciando intereses globalizadores que poco consideran las dinámicas y procesos locales ya que claramente afectan las estructuras ecológicas y sociales. En este sentido la normativa implementada refleja un desconocimiento de las dinámicas locales que ocurren en la Interfase Periurbana (IPU) generando confusión, fragmentación y ausencia de políticas concretas para la población y el entorno ambiental de esta configuración espacial del territorio, lo cual se refleja en sus carencias ecológicas y de servicios públicos, encontrándose en una especie de –limbo- institucional.

El referente práctico para el presente trabajo es la zona de interfase periurbana de la localidad de Usme, localizada al sur de la ciudad de Bogotá (Colombia), en donde la urbanización acelerada y las actividades extractivas afectan de forma evidente la zona rural y urbana, debido a la actual demanda de recursos naturales por parte de la ciudad y del interior de la localidad misma. Dichas condiciones se generan a partir de la implementación de políticas y dinámicas económicas externas, ocasionando cambios en las formas de habitar, resultado de un modelo de ciudad excluyente, dónde el desarrollo (¿Para quién?) se traduce en una infraestructura que trae consigo problemáticas ambientales complejas que involucran actores tanto a favor de la expansión indiscriminada como en contra de ella. Estos últimos propenden por la apropiación

ambiental y cultural del territorio desde una perspectiva de reivindicación de la identidad rural.

La zona periurbana de Usme tiene una conformación diversa, con actividades económicas mineras, actividades agropecuarias y zonas de conservación. Muchas de las tierras son propiedad de terratenientes que las arriendan a personas no habitantes del sector, sin sentido de pertenencia hacia el territorio, generando problemáticas crecientes de contaminación del suelo y quebradas que son la principal fuente de agua consumible para los pobladores del área rural. Parte de la problemática de la Interfase periurbana de Usme, también está ligada a intereses externos, que interactúan con la tradicional actividad agrícola y se sumergen en el mercado de la especulación de tierras y vivienda, afectando también al sector urbano por la presión demográfica creciente y la demanda de servicios que esto implica.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la localidad de Usme contiene todas las características de las zonas de Interfase Periurbana, por lo que requiere de caracterizaciones, análisis, políticas y decisiones complejas. No obstante, la falta de conocimiento de la conceptualización y gestión de estas zonas en el ámbito nacional y local conlleva a una toma de decisiones inadecuada. En ese sentido, se hace necesario realizar un análisis del paisaje periurbano de la localidad de Usme.

1.1 Justificación

Pese a que en la zona periurbana de Usme se han realizado diversos estudios, el enfoque del pensamiento complejo y el concepto de paisaje periurbano brindan una nueva perspectiva para la comprensión del territorio. Desde el punto de vista teórico, se busca que esta investigación genere reflexión y discusión, por parte de los sectores gubernamentales, la academia y la comunidad en general, respecto a los impactos que puede generar la expansión de las ciudades y la comprensión del concepto interfase periurbana como franja de procesos dinámicos que se desarrolla como consecuencia del crecimiento urbano en su periferia.

Además, se busca comprender cómo un sentido de apropiación de los recursos ambientales y el territorio puede conllevar a una relación de cuidado y preservación de la naturaleza, relación que se ha ido perdiendo por las decisiones que la expansión urbana ha acarreado sobre el territorio, a expensas del conocimiento de sus efectos sobre las comunidades locales. Por lo anterior, la percepción de la comunidad ocupa un lugar destacado en el presente trabajo involucrando no solo a los actores rurales que han tomado parte en la resistencia, también se incluyen actores de la zona urbana que son parte del fenómeno expansivo en la localidad.

Es importante que la academia y la comunidad hagan parte de la toma de decisiones sobre este tipo de problemáticas, ya que pueden aportar al análisis y ofrecer posibles soluciones a partir del conocimiento de su complejidad. Es por ello que esta investigación busca proponer líneas de acción que permitan su extensión a contextos similares, sirviendo como marco referencial, ya que, en el contexto colombiano, el concepto Interfase Periurbana o periurbanización, es poco conocido o implementado. Asimismo, este trabajo busca concienciar a la comunidad sobre la importancia histórica de este concepto en pro de la defensa del territorio y el entorno natural además de mostrar cómo las percepciones de la comunidad frente a este fenómeno sobre sus territorios pueden encaminarse a la formulación de nuevas alternativas y perspectivas territoriales.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Principal

Analizar los procesos derivados de la normatividad sobre el uso del suelo en zonas periurbanas a partir de las dinámicas ambientales y territoriales en la localidad de Usme (Bogotá)

1.2.2 Objetivos Específicos

- Realizar un análisis comparativo de la normativa histórica incidente en los cambios de uso del suelo y ordenamiento de la zona periurbana de la localidad de Usme.

- Aportar al análisis y reconocimiento de los problemas ambientales presentes en los espacios periurbanos y su complejidad para la formulación de políticas de intervención.
- Identificar las percepciones e imaginarios sobre los efectos ambientales que los habitantes de la zona periurbana de la localidad de Usme tienen sobre el cambio del uso del suelo urbano y rural.

1.3 Alcances

Este estudio toma nueve normas históricas para el análisis del paisaje periurbano de Usme, enfocado desde el pensamiento complejo. Se consideran elementos integrantes de la IPU, la problemática del relleno sanitario y la actividad minera. No obstante, no se profundiza en sus dinámicas pues estas requieren estudios profundos y puntuales. Igualmente ocurre con lo referente a salud y tenencia de la tierra. Los análisis respectivos se realizan a partir de la expansión urbana sobre lo rural, por lo cual el estudio se apoya en datos sobre emplazamiento, legalización de barrios y datos demográficos. Las entrevistas se realizaron a líderes comunitarios urbanos y rurales, y el cuestionario y la cartografía social, se enfocaron en los habitantes urbanos, dado que muy poco se les ha tenido en cuenta en el reconocimiento ambiental de la localidad, lo cual se refleja en el limitado conocimiento que tienen de ella y sus dinámicas, que trascienden a los espacios rurales, muchas veces desconocidos para estos habitantes. Por ello, gran parte de la descripción del contexto se enfoca hacia lo rural, y el trabajo práctico de percepción desde lo urbano.

1.4 Acerca de este documento

El presente documento se divide en 6 capítulos. En el capítulo dos, se expone el marco teórico de esta investigación en el cual se introducen los conceptos similares al de Interfase Periurbana o periurbanización, como rururbanización, conurbación, surburbanización con especial énfasis en el concepto de Interfase Periurbana, sus características, enfoques y contextos. Consecutivamente, se exponen los conceptos de espacio, lugar, territorio y nueva ruralidad, los cuales contribuyen a comprender las problemáticas de acuerdo con sus actores, configuraciones, reconfiguraciones, disputas por el territorio y la búsqueda de la identidad rural a partir de resistencias comunitarias.

Se aclara que todos los conceptos son analizados desde el lente de la complejidad ambiental. En este capítulo también se describen la metodología Geosistema-Territorio-Paisaje (GTP) y la Metodología de Eventos Relacionales para el Análisis del Paisaje (MERAP), y se desarrolla la caracterización de la zona de estudio, iniciando con la descripción de la realidad ecológica, incluyendo datos demográficos que respaldan los eventos descritos posteriormente con MERAP.

Los capítulos tres, cuatro y cinco desarrollan los objetivos específicos de este trabajo. En el capítulo tres, la MERAP se aplica a la normativa histórica para Usme, esto es, decretos y acuerdos que han sido seleccionados a partir de sus efectos en la transformación del paisaje que lo han conformado como paisaje periurbano teniendo en cuenta el enfoque esencial de cada norma, sea éste, cambios en el uso del suelo o gestión ambiental, que inciden en las políticas de ordenamiento de la zona periurbana de la localidad de Usme. En cada norma se realiza una breve descripción histórica y contextual correspondiente, que resume los eventos principales establecidos con la MERAP. Se establece un puente entre las políticas existentes referentes a los bordes urbanos y la concepción de los elementos teóricos, y se determinan los efectos de cada normativa sobre el paisaje y el territorio.

El capítulo cuatro expone la forma en que la aplicación del concepto interfase periurbana en el análisis de áreas con estas características permite entender la complejidad de sus dinámicas y por tanto puede dirigir las políticas de intervención en estas áreas. De acuerdo con lo anterior, se toman aspectos como pobreza, fragmentación institucional y los efectos de la globalización. Se destaca además el papel de la Nueva vía al Llano y la situación del sector rural de la localidad de Usme. El capítulo cinco muestra las percepciones que los habitantes de la zona periurbana de la localidad de Usme tienen sobre el cambio del uso del suelo urbano y rural y sus efectos ambientales. El último capítulo abarca las conclusiones y recomendaciones.

2 La interfase periurbana y otros conceptos sobre la franja urbano-rural

La relación campo – ciudad, se ha mostrado históricamente dicotómica, desconociendo u omitiendo los fenómenos que ocurren en el intermedio, estableciendo así un límite abrupto entre estas dos configuraciones territoriales. Con el tiempo surgen discusiones entre los académicos, al observar espacios emergentes en las periferias de las ciudades, generados principalmente por la expansión urbana formal e informal, influencia que cambia y diversifica sus elementos, relaciones y actores, impulsado por los bajos precios del suelo y el poco control institucional. Así, se generan bruscos cambios en el uso del suelo, establecimiento de nuevas actividades (minería, rellenos sanitarios y proyectos urbanísticos) situadas allí por su fácil acceso desde la ciudad, causando deterioro ambiental, disminuyendo la calidad de vida de sus habitantes.

Dados estos componentes de la IPU, se puede hablar de una complejidad inherente a este fenómeno espacial, por lo cual se incluyen además las nociones de espacio, lugar y territorio que aportan a la comprensión de las dinámicas en las que está inmersa la IPU. Adicionalmente, se trata el concepto de nueva ruralidad, mostrando aspectos sobre las características de los habitantes rurales de la IPU.

2.1 Abordaje de la Interfase periurbana desde otros contextos

El concepto de lo periurbano, interfase periurbana, o periurbanización y sus efectos ha sido un tema medianamente tratado en el ámbito latinoamericano pese a que es un fenómeno que ha afectado a grandes y pequeñas ciudades. Las investigaciones al respecto toman básicamente aspectos ecológicos, rurales y sociológicos, pero no todos estos trabajos se relacionan directamente con el concepto de Interfase Periurbana o Periurbanización.

Ferrando (2008) aborda la expansión urbana, para el caso de Santiago de Chile iniciando con cifras demográficas, con las cuales se muestra crecimiento poblacional de la ciudad, originado principalmente por la migración campo-ciudad, con lo cual se han generado conflictos asociados al riesgo de desastre. También describe las políticas y planes sobre

el uso del suelo y urbanización que han sido ejecutados con enfoques neoliberales, por ejemplo, la declaración del suelo como bien no escaso, que dio apertura al libre mercado de tierras perjudicando en gran medida las zonas rurales de la ciudad, generando crecimiento y urbanización desordenada y afectando áreas no adheridas a los planes ambientales. El autor toma como base el crecimiento demográfico, los cambios en el valor del suelo, la normativa que ha definido las zonas de expansión urbana y la zonificación por usos, incluyendo zonas de riesgos, temas en los que según el autor existen demasiados vacíos, situaciones también presentes en la zona Periurbana de Usme.

También aportan conceptualmente a este estudio dos proyectos realizados en el valle de Aburrá en Medellín, Colombia. En el primero de ellos, Moreno (2008) analiza los procesos de conurbación desde la perspectiva de la complejidad ambiental, destacando el desconocimiento del concepto de conurbación, la vasta complejidad que contienen sus dinámicas y la ausencia y/o fragmentación institucional que dificulta su manejo. Para la autora, la conurbación no está presente en el pensamiento de la gente: las personas relacionan la conurbación con fronteras, límites y bordes, no hay una visión de integración y fusión inherentes a estos espacios. Pese a lo anterior, se deduce que el comportamiento rizomático, es decir la integración a un sistema complejo o una “trama ambiental compleja” (p.9) está presente en la cotidianidad de la gente, aunque no sea autopercebido.

En el segundo estudio referente al Valle de Aburrá, Agudelo (2012) se enfoca en la Ruralidad Metropolitana. El autor examina la condición actual de los espacios rurales metropolitanos a partir de la evolución del paisaje y de la narrativa propia de la zona, estableciendo la categoría de *ruralidad metropolitana* como un concepto más sólido comparado con el de “nuevas ruralidades”. Las problemáticas, percepciones y formas de habitar de las comunidades campesinas que se ubican en los espacios rurales metropolitanos son similares a las de las comunidades rurales periurbanas, por su cercanía a las urbes, y la multiplicidad de usos del suelo que se presentan en tales espacios, como usos urbanos, agrícolas, industriales, comerciales, equipamientos, suelos de protección, etc., todos superpuestos en una “matriz compleja” (p.559).

Un estudio realizado por Hernández, Rojas y Sánchez (2013) estrechamente relacionado con el presente, es el concerniente a Pasquilla, zona rural aledaña a la localidad de

Usme, ubicada en la vecina localidad de Ciudad Bolívar. Esta zona también está directamente afectada por el Relleno Sanitario Doña Juana, los parques minero-industriales y la infraestructura. El estudio muestra que hay una disminución significativa de cobertura vegetal, ya que la actividad productiva más rentable para la población del lugar es la actividad lechera, la cual ha conllevado a la potrerización de grandes áreas y afectación del páramo. Sin embargo, cabe anotar que la población campesina, ha sido constante en la defensa de su identidad y en la participación y concienciación en el cuidado del entorno. Pasquilla, hace parte de la Franja de Borde Urbano-Rural Sur conformada por las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, en la cual se presenta un acelerado cambio en el uso del suelo, característica destacada de los espacios periurbanos.

Ramírez (2009), por su parte, analiza los conflictos ambientales en las interfases urbano-rurales en los casos de los Cerros Orientales y la cuenca del río Tunjuelo en Bogotá, Colombia, zonas altamente vulnerables en el ámbito ambiental. Estas áreas implican dinámicas complejas entre los sectores político, social y económico. El autor destaca el papel de los diferentes actores involucrados (familias campesinas y urbanas, minas, organizaciones comunitarias, entidades del Estado, etc.) y su relación con el territorio, y la conformación de sistemas “socio-ecológicos” (p. 74). Concluye exponiendo algunas propuestas de la comunidad que buscan aportar a la formulación de políticas públicas y el ordenamiento territorial. El autor toma como base teórica el concepto de Interfase urbano – rural, sus componentes, actores y problemáticas ambientales, y realiza un análisis desde las políticas que influyen en los cambios de uso del suelo como el POT.

En el estudio de González Plazas (2009), el concepto de Interfase Periurbana es directamente tratado y el autor lo enfoca desde una perspectiva sistémica, a partir de la unidad de hábitat “holón²”, aplicándolo al paisaje periurbano de la ciudad de Manizales, Colombia, para posteriormente, generar una zonificación fractal a través de una metodología compuesta por tres fases: estructura (variables físicas y sociales), función (descripción de las interacciones socio-espaciales) y forma (resultante espacial de las

² “El holón, según Koestler, es considerado como un sub entero, unidad espacial de funcionamiento fractal, integrador de un sistema mayor, con características de semi autonomía en sus decisiones, gobernado en parte por las decisiones del sistema mayor y por las influencias de sus vecinos. El holón, desarrolla principios de autosemejanza del sistema mayor, tiene la capacidad de crecimiento y desarrollo espacial, dependiendo tanto de su grado de importancia en el sistema mayor, como de las funciones que realiza y la energía que a él llega.” (González, 2009, p, 96)

interacciones, explicada por la función y las variables de la estructura). Estos componentes hacen parte de la ecología del paisaje. El carácter sistémico que brinda el holón con sus flujos de energía y dinámicas abiertas, y como componente de un sistema mayor brinda una visión de la complejidad de la Interfase Periurbana.

Los aportes de los estudios enunciados muestran cómo el fenómeno de la IPU se presenta en diferentes contextos en Colombia y en Chile. Estos trabajos resumen la complejidad de los espacios periurbanos, a partir de la interacción de sus componentes físicos, sociales y normativos, es decir, explican los efectos de la normativa y el papel de los actores sobre los usos del suelo y la generación de problemáticas ambientales.

2.2 La interfase periurbana: configuraciones territoriales y sus factores incidentes

Los estudios periurbanos reciben aportes desde diferentes perspectivas: sociología, geografía, urbanismo, y por supuesto, las ciencias ambientales, entre otras. La definición de lo periurbano no es siempre precisa en cuanto a sus límites físicos, pero los autores se aproximan mucho. Por esto, es importante enfatizar sobre la diversidad de metodologías y enfoques que dichos autores brindan sobre el concepto. Incluso no está claro qué es lo urbano y qué se define como rural por el carácter difuso de las configuraciones periféricas. Esto conlleva a que esta dicotomía en los estudios actuales haya quedado en desuso, por lo que es necesario establecer nuevas formas de estudio de dichas configuraciones territoriales (Cardoso y Fritschy, 2012; Entrena, 2004). A partir de lo anterior, a continuación, se realiza un recorrido a través de diferentes propuestas referidas a los procesos urbanos asociados a la periferia y al fenómeno de expansión urbana, ya que esta diversidad de conceptualizaciones a menudo no permite plantear un diagnóstico apropiado y tampoco ofrecer políticas concretas de planeación pertinentes.

Las diferencias visibles son en efecto, la escala en la que se desarrollan dichas configuraciones espaciales, y el grado de influencia urbana, con las cuales se pueden jerarquizar y categorizar estas áreas dentro de la periferia (González Plazas, 2009). También se abarcan el concepto de nueva ruralidad, que explica en parte los

movimientos de resistencia y el concepto de -no lugar- que explica el no sentido de pertenencia hacia un territorio y por ende el poco o nulo cuidado sobre el mismo.

2.2.1 La periferia: introducción a las configuraciones de borde y su diferencia conceptual (periurbano, rururbano, conurbano, bordes)

El proceso de urbanización en el mundo en desarrollo no necesariamente conduce a una urbanización plena del campo, más bien obedece a la intensificación de las interacciones urbano – rurales que llevan a realidades espaciales y ambientales poco conocidas. Esta intensificación está dando pie a un cuestionamiento sobre la percepción tradicional de la dicotomía campo-ciudad, dando paso a “paisajes emergentes” y su localización, estructura física, relación funcional, contexto institucional y perspectiva cultural (Allen, 2010). Estos nuevos paisajes complejos, involucran diversos actores, usualmente con intereses contrarios, con limitaciones o facilidades para la toma de decisiones, diferentes formas de habitar y percibir el lugar, diferentes enfoques sobre las problemáticas y oportunidades. Al respecto Noguera (2004) afirma:

“De estas alteridades, surgen propuestas para comprender la ciudad como viva, como flujos permanentes, como inestable y diversa. Estas propuestas surgen de las fuerzas de la vida misma y expresan nuevas figuras de ciudad que apuntan a una valoración integral y compleja de la ciudad, valoración que en términos éticos y hermenéuticos, imprime de nuevos sentidos las formas contemporáneas de lo urbano, con dimensiones que enriquecen la ética ciudadana, como es la dimensión compleja de lo ambiental” (p.153)

Santos complementando lo anterior expresa: “Los movimientos de la sociedad, atribuyendo nuevas funciones a las formas geográficas, transforman la organización del espacio, crean nuevas situaciones de equilibrio y al mismo tiempo nuevos puntos de partida para un nuevo movimiento” (Santos, 1996 citado por Blanco 2007). De acuerdo con lo anterior, son los actores los que constantemente configuran y reconfiguran la estructura de la ciudad no solo en la IPU, sino en cualquier forma geográfica.

Otros conceptos asociados al de Interfase periurbana, son periferia y suburbio, los cuales tienen distintas tipificaciones que conllevan a entender las diferencias entre las diversas

entidades territoriales. Para que exista periferia (del griego peri: alrededor de), es necesario que coexista un centro, donde ambos difieren en cualidades y/o condiciones (Soijet y Mantovani, 2005). Dematteis (1996), profundiza al respecto mencionando que la periferia es dependiente de un centro, generalmente cargada de valores negativos “alojando lo que el centro rechaza” (Sección IV, párr.1), por ejemplo, las basuras, que en el caso de la IPU de Usme concierne al Relleno Sanitario Doña Juana. Así, lo urbano se corresponde con valores positivos. Dematteis agrega: “Por si eso no bastara, en muchos casos las periferias de las grandes ciudades se han concebido como espacios donde las patologías urbanas y las desvalorizaciones son máximas: la degradación física y social, la marginalidad, la exclusión, la desviación” (Sección IV, párr.1)

De acuerdo con lo anterior, la IPU obedece a un nivel bajo de desarrollo con la salvedad de que también en las periferias se cuenta con una estimación positiva en lo referente a valores ambientales y autonomía sobre el territorio, valores con tendencia creciente. Al respecto el autor se refiere a las IPU como” ... “laboratorios” sociales y territoriales en los que se experimentan innovaciones y cambios importantes en la forma de habitar, en los estilos de vida, en las relaciones sociales y también en los movimientos políticos” (Sección IV, párr.5)

Para González Plazas (2009) la periferia es “...la materialización espacial de los contrastes ambientales, y empalmes de modos de vida, hábitat, urbano o rural; que son atributos constructores del paisaje cultural urbano y rural andino” (p.98). El autor define la periferia como límite, zona de cambios donde son claramente distinguibles los espacios rurales de los urbanos.

Otro de los conceptos asociados a las IPU es el de suburbanización, el cual suele tener un significado híbrido con periurbanización, bordes, frontera urbano-rural, periferia urbana, etc. Estas configuraciones también corresponden a franjas de transición entre lo urbano y lo rural en la denominada “área suburbana”. El área suburbana también puede ubicarse a lo largo de carreteras e incluir pueblos pequeños. El fenómeno de la suburbanización suele ser transitorio, sobre todo en zonas de crecimiento urbano no planificado (Sánchez, 2015). El suburbio es otro término asociado a las IPU, y obedece al fenómeno de expansión de la ciudad o “ciudad dispersa” (Dematteis, 1996) relacionado con el asentamiento en las periferias de comunidades campesinas que buscan el

aprovechamiento de la oferta laboral proveniente de la ciudad. Esta configuración urbana se expone en la **Figura 2-3**.

En los suburbios tienen lugar diferentes fenómenos urbanos, como la conurbación, metropolización, periurbanización, contraurbanización, desurbanización etc. (Dematteis, 1996; Orellana, 2012). Sin embargo, se entiende que estos fenómenos son fases del proceso de suburbanización en algunos casos. Según Capel (1994) citado por Orellana (2012) el término suburbio fue acuñado en forma despectiva respecto de lo urbano. No obstante, la noción del suburbio varía según la ubicación geográfica e histórica: los suburbios anglosajones se ajustan a buenas condiciones de vida, mientras que los suburbios latinoamericanos se identifican con precarias situaciones, (con contadas excepciones) y diferentes formas de habitar (Dematteis, 1996).

Según la clasificación de Soijet y Mantovani (2005), la periferia residencial o “suburbia” se divide en cinco grupos: 1) Una ‘Ciudad Jardín’ en donde los habitantes eligen dicha condición de asentamiento. Se identifica con los suburbios anglosajones y norteamericanos; 2) La periferia marginal o segregada, la cual se caracteriza por grandes carencias de tipo estructural, infraestructural, ambiental, unido a la condición de borde. Además, agregan que la suburbia es una “Realidad urbana forzada por situaciones socioeconómicas de población de origen rural y urbano en situación de propietarios o invasores. Condición inversa a la anterior donde la población vive donde puede y no donde quiere” (p.93); 3) La periferia programada o proyectada en la cual el sector público ha destinado para construcción de vivienda formal; 4) la periferia mixta o indefinida, con sucesivos cambios de usos dominantes e indefinidos en el tiempo; 5) La periferia potencial se caracteriza por el visible abandono de usos rurales y se encuentra a la espera de una posible urbanización. Para el caso se observa que la IPU incluye las características de la “periferia marginal” y de la “periferia programada”, por lo cual ya se puede distinguir de entrada, el carácter diverso de la misma.

González Plazas (2009) sugiere otra categorización de la periferia directamente relacionada con los espacios periurbanos: 1) La periferia de borde, es un área periurbana que se conforma como un contorno que pone límite a la aglomeración urbana con áreas urbanas discontinuas; 2) La periferia suburbana, un espacio semiurbano con actividades semi-rurales y usos urbanos recientemente emplazados y con tendencia al crecimiento, con extensión física de 1 a 5 kilómetros desde el borde urbano; 3) La periferia de franja

rural-urbana que puede tener una extensión variable, entre 19 y 50 kilómetros. La anterior clasificación se ilustra en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

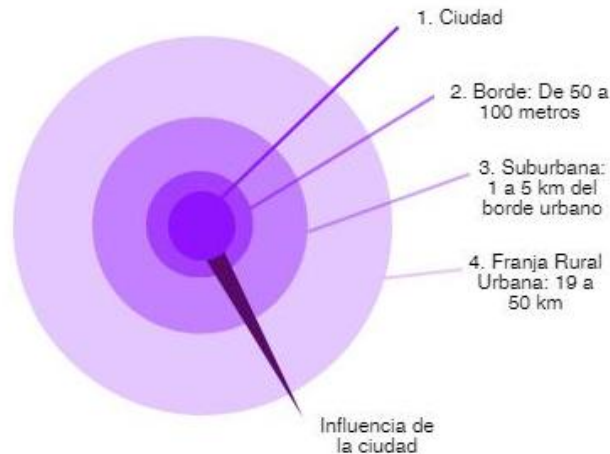


Figura 2-1. Clasificación de los espacios periféricos según González Plazas (2009)

García Ramón (1995, citado por Cardoso y Fritschy, 2012) introduce el concepto de “contínuum rural- urbano” (p. 31) el cual incluye lo periurbano o IPU y al que – categoriza en: 1) Espacio urbano: Edificaciones estructuradas por vías y usos del suelo urbano; 2) Periurbano: Condiciones de degradación en lo urbano y excedente en lo rural. Presencia de especulación, marginalidad en el uso del suelo, desarrollo de hábitat disperso usualmente carente de servicios y equipamientos necesarios; 3) Semiurbano: alternancia de usos y extensas áreas de residencias urbanas, industrias y servicios descentralizados; 4) Semirural urbanizado: residencia, mercados e industrias con predominio de actividades agrarias; 5) Rural: poco desarrollo urbano y de servicios, con predominio de actividades agrarias. Viviendas de segunda residencia y actividad industrial rudimentaria; 6) Rural marginal: parajes naturales, zonas de reserva natural. La clasificación anterior se esquematiza en la **Figura 2-2 A**.

Esta determinación de borde difiere de la propuesta de Entrena (2004), representada en el **Figura 2-2 B**. Este autor reconoce flujos bidireccionales centro – periferia y hace una división más sucinta de los espacios periféricos. Sin embargo, ambas determinaciones de borde identifican la zona periférica más exterior como área rururbana o franja rural

urbana en la que predominan los usos y actividades rurales, pero existe cierta influencia urbana, principalmente con la presencia de pequeños grupos residenciales y los modos de sustento que no necesariamente dependen de la producción agrícola.



Figura 2-2. Clasificación de espacios periféricos A) Según García Ramón citado por Cardoso y Fritschy (2012) B) A partir de Entrena (2004)

Para Cardoso y Fritschy (2012) lo periurbano y rururbano hacen parte de la misma interfase; la cara interna y externa, respectivamente. Lo determinante allí es la menor o mayor influencia de lo urbano sobre estas unidades territoriales. Teniendo en cuenta que la IPU está más cercana a la influencia de la ciudad que la zona rururbana, y se encuentra sometida a mayores presiones, los cambios en los comportamientos sociales allí son más abruptos, entre ellos por ejemplo el cambio de actividades productivas y laborales. Lo anterior se representa en la Figura 2-3.

El concepto de *urban fringes* se enfoca desde lo rural, desde la urbanización del campo (rururbanización), permitiendo un análisis territorial integral, vigente para estudios actuales. Así, se comienza a incorporar las relaciones campo-ciudad desde la perspectiva de los modelos de desarrollo capitalistas y la globalización, que debilita las conexiones cercanas campo-ciudad. En este marco, los espacios periurbanos son una extensión de los espacios rurales, con procesos complejos y cambiantes en el tiempo determinado por su proximidad a los espacios urbanos. (González Urruela, 1987)

Otro fenómeno importante por describir es el fenómeno de conurbación (**Figura 2-3**), definido como la integración territorial de dos o más ciudades cuyos intereses comunes dan origen a nuevas territorialidades. Para Moreno (2008): "...la conurbación es un tejido formado por otros diferentes tejidos que encuentra en la heterogeneidad su característica propia, una conexión de las diferencias que le hace un fenómeno culturalmente diverso a la vez que un hecho ambiental complejo" (p. 2). Esta perspectiva de complejidad ambiental se aplica también a la IPU como configuración territorial diversa y heterogénea.

De acuerdo con las definiciones anteriores, los límites de bordes no siempre están bien definidos, porque no pueden ser puntualmente medidos, se hallan dentro de un rango o franja cambiante. Estos bordes no son estáticos, ni en su extensión física ni en sus dinámicas sistémicas dado que las interacciones entre campo y ciudad abarcan una organización territorial compleja (Cardoso y Fritschy, 2012). Así mismo, ocurre con la IPU, cuyos límites son imprecisos no solo en términos físicos, "...sino también porque en tales territorios suelen manifestarse formas de sociedad cuyas características sociales y económicas se encuentran a menudo en proceso de cambio y de redefinición" (Entrena, 2004, p. 38).

Los bordes constituyen espacios de intercambio de energía, materiales, organismos, que producen articulaciones entre diferentes actores (Bozzano, 2000, citado por Ballén-Velásquez, 2014); son franjas de transición entre usos urbanos, rurales o de protección, en los cuales se presenta una alta degradación ambiental, deficiencia en infraestructura de equipamiento urbano, actividad minera con sus respectivos pasivos ambientales y tensiones entre diversos actores: pobladores, empresas privadas e instituciones (Ballén-Velásquez, 2014). La autora agrega que los bordes se constituyen en un sistema con procesos propios, flujos, redes y conexiones entre sus realidades ecosistémicas, rurales y urbanas, lo que da lugar a "desbordes" sociales. En este orden de ideas, Ballén-Velásquez (2014), propone estudiar los bordes desde la construcción cultural y política que brinde una perspectiva cognitiva y simbólica. Esta definición se ilustra en la **Figura 2-3**.

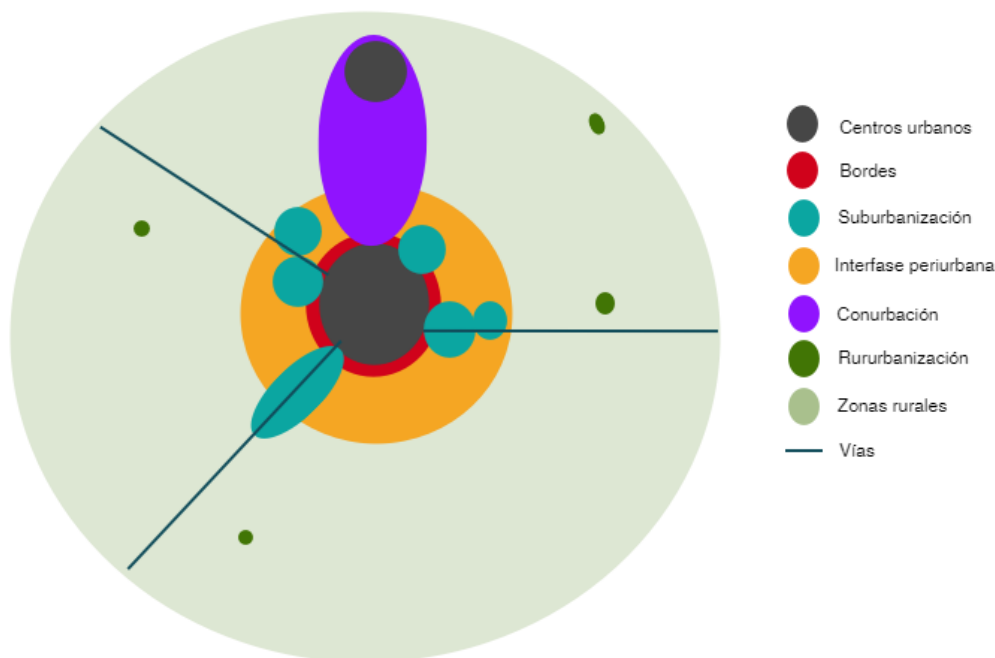


Figura 2-3. Distribución y evolución de los espacios periféricos. Los bordes son inmediatos al núcleo urbano y lo delinean en su exterior; los suburbios se constituyen en formas netamente urbanas inmediatas a la ciudad y a lo largo de las vías regionales; la IPU se identifica por su variedad de usos urbanos y rurales; la conurbación se constituye como la “atracción” de dos o más concentraciones urbanas, la que inicialmente también tiene variedad de usos que se transforman luego en usos urbanos, por lo cual se le suele confundir con la IPU; los puntos identificados como rururbanización no corresponden a centros urbanos como pueblos o caseríos sino a urbanizaciones o condominios situados en las zonas rurales. Elaboración propia.

El concepto de borde nos lleva al de límite. Cardoso y Fritschy (2012), establecen tres criterios para establecer los límites, ya sea el de IPU o rururbano. El primer criterio corresponde al espacial y morfológico (borde o ecotono); el segundo criterio, son procesos generadores: factores económicos, políticos, sociales, ambientales, demográficos y de flujos; en tercer lugar, los procesos culturales y sociales que instauran la frontera y el lugar, como elementos simbólicos en la conformación de los territorios.

En cuanto al primer criterio, desde la perspectiva ecológica concierne al borde y al ecotono, ambos correspondientes a zonas de transición que regulan el intercambio de materia y energía entre hábitats adyacentes (López, 2004). Para Sarlov-Herlin (2001) citados por López (2004), la diferencia entre borde y ecotono no es clara y depende del observador, organismos o variables por estudiar. La escala y la complejidad de los flujos

existentes también pueden ser determinantes en la definición del ecotono: el ecotono se puede aplicar a escalas amplias como transiciones entre formaciones continentales o entre ambientes acuáticos y terrestres (Weltzin y McPherson, 1999, citados por López, 2004). No obstante, López define al ecotono como un tipo de borde transicional (efecto de ecotono) con un hábitat diferente al de los dos hábitats adyacentes a él. Para Odum (2006), el ecotono es la “...yuxtaposición de diferentes hábitats o tipos de ecosistema y supone la existencia de la interacción activa entre dos o más ecosistemas” (p.24) enfatizando en la diversidad y riqueza de especies (López, 2004; Odum, 2006). Así, se podría decir que en escalas menores y aplicado a la IPU, el borde se define por el encuentro y alternancia de actividades y elementos urbanos y rurales con dinámicas únicas propias del borde (Bozzano, 2000 citado por Cardoso y Fritschy, 2012)

Clarke (1976), citado por Cardoso y Fritschy (2012), subraya el papel que ejerce la tensión, la diversidad y competencia entre comunidades sobre el ecotono, características que finalmente lo definen como tal. En el caso de la IPU, estas tensiones corresponden principalmente a la competencia por los usos del suelo, y los usos actuales como la minería, el relleno sanitario, y grandes obras de infraestructura que no están presentes ni en espacios urbanos ni en los rurales: la IPU en su carácter de ecotono cuenta con esta “diversidad” de actividades y funciones impuestas (Cardoso y Fritschy, 2012).

Noguera (2004) por su parte, añade:

“Las dinámicas urbanas, hoy más que nunca, son de gran fugacidad. Podríamos decir que son inasibles, pues mientras se estudian en las universidades, oficinas de planeación urbana u otros espacios académicos, ellas cambian, mutan y se transforman en nuevos sentidos y direcciones que hacen difícil estudiar la ciudad —lo urbano— constituida en magma de eventos que acontecen en y por ella” (p.136)

De este modo, los fenómenos urbanos son dinámicos y viven en constante cambio, a lo cual la IPU no es ajena, dado que es una configuración aceleradamente variable en el tiempo y el espacio. Así, se observa que el crecimiento urbano genera espacios híbridos periféricos que han dado lugar a gran variedad de interpretaciones sobre los bordes urbano-rurales y los espacios periféricos que resultan difíciles de espacializar,

conceptualizar y por tanto se complica proponer métodos de planificación integrales para los mismos.

Un ejemplo del establecimiento de límites a los bordes está precisamente en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, Decreto 190 de 2004, artículo 100, en dónde “se define el Corredor Ecológico de Borde como una franja de 50 a 100 metros de ancho en suelo rural, contiguo y paralelo al perímetro urbano”. Conceptual y prácticamente hablando, el término que más se asemeja al de IPU en el POT y demás normativas es el de ‘Corredor ecológico de Bordes o Bordes Urbano – Rurales’; lo anterior básicamente porque como lo manifiestan Toro, Velasco y Niño (2005), estos corredores son franjas de encuentro entre lo urbano y lo rural, fragmentadas por cambios y conflictos en el uso del suelo, asientan actores que se disputan estos territorios, son articuladores regionales, presentan situaciones de riesgo y prestan importantes servicios ambientales. En general estos corredores ecológicos de bordes o bordes urbano-rurales son franjas con diversos retos y oportunidades ambientales, económicas e institucionales.

Teniendo en cuenta la conceptualización anteriormente descrita, a continuación, se define el concepto de Interfase Periurbana.

2.2.2 La Interfase Periurbana

La noción de IPU ha sido un concepto “incómodo” (Allen, 2003b) y confuso (González Urruela, 1987) para caracterizar y definir las zonas de IPU como espacios híbridos entre lo urbano y lo rural, ya que sus características propias como las interpretaciones sobre esta son diversas, generándose una variedad de términos que todavía hoy, siguen suscitando desorientación en la implementación de políticas, gestión y manejo ambiental, entre otros.

Sin embargo los conceptos se enfocan en la complejidad de su composición ambiental, geográfica y económica, esto es, el cambio brusco en usos del suelo, actores públicos y privados cambiantes en continua disputa por el uso y apropiación de la tierra, dinámicas ambientales, oportunidades, carencias y presiones a nivel socioeconómico, ambiental e institucional multiescalares, incluyendo funciones impuestas que cubren necesidades de los espacios urbanos (González Urruela, 1987) como escenario para actividades mineras, curtiembres clandestinas, rellenos sanitarios y uso intensivo de agroquímicos, actividades que requieren condiciones como el bajo precio de tierras, una distancia y

tamaño suficiente respecto a la ciudad (Allen, 2003b; Entrena, 2005 citando a Sancho Martí, 1989). Así, la IPU tiene un carácter homogéneo, amosaicado y multifuncional por lo cual tienden a ser áreas muy vulnerables ambientalmente. (Aguilar y Escamilla, 2011; (Allen, 2003a; Allen, 2003b).

De acuerdo con Allen (2010) la IPU es un concepto al que se le suele atribuir “la pérdida de valores rurales y el déficit de atributos urbanos” (p. 35) y se encuentra en una periferia física, simbólica y socioeconómica (Allen, 2003b, p. 4), en donde las actividades económicas - laborales duales de la población de bajos ingresos, refleja las necesidades insatisfechas y carencias de la población. Hernández Montesinos (2001) citado por Entrena (2005), hace énfasis en la presión sobre las tierras que aumentan de precio toda vez que disminuye su disponibilidad. También afirma que al disminuir o retirarse la actividad agrícola, emergen zonas de terrenos abandonados (lotes de engorde).

Para Noguera (2004) es necesario realizar estudios urbanos desde la complejidad ambiental como “condición para interpretar los fenómenos ambientales como densas relaciones entre los sistemas culturales urbanos y los ecosistemas” (p. 117) donde lo urbano se asienta y se abastece del ecosistema circundante. Añade Noguera que, los procesos de urbanización no se limitan a ser cambiantes únicamente en su aspecto físico, sino que cambian sobre todo desde la mirada de los imaginarios simbólicos y estructurantes de la cultura. La complejidad aboga por vislumbrar el territorio de manera no dicotómica (urbano-rural; ciudad-campo), trascendiendo así a la realidad del territorio (Toro, et al., 2005).

Por lo anterior, la complejidad ambiental y el pensamiento sistémico son inherentes a la IPU, dada la heterogeneidad y diversidad de todas las interrelaciones dentro y fuera de ella. Capra (1996) lo interpreta como un “patrón dentro de una inseparable red de relaciones” (p.67) donde las partes u objetos son relaciones al interior de otras redes de relaciones, dando una perspectiva fractal (**Figura 2-4**). Así, la IPU puede ser analizada desde sus componentes y flujos y también como componente de un sistema o red mayor: la ciudad como región, como centro de influencia.

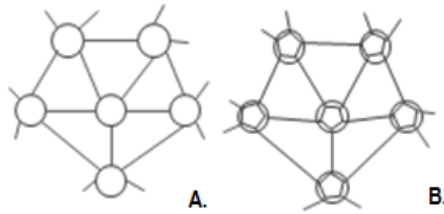


Figura 2-4. Red de relaciones. Cambio de objetos (A) a relaciones (B). Tomado de Capra (1996, p.58)

Agrega, además:

La naturaleza es percibida como una red interconectada de relaciones, en la que la identificación de patrones específicos como «objetos» depende del observador humano y del proceso de conocimiento. Esta red de relaciones es descrita en términos de su correspondiente red de conceptos y modelos, ninguno de los cuales es más fundamental que otro... Por otro lado, cabe admitir también que, en general, a distintos niveles sistémicos corresponden distintos niveles de complejidad (p.60).

Así mismo, Capra considera que ninguna de las propiedades de la red es fundamental, es decir, lo que determina su función es la interrelación de esa red con las demás redes, por lo que se puede deducir que la IPU tiene funciones concernientes a sí misma que también dependen de las configuraciones territoriales externas, Noguera (2004) lo denomina rizoma (**Figura 2-5**).

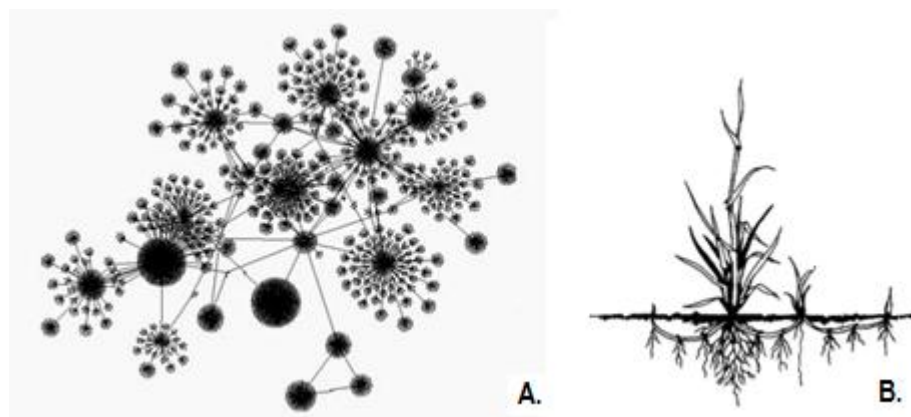


Figura 2-5. A. Rizoma. Tomado de: rizomaprimaria.blogspot.com. B. Rizomas en la naturaleza. Tomado de: b-log-ia20.blogspot.com.co

González Urruela (1987) realiza un recorrido sobre las bases que definieron en un comienzo el concepto de IPU las cuales incluyen áreas de influencia y flujos (información, personas, mercancías, etc.) enmarcados en la esfera económica. Sin embargo, afirma que éste enfoque inicial, se centra en la ciudad y su impacto espacial pero no en la forma como dichos impactos afectan la IPU ni en las diferencias escalares de las configuraciones territoriales que se generan con la expansión urbana, limitando al espacio como simple contenedor de relaciones económicas.

No obstante, la naturaleza homogénea de la IPU se explica por estos flujos rural-urbanos multidireccionales hacia y a través del sistema: campo-ciudad, ciudad-ciudad y otras escalas (Allen, 2003a; Toro, et al., 2005) (**Figura 2-6**). Así, la IPU no es una “sucesión de estados”, sino procesos continuos de transformación que se producen por la influencia de diferentes niveles escalares conforme a factores que van más allá de los físico-espaciales, que permiten la identificación de rápidos cambios, pero dificultando proporcionar una definición físico – espacial concreta a esta configuración territorial.

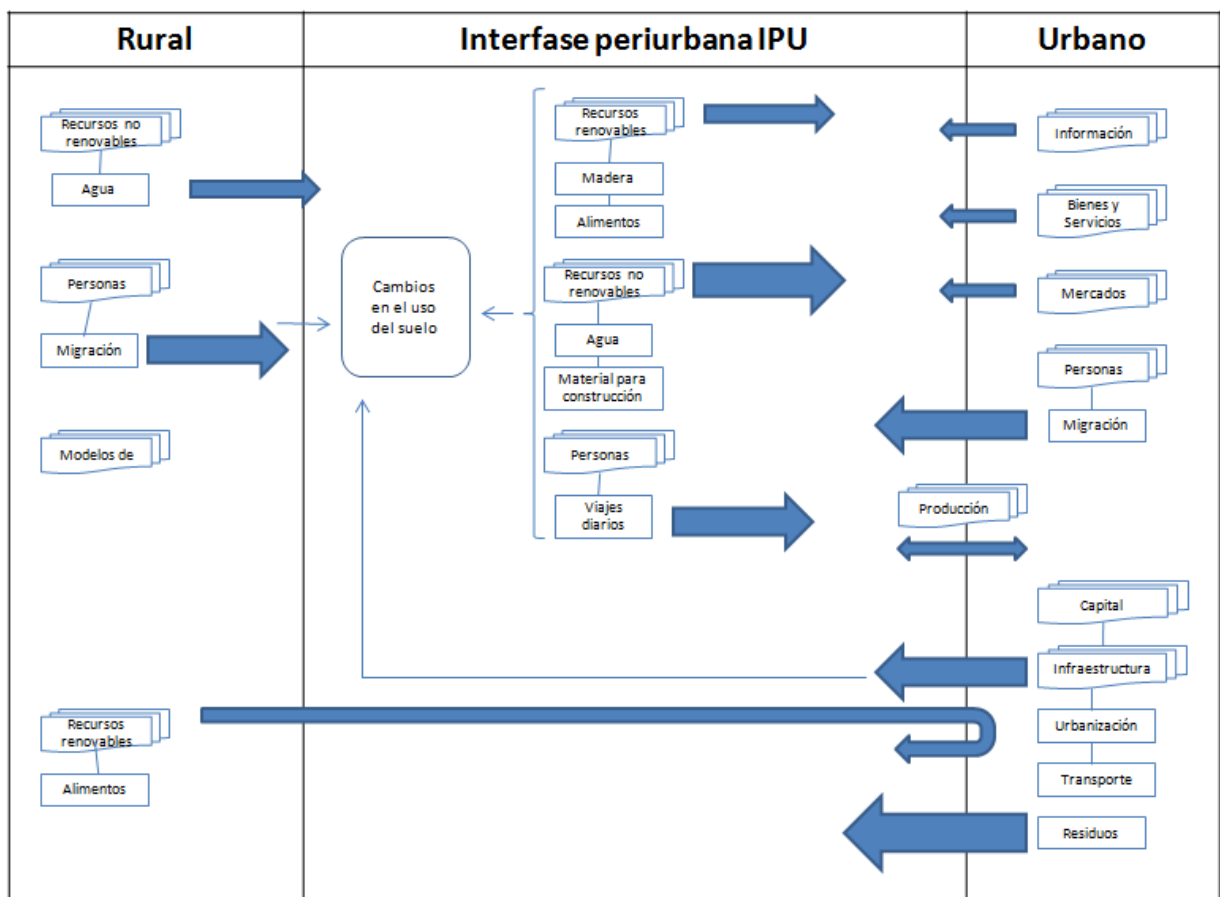


Figura 2-6. Interacciones rurales y urbanas a partir de flujos. Realizado y modificado a partir de Allen (2003b)

Estas influencias escalares afectan cada IPU de manera diferente, dependiendo del contexto histórico, social y ambiental. Los flujos de población hacia la IPU, por ejemplo, pueden surgir a partir factores ambientales, como la pérdida de calidad de las tierras, la contaminación del agua, agotamiento de recursos, etc., o por factores socioeconómicos, como los bajos ingresos, tenencia inequitativa de la tierra, monocultivos, entre otros, que ocurren en las zonas rurales. Por lo tanto, la IPU podría brindar a esas poblaciones nuevas alternativas de sustento (Allen, 2003a).

González Urruela (1987) intenta brindar un carácter de análisis espacial territorial desde la geografía regional, por medio del concepto de la *banlieue*³ francesa, una incipiente descripción de procesos y usos del suelo enfocada en las *banlieues* urbanas o rurales.

Es importante aclarar que las características de la IPU en América Latina son diferentes a las europeas, norteamericanas, asiáticas y africanas. Webster & Muller (2009), en su análisis sobre periurbanización en ciudades asiáticas, afirman que las características de la IPU suelen ser las mismas, aunque las condiciones se ajustan al contexto histórico, económico, social y a la demografía de cada zona. Por ejemplo, las dos primeras (europeas y norteamericanas) son habitadas por grupos de población de clase media-alta, con emplazamientos privados de urbanizaciones cerradas o turísticas y actividades comerciales y de servicios que soportan esos complejos, generando –miniciudades– totalmente independientes del núcleo, mientras que las ciudades de los países en desarrollo, subsisten a partir de agricultura, minería y pesca, por lo cual dependen altamente de su hinterland⁴ más que las ciudades en países desarrollados (Allen, 2010).

En el caso de Europa las zonas rurales están en peligro de “degradación cualitativa” (Dematteis, 1996, sección II. párr.8), manifestándose con crecimiento desequilibrado y desarrollo adyacente a las vías principales, evidenciado en una creciente densificación y desarticulación de tejidos urbanos y territoriales, influenciados por dinámicas exógenas en detrimento de legados culturales y materiales. En África, las áreas periurbanas son pocas, manteniéndose la forma urbana monocéntrica generada por el desplazamiento de comunidades rurales dada la complicada situación de subsistencia (Webster & Muller, 2009). Allí sigue siendo primordial el suelo rural, del cual dependen los densos emplazamientos urbanos (Allen, 2010).

³ Banlieue (fr): afueras, suburbios.

⁴ Hinterland: área de influencia.

En Asia los emplazamientos son de tipo industrial, disminuyendo los costos de transporte por medio de vías que usualmente son financiadas por los gobiernos y por inversión extranjera directa, además el fácil acceso a mano de obra barata de migrantes. No obstante, se trasladan los riesgos industriales del núcleo de la ciudad a la IPU, aumentando allí los impactos ambientales y sociales. A este cinturón de complejos industriales se le llama exurbanización. También se presentan en Norteamérica, sin embargo, allí estas configuraciones están en declive, a diferencia de las impulsadas por los efectos de la creciente industria asiática (Webster & Muller, 2009). Para el caso de América Latina, Webster & Muller (2009) indican que la IPU se caracteriza por la presencia de población vulnerable y de bajos ingresos, con altos índices de segregación y urbanización informal. Allen (2010) añade que un factor principal en el cambio de las ciudades latinoamericanas es la globalización y genera un tipo de ciudades “policéntricas” en donde el crecimiento se observa principalmente fuera del perímetro urbano.

Por último, también existen IPU en Regiones Metropolitanas Transnacionales, en las cuales la ciudad se encuentra en un país y su IPU se halla al otro lado de la frontera. En estos casos también está ligada usualmente a actividades industriales. Un ejemplo es la frontera Estados Unidos – México y la actividad de las maquilas.

En todos los casos, los emplazamientos se agilizan por el bajo precio de las tierras, la mezcla de usos del suelo, el cambio de actividad económica y el crecimiento de la población y por ende, de la urbanización (Anexo A).

Finalmente, la pregunta es ¿Qué es la Interfase Periurbana? Pues bien, es un sistema ambiental complejo (interfase ecológica y socioeconómica), que incluye ecosistemas naturales, agrosistemas y ecosistemas urbanos (Allen, 2003b y Entrena, 2005). Allen (2003b) clasifica estos espacios aplicando la relación entre producción (P) o energía transformada y consumo (C) pérdida de energía. La **Tabla 2-1 Composición de los espacios en la IPU. Realizado a partir de Allen, 2003b; Pellicer (1998) citado por Entrena, 2005; Santos, 1996.** relaciona y compara diferentes enfoques sobre los espacios híbridos, identificando los elementos y procesos que se generan en los subsistemas naturales, rurales y urbanos que integran la IPU. Asimismo, se exponen los problemas y oportunidades presentes en cada subsistema, y los factores que generan el carácter cambiante y diverso de la IPU.

Tabla 2-1 Composición de los espacios en la IPU. Realizado a partir de Allen, 2003b; Pellicer (1998) citado por Entrena, 2005; Santos, 1996.

Enfoque	Áreas protegidas o naturales	Rural	Urbano
Enfoque áreas metropolitanas (Pellicer)	Espacio natural: zonas húmedas y riberas fluviales, bosques protegidos, de elevada productividad biológica y gran potencial como espacios recreativos y de contacto con la naturaleza.	Espacio rural: Huerta, cultivos, pastizales, plantaciones forestales.	Espacio urbano: Barrios periféricos, nuevas urbanizaciones de residencia habitual o secundaria, instalaciones turísticas, grandes infraestructuras urbanas y polígonos industriales.
Enfoque IPU (Allen)	Ecosistemas naturales: la relación P/C es igual a uno. Estos ecosistemas están sujetos a bajos niveles de perturbación.	Ecosistemas productivos o agrosistemas: relación P/C superior a uno donde la energía que surge de la fotosíntesis del ecosistema es exportada y consumida más allá de sus límites, por ejemplo, en forma de alimentos.	Ecosistemas urbanos: «ecosistemas de consumo», donde la relación P/C suele ser inferior a uno. Su producción es mínima, debido a que su biomasa es insignificante y el valor del consumo es sobredimensionado en vista de la energía importada de los ecosistemas naturales y agroproductivos.
Enfoque geográfico (Santos)	Objetos naturales y geográficos	Objetos sociales, naturales y geográficos.	Objetos sociales y geográficos.
Problemas	Degradación ambiental Contaminación Cambios de uso del suelo Minería	Cambios de uso del suelo Presión por tierras Pérdida de valores rurales Déficit de servicios Bajos ingresos Monocultivos Minería	Fragmentación institucional Déficit de servicios Bajos ingresos Minería
Oportunidades	Bienes y servicios ambientales	Cercanía a vías y equipamientos Bienes y servicios ambientales Resistencias	Bienes y servicios Mercados Comercio
	Flujos / Actores / Políticas multiescales		

2.2.3 Espacio geográfico, lugar, territorio y no lugar: resistencias desde la IPU

Desde la perspectiva geográfica, es importante para este trabajo incluir las dimensiones espacial y territorial, ya que a partir de ellas se obtiene una mejor comprensión sobre los procesos de apropiación y arraigo, la construcción de lugar y territorio, por consiguiente se visibilizan grupos locales con altos valores simbólicos hacia el territorio, reflejados en acciones que propenden por la resignificación y defensa del mismo, gobernanza sustentable y reconocimiento de su identidad, generando resistencias.

2.2.3.1 El espacio Geográfico

El espacio geográfico no actúa simplemente como contenedor de objetos y relaciones. El espacio produce sistemas sociales y a su vez es producido por los mismos: es sujeto y objeto de producción social (Santos, 1996; Soja, 1985 y 1993, citados por Blanco, 2007). El espacio es un sistema de realidades, un tejido de relaciones y cosas, una realidad relacional compuesta de objetos geográficos, naturales y sociales animados por la vida misma, siempre en movimiento, cuyas formas son determinadas y determinantes de la sociedad, y sus luchas en específicos momentos históricos, también dan sentido al espacio (Santos, 1996). Está formado por un conjunto de sistemas de objetos y sistemas de acciones solidarias, también contradictorias e interactuantes, unificadas en el marco de la historia (Santos, 1996 citado por Blanco 2007) en donde los componentes materiales y decisionales son inseparables y los actores viven en constantes dinámicas con los objetos y las formas espaciales (Blanco, 2007). En otras palabras, los procesos de producción del espacio equivalen a una red de relaciones. Esta definición se ilustra en la

Figura 2-67.

Es importante subrayar, el carácter de construcción social del espacio rural que hace Fernández (2008), el cual también aplica al sector urbano y periurbano, como construcciones sociales y territoriales que, con sus dinámicas internas, externas, y funciones, configuran esa construcción social del espacio:

“El medio rural continúa siendo el principal medio de producción de alimentos – aunque no el único- pero también hemos descubierto en él, nuevas funciones que

han hecho que resignifiquemos su función, al punto que podemos hablar de “sus funciones”, encontrando en el mismo un escenario donde se mueven una pluralidad de actores con actividades muy diversas. ¿Por qué afirmamos esto último? Porque sin duda que el concepto “rural”, es una construcción social e históricamente determinada, que delimita una porción de territorio diferente de otras—por ejemplo “lo urbano”—con determinados atributos físicos geográficos, características político-administrativas, particularidades demográficas y funciones económicas” (p.3)

Los procesos de producción y reproducción social del espacio demandan la transformación de la superficie terrestre lo cual implica flujos, infraestructura, mano de obra y una localización que genere enlaces con otras localizaciones concretas (Blanco, 2007). De esta manera, los procesos sociales y el espacio geográfico son indivisibles.

Estas transformaciones, más allá de lo político, jurídico o administrativo dan lugar a diferentes formas de apropiación del espacio, expresadas en la cultura, las maneras de habitar, formas de trabajo y explotación que influyen en las relaciones de poder, gestión y ordenamiento por parte de un actor. Así, las configuraciones espaciales se van tornando llenas de significados y valores, los cuales forjan las identidades y arraigos con ese espacio geográfico, lo que brinda otro nivel de apreciación del espacio: el territorio (Blanco, 2007 citando a Santos y Silveira, 2004, Brunet, Perras y Thery, 1993, Wanderley Da Costa, 1995, Raffestin, 1993; Jiménez y Novoa, 2014).

2.2.3.2 El Territorio

El territorio o los territorios (

Figura 2-67) también se definen de diversas maneras. Noguera, (2004) menciona: “... los territorios son, en el momento en que significan algo para alguien, es decir, en el momento en que un grupo social, una «comunidad» o un grupo con intereses comunes, escribe sobre la tierra sus formas de morar” (p. 118). Para Jiménez y Novoa (2014) los actores de ese territorio cambian de la misma forma cómo cambian los modos de apropiación y los intereses sobre el mismo, lo cual determina el carácter de territorio

estratégico o no estratégico de acuerdo con esos intereses, en el marco de diferentes contextos históricos y luchas sociales entre dichos actores. Sostienen además:

“...existe una confrontación entre dos racionalidades antagónicas para la ordenación del territorio, una que asume el territorio como abrigo y que se apoya en construcciones públicas y comunitarias, y otra que asume el territorio como recurso económico que debe ser ordenado bajo la lógica imperativa de la acumulación de capital” (p. 59).

De estas disputas por el territorio, surgen resistencias: comunidades que perseveran por la defensa no solo de los aspectos físicos, la propiedad, ordenación, etc., sino también por “*su dirección y sentido*” (p.21), es decir, la dirección política y el valor de uso⁵ dado a través de la cultura, que dota al territorio de significados y símbolos, lo que revela que la lucha no se limita a la búsqueda de un acceso a necesidades materiales, sino a la posibilidad de mantener sus formas de vida comunitarias y solidarias, maneras de relacionarse, socializar y habitar. Estas comunidades resisten no solo en defensa de los recursos materiales, también resisten ante el riesgo de cambio o pérdida de sus órdenes sociales y su cotidianidad (Jiménez y Novoa, 2014).

De esta manera, ante panoramas de conflicto, surgen formas auto-organizativas horizontales desde las comunidades vulneradas por esos conflictos (Dematteis, 1996 y Jiménez y Novoa, 2014) generando encuentros no oficiales, fortaleciendo la resistencia desde la cotidianidad, desde el campo, desde la escuela, desde las labores diarias. No se reducen a una clase social o sector específico, provienen de los vínculos que se tienen con el territorio en el que se vive (Jiménez y Novoa, 2014). La búsqueda del bienestar en el territorio también incluye satisfacer necesidades, que se suplen a través de los procesos de producción de bienes y servicios (en los que están implícitas la circulación y la ganancia). Claro está, estas necesidades varían según las clases y grupos sociales (Blanco, 2007).

2.2.3.3 El Lugar y el No lugar

⁵ Valor de uso: utilidad de una cosa para satisfacer una necesidad.

El lugar se constituye en un componente complejo de esa gran red de relaciones. Para Silveira (1995) el lugar no es estático, ni es un fragmento, es un subespacio dotado de totalidad parcial ligada a otras totalidades parciales: “[el lugar]...es el todo mismo concretado en lo local” (p. 57). A pesar de esas conexiones e influencias, el lugar no pierde individualidad porque su totalidad parcial es única y tampoco se limita a lo local porque lo atraviesan acontecimientos y eventos históricos. Según Lynch (1976) el lugar es resultado de una evolución política e histórica, lo cual se ve reflejado en su apariencia, que depende de quién controla el lugar. Y agrega:

“... estos sitios, nos hacen sentir en casa, arraigados. A menudo, se recuerda con afecto el carácter de un lugar, su ausencia es un tema frecuente de queja popular. A la gente le agrada “conocer” una gran ciudad o entender su historia. Aún más, un fuerte sentido de pertenencia a un lugar apoya nuestro sentido de identidad personal. Por tal razón, a menudo se defienden a capa y espada los rasgos familiares de un paisaje (p. 34)”.

El lugar se puede explicar por todos los flujos y redes que históricamente han convergido en él (Blanco, 2007). Para Dematteis (1996) el lugar puede pertenecer a diferentes redes sociales, económicas, culturales, etc., y depende de éstas para estancarse o crecer según su especialidad o función. Esas redes a su vez interactúan a escalas distintas, pero son las redes culturales las que sustentan la continuidad y la innovación del lugar.

Massey (1993) citada por Barros (2000) explica que, por la condición de único, al lugar se le tiende a idealizar y se deja de lado el hecho de ser un ente problematizado con yuxtaposición de actores y límites indefinidos. Por su parte Lefebvre (1968), explica lo anterior en el contexto de la IPU:

“El campo [...] es un lugar de producción y obras. La producción agrícola hace nacer productos; el paisaje, por el contra, es obra. Esta obra emerge de una tierra lentamente modelada, vinculada originariamente a grupos que la ocupan por sacralización recíproca, más tarde profanada por la ciudad y la vida urbana (que captan esa sacralización, la condensan, y finalmente, la disuelven en el transcurso de las épocas, absorbiéndola con la racionalidad)” p.87).

De acuerdo con lo anterior Buttimer (1985) citada por Barros (2000) infiere que la pérdida del lugar, del terruño, conlleva usualmente a crisis de identidad de los individuos o comunidades. Además, no muchas personas consideran el sitio donde viven como su lugar u hogar, este se limita a ser un centro de actividad laboral (Allen, 2010; Dematteis, 1996) o zona dormitorio para poblaciones con movilidad más rápida (Dematteis, 1996; González Plazas, 2009).

Dematteis (1996), agrega que las periferias muchas veces son habitadas por necesidad, al no tener otra opción, por tanto no generan sentido de identidad ni de pertenencia, esto se define como “atopía” -espacios sin lugares- (Sección IV, párr. 2) los cuales se asocian a tiempos de acelerado crecimiento periférico que no permiten una asimilación completa del territorio y sus cualidades materiales e inmateriales. Estos espacios son invisibilizados y destinados a la implementación de actividades netamente funcionales. Así, en contra parte al carácter de apropiación del territorio, se encuentra el concepto de -no lugar- (**Figura 2-7**): “Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar...” (Auge, 1992, p.83) Y continúa:

“Se ve claramente que por “no lugar” designamos dos realidades complementarias pero distintas: los espacios constituidos con relación a ciertos fines (transporte, comercio, ocio), y la relación que los individuos mantienen con esos espacios. Si las dos relaciones se superponen bastante ampliamente, en todo caso, oficialmente (los individuos viajan, compran, descansan), no se confunden por eso pues los no lugares mediatizan todo un conjunto de relaciones consigo mismo y con los otros que no apuntan sino indirectamente a sus fines: como los lugares antropológicos crean lo social orgánico, los no lugares crean la contractualidad solitaria” (Auge, 1992, p.98).

El carácter multifuncional de la IPU, da pie para que se le asignen funciones que no tienen cabida en el casco urbano, que requieren condiciones especiales de distancias (ni muy lejos, ni muy cerca), y disponibilidad de suelos baratos (Sancho Martí, 1989, citado por Entrena, (2005) esto es, por ejemplo la situación del Relleno Sanitario Doña Juana;

un –no lugar- en dónde se arrojan los desechos de la ciudad , la actividad minera⁶ y la Nueva vía al Llano que diariamente transporta cientos de pasajeros, para los cuales la vía es un sitio de paso, aledaño a los “barrios marginales del sur”. Así, se podría identificar el –no lugar- en la IPU, con localizaciones donde se han emplazado estas actividades. Si bien existen procesos históricos notables no se han generado procesos de apropiación ni de identidad, por parte de los habitantes de la ciudad, incluso no se han generado dentro de la comunidad habitante de la localidad.

Por otro lado, se pone de manifiesto la complejidad no solo de la IPU, sino de la construcción del espacio y el territorio en las periferias. De esta manera, los procesos de reproducción social que se originan en la IPU como periferia, son también productores de espacio y productores de los procesos de producción que se requieren para atender la demanda de infraestructura, vivienda y necesidades de reproducción social (por ejemplo, necesidad de abrigo y protección) (Blanco, 2007).

Aunque para la caracterización de la IPU, los flujos son más importantes que el “lugar” (Allen, 2010), se considera de gran importancia este concepto para el presente trabajo, dadas la construcción de territorio y las percepciones e imaginarios que tienen las comunidades habitantes de la IPU, factores que impulsan los movimientos por la defensa del mismo. La **Figura 2-** ilustra la interacción entre espacio, lugar, no lugar y territorio en el contexto de la IPU.

⁶ Las actividades mineras inicialmente tuvieron el carácter de lugar porque allí se emplazaron los primeros barrios. Además esta actividad era fuente de trabajo para las comunidades. En la actualidad en la mayoría de explotaciones, sobre todo en las que ya están constituidas como empresas, no labora gente del barrio sino de fuera de la localidad, por lo cual se considera como -no lugar-. Para los habitantes de los barrios aledaños, esta actividad es invisibilizada: es algo que se evidencia pero constituye un elemento que no genera identidad ni pertenencia.

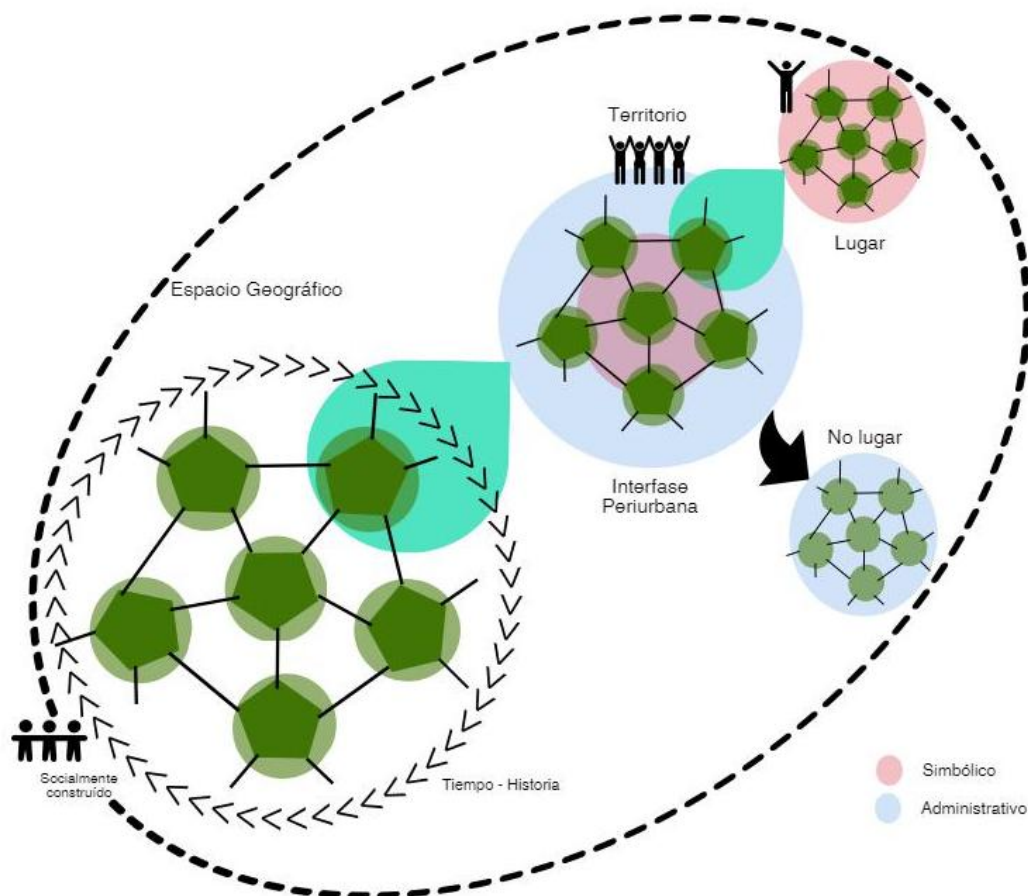


Figura 2-7. Representación fractal del espacio, el territorio, el lugar y el no lugar. La red de relaciones del espacio geográfico se transforma a través del tiempo, lo cual genera cambios en el territorio y el lugar. El territorio contiene elementos simbólicos y también cuenta con límites o divisiones administrativas. A su vez el lugar está inmerso en lo simbólico, y el no lugar solamente se rige por lo administrativo y funcional. Elaboración propia.

2.2.4 El concepto de Nueva Ruralidad

Las causas que aceleraron la migración a las zonas de interfase periurbana pueden entenderse a través de los procesos asociados al concepto de nueva ruralidad, ya que los pobladores inmigrantes llegan no solo a las partes urbanas de la IPU, también a las rurales, habitualmente buscando evocar su lugar de origen, mezclándose con los habitantes urbanos y los rurales autóctonos. Esta variedad de habitantes neo-rurales de la IPU se debate entre una serie de actividades tan diversas como la IPU misma. Para

ellos la ciudad no resulta extraña ni lejana, pero mantienen el arraigo que tienen por su territorio y su tradición campesina.

Los efectos de la globalización han generado cambios en el agro mundial. En el contexto de América Latina, entre los años 1950 y 1970 incluyeron la adecuación y/o emplazamiento de vías, infraestructura, riegos, ampliación de la frontera agrícola, a través de la colonización de tierras que fomentaban la migración, y mejoras en general para el sector del agro (Bonnal, Bosc, Díaz, y Losch, 2003). En la década de 1980, estas políticas estructurales giraron hacia el fomento de las exportaciones y el agro quedó en manos del sector privado. El sector agroindustrial se fortaleció, y la agricultura familiar no presentó cambios sustanciales, lo que conllevó a la pobreza en los sectores rurales (Bonnal, et al. 2003).

En Colombia, desde los años 50 se comenzó a fortalecer la agroindustria, pero después de la apertura económica de los años 90, solo sobrevivieron las del café, banano y flores. Los campesinos se enfocaron en la agroindustria alimentaria y productos no exportables, y se adaptaron a los requerimientos del sector productivo, pero no fue posible su vinculación a los mercados internacionales y el rendimiento en cuanto a indicadores sociales fue bajo, lo cual implicó una migración masiva hacia las ciudades (Pérez, 2001).

No obstante, la búsqueda de espacios con cercanía a un centro urbano y/o con buena dotación de recursos para el agro, generó una gradual adecuación de infraestructuras que facilitan el transporte y el movimiento de recursos y mano de obra, promoviendo la migración hacia estos nuevos emplazamientos en interfase periurbana donde se tienen más oportunidades de acceder a mercados, servicios y satisfacción de necesidades básicas (Bonnal, et al. 2003; Rubio, 2003 citado por Rodríguez, 2014).

La globalización ha intensificado la interdependencia entre los centros urbanos y las zonas rurales a través de los flujos, por lo que es importante el planteamiento de políticas integrales y no sectoriales dirigidas a lo rural o lo urbano por separado (Pérez, 2001).

Adicionalmente, Pérez (2001) explica algunas de las problemáticas presentes en el sector rural que se relacionan con la pérdida del modelo social y la identidad rural. El agricultor se debate entre las dinámicas de competencia que el mercado impone y las

tradicionales, generando una crisis no solo de identidad sino en sus formas de producir: el mercado denigra las actividades rurales, alejando a los jóvenes del campo, determina cuándo y cómo se debe producir, estableciéndose como único tomador de decisiones, y causando daños y pérdidas ambientales. De esta manera el *campesino metropolitano* abarca una variedad de actividades rurales y urbanas, que se manifiestan en el paisaje rural (Agudelo, 2012).

Los conflictos causados son generalmente por convivencia, recursos, falta de apoyos públicos, migración y pobreza, cacicazgos, exclusiones de género, problemas generacionales, etc., (Agudelo, 2012; Rodríguez, 2014) los cuales hacen que el modo de vida campesino muestre una constante reconstitución y adecuación (Rodríguez, 2014). Todas estas problemáticas solo pueden ser resueltas si se ofrece mayor participación a las comunidades rurales en la toma de decisiones sobre sus propios territorios. Estas comunidades no solo se enfocan en reclamar sus derechos sobre la propiedad, también en fortalecer dicha participación.

Ante este panorama, la nueva ruralidad se enfoca en la búsqueda de formas sostenibles de vida, proponiendo estrategias de desarrollo alternativo en donde las comunidades rurales tienen el reto de superar el abandono y rechazo de las nuevas generaciones hacia las actividades tradicionales. Adicionalmente, el reconocimiento de la interdependencia de las redes urbano-rurales conlleva a la valoración de los servicios que presta el sector rural por parte de las comunidades urbanas, que en ese ejercicio habrían de modificar sus pautas de consumo (Bonnal, et al., 2003; Pérez, 2001).

La revalorización de lo rural se genera principalmente desde lo cultural, planteándose como alternativa de vida, lo cual se ve reflejado en que las comunidades urbanas conservan aún muchas prácticas provenientes de la vida rural (Pérez, 2001). También se manifiesta en la búsqueda de formas de vida “menos artificiales” (p. 8) generando un retorno al campo y el deseo de permanecer allí por parte de las generaciones más jóvenes (Gómez, 2013).

2.3 Metodología para el Análisis del paisaje periurbano en Usme: La MERAP y la GTP

El análisis de la Interfase Periurbana en la localidad de Usme se hizo con base en la Metodología de los Eventos Relacionales para el Análisis del Paisaje MERAP, propuesta por Barrera-Lobatón (2014) y la GTP (Geosistema, Territorio y Paisaje) propuesta por Frolova y Bertrand (2006). La MERAP parte del supuesto de que el paisaje se modifica constantemente, por tanto, el análisis de ciertos eventos de interés permite entender las relaciones y dinámicas que modifican al paisaje bajo estudio. Estos eventos se encuadran en dinámicas espaciotemporales multiescales y abarcan una serie de causas y consecuencias que influyen en la modelación del paisaje (Barrera-Lobatón, 2014).

La MERAP se compone de la realidad ecológica identificada con los eventos físico-bióticos, y la realidad contextual, que se analiza desde los eventos de tipo económico, infraestructural, estructural, regulatorios y simbólicos. Para el caso de la interfase periurbana se seleccionaron los eventos regulatorios como los principales ya que de ellos se deriva el análisis relacional de la IPU de la localidad de Usme.

La GTP, Geosistema, Territorio y Paisaje es una metodología que ofrece una perspectiva paisajística integral de los sistemas ambientales (Bertrand, 2006). El geosistema, el territorio y el paisaje, representan tres ámbitos de la problemática medioambiental y por medio de ellos se analiza el funcionamiento global del medio geográfico, además de las interacciones entre los tres sistemas. La *Tabla 2-2. Sistema GTP (Geosistema, territorio y paisaje), a partir de Frolova y Bertrand (2006) y Metodología MERAP, a partir de Barrera-Lobatón (2014).* muestra los conceptos principales de las propuestas metodológicas GTP y MERAP.

Tabla 2-2. Sistema GTP (Geosistema, territorio y paisaje), a partir de Frolova y Bertrand (2006) y Metodología MERAP, a partir de Barrera-Lobatón (2014).

GTP	Geosistema	Ambiente como fuente	Analiza la estructura y funcionamiento biofísico por su grado de antropización	
	Territorio	Espacio geográfico como recurso	Analiza las repercusiones de la organización y el funcionamiento social y económico sobre el espacio	Artificialización del ambiente
	Paisaje	Resurgimiento, reflejo, recuperación, renovación	Enfoque sociocultural del ambiente por la percepción o por el uso del ambiente	Artialización ⁷
MERAP	Realidad ecológica	Elementos y eventos físico-bióticos		
	Realidad Contextual	Eventos económicos	Medios de sostenimiento económico derivados del trabajo sobre el entorno natural, concebido como proveedor de bienes y servicios. Puede estar determinada por fuerzas externas, por medio de políticas que determinen el uso y explotación de ese entorno.	
		Eventos infraestructurales (comunicación)	Medios de comunicación y transporte, flujos de información, conocimiento e insumos. Tanto físicos (carreteras, caminos, ríos, periódicos, etc.) como virtuales o flujos de información y conocimiento (televisión, radio, internet). Incluye redes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, alcantarillado).	
		Eventos estructurales	Acción política e institucional de delimitar, y sus efectos sobre las formas de apropiación y formas de habitar de las comunidades.	
		Eventos regulatorios	Entes institucionales, políticas, programas y proyectos, materializan la regulación por la que se rige un área determinada. Acciones sociales que buscan manejos alternativos de sus territorios.	
		Eventos simbólicos	Imaginarios, creencias, instalación de objetos o acciones simbólicas que modifican la relación y el entendimiento de los y las habitantes sobre el espacio habitado	

La realidad ecológica se analizó en este trabajo con base en el componente Geosistema de la metodología GTP, mientras que la contextual se basó en el análisis MERAP de la

⁷ Artialización: Transformación, por medio de la pintura, “de un espacio vivido o visto, en un paisaje contemplado y percibido” (Roger, 1997 citado por Frolova y Bertrand, 2006, p.258)

normativa que ha tenido incidencia en la transformación del paisaje periurbano de Usme. El componente Territorio de la GTP, se analizó desde la descripción de los contextos y el de Paisaje, desde la percepción de los habitantes de la localidad, a través de su expresión oral y pictórica. No obstante, éste último, es transversal a MERAP. La **Figura 2-** muestra como las dos propuestas se articulan para apoyar el análisis del paisaje de la zona periurbana de Usme.

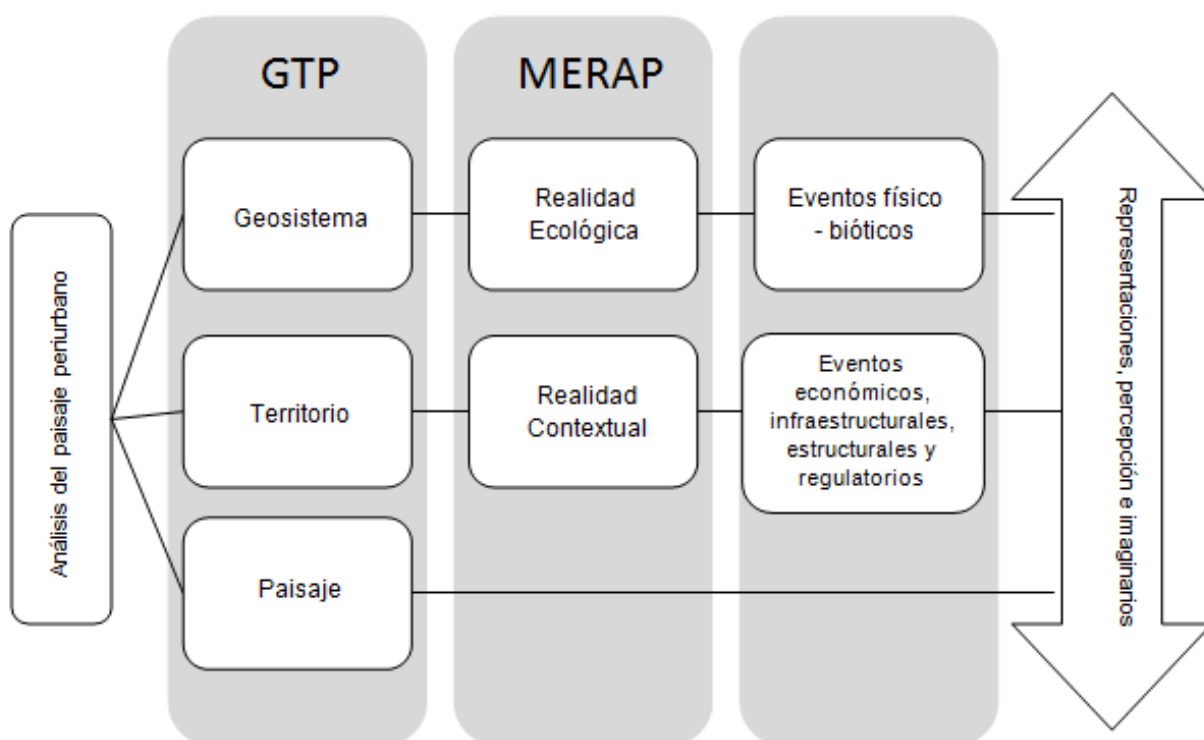


Figura 2-8. Articulación de las propuestas GTP y MERAP para el análisis del paisaje.

La construcción y transformación del paisaje obedece a factores históricos, naturales y antrópicos. Estos últimos, compuestos por las relaciones que las comunidades tienen con su entorno, como por las dinámicas impuestas desde esferas externas. El enfoque multiescalar, permitió identificar los efectos de la delimitación social y administrativa, y de las políticas externas sobre las estructuras territoriales locales, explicando las diferentes influencias que ejercen las relaciones de poder, la contigüidad y la vecindad, que definen en gran parte los flujos de energía, información y materiales, generando transformaciones en el paisaje.

Para el desarrollo del primer objetivo de este trabajo, se seleccionaron varios eventos regulatorios a través de la revisión de la normativa, la cual se contextualizó con datos históricos y se respaldó con datos demográficos. De cada normativa, se realizó el correspondiente análisis MERAP y GTP. Los problemas inherentes a la IPU se estudiaron mediante la revisión de referencias históricas y diagnósticos, y se representaron en mapas realizados a partir de dicha revisión. Las percepciones de la comunidad se hallaron a través de entrevistas, cartografía participativa y un cuestionario sobre la percepción del paisaje. Las preguntas formuladas a través de las herramientas anteriores giran alrededor de la percepción de la transformación ambiental del paisaje, la identificación (o confirmación) de los elementos y factores transformadores y las perspectivas que se tienen sobre el territorio, claro está puntualizando los ítems por tratar en el cuestionario y profundizándolos en la entrevista.

Las entrevistas se dirigieron a tres líderes comunitarios con extensos conocimientos sobre la localidad, y amplio recorrido en procesos locales con las comunidades rurales y urbanas de la misma. El cuestionario se realizó desde la plataforma Google Formularios, difundido a través de redes sociales, entre habitantes urbanos de la localidad, conocedores y no conocedores de los procesos comunitarios. El número de personas alcanzadas fue de 27, posterior a la depuración de los datos recolectados.

Estos elementos permitieron identificar diversidad de aspectos, entre ellos factores históricos, problemas y potencialidades del territorio, a través de las percepciones expresadas y las plasmadas en la representación gráfica. La **Figura 2-** muestra las herramientas metodológicas para cada objetivo propuesto.

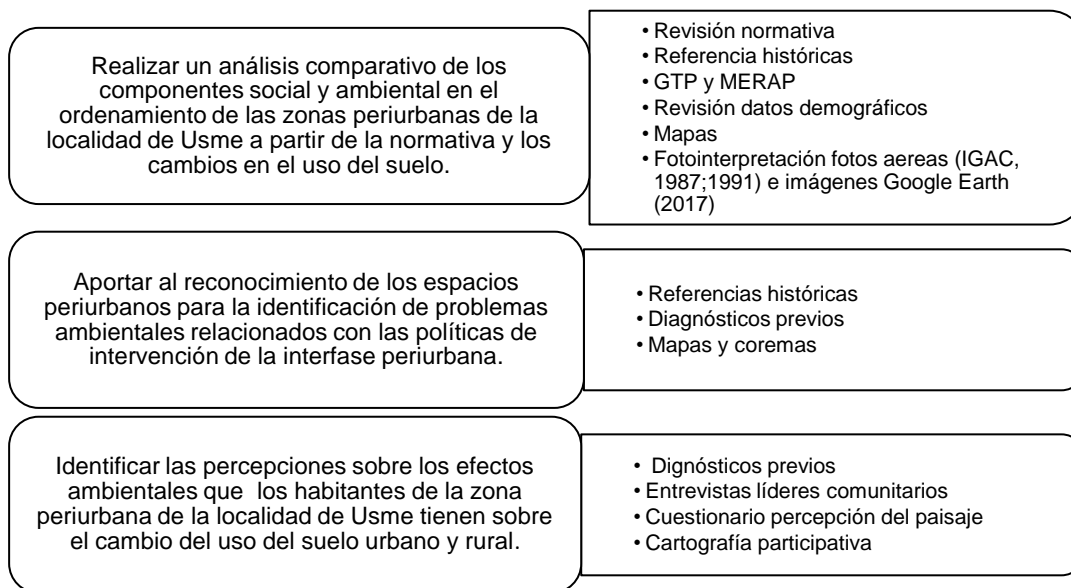


Figura 2-9. Herramientas metodológicas para el análisis del paisaje periurbano de Usme.

2.4 Descripción de la Interfase Periurbana de Usme: La Realidad ecológica y el crecimiento poblacional, como elementos dialógicos en la configuración de sus dinámicas

El contexto en el que se ha desarrollado la IPU de Usme se describe a continuación con base en lo propuesto por MERAP es decir a partir de la relación entre la realidad ecológica y la contextual.

Situada al extremo sur de Bogotá, la localidad de Usme limita al norte con las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito; al sur con la localidad de Sumapaz; al oriente con los municipios de Ubaque, Chipaque y Une; y al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar y los municipios de Pasca y Soacha. Usme es la segunda localidad más grande de Bogotá y también la segunda con mayor extensión de suelo rural, después de la localidad de Sumapaz (Mapa localización zona de estudio (Anexo B)). Usme tiene una conformación diversa, con diferentes tipos de actividades económicas como la minería y la actividad agropecuaria que incluye ganadería y actividad agrícola con productos como papa, arveja, haba, cebolla, maíz, entre otros. La población se compone de rural y

urbana proveniente de varias regiones del país. En los últimos años se destaca la inmigración de población afro.

Usme se caracteriza por ser una de las localidades de borde de Bogotá y abarca dentro de sus límites zonas protegidas amenazadas por la expansión de la frontera agrícola, expansión urbana, minería y depósito de desechos de toda la ciudad lo que refleja la falta de articulación entre las instituciones competentes, generando un desgobierno que perjudica a estas zonas. El avance de la expansión urbana no solo propia sino de la ciudad entera ha generado sucesivos cambios en los diversos ecosistemas de la zona (Anexo C).

En la localidad de Usme se pueden identificar tres unidades ecosistémicas y de relieve que han sido determinantes en la conformación las relaciones ambientales en la zona: el valle del río Tunjuelo, el cerro Entre Nubes y los Cerros Surorientales dentro de una gran unidad geomorfológica correspondiente al Sinclinal de Usme (Urrea, Del Castillo, Cuellar, 2011) clasificados respectivamente en: 1) una zona de colinas bajas y relieve ondulado; 2) área de colinas medias y altas; y 3) alta montaña correspondiente a subpáramo y páramo entre los 3350 y los 3800 msnm desde donde provienen las fuentes de agua que forman la cuenca del río Tunjuelo (Alcaldía Mayor, 2009) con una extensión de 41944 ha abasteciendo también los embalses de La Regadera y Chisacá (**Figura 2-** y Anexo B).

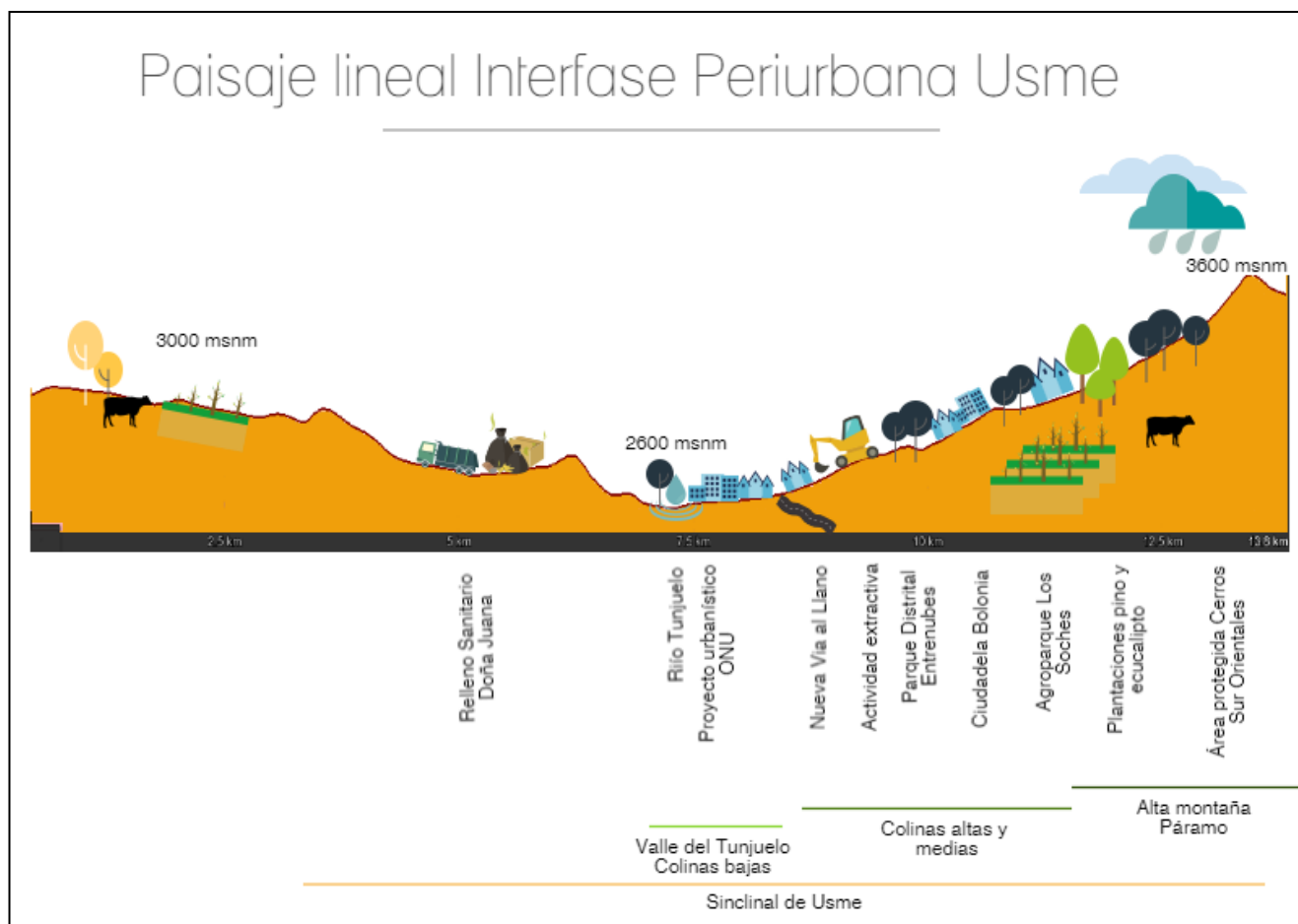


Figura 2-10. Paisaje lineal Interfase periurbana de Usme. El perfil permite identificar las unidades geomorfológicas (Sinclinal de Usme, Valle del río Tunjuelo) y ecosistémicas (zonas rurales y de protección). Asimismo, se identifican zonas de conflicto por usos del suelo: urbanización sobre la ronda del río; minería contigua a zonas urbanas y a zonas protegidas; urbanización en zonas con alta pendiente; bosque plantado de pinos y eucalipto en zonas protegidas; y el Relleno Sanitario Doña Juana desde donde se filtran los lixiviados al río Tunjuelo. Fuente: Elaboración propia a partir del perfil topográfico de Google Earth, 2017.

Estas fuentes de agua representan el 10% de las existentes en la ciudad. No obstante, los habitantes de la zona reconocen el deterioro en el que se encuentra la cuenca, tanto por invasión de las rondas como por vertimientos (Zambrano, 2005). Los casos más graves se encuentran en las corrientes que atraviesan los barrios como la Quebrada Yomasa, la Quebrada Chuniza y la Quebrada Santa Librada (Alcaldía Mayor, 2009) Sin embargo, en la quebrada Yomasa se han establecido algunos puntos para la agricultura urbana, y ha disminuido significativamente la disposición de las basuras en su ribera.

Teniendo en cuenta la variedad de relieves (entre 2690 y 3900 msnm), el clima es variable: en las partes bajas se registra precipitación de 800 mm/año y temperaturas promedio de 12° C, mientras en las partes altas, la precipitación puede ser superior a 1400 mm/año y la temperatura promedio de 6°C (Metrovivienda, 2011). Se genera además un microclima con vientos fríos y mayores precipitaciones hacia los cerros y temperaturas más cálidas y secas en las partes bajas.

Usme se asienta sobre la formación que lleva su nombre, de origen sedimentario y rica en areniscas y arcillas (Alcaldía Mayor, 1994) de manera que ofrece materiales de construcción generando actividad extractiva en canteras y beneficiaderos por lo que el río Tunjuelo marca una zona de explotación en la localidad, por su alto contenido de gravas de tipo agradacional⁸. El sector más afectado por la minería es el del Parque Entrenubes, donde se encuentran más de treinta minas ilegales, las cuales han afectado en gran medida fuentes hídricas y suelos. Adicionalmente, estas zonas presentan mayor riesgo por remoción en masa (Actividades conflictivas, 2007). Lo anterior también representa un mayor arrastre de material en las temporadas lluviosas, generando carcavamiento, erosión hídrica superficial, por escurrimiento difuso, intenso y concentrado, situaciones que se ven agravadas por la urbanización, la deforestación y explotación de canteras. (Zambrano, 2005).

Estas amenazas han sido identificadas principalmente en las UPZ⁹ Danubio y Gran Yomasa. Allí las zonas de alto riesgo están asociadas además a fallas tectónicas. Se presenta también desprendimiento de rocas y hundimiento de suelos. En zonas rurales, estas situaciones se originan a partir de la pérdida de cobertura del suelo (Alcaldía Mayor, 2013).

Mediante la conformación del Parque Minero Industrial de Usme se reglamentó la zona compatible con actividad minera, donde según su plan de manejo, esta actividad se llevará a cabo bajo parámetros de producción limpia garantizando al mismo tiempo la calidad de los productos para proveer a la ciudad de material de construcción. En el

⁸ Agradación: acumulación de sedimentos que la corriente de un río o arroyo ya no puede arrastrar.

⁹ UPZ: Unidad de Planeamiento Zonal. Instrumento de planeación urbanístico para un conjunto de barrios con características comunes. Las localidades se dividen en UPZ. Usme cuenta con siete UPZ: La Flora, Danubio, Gran Yomasa, Comuneros, Alfonso López, Ciudad Usme y Entre Nubes.

Parque Minero Industrial de Usme solo 6 empresas extractivas poseen título minero, lo cual refleja un alto grado de ilegalidad, siendo éste de un 90% (Actividades conflictivas, 2007).

La presa seca de Cantarrana se construyó con el fin de regular el caudal del río Tunjuelo en estaciones lluviosas, para evitar la inundación de barrios ubicados en la cuenca media del río (localidad de Tunjuelito). Por su localización en el borde de la ciudad y dadas las condiciones de aridez y presencia de materiales impermeables en los suelos, el Relleno Sanitario Doña Juana fue localizado en inmediaciones de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, iniciando actividades en el año 1988. En la zona entre Cantarrana y la entrada al Relleno Sanitario Doña Juana, existen beneficiaderos de material de construcción, lo cual afecta directamente al río Tunjuelo por el vertimiento de aguas residuales y el relleno de la ribera del río. Estas actividades extractivas y el relleno sanitario son indiferentes para gran parte de la ciudad, pero han generado en los habitantes de la localidad problemáticas referentes a salud, ante lo cual se han realizado varias movilizaciones por el desmonte de estas actividades, máxime desde el evento ocurrido en 1997, cuando el relleno sanitario colapsa afectando a un gran sector de la población de Usme y Ciudad Bolívar. Esta situación está a punto de volver a presentarse.

Uno de los servicios ambientales más importantes que ofrece la vegetación y la formación del suelo, es la prevención de deslizamientos en varias zonas de la localidad, donde se ubica la población más vulnerable de la IPU (barrios de invasión). Otros servicios ambientales consisten en conservación de ecosistemas, fertilidad y formación de suelos, control de la erosión, belleza paisajística (contemplación), conservación de flora y fauna, mantenimiento de la calidad del aire, regulación hídrica y fijación de carbono, etc. Estos servicios se encuentran amenazados por procesos de expansión urbana, explotación minera, degradación ambiental, plantación de especies vegetales invasoras o foráneas. Las áreas mejor conservadas se encuentran en los páramos, que, no obstante, están afectados por la expansión de la frontera agrícola (SDP, 2010).

Entre los bienes ambientales se encuentra en primer lugar el agua superficial, proveniente principalmente de los embalses de Chisacá y La Regadera, que proveen el agua para el sur de la ciudad, y de las corrientes que abastecen a la mayoría del área rural de la localidad. La localización estratégica de estos embalses se debe a su posición central entre la ciudad y la zona rural o el páramo desde donde procede el agua. A pesar

de los efectos negativos de la producción agrícola sobre estas fuentes, su estado de conservación es deseable y la disponibilidad alta (SDP, 2010).

En cuanto a los recursos pesqueros, se concentran en los ríos Chisacá y Curubital, donde existe cultivo de trucha. Esto no permite la recuperación de especies de peces endémicas, pero es fuente de ingresos económicos para los habitantes rurales. También se considera bien ambiental, lo concerniente a los recursos mineros, causantes del deterioro de gran parte de la localidad. Finalmente, se encuentran recursos maderables, con disponibilidad media, dado el carácter de zonas de protección para los bosques de la localidad (SDP, 2010).

La cobertura vegetal nativa es poca, estableciéndose en su mayoría en las zonas de páramo y subpáramo, bastante intervenidos por ganadería, cultivos y plantaciones de eucalipto y pino. Predominan las coberturas de pastizales y cultivos. En cuanto a fauna, las especies más numerosas corresponden al grupo de las aves, seguidas por mamíferos y reptiles (Metrovivienda, 2011). Las coberturas han sido amenazadas principalmente por la expansión urbana formal e informal y la influencia de la Nueva vía al Llano fragmentando notablemente el corredor de páramos Chingaza- Sumapaz, ya que se constituye como un nexo de integración regional con los Llanos orientales. Este interés económico prima sobre los ambientales. Otro elemento importante es el hallazgo arqueológico que se ubica en la Hacienda El Carmen, descubierto en el año 2007. Ha sido uno de los factores que ha frenado el proyecto urbanístico OENU.

Los aspectos demográficos son causa como consecuencia de la expansión urbana y generan efectos ambientales notables. El crecimiento de la población de Usme entre 1970 y 1980, fue el mayor entre los municipios anexados en 1954, y en el periodo de 1993 a 2005, se registró el cuarto crecimiento más alto en el mismo grupo de localidades (**Tabla 2-3. Totales de población de Usme y municipios anexados a Bogotá en 1954. Elaboración propia a partir de DANE, Población ajustada de Bogotá D.C. y Censos de población 1951 y 1964 y 2-4).**

Tabla 2-3. Totales de población de Usme y municipios anexados a Bogotá en 1954. Elaboración propia a partir de DANE, Población ajustada de Bogotá D.C. y Censos de población 1951 y 1964.

Localidades	1951 ⁽¹⁾	1964 ⁽²⁾	1973 ⁽³⁾	1985 ⁽⁴⁾	1993 ⁽⁵⁾	2005
	9 de mayo	15 de julio	24 de octubre	15 de octubre	24 de octubre	30 de junio
Total Bogotá	715250	1568101	2496172	4262127	5440401	6840115
Bosa	16613	23970	23871	122737	215816	508828
Engativá	5782	4383	319367	530610	671360	804470
Fontibón	16468	45872	90060	166427	201610	301375
Suba	6062	20077	97459	334700	564658	923064
Usaquén	11207	30282	71427	216320	348852	425192
Usme	10794	4626	6394	164847	200892	298992

1. DANE. Censo de Población de 1951. Departamento de Cundinamarca.
2. DANE. XIII Censo Nacional de Población. Resumen de Bogotá. 1964
3. CCRP. Proyecciones de población del Distrito Capital y su distribución espacial al año 2010.
4. DANE. Edición de información por localidades de Santafé de Bogotá Censo 1993.
5. DANE. Colombia. proceso de conciliación censal 1985-2005.

Tabla 2-4. Crecimiento total e intercensal de Usme y los municipios anexados a Bogotá en 1954. (Cifras en porcentaje) Elaboración propia a partir de la tabla 2-3.

Localidades	Crecimiento total de 1964 a 1973	Crecimiento total de 1973 a 1985	Crecimiento total de 1985 a 1993	Crecimiento total de 1993 a 2005	Crecimiento anual de 1964 a 1973	Crecimiento anual de 1973 a 1985	Crecimiento anual de 1985 a 1993	Crecimiento anual de 1993 a 2005
Total	59,18	70,75	27,65	25,73	6,58	5,90	3,46	2,14
Bosa	-0,41	414,17	75,84	135,77	-0,05	34,51	9,48	11,31
Engativá	7186,49	66,14	26,53	19,83	798,50	5,51	3,32	1,65
Fontibón	96,33	84,80	21,14	49,48	10,70	7,07	2,64	4,12
Suba	385,43	243,43	68,71	63,47	42,83	20,29	8,59	5,29
Usaquén	135,87	202,85	61,27	21,88	15,10	16,90	7,66	1,82
Usme	38,22	2478,15	21,87	48,83	4,25	206,51	2,73	4,07

De la tabla anterior, se puede inferir que durante (1973-1985) Usme fue la localidad con el mayor crecimiento teniendo en cuenta el auge de la industria minera y la gran cantidad de migrantes internos a causa inicialmente de la ola de violencia existente desde los años 50. En este periodo, 1973-1985, el crecimiento fue significativamente alto con un 2478% de crecimiento, cifra histórica para la localidad y muy elevada al compararla con Bogotá. En este tiempo, el crecimiento urbano se reflejó en el establecimiento y desarrollo de actividades extractivas, la desaparición de la Hacienda como medio

productivo y la parcelación y loteo destinada a construcción de vivienda informal para la población entrante (Anexo D).

Entre 1993 y 2005 el crecimiento no fue tan considerable a comparación de localidades como Bosa o Suba. Sin embargo, Usme tuvo uno de los cuatro más altos crecimientos con 48.8%. Esto se debe a la urbanización de terrenos baldíos, el establecimiento de barrios de invasión que facilitaban el acceso a la vivienda (lo cual se tradujo en la declaración de Usme como zona de expansión urbana), a las oportunidades de trabajo que ofrecía la región sobre todo en el sector rural, y claro está, la descendencia de la primera ola de inmigrantes. Los demás municipios anexos en 1954 se incluyen en las Tablas 2-3 y 2-4 para establecer una comparación de crecimiento de la localidad, ya que la anexión fue crucial en el crecimiento urbano y cambios en la normativa de uso del suelo para Bogotá. Además, esas localidades hacen parte hoy de la franja de bordes de la ciudad (Anexo E).

Teniendo en cuenta lo anterior, la localidad ha sido históricamente receptora de población, presentando un crecimiento destacado y por ende aumento de la urbanización, lo que ha elevado el número de conflictos ambientales. Las problemáticas ambientales, sin embargo, vienen de mucho tiempo atrás, con las zonas de explotación minera de materiales para la construcción.

Usme es una zona receptora de población especialmente campesina, ya que el costo de vida es bajo. La mayoría de los emigrantes proviene de Boyacá, Cundinamarca y Tolima. De los dos primeros departamentos, las personas emigran a Usme por razones familiares, ya que la zona evoca de cierta manera condiciones similares al lugar de origen. En cuanto a la población emigrante del Tolima, la mayoría lo hace por desplazamiento forzado (RETADAM, DANE) (**Figura 2-**).

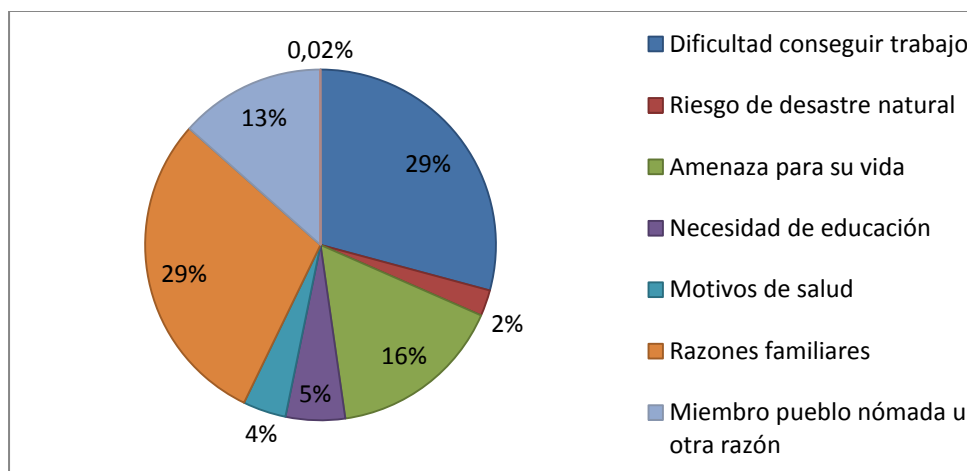


Figura 2-11. Razones de migración hacia la zona de Usme. Elaboración propia a partir de RETADAM (DANE)

Las cifras estimadas de población rural para Usme son inciertas, fluctuando entre diferentes fuentes (**Tabla 2-5**). Luego de la anexión del municipio a Bogotá, los censos no discriminaron las cifras entre población rural y urbana, por lo cual no se tiene certeza sobre las cifras históricas rurales. Otras entidades estimaron diferentes valores, pero siguen siendo inciertos. Según la Política Pública Distrital de Ruralidad (citada por Alcaldía Mayor, 2009) la localidad de Usme es la que posee mayor concentración de población rural, alcanzando un 34% de la totalidad de esta población para el Distrito Capital, es decir que, de un total de 16.429 habitantes rurales de Bogotá, 5.585 pertenecen a esta localidad. Según datos censales el crecimiento de la población rural entre 1973 y 1985 aumentó un 3.10%, superior a las demás localidades de la ciudad. En el periodo entre 1985 y 1993 este índice de crecimiento fue de 2.5%. Planeación Distrital afirma que en 1997 la población rural de Usme equivalía a 3.218 habitantes; en 2002 aumentó a 5.593 habitantes, ubicadas en 1.119 viviendas, localizadas en 15 veredas. (Observatorio Rural y Alcaldía Mayor, 2009).

No obstante las cifras variables, estas demuestran que la zona rural de la localidad se ve enormemente amenazada por la presión del crecimiento urbano, debido a la cantidad de población desplazada por el conflicto armado que se ubica en las áreas de expansión urbana, siendo las zonas destinadas para ello, las veredas, El Uval, La Requilina y Olarte, reglamentadas por el Plan de Ordenamiento Territorial, en el año 2000. De esta manera la tendencia se dirige hacia el aumento de la población urbana en la localidad.

De acuerdo con el Primer Censo y Foro Educativo 1985 de Usme realizado por el CEYS (Comité de Educación y Salud de Usme), Usme contaba en dicho año con 307.000 habitantes y según el Encuentro de hogares 30 del DANE, la población para el mismo año era de 304.000 habitantes (Santafé, 1998, p.181). En el II Censo poblacional y foro educativo Usme de 1989, la población era de 350.000 habitantes, y en el censo del DANE de 1993 Usme contaba con 178000 habitantes (Santafé, 1998, p. 202)

Tabla 2-5 Cifras históricas población de la localidad de Usme.

Año	Población Rural	Población Urbana	Total	Observaciones
1951	10583	211	10794	(1) (2) El Censo 1951 Cundinamarca aclara: “La cabecera de Usme no puede considerarse como centro urbano, sin embargo aparecen 2084 habitantes que corresponden a barrios o prolongaciones de Bogotá que entran es ese municipio”.
1964	3699	927	4026	(3) El Censo para Bogotá de 1964 define la totalidad de habitantes de la localidad como rurales ya que en este censo se consideraban urbanas unicamente poblaciones con mas de 1500 hab. Usme se considera municipio. Sin embargo define más adelante 927 habitantes en cabecera y 3699 resto. Adicionalmente se desglosan los datos en nacidos en el municipio con 643 en cabecera y 2889 resto, lo que genera un resultado de 494 no nacidos en Usme. (4) Se categoriza a Bogotá y sus localidades anexas como municipios.
1973			6394	(5.)
1985			164847	(6.)
			184662	(7.)
				(8) En el censo de 1985, Usme está catalogada como una de las 7 cabeceras municipales de Bogotá., junto con las demás localidades anexas en 1954.
			307000	(9.)
			304000	(10.)
1993			200892	(11.)
1994	4000			(12.)
1997	3218			(13.)
2002	5593			(14.)
2005			298992	(15.)
			294580	(16.)
			299621	(17.)
2007			314431	(18.)
2009			349346	(19.)
1. DANE. Censo de Población 9 de mayo de 1951. Decreto ley 1905 de 1954				
2. DANE. Censo de Población 1951. Cundinamarca.				
3. DANE. XIII Censo Nacional de población y II de edificios y viviendas. Julio 15 de 1964. Bogota D.E.				
4. DANE. Población del país según el censo 1964				
5. CCRP. Proyecciones de población del Distrito Capital y su distribución espacial al año 2010.				
6. DANE. Edición de información por localidades de Santa fe de Bogotá Censo 1993				
7 y 16. Observatorio Rural				
8. DANE. División político administrativa de Colombia. Julio de 1985.				
9. Comité de Educación y Salud de Usme (CEYS)(Santafé, 1998)				
10. DANE. Encuentro de hogares 30 (Santa fe, 1998)				
11. DANE. Edición de información por localidades de Santa fe de Bogotá Censo 1993.				
12. Alcaldía Mayor. Agenda Local Ambiental Usme 1994				
13. 14 y 16. Alcaldía Mayor. Agenda Local Ambiental Usme 2005.				
15. DANE. Colombia. Proceso de conciliación censal 1985-2005.				
17 y 19. SDP. Inventario estadístico. Aspectos demográficos.				
18. Encuesta de calidad de vida Bogotá 2007.				

La localidad de Usme se encuentra dividida en 7 UPZ. De acuerdo con la **¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.**, se puede inferir que la UPZ Alfonso López tiene el más alto crecimiento poblacional, el cual sigue incrementándose con urbanización informal. Esto contrasta con la UPZ Danubio, cuyo carácter de centralidad generó crecimiento por la urbanización formal asentada en los alrededores del portal de Usme. En el caso de Entre Nubes, pese a ser una UPZ de protección, la expansión urbana proveniente de Juan Rey, Gran Yomasa y Danubio, ha generado tal crecimiento. Gran Yomasa no creció en este periodo, debido a que su crecimiento se dio entre 1960 y 1980 (Anexo F).

Tabla 2-6. Crecimiento poblacional total y anual de las UPZ de Usme 2005-2015 (Cifras en porcentaje). Elaboración propia a partir de DANE y SDP.

UPZ	Población 2005	Población 2015	Crecimiento total 2005-2015	Crecimiento anual 2005-2015
La Flora	16.475	21.539	30,7	3,1
Danubio	29.775	47.420	59,3	5,9
Gran Yomasa	124.321	157.588	26,8	2,7
Comuneros	76.214	102.806	34,9	3,5
Alfonso López	39.818	83.579	109,9	11,0
Entre Nubes	1.531	2.658	73,6	7,4
Ciudad Usme	11.460	16.885	47,3	4,7

La disparidad en las cifras y estimaciones, evidencia la falta de una caracterización apropiada de la población de la IPU y la fragmentación institucional. Los problemas respecto a la caracterización de la población se puntualizan en el apartado 4.2.

3 El papel de la normatividad en el ordenamiento ambiental y en el cambio de uso de suelo de la interfase periurbana de la localidad de Usme

La red de poblados y caminos muiscas determinó en gran parte la configuración espacial de Bogotá, y poblaciones aledañas, ya que siguiendo sus trazados se realizaron las principales vías que conectaban con poblaciones que aún hoy siguen siendo parte de la red amplia de la ciudad.

La ley 17 del 11 de abril de 1905, la ley^{1ª} del 5 de agosto de 1908 y el Acto Legislativo número 1 de 1945, consolidaron a Bogotá como capital y Distrito Especial (Díaz, 2005), lo cual le dio un carácter administrativo independiente respecto a la gobernación de Cundinamarca (Zambrano, 2005). Con esta última ley también quedó estipulado que las anexiones se debían solicitar por tres cuartas partes de los concejales de los municipios interesados en formar un Departamento o anexionarse. Sin embargo, los municipios de Usme, Suba, Usaquén, Bosa, Fontibón y Engativá se anexaron al ahora Distrito Especial, por una declaración de estado de sitio del entonces presidente, Gustavo Rojas Pinilla, sin una justificación aparente y sin que los municipios manifestaran su intención de anexarse (Díaz, 2005).

Como antecedente, con la ley 88 del 27 de diciembre de 1947, se establecieron Planes Reguladores para Bogotá, Cali y Medellín, basados en planeación con enfoque regional. Sin embargo el plan para Bogotá no se aprueba debido al rechazo que provocó la delimitación propuesta (hasta la carrera 30 hacia el occidente): los urbanizadores ejercieron presión para que esto no se diera, dado que se generaría aislamiento de los desarrollos urbanísticos impulsados por estos. Así la planeación de la ciudad quedó a su disposición. Finalmente, se anexaron los seis municipios que se acentuaron como centralidades generando conurbación (Díaz, 2005). El crecimiento al occidente de la ciudad se manifestó con construcciones como el CAN y el aeropuerto Eldorado (Zambrano, 2005).

Entre los años 50 y 70, el crecimiento demográfico fue tal que ya ningún plan para regular la expansión urbana funcionó, y la oficialización de los barrios informales se vio mediada por políticos. Esta expansión generó grandes utilidades para urbanizadores legales y piratas, y dueños de tierras, además de ocasionar alta demanda de servicios públicos para los nuevos barrios. El 40% de área construida en este periodo, corresponde a barrios informales, paradójicamente cuando los gobiernos hacían un esfuerzo por establecer una ciudad completamente planificada (Zambrano, 2005).

La expansión urbana y el crecimiento demográfico de la capital han generado sucesivas normas (eventos regulatorios) legitimando el modelo de ciudad que se expande hacia los bordes originando cambios en el territorio y las formas de habitar, además de cambios en las políticas que, a su vez, modifican la visión de los actores respecto al territorio. Los nueve eventos regulatorios desde los cuales se hace el análisis de la IPU de Usme

(**Figura 3-1**; Anexo G) han transformado el paisaje de manera constante y acelerada, originando cambios notables tanto en la realidad ecológica como en la contextual. A partir de los eventos regulatorios se analiza la realidad contextual y se estudian las relaciones con los otros eventos definidos en MERAP: económicos, infraestructurales, estructurales y simbólicos (Anexo G).

A continuación, se aborda lo concerniente a la reglamentación que existe sobre bordes y franjas de transición urbano-rural (definiciones con las que se identifica la IPU desde lo institucional) es decir, los eventos regulatorios que se ciñen al marco del Protocolo de Pactos de Bordo. Existen antecedentes históricos que corresponden a normas orientadas al uso del suelo de Bogotá, o específicamente hacia Usme, que han incidido en su transformación territorial y paisajística, sobre los cuales se aplica el análisis.

Las normas enunciadas en la **Figura 3-1**, se seleccionaron de acuerdo con su incidencia en las transformaciones ambientales y reconfiguraciones territoriales de la localidad de Usme, desde que esta fue anexada a Bogotá. Se incluyen normas para todo el Distrito Capital y normas específicas dirigidas a la localidad de Usme. Cabe aclarar que las normas orientadas al cambio de uso del suelo tienen incidencia en lo ambiental y viceversa. No obstante, se clasificaron de este modo por el enfoque esencial de cada norma.

A continuación, y con base en estas normativas (eventos regulatorios) se expone una breve descripción del contexto histórico correspondiente a las dinámicas ambientales y cambios de uso del suelo que dan lugar a las dinámicas de la IPU de Usme. Si bien los cambios entre la vigencia de una y otra norma no son inmediatos, estos legitiman de alguna manera la constante expansión urbana y el establecimiento de actividades en conflicto con el carácter de protección ambiental que tiene la zona de estudio. Además, se busca visibilizar el papel de las vías (eventos infraestructurales), en especial la Nueva vía al Llano en la configuración espacial del territorio, la expansión urbana y el crecimiento poblacional (Anexo G).

Normas históricas incidentes en la IPU de Usme

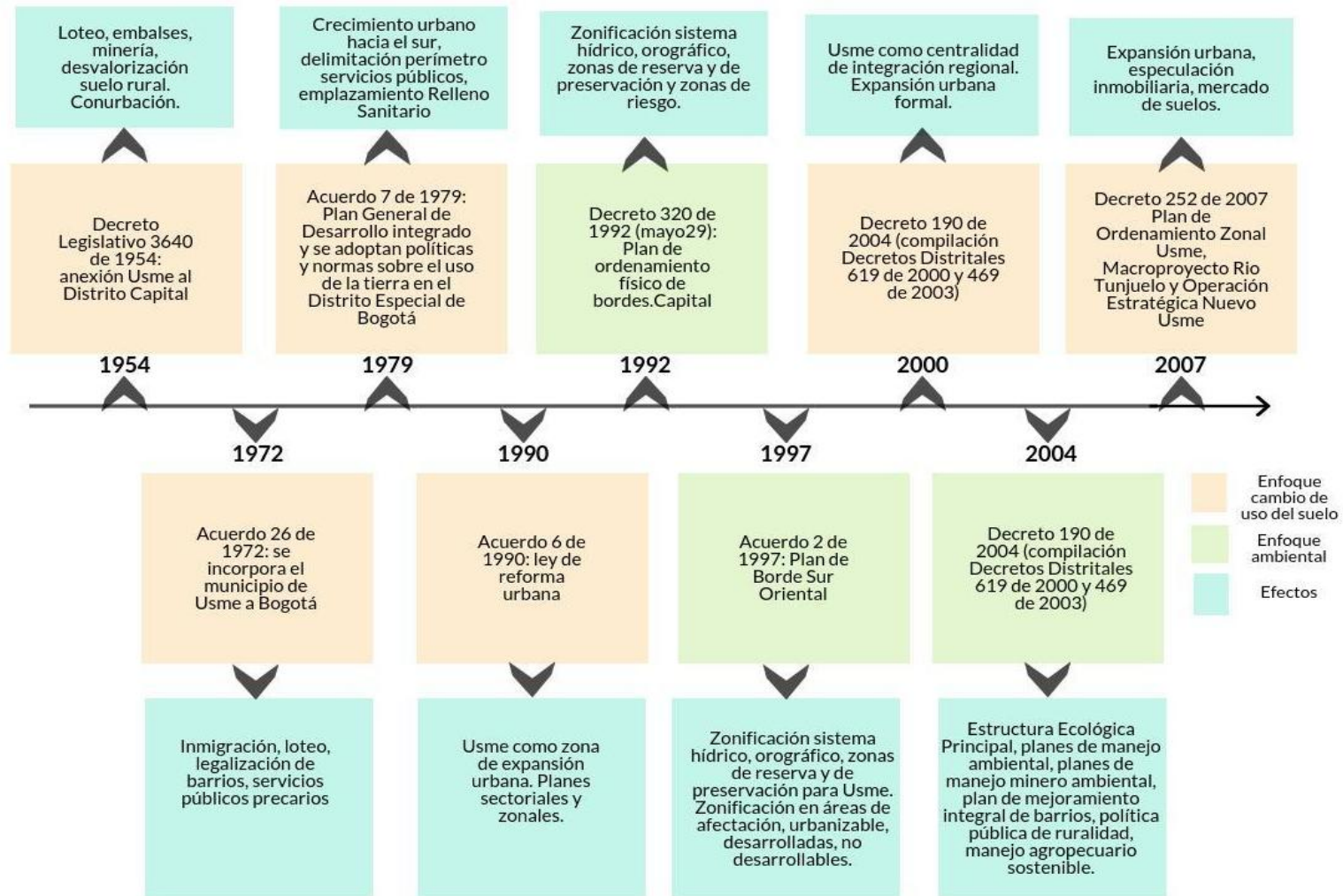


Figura 3-1. Normas incidentes en la configuración del paisaje periurbano de Usme

3.1 La IPU y su relación con los Bordes o Franjas de Transición Urbano-Rural (FTUR) en la normatividad de Bogotá

En Bogotá la normativa no incluye explícitamente el concepto de IPU, define las Franjas de Transición Urbano-Rural de borde¹⁰ y los bordes, las cuáles serían su equivalente. Lo anterior dada la variedad de conceptos existentes respecto a espacios híbridos en la normativa y en las discusiones con la comunidad. La FTUR Sur, comprendida por Usme y Ciudad Bolívar, es afectada por el Relleno Sanitario Doña Juana, expansión urbana y minería. Estas zonas son proclives a riesgos por fenómenos naturales extremos (remoción en masa e inundaciones) (Toro et al. 2005; SDP, (s.f.)).

La noción de bordes en la ciudad de Bogotá, y las estrategias y políticas al respecto se vienen planteando desde los años 90 con el Acuerdo 6 de 1990. Mediante los Acuerdos 26 y 31 de 1996, se adoptan los planes de ordenamiento físico de los bordes occidental-norte y nororiental, respectivamente, y el Acuerdo 2 de 1997 para el borde suroriental de la ciudad (Ballén-Velásquez, 2014), derogados por el Decreto 619 de 2000, POT.

Desde el DAMA (Departamento Administrativo del Medio Ambiente) se planteó el Protocolo Distrital de Pactos de Borde (Reina y Rojas, 2004). En el proceso, se contó con la participación de las instituciones y la comunidad habitante de estas zonas, en el marco de construcción del POT de Bogotá y su posterior revisión en el año 2003; en este se consensuó trabajar conjuntamente por mejorar la calidad de vida de los residentes y frenar la urbanización ilegal en zonas protegidas. En el Artículo 100 del POT, Decreto 190 de 2004, se establece el corredor ecológico de borde como una franja con una extensión de 50 a 100 metros en suelo rural “contigua y paralela al perímetro urbano”. La **Figura 3-2** ilustra la normativa histórica sobre bordes en el Distrito Capital.

¹⁰ En Bogotá existen cuatro zonas definidas como Franja de Transición Urbano-Rural de borde: la franja norte se caracteriza población de estratos altos, emplazamiento de centros comerciales y altos precios de los suelos. La urbanización allí en su mayoría es legal. En el caso de la franja oriente, el borde concierne a los Cerros Orientales de la ciudad, con problemáticas como la urbanización de lujo formal e informal y la invasión de los cerros. Al occidente, el borde correspondiente a las localidades de Bosa-Soacha, Fontibón y Engativá presenta situaciones como el emplazamiento de industria, urbanización informal, déficit en el sistema de alcantarillado, contaminación de humedales y del río Bogotá. Así, se evidencia un crecimiento urbano inclinado hacia las zonas sur y oriental de Bogotá.

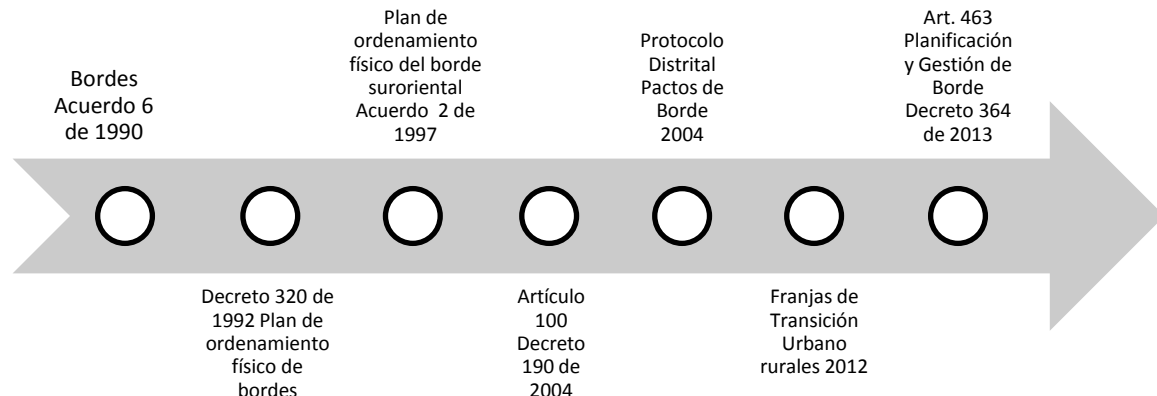


Figura 3-2. Línea de tiempo sobre normativa de bordes incidente en la localidad de Usme.

En el Protocolo de Pactos de Borde (Reina y Rojas, 2004), se establece una diferencia entre bordes y franjas de transición. El primer término, obedece al sentido sociocultural, al imaginario del borde como territorio de retos y oportunidades para la construcción de ciudad, con diversidad de usos del suelo y actores; el segundo, las franjas de transición, se definen como un área intermedia entre lo construido y lo natural que cumple la función principal de evitar la expansión urbana ilegal y a su vez las conexiones ilegales a servicios públicos. De acuerdo con lo anterior, Díaz (2006), complementa:

Los bordes son entendidos como aquellos lugares donde con diferentes intensidades siempre están presentes las mayores potencialidades de desarrollo, pues no intentan separar, sino lo que hacen es entretejer las áreas aledañas, bien sea por las actividades económicas de la población, las preexistencias de tipo geográfico, las huellas históricas, o por ser el espacio de tránsito entre las diferentes escalas y áreas del territorio. Este tema hace parte de la discusión contemporánea sobre el papel de la periferia urbana, en un momento en el que las ciudades en el mundo continúan rebasando esos límites y cargándolos de transitoriedad (Díaz, 2006, p. 133)

No obstante, se considera que la IPU contiene los componentes territoriales que definen tanto al borde como los componentes administrativos correspondientes a la FTUR desde la cual normativamente se gestiona la IPU.

El Pacto de Borde se estableció como instrumento de gestión del territorio a través de acuerdos entre actores públicos y privados, en la búsqueda de intervenciones integrales y sinérgicas para la construcción y delimitación de los bordes, en suelo urbano, rural y de protección. En el proceso se evidenció la diversidad de nociones sobre el concepto de franja de transición, bordes, etc., y las representaciones y proyecciones que tiene cada uno de dichos grupos sobre el territorio, generando disputas, en términos socio ambientales, de los cuales se derivan problemáticas que implican la expansión urbana, zonas de protección de ecosistemas, formas de vida campesina, entre otros. También se evidencia la desarticulación institucional y se generan propuestas para el ordenamiento de los bordes.

El artículo 473 del Decreto 364 de 2013, en el marco de la prevención contra el cambio climático y ordenación alrededor del agua, establece el Instrumento de Planificación y Gestión de Borde, enfocado, una vez más, a la contención de la expansión urbana en la búsqueda del modelo de ciudad compacta, modos de vida sustentables, fortalecimiento y participación de las redes comunitarias, protección de la Estructura Ecológica Principal, protección del patrimonio cultural, gestión de riesgos, entre otros.

Al anterior, se articulan el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (Art. 534) y el Plan de Gestión Ambiental del Distrito, el cual incluye entre sus subprogramas, la Gestión de bordes y franjas de transición urbano – rurales, que, a su vez, integra los siguientes instrumentos: Plan de Manejo Ambiental del Nivel Distrital (PMA), Planes de Ordenamiento Zonal (POZ), Planes de Mejoramiento Urbano (PMU) y el Instrumento de planeación de borde (SDP, (s.f.)). Al Protocolo de Pactos de Borde, se articulan, además, los Planes Parciales y las Operaciones Estratégicas. En el marco del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, La Caja de Vivienda Popular fue delegada por la Alcaldía Mayor como ente coordinador de Pactos de Borde (Reina y Rojas, 2004).

De lo anterior, surge un documento de la Secretaría de Planeación Distrital (s.f.) con la caracterización de las zonas de transición urbano-rurales de Bogotá, en el marco del plan

de desarrollo “Bogotá Humana”, el cual plantea en uno de sus objetivos, reducir la presión sobre la franja urbano-rural, a través del plan de Centro Ampliado¹¹ de la ciudad.

Se evidencia que gran parte de los servicios ecosistémicos para la ciudad, los brindan los bordes y zonas rurales de Bogotá, por lo cual la Estructura Ecológica Principal (EEP) se constituye como eje ordenador. Así mismo, se demuestra que estas zonas son las más propensas a la expansión urbana acelerada. Uno de los factores de esa expansión son las vías de integración regional y la ocupación no planificada o proyectos urbanísticos impulsados por los Planes Parciales, y las lógicas de mercado inmobiliario regional, que se generan a lo largo de ellas, originando un patrón “consuburbanizado” manifestado en la presión sobre estas áreas de borde. En el caso de Bogotá, las ciudades que conforman el polo regional corresponden principalmente a Tunja, Ibagué y Villavicencio (SDP (s.f.)).

Dado el destacado carácter que tiene el objetivo de frenar la urbanización ilegal o no planificada en estas áreas, se declararon como zonas de expansión urbana programadas por medio de Planes Zonales y Parciales, entre ellos la Operación Estratégica Nuevo Usme, administrada por Metrovivienda¹², que se establece como la primera operación urbanística de borde urbano-rural que busca instaurar reasentamiento productivo, proteger al campesinado y establecer un límite físico al sur de la ciudad (Ballén-Velásquez, 2014 citando a SDP, 2006)

A continuación, se exponen los cambios de uso del suelo en la IPU de Usme a partir de los eventos regulatorios seleccionados (**Figura 3-1**).

3.2 Eventos regulatorios y los cambios de uso del suelo en la IPU de Usme

Las normas o eventos regulatorios ejercen cambios en el uso del suelo, definen límites y funciones administrativas, y se materializan mediante los eventos estructurales, es decir propenden por expansión urbana, legalización de barrios, emplazamiento de

¹¹ Centro ampliado: modelo de ciudad compacta que busca eliminar la presión sobre los bordes de la ciudad por medio de la concentración de actividades urbanísticas y oferta de servicios (SDP,(s.f.))

¹² Metrovivienda: “empresa industrial y comercial de la Alcaldía Mayor de Bogotá que promueve la construcción y adquisición de vivienda de interés social en la ciudad” www.metrovivienda.gov.co

infraestructura, y obedecen en su mayoría, a intereses externos. No obstante, estas normas también tienen efectos ambientales pero su enfoque es explícito hacia los cambios de uso del suelo.

3.2.1 Anexión de Usme al Distrito Capital

A través del Decreto Legislativo 3640 de 1954, el municipio de Usme, junto con los municipios Suba, Usaquén, Bosa, Fontibón y Engativá fueron anexados al Distrito Especial, lo cual suscitó la asignación de una alcaldía menor a cada uno de ellos. Previamente al Decreto, Usme constituía una sola jurisdicción junto con Sumapaz. Por su extensión y poco desarrollo urbano, no era incluida en la cartografía de la época, como si lo eran las otras zonas anexadas. Dado que los caminos y vías se trazaron de acuerdo con los caminos de los indígenas, para los cuales era más importante el camino a Tunja que hacia los Llanos, además de las condiciones orográficas de los cerros del sur, no hubo desarrollo de estructuras viales y se presentó muy poco desarrollo urbano. De esta manera, Usme se consolidó como nodo de conexión regional con el Llano, pero no con Usme pueblo. Así, se emplazó la Avenida de Oriente (Antigua vía al Llano), que iniciaba en la actual Avenida Primera de Mayo (Díaz 2005; 2006).

La fundación del barrio Barranquillita en 1952, surgió tras la compra de terrenos por parte del señor Heliodoro Carrillo para la explotación de material (posteriormente Ladrillera Helios), ya que los trabajadores de la ladrillera podían construir su casa con los primeros mil adobes que fabricaran. En 1957, la venta de lotes había dado origen a ocho barrios: Barranquillita, El Carmen (desaparecido), Santa Librada, Santa Marta, La Fiscala, Almirante Padilla, Tenerife, Villa Nelly y Gran Yomasa (Santafé, 1998).

Las condiciones de anexión de Usme y los demás municipios no quedaron claras, ya que seguía siendo un territorio en su gran mayoría rural, y una de las razones posibles para la anexión, pudo haber sido por la reserva de agua del Páramo de Sumapaz que en ese entonces pertenecía a Usme (Díaz, 2005). Por otro lado, Zambrano (2005) explica que se trató de una acción para controlar los actores armados que históricamente han ocupado la zona, por lo cual solamente Usme estaría cubierto por el decreto en lo referente al estado de sitio (Díaz, 2006).

El crecimiento urbano de Bogotá exigía fuentes de agua confiables, ya que hasta la década de los años 30 aproximadamente, el agua para uso doméstico provenía

directamente de los ríos, con lo cual para 1938 se instauró la represa y planta de tratamiento de Vitelma. Posteriormente, se construyó el embalse La Regadera, que implicó la construcción de una vía que conectó al municipio de Usme con la capital. Esta vía luego sería la prolongación de la Avenida Caracas (Zambrano, 2004).

La Regadera también funcionó como reguladora del caudal del río Tunjuelo, disminuyendo las inundaciones en las partes media y baja del río. No obstante, provocó la desecación de lagunas y humedales, condición que favoreció la extracción de material para construcción y urbanización en demanda creciente para la ciudad, con lo cual se instalaron ladrilleras y chircales desde Tunjuelito hasta Usme. Ladrillera Santa Fe y Central de Mezclas, relacionadas con empresas constructoras, comenzaron con la explotación masiva del material, dejando numerosos pasivos ambientales que continúan en la actualidad. Con una intensa temporada seca en los años 40, fue necesario adicionar la represa de Chisacá (Zambrano, 2004).

La urbanización se instauró en varias zonas en función de la provisión de agua que bajaba por gravedad desde La Regadera y la planta Vitelma (Díaz, 2006), y el embalse de Chisacá (Zambrano, 2004). La Estación experimental, la Penitenciaría la Picota y la Escuela de Artillería, eran el límite con la localidad de Tunjuelito y actuaron como atractivos de población que facilitaron los emplazamientos en la zona (Zambrano 2004).

Dado el carácter rural, las haciendas se rememoran como fuente de trabajo y despensa para Bogotá. No obstante, el cambio hacia el modelo minifundista por parte de nuevos inmigrantes, el conflicto armado y la expansión urbana de la ciudad desplazaron la frontera agrícola y deterioraron el modelo de la hacienda (Zambrano, 2005).

Así pues, según Zambrano (2005) hubo dos clases de poblamiento en la zona: uno que se originó a partir de la parcelación y venta de las haciendas, dado el aumento en la valorización para suelo a urbanizar, en detrimento del suelo para usos rurales; el segundo, emplazamientos cercanos a las fuentes de empleo que correspondían a las minas, canteras y chircales. De esta manera, el crecimiento urbano de Usme se caracteriza por su informalidad. Asimismo, el acceso a servicios públicos fue gestionado por la comunidad, lo cual legitimó de alguna manera la pertenencia a la ciudad.

En el año 1959, familias comienzan a llegar al barrio La Fiscala. Claramente no se cuenta con los servicios básicos (agua, luz y alcantarillado), que luego de la intervención por

parte de la comunidad, se instalaron en el barrio casi 10 años después de manera precaria e ilegal. Posteriormente, con la legalización del barrio, se pudo acceder al acueducto. Cabe aclarar que el sistema de alcantarillado fue construido por la misma comunidad, a la cual luego, con la llegada del acueducto, le fue cobrado, es decir, la comunidad pagó por un servicio que ellos mismos implementaron sin la ayuda de ningún ente institucional. En 1982 llega la primera ruta de transporte urbano y en 1990 la línea telefónica (Zambrano, 2005) (Anexo H).

De acuerdo con lo anterior y a los eventos expuestos con MERAP (Anexo G), este decreto define el inicio de la transformación del paisaje rural de Usme en paisaje periurbano mediante la infraestructura inicial (vías y embalses) y los primeros loteos de haciendas y establecimiento de barrios en torno a la actividad minera. No obstante, el carácter rural de la localidad prevalecía a pesar de dichos eventos.

3.2.2 Creación de la Alcaldía menor del municipio de Usme

Al igual que en el caso anterior, el Acuerdo 26 de 1972 (en algunas fuentes figura como 1973) a través del cual se incorpora el municipio de Usme a Bogotá, generó varios cambios en el uso del suelo de la localidad, asociados principalmente a la definición de sus límites administrativos y nomenclatura. Este acuerdo reglamenta el funcionamiento de la alcaldía menor y autoriza al Alcalde Mayor¹³ para delegar funciones.

En los años setenta la migración masiva de población campesina hacia Usme se evidenció aún más dada la reducción de los espacios para urbanizar en las localidades aledañas de Tunjuelito, Rafael Uribe y San Cristóbal, dando paso a la parcelación y el loteo en la zona. Desde la planificación urbana los asentamientos resultantes eran desordenados, sin embargo, coherentes con el entorno y condiciones de los pobladores. El barrio se consolidó como unidad urbana al sur de la ciudad (Zambrano, 2005).

El déficit de vivienda era constante con la migración de nuevos habitantes a la ciudad, sin embargo, la urbanización pirata involuntariamente disminuyó ese déficit presente desde 1951 (Zambrano, 2005).

¹³ Alcalde Mayor: alcalde de Bogotá Distrito Capital.

Los emplazamientos en los años 70 en Usme se ubican entre el río Tunjuelo y los cerros Juan Rey, Guacamayas y la Cuchilla del Gavilán. El crecimiento urbano constante generaba demanda creciente de servicios, primordialmente el agua, por lo cual, en el año 1978, la Empresa de Acueducto junto con las comunidades gestionaron las redes secundarias y domiciliarias (Urrea, et al., 2011). A partir de esta década la expansión urbana en la localidad se comienza a manifestar aceleradamente (Anexo I).

De acuerdo con MERAP (Anexo G) el loteo y los barrios informales cada vez más numerosos por la migración creciente, es la constante, destacándose la cohesión social de la comunidad por la consecución de servicios públicos (principalmente el agua) y equipamientos en sus barrios. Gran parte de la localidad aún conservaba el carácter rural.

3.2.3 El primer Plan de Desarrollo Integrado: Usme como el “Sur” de Bogotá

Mediante el Acuerdo 7 de 1979, se plantea orientar el crecimiento físico de Bogotá hacia las zonas sur y occidente, definiendo a su vez el perímetro de servicios públicos de la ciudad. Particularmente, el artículo 56, se refiere al tratamiento de desarrollo, es decir, manejos diferenciados de acuerdo con usos y áreas de actividad. Para Usme corresponden los tratamientos de áreas susceptibles de ser incorporadas a la zona urbana, sean estas de actividad agrológica o fuera del perímetro urbano que cuenten con las características para permitir asentamientos de uso urbano. Las zonas de reserva ambiental incluían el Cerro Juan Rey y Guacamayas, y se ubicaban fuera del perímetro de servicios públicos. Por otro lado, se permite la explotación de materiales de construcción, “mientras dure la actividad”, las cuales continúan en la actualidad (Anexo I).

En la década del 80, la mayoría de los barrios autoconstruidos, giran en torno a su capital social, dicho de otro modo, lo primero que se establece en dichos barrios es la Junta de Acción Comunal, por medio de la cual se gestionan los servicios, comenzando por el agua, servicio que inicialmente se obtiene por perforación del tubo madre proveniente de La Regadera, y mangueras o piletas donde usualmente se presentaban largas filas para proveerse del líquido. Sin embargo, el agua no tratada es fuente de diversas

enfermedades gastrointestinales, y las condiciones de abastecimiento, generan disputas entre los mismos habitantes que compiten por la obtención del agua (Zambrano, 2005).

En este periodo, el Estado ya hace presencia. No obstante, los pobladores siguen en la lucha por obtener servicios dignos y legalizar sus barrios, proceso mediado frecuentemente por la intervención de políticos que capacitan a los pobladores para gestionar la autoconstrucción. Una vez cubiertas las demandas de servicios, la organización social se disuelve, obteniendo beneficios respecto a la calidad de vida, pero perdiéndose el capital social (Zambrano, 2005).

En 1984, se pone en marcha el Convenio de ayuda mutua para Usme, el cual permite el Proyecto de Desarrollo Regional (Resolución 0071 de 1984, Universidad Nacional de Colombia), asistidos por la Alcaldía Mayor y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional, con el fin de ampliar la gama de productos agrícolas producidos en la zona (papa, cebolla junca, alverja y haba) e implementar cultivos de frutas y hortalizas, con el fin de mejorar la calidad de vida del campesino. Además, la Universidad aunaría esfuerzos para congrega y organiza los movimientos comunitarios, gremiales y cooperativas existentes (Santafé, 1998).

Posteriormente se unen al proceso el SENA y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, enfocándose en el tema educativo de la localidad con lo cual se crea el Comité de Educación y Salud de Usme CEYS, que diagnosticó la precaria situación del sector educativo en la localidad (Santafé, 1998). Dicho comité, gestiona la construcción de tres colegios de educación secundaria: Miguel de Cervantes, Gran Yomasa y Almirante Padilla. En 1980 ya se cuenta con ocho escuelas de educación primaria y una de secundaria (Urrea, et al., 2011). En barrios como el Juan José Rondón, ya entrado el año 2000 aún no se cuenta con acueducto, y son los fontaneros precariamente pagados por la misma comunidad, los que realizan el mantenimiento de mangueras y tanques (Zambrano, 2005). Esto demuestra una vez más, el déficit de servicios existente en la IPU transformados en oportunidad, por la acción de las comunidades.

Asimismo, se organizó la cooperativa de agricultores, COOAGROUSME, la de tenderos, CTU y la de trabajadores, COOPTEUSME. No obstante, existían muchas falencias en cuanto a la comercialización de los productos, por lo cual se planificó la construcción de un centro de acopio para Usme. Dicha obra nunca se llevó a cabo (Santafé, 1998).

En 1985, la ciudad se cuestionaba la ubicación de un nuevo relleno sanitario, dado que finalizarían las actividades en el botadero de Gibraltar ubicado en Patio Bonito. Las dos opciones presentadas para reemplazarlo se encontraban en el barrio La Fiscala y en la actual localización del Relleno Sanitario Doña Juana, ambos en la localidad de Usme. En la zona de la Fiscala, ya comenzaban a transportar las basuras desde Bogotá, ante lo cual, los habitantes de este barrio impidieron el emplazamiento del relleno (Santafé, 1998).

Entre 1985 y 1990, la localidad presentaba el mayor porcentaje de loteo ilegal, que en dicho periodo de tiempo se incrementó de 17.778 a 35.851 lotes (Alcaldía Mayor, 1994) lo cual evidencia la creciente expansión urbana y demanda de servicios en la zona.

Existe una contradicción en este acuerdo y consiste en que Usme se debate entre una zona agrológica y de protección, y otra de áreas de crecimiento urbano. Sumado a esto, los embalses, la continua actividad extractiva y el emplazamiento del relleno sanitario, ponen de manifiesto que Usme ha sido considerada como una zona de carácter netamente utilitario. De acuerdo con MERAP (Anexo G), con este acuerdo se comienza a incorporar el ámbito ambiental en la normativa, pero de forma muy somera.

3.2.4 La reforma Urbana y la preocupación ambiental global

La ley de reforma urbana estipulada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante el Acuerdo 6 de 1990 establece la zonificación del Distrito Especial, ubicando en el nivel principal las zonas naturales de la ciudad, integradas por el Sistema Hídrico, el Sistema Orográfico y los parques y zonas verdes (Art. 63 y 152). También instaure reglamentaciones urbanísticas, planes sectoriales y planes zonales, zonificación de áreas suburbanas, urbanas rurales y de reserva agrícola.

Dentro del sistema hídrico y orográfico de Usme, se encuentra el Parque Entre Nubes (área suburbana de los cerros Guacamayas y Juan Rey, Art. 153), el corredor de restauración de las quebradas Santa Librada y Bolonia, y las microcuencas La Chiguaza, Hoya del Ramo, Yomasa y El Amoladero (Suna Hisca, 2003). El segundo nivel de zonificación (Art. 64 y 161), busca separar las zonas urbanas de las no urbanas, bajo la definición de áreas urbanas, suburbanas, rurales, y zonas de reserva agrícola (Anexo J).

Esta ley establece Planes Zonales (Art. 32), encaminados a la planificación y reglamentación de la estructura urbana en las zonas de expansión de la ciudad. Estos fueron prioritarios para las localidades de Usaqué, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal.

El acuerdo define las áreas suburbanas (Art.185) y las clasifica en: las que se encuentran dentro de los sistemas orográfico e hídrico; de transición (zona de borde y futura expansión urbana; de expansión o zonas que han perdido la vocación agrícola; las susceptibles de incorporarse al suelo urbano y dotadas con algunos servicios públicos (se exceptúan las áreas de reserva, ecológicas, paisajísticas o en riesgo); áreas suburbanas a lo largo de las vías de acceso a la ciudad en franjas de hasta 500 metros de ancho y con el concepto técnico de las empresas de servicios públicos. La incorporación como área urbana de estas zonas está a disposición de la Alcaldía Mayor. Hace parte de esta área suburbana la Autopista al Llano.

Las zonas suburbanas susceptibles de ser incorporadas al Distrito (Art. 191) debido a la creciente implementación de servicios y accesibilidad vial, dependen del concepto de las empresas de servicios públicos para tal fin. La legalización de los emplazamientos informales constituye en sí misma la incorporación a la zona urbana. Dichas áreas deben adaptarse a las normas urbanísticas permitidas en el marco del Plan Zonal en caso de que corresponda. Subsiguientemente, se hace énfasis en la incorporación, adaptación y legalización de estos barrios. A su vez se crea el Banco de tierras (Art 378). En el año 1990, la localidad presentaba uno de los más altos índices de densidad, pobreza y miseria, junto a la localidad de Ciudad Bolívar (Alcaldía Mayor, 1994).

Los cambios en el uso del suelo que definieron a Usme como zona de expansión, aumentaron los impuestos en el predial de las zonas a incorporarse y redujeron el costo de los predios (Blog Agroparque Los Soches).

Si bien las consideraciones sobre el entorno ecológico se hacen evidentes por medio de la zonificación hídrica y orográfica, y el reconocimiento de zonas verdes y de riesgo, otra vez existe contradicción en cuanto a los usos del suelo para Usme, puesto que por medio de los servicios públicos y la incorporación de nuevas áreas al entorno urbano se legitiman los emplazamientos informales, dando pie a que la expansión urbana aumente aceleradamente, generando además del conflicto con los pobladores rurales,

desregulación, especulación inmobiliaria y desarrollos urbanos incorporados de manera aislada, que muestran una vez más los problemas relacionados con la IPU (Anexo G).

3.2.5 El primer POT de Bogotá, la Franja de Borde Sur y el Plan de Ordenamiento Zonal para Usme

El Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 619 de 2000), es quizás la norma más influyente en la zona pues trata de involucrar las dinámicas de borde presentes en la localidad, e incluye a Usme en los Pactos de Borde y en la implementación de infraestructura para la integración regional e internacional. Aquí se aborda la Franja de Borde Urbano-Rural Sur, el Plan de Ordenamiento Zonal para Usme, que posteriormente da origen a la Operación Estratégica Nuevo Usme (Dec. 252 de 2007).

Usme se plantea en el POT como eje de integración regional e internacional, por medio de la centralidad Nuevo Usme, dónde se localiza el plan urbanístico Operación Estratégica Nuevo Usme y la Nueva vía al Llano (Art. 417). Entre otras disposiciones se proyecta la centralidad Danubio-Tunjuelo, donde actualmente se encuentran el portal de Transmilenio, el Centro Comercial Altavista y los conjuntos Quintas del Portal, Reservas del Portal y Prados del Portal, muy cercanos a la zona minera, que también está establecida en el POT como Parque Minero Industrial. Adicionalmente se establecen sitios para las escombreras, la mayoría situados en la localidad de Usme a lo largo de la Av. Boyacá adyacentes a zonas residenciales y al río Tunjuelo (Anexo K).

En cuanto a lo ambiental, el POT plantea grandes avances estableciendo como eje la Estructura Ecológica Principal (ampliado luego en el Dec. 190 de 2004) y ratifica la importancia de las zonas de riesgo y la microzonificación sísmica. Por otro lado es incoherente tratar de frenar la expansión urbana y al mismo tiempo conservar la EEP mediante desarrollos urbanísticos y disposición de Parques minero-industriales y escombreras sobre la Franja de Transición Urbano-Rural Sur, ya que este tipo de actividades afecta directamente la EEP (objeto de conservación primordial en el POT), además de causar o agudizar los riesgos existentes en la zona. Se suman los conflictos con las comunidades causados por la presencia de este tipo de actividades. Lo anterior es una muestra sobre el carácter multifuncional de la IPU y los usos impuestos desde la ciudad (Anexos G y V).

3.2.6 La Franja de Transición Urbano-Rural de Borde Sur: Usme

La delimitación de la FTUR se precisó en el marco del Plan de Ordenamiento Zonal de Usme y la Operación Estratégica Nuevo Usme, gestionada por Metrovivienda, que definieron la zona como de expansión urbana, con preferencia para Vivienda de Interés Social (VIS), Vivienda de Interés Prioritario (VIP), y nodo regional con los Llanos orientales (SDP, (s.f.)). Según Metrovivienda, la delimitación de los bordes se llevó a cabo de acuerdo con mesas concertadas con la comunidad, lo cual ha sido tema de controversia, pues las comunidades expresan que no han sido escuchadas sus propuestas.

La Secretaría de Planeación Distrital planteó cinco criterios para la delimitación de la Franja de Transición urbano-rural: 1) Geográficos: cuenca media del río Tunjuelo, microcuencas Yomasa, Fucha y Chiguaza; 2) Estructura Ecológica Principal: Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del río Bogotá, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, Agroparque Los Soches, Parque Entre Nubes; 3) Usos del suelo: asociados al suelo rural, actividades agropecuarias realizadas por comunidades campesinas, usos urbanos, y los relacionados al crecimiento urbano en los suelos de expansión urbana formales e informales; 4) Procesos territoriales organizativos: Mesa de Concertación Campesina; 5) Normatividad y propuestas desde la institución: programas, proyectos, etc. (SDP, s.f.).

A su vez, el Protocolo de Pactos de Borde (Reina y Rojas, 2004), establece tres características para que una UPZ sea considerada como Borde: 1) Vulnerabilidad alta y o fase de control de riesgos; 2) Ocupación ilegal de suelos de protección; y 3) Deterioro o contaminación en la EEP asociados a ocupación ilegal.

El estudio de la SDP (s.f.) halló que 9691,7 ha corresponden a Franja de Transición Urbano-Rural (FTUR), de ellas en suelo urbano corresponden a 2039,72 ha (21%), en suelo rural 7131,98 ha (74%), y en expansión 519 ha (5%). La FTUR Sur, se reparte entre las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, con 3801, 27 ha y 5890,43 ha respectivamente (Ver Anexo L).

El Plan de Ordenamiento Territorial clasifica los suelos del Distrito en urbanos, rurales, de expansión, de protección y productivos. El suelo urbano de Usme corresponde con las UPZ's 52 (La Flora), 56 (Danubio), 57 (Gran Yomasa), 58 (Comuneros) y 59 (Alfonso

López). Los problemas principales en estas UPZ's son contaminación de quebradas, riesgo de deslizamiento por minería, y conflictos entre los límites con el Parque Entre Nubes, el Cerro Juan Rey y la Cuchilla del Gavilán (Alcaldía Mayor, 2009). El suelo de expansión urbana se ubica en la UPZ 61 (Ciudad Usme), en donde se ha planteado a través del POT el emplazamiento de los proyectos de vivienda VIS y VIP gestionados por Metrovivienda (DAPD, 2006) (Ver Anexo M).

La UPZ 60 (Parque Entre Nubes) está seriamente amenazada por la minería y la expansión urbana de las UPZ's Yomasa y Danubio donde ya existen proyectos de urbanizaciones legales. La UPZ Gran Yomasa es la más afectada por cercanía a las canteras y escombreras ubicadas junto a conjuntos residenciales en la Av. Boyacá y al Relleno Sanitario Doña Juana. Según la Secretaría Distrital de Planeación (2010), en 2002 el parque presenta conflictos de uso del suelo con sobreutilización moderada por bosque plantado representadas en 257,34 ha y por sobreutilización severa por el establecimiento de cultivos transitorios y urbanización con 229,45 ha, y finalmente 23,58 ha con uso adecuado. En 2007, presenta 282,94 ha con sobreutilización ligera por presencia de bosque plantado; suelos sin conflicto con 156,11 ha; y suelos con sobreutilización severa con 70,47 ha por emplazamiento de cultivos transitorios y pastizales. Las cifras anteriores son confusas, dado el aumento de la expansión urbana representado en barrios ilegales y urbanizaciones como Ciudadela Bolonia (SDP, Plan Parcial Ciudadela Bolonia) y de las actividades extractivas (Ver Anexos K, W y AM).

El suelo rural se divide en áreas de alta capacidad¹⁴ con 784,4 ha, zonas de alta fragilidad correspondientes a 7833,32 ha, el sistema de áreas protegidas tiene 9026,92 ha y para el área de expansión están reservadas 859,78 ha. Estos suelos según el POT son de uso agrícola, ganadero, forestal, zonas de protección y explotación de recursos y están incluidos en las Unidades de Planeamiento Rural o UPR¹⁵ basadas en la unidad geográfica de cuenca. La zona rural de Usme corresponde con la UPR 3 Río Tunjuelo (Alcaldía Mayor, 2009) (Anexo N).

En cuanto a suelos de protección, pueden ubicarse dentro de cualquiera de los tres anteriores, y hacen parte de ellos la Estructura Ecológica Principal (áreas protegidas del

¹⁴ Áreas productoras de alta capacidad: aptitud agropecuaria alta; áreas productoras de alta fragilidad: baja aptitud agrológica susceptibles de conservación y protección (POT, 2004).

¹⁵ A Usme corresponde la UPR 3 Río Tunjuelito, conformada por las veredas Agualinda-Chiguaza, Chizacá, Corinto Cerro Redondo, Curubital, El Destino, El Hato, El Uval, La Requilina, La Unión, Las Margaritas, Los Andes, Los Arrayanes, Los Soches y Olarte (Dec. 190 de 2004).

Distrito, parques urbanos, rondas de ríos), zonas de alto riesgo, áreas de plantas de tratamiento y expansión del relleno sanitario. En Usme, el área total de suelos protegidos está conformada según la SDP (2010) como lo muestra la tabla 3-2.

Tabla 3-1. Áreas protegidas de orden distrital para la Localidad de Usme. Fuente: SDP y Universidad Distrital (2010)

Categoría de Manejo	Nombre Área Protegida	Área (ha)	% área
Área forestal Distrital	Área de restauración canteras del Boquerón	19,24	0,22%
	Área de restauración de Santa Bárbara	11,17	0,13%
	Área de restauración Los Arbolocos-Chigüaza	192,8	2,16%
	Área de restauración Subpáramo de Olarte	428,02	4,79%
	Área de restauración Subpáramo Parada del Viento	288,85	3,23%
	Corredor de restauración Aguadita-La Regadera	193,38	2,16%
	Corredor de restauración de Piedra Gorda	400,44	4,48%
	Corredor de restauración La Requilina	78,99	0,88%
	Corredor de Restauración Río Curubital	293,9	3,29%
	Corredor de restauración río Tunjuelo	1,02	0,01%
	Corredor de restauración Santa Librada-Bolonia	0,24	0,00%
	Corredor de restauración Yomasa Alta	12,69	0,14%
	Los Soches	182,01	2,04%
	Páramo Alto Chisacá	1.695,13	18,98%
	Páramo de Andes	284,62	3,19%
	Páramo Los Salitres	773,22	8,66%
	Páramo Puente Piedra	618,03	6,92%
	Subpáramo La Regadera	145,7	1,63%
Parque Ecológico Distrital de Montaña	Entrenubes Cuchilla del Gavilán	0,88	0,01%
	La Regadera	509,49	5,70%
Parque Nacional Natural	Sumapaz	280,58	3,14%
Reserva Forestal Protectora	Bosque Oriental de Bogotá	1.282,93	14,36%
Santuario Distrital de Fauna y Flora	Lagunas de Bocagrande	118,79	1,33%
	Pantanos Colgantes	1.055,06	11,81%
Sin definición de categoría de manejo		65,76	0,74%
	Total	8932,94	

Las áreas protegidas obedecen a formas que restringen el crecimiento de la ciudad (Zambrano, 2013). No obstante, de acuerdo con la tabla anterior, varias de las áreas protegidas corresponden a zonas de restauración, lo cual refleja el estado de degradación alcanzado por causa de la expansión urbana, las actividades extractivas y contaminación en general. Los páramos se encuentran en seria amenaza por expansión de la frontera agrícola.

3.2.7 Plan de Ordenamiento Zonal (POZ) Usme, Macroproyecto del Rio Tunjuelo y Operación Estratégica Nuevo Usme: ¿Mecanismo de participación?

El Decreto 252 de 2007, es específico para Usme y se plantea inicialmente en el artículo 128 del Dec. 619 de 2000 (POT) y ampliado posteriormente en los artículos 26, 63 y 71 del Dec. 190 de 2004. La Operación Estratégica Nuevo Usme (OENU), está enfocada a establecerse como eje de integración regional, orientando el uso del suelo hacia la urbanización planificada evitando ocupaciones ilegales y expansión, por medio de la generación de VIS y VIP evitando la segregación social, en el marco de la conservación del suelo rural y de protección, la conservación del paisaje y el reconocimiento del agua como elemento ordenador del territorio.

Este proyecto está concebido como plan piloto en cuanto a instrumentos de gestión del suelo, y se enfoca en la inversión eficiente de los recursos públicos para la generación de suelo urbano de calidad. A su vez, el Macroproyecto del Rio Tunjuelo dentro del cual está inmerso el POZ y la OENU, busca articular la recuperación ambiental de la cuenca, la urbanización legal y el aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y agropecuarios. Adicionalmente, el POZ es uno de los Instrumentos de gestión del suelo para evitar especulación (DAPD, 2006).

La OENU, se plantea con el respaldo del Protocolo de Bordes, en el marco del cual el Plan de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) afirma que estas operaciones deben contar con una formulación participativa. Sin embargo, las operaciones obedecen a niveles que van más allá de las instituciones locales y distritales (Reina y Rojas, 2004). También busca construir identidad y arraigo por el territorio (DAPD, 2006). Lo anterior suena contradictorio y no garantiza un Pacto de Borde que de verdad abogue por las comunidades campesinas ni por la EEP, ya que se anteponen los intereses nacionales.

Reina y Rojas (2004) explican que la urbanización ilegal es más rentable que la legal ya que no respeta normas urbanísticas, tributarias ni ambientales. Así, los objetivos de la OENU consisten en generar vivienda digna para la población más vulnerable contrarrestando la urbanización ilegal, y reconocer los modos de vida y dinámicas de la población, construyendo propuestas de ordenamiento conjuntas con el fin de mejorar la calidad de vida (DAPD, 2006).

De acuerdo a lo anterior, las estrategias principales de ordenamiento de la OENU se constituyen en: 1) Construcción social del Borde Urbano-Rural; 2) Estrategia social para la población campesina de la zona y para la población futura; 3) Estrategia de los cuatro planes parciales; 4) Estrategia para la gestión del suelo; 5) Promoción económica en el contexto regional; 6) Estrategia institucional (integración de entidades, planes y proyectos); 7) Estrategia de hábitat y vivienda digna (DAPD, 2006). Según el DAPD (2006), la base del proyecto se sustenta en la participación de las comunidades aledañas a la cuenca media del río Tunjuelo, dónde se presentan las problemáticas ambientales ya descritas.

Dentro del marco anterior, se encuentran los planes parciales, ubicados en la zona rural de la IPU de Usme, dentro de la zona Reserva Forestal Productora de la Cuenca Alta del río Bogotá, (lo cual ha sido determinante en la dilación del proyecto) (Contraloría, 2012), constituidos como instrumentos de planificación de mediana escala, articulados con el POT y los POZ, con características y tiempos de ejecución diferentes entre sí. Para Usme, corresponden cuatro planes parciales, de los cuales el número 4 aún está en discusión.

El Plan Parcial No.1 corresponde a la consolidación del centro de servicios Puerta al Llano para la integración ciudad-región. Constituye la centralidad eje de integración Llanos – Nuevo Usme, incluye un matadero y zona de industria y servicios regionales, un parque industrial, plataforma logística, terminal interurbano (estos tres últimos ubicados sobre la vía al Llano) (DAPD, 2006). Según la SDP (2010), en 2007 Metrovivienda da inicio al proceso de formulación del Plan Parcial 1 “Tres Quebradas”, radicado en agosto de 2008 ante la secretaria Distrital de Planeación y se desarrolla la fase de información a propietarios. En diciembre de 2008 se viabiliza la propuesta de formulación del plan y se precisa la delimitación. Hasta el momento se ha construido un tramo de la Av. Usminia en el plan parcial (Contraloría, 2012) como mecanismo de presión hacia las comunidades.

El Plan parcial No. 2 proyecta usos dotacionales y centro de servicios. Allí se sitúa gran parte de Usme pueblo y actualmente cuenta con la urbanización Ciudadela Nuevo Usme (este proyecto no pertenece a la OENU, pertenece a Metrovivienda y afecta directamente la ronda del río Tunjuelo). El Plan parcial No. 3 corresponde al suelo de expansión de Ciudad Bolívar, destinado a vivienda y servicios de salud y educación. Por su parte el

Plan Parcial No. 4 propone la consolidación del borde urbano-rural, proyectos de agricultura urbana y una zona de manejo y protección (DAPD, 2006) (Anexo O).

Según la Contraloría (2012) “Los planes 2 y 4 se encuentran suspendidos por proceso de realinderamiento del área de la Reserva Forestal Protectora-Productora de la cuenca del río Bogotá y en cuanto al plan parcial No.4, se encuentra en etapa de preformulación y está suspendido”. La Contraloría (2012) también declara que a 2012 solo se habían adquirido 17 de 956 predios requeridos para la OENU.

La zona de la UPZ Ciudad Usme, constituye la mayor reserva de tierra disponible del Distrito de acuerdo con Planeación Distrital. Según el diagnóstico del estado de propiedad de los predios solamente en el plan parcial 1, se halló la siguiente información: Gran propietario, 14 predios (5.98%); persona jurídica, 18 predios (7.69%); persona natural con 195 predios (83.33%); y sin información 7 (2.99%) para un total de 234 predios con código catastral y 74 sin legalizar. En hectáreas, 236.21 (72.84%) corresponden a propietarios y 88.08 (27.16%) a poseedores. Por otro lado, en el análisis se detectó que, de 308 predios, solamente 86 contaban con vivienda habitada. En hectáreas, 140,68 corresponden a lotes de engorde; 62.52 ha a uso agropecuario; 106.68 ha uso agropecuario y vivienda; 13.65 ha otros usos; y exclusivamente vivienda 0.78 ha (DAPD, 2006).

Las cifras anteriores, actúan como mecanismo para facilitar la adquisición de predios por parte del Distrito, que se excusa en que estos se hallan deshabitados, funcionando como lotes de engorde, buscando “facilitar el diálogo” con propietarios naturales o argumentando que estos propietarios no dependen de actividades agropecuarias.

Se proyecta que la demanda de vivienda en Usme aumente significativamente, para lo cual se establecieron los siguientes proyectos: Ciudadela Nuevo Usme – Metrovivienda: 6000 viviendas y 24.000 habitantes y Ciudad Nuevo Milenio – Colsubsidio: 7495 viviendas y 30.000 habitantes (Usme Centro); Operación Nuevo Usme (Objeto del Plan de Ordenamiento Zonal): 57.000 viviendas y 250.000 habitantes. A estos proyectos se suman las siguientes centralidades: eje de integración Llanos - Nuevo Usme (70 ha) y Ciudad Nuevo Milenio – Centralidad Danubio (76.13 ha) reconocidas y proyectadas por el

POT; la centralidad Santa Librada (20 ha) no está incluida en el POT, pero se constituye como principal núcleo comercial y de servicios en la localidad.

El proyecto se socializa con la comunidad, la cual es reticente dado que se propone reasentamiento productivo en tierras cercanas al páramo donde las vías de acceso son precarias y el ecosistema se vería seriamente amenazado, o reubicación en una de las casas del proyecto donde sus valores y cultura serían afectados. Otro aspecto a favor que nombra el plan es la cercanía e integración con el sistema de transporte (DAPD, 2006), argumento que resulta algo embustero, en vista de las condiciones precarias del sistema Transmilenio y el SITP. Para pobladores potenciales y constructores, la urbanización en Usme no es llamativa, por el difícil acceso, el tamaño de las casas, y la deficiencia de equipamientos (Contraloría, 2012).

Inicialmente la tierra fue avaluada en \$16 000 M2. Por otro lado, los avalúos de referencia entregados por Catastro Distrital muestran que el 86.73% del área, tiene un costo por metro cuadrado de entre \$2500 y \$4500 (cifras de 2003), valores adaptados a los usos actuales, fuentes de agua disponibles, vías de acceso, topografía, clima, posibilidades de adecuación y cultivos presentes (DAPD, 2006) (Ver anexo G).

Lo anterior ha causado inconformidad entre la población ya que los avalúos comerciales y los de referencia no se ajustan al valor estimado por los propietarios (SDP, 2010). Por supuesto estos controles son de tipo intimidante contra la población campesina, ya que sumado a los bajos precios ofrecidos por mt2, en caso de que los propietarios no quieran participar, se les expropia la tierra por vías administrativas, obteniéndolas por \$2000 el mt2.

Según Knox (2010), en estos submercados de la vivienda, intervienen varios actores: los bancos, los constructores, el sector comercial, los propietarios y terratenientes, el Estado y los entes gubernamentales locales. Estos últimos, son los que mayor influencia tienen en el desarrollo urbano. Sin embargo, los dueños de las tierras y los promotores inmobiliarios cumplen también la función de –tomadores- de decisiones, en torno a la estructura urbana, ya que los primeros con la especulación y los segundos mediante la preparación de esas tierras, generan espacios urbanos bien diferenciados que lógicamente influyen en el valor de éstos (Knox y Pinch, 2010).

Los pobladores argumentan en su defensa que prima el bienestar colectivo antes que el individual. Los campesinos denuncian la vulneración de sus derechos ya que se les congeló el precio de la tierra, imposibilitándolos a vender, o Metrovivienda ha echado mano de maniobras administrativas, bajo precio indicado o bajo presión de despojo y amenazas (Blog Campesinos de Usme). No obstante, las versiones en cuanto a las amenazas por parte del Distrito o por grupos armados difieren entre los habitantes rurales y líderes comunitarios. Así, en el Plan de Ordenamiento Zonal (DAPD, 2006), se establecen los medios de obtención de predios por medio de enajenación voluntaria y forzosa, expropiación por vía administrativa o por vía judicial derecho de preferencia a favor de Metrovivienda, o declaratoria de desarrollo prioritario.

Adicionalmente, en el documento técnico, se acepta que los retos a afrontar son el aislamiento de la zona, la topografía irregular y las altas pendientes que implican costos más altos de construcción y equipamientos, y el mantenimiento del borde en su aspecto ambiental. Así mismo, se acepta que el diseño no está adecuado a la complejidad ambiental y escalar de la zona, es un modelo macro y uniforme, que no solo tendría errores estructurales sino también de carácter habitacional y paisajístico (DAPD, 2006).

Claramente se observa como todas las políticas optan por el desarrollo urbano con la excusa de frenar la expansión urbana informal, pero se confirma que la urbanización legal tampoco respeta ciertas normas, como por ejemplo la construcción en las riberas del río Tunjuelo (Usme Pueblo) y urbanizaciones legales en zonas de riesgo y de protección (Yomasa, Entre Nubes). Según la Contraloría (2012) “La Operación Estratégica Nuevo Usme, no se ha articulado al Macroproyecto del río Tunjuelito, siendo esta una alternativa de construcción de borde, en una porción de la cuenca de dicho río”. Añade que la OENU se estableció con pleno conocimiento de la existencia de la reserva forestal y que se han realizado inversiones que no reflejan avances en el proyecto (Contraloría, 2012) (Anexo K).

Estos proyectos iniciados por la Asociación para la Vivienda Popular (AVP) y Metrovivienda, en la Ciudadela Nuevo Usme particularmente, destinados a familias en condición de desplazamiento y reubicadas, han tenido diferentes problemas al ser implementados, ya que contrario a lo propuesto, muchas de las viviendas tienen fallas de tipo estructural y las instalaciones de servicios públicos están muy afectadas, convirtiéndose en una amenaza para los habitantes del sector. Los desagües se dirigen

directamente al río Tunjuelo (Antorcha Libertaria, 2010) evidenciando que los objetivos de vivienda digna y sostenibilidad realmente no existen. El conjunto Río Verde ha sido el más afectado, allí los problemas con la estructura comenzaron aproximadamente a dos años de ser construidos y en la actualidad continúan.

Es claro que este Decreto se ciñe al POT, e igualmente confronta el cuidado ambiental con la expansión urbana “planificada” y se presta para la especulación con el suelo rural, ante lo cual la comunidad se ha manifestado, abogando por el derecho a la propiedad, a la conservación de su ruralidad y a un ambiente sano. El POZ reconoce sus propias falencias, sin embargo, no se hace un esfuerzo para aminorarlas. Por otro lado, la CAR también se ha manifestado por las afectaciones ambientales que tiene este proyecto, sin embargo, Metrovivienda alega que todos los procesos fueron concertados previamente con dicha entidad (Contraloría, 2012). Se hacen evidentes entonces los problemas de fragmentación institucional relacionados con el deterioro ambiental inherente a la IPU, y las resistencias emergentes en forma de oportunidades.

3.3 Eventos regulatorios y la Gestión ambiental en la localidad de Usme

Este grupo de normas se basa en la gestión ambiental, estableciendo zonificaciones basadas en el sistema hídrico y orográfico principalmente, delimitando zonas de protección y de riesgo que disminuyan la expansión urbana. Posteriormente, se enfocan en la Estructura Ecológica Principal, los Planes de Manejo Ambiental y la incorporación de las comunidades en el cuidado ambiental.

3.3.1 El Plan de Ordenamiento Físico de Bordes

El plan de ordenamiento físico del Bordes (Decreto 320 de 1992), establece las directrices para los bordes oriental, suroriental, suroccidental y las zonas de preservación del Cerro de Suba Norte y Sur, del Cerro de la Conejera y los Sistemas Orográfico e Hídrico de Bogotá.

Se disponen el Sistema Hídrico, el Sistema Orográfico y los parques y zonas verdes, en el primer nivel de zonificación. El segundo nivel, se clasifica en zonas de reserva forestal

y ecológica, zonas de preservación ambiental e incorporación puntual de usos urbanos y áreas de incorporación por legalización. Mediante este decreto, se establecen los parques de Cerro Juan Rey, Guacamayas y Serafín (actualmente cementerio) para la localidad de Usme. Las zonas objeto de habilitación son aquellas que están bajo riesgo o son susceptibles de incorporarse a la ciudad, pero no cumplen con el mínimo de servicios públicos.

Los objetivos de este acuerdo se enfocan en contener el desarrollo urbano y controlar y recuperar las zonas de actividad extractiva, mejorando la calidad de vida de los desarrollos informales y las relaciones con los cerros, zonas verdes y parques a través de espacios recreativos, institucionales y residenciales de baja densidad.

La localidad seguía presentando entornos de barrios informales y la lucha de las comunidades por la legalización de los mismos. En 1994 la localidad estaba compuesta por 17 veredas (con población aproximada de 4000 habitantes) y 126 barrios. Desde entonces se consideraba a Usme como parte de la Franja Urbano-Rural (Alcaldía Mayor, 1994). Se presenta un crecimiento urbano acelerado, el cual ha sido constante desde los años 70. Para el año 1996, había 18 veredas y 136 barrios (Zambrano, 2005).

Según la Red de Prevención de Desarrollos Ilegales, citado por Reina y Rojas (2004) los desarrollos urbanos ilegales se concentraban en las UPZ's 52 (La Flora), 56 (Danubio), 57 (Gran Yomasa), 58 (Comuneros), 60 (Parque Entre Nubes) y 61 (Ciudad Usme). La localidad de Usme es la más propensa a desarrollos urbanos ilegales, al contar con la mayoría de terreno loteado, entre las localidades ubicadas en bordes. No obstante, la presencia rural también ha sido constante, lo que se evidencia en la comercialización activa de los productos agropecuarios para el abastecimiento de la ciudad. Igualmente, la actividad minera (Alcaldía Mayor, 1994).

Las principales causas de morbilidad y mortalidad obedecen a enfermedades gastrointestinales, diarreas generadas por la calidad del agua no tratada, quebradas contaminadas y el deficiente servicio de recolección de basuras que se arrojaban en lotes, vías o quebradas (Alcaldía Mayor, 1994). Adicionalmente se presentan casos de enfermedades infeccioso-respiratorias, causadas por actividades extractivas y mataderos (Alcaldía Mayor, 1994).

En cuanto a equipamientos se contaba para ese año con cinco centros de salud, pero sin la dotación suficiente. El agua provenía de los sistemas Vitelma ubicado a 2787 msnm y La Laguna a 2890 msnm, que proveía al municipio de Usme y al tanque de El Uval ubicado a 2820 msnm. Este a su vez suministraba el agua a los barrios ubicados por encima de la cota 2750 m. El sistema requería ampliación, y presentaba constantes problemas de presión, además existía déficit en cuanto a redes domiciliarias, sin contar con las conexiones informales que abundaban en la zona y que provocaban servicio racionado en todo el sistema. Las aguas residuales en su mayoría procedentes de los barrios ilegales eran vertidas en la quebrada Chiguaza y el río Tunjuelo principalmente, sumado a los lixiviados provenientes del relleno sanitario (Alcaldía Mayor, 1994).

El servicio de energía eléctrica era también precario, ya que la mayoría de las instalaciones eran de tipo artesanal (postes de madera con las conexiones de la cuadra), incluyendo el alumbrado público (Zambrano, 2005; Alcaldía Mayor, 1994).

La cobertura del sistema de transporte era poca. Usualmente solo prestaba servicio una ruta de la empresa pirata Expreso Imperial, hasta la zona de Monte Blanco, Yomasa o el Virrey, en adelante las personas debían desplazarse a pie hasta los demás barrios (Zambrano, 2005). Así mismo, las vías secundarias eran destapadas lo que también impedía el acceso de las rutas (Alcaldía Mayor, 1994). Estas vías fueron trazadas de acuerdo con la parcelación y loteo. Resumiendo, la situación anterior, Agudelo (2012) afirma:

Paradójicamente la especulación aleja compradores y de alguna manera «selecciona» a los habitantes de los espacios periurbanos y rururbanos. Pero la fuerza del mercado y un débil control estatal se combinan para desatar ciudadelas de viviendas no adosadas, que comienzan a demandar soluciones de saneamiento básico y equipamiento verdaderamente urbanas. En materia de servicios públicos, el pozo séptico debe sustituirse por redes de alcantarillado, colapsa el acueducto veredal y se impone la conexión a redes más extensas. Lo mismo ocurre con el gas, la electrificación, la telefonía, la seguridad... El sueño de la vida en el campo se ha convertido en la pesadilla del suburbio (p.561).

En 1992 surge el nombre de Parque Entre Nubes a partir de los trabajos con las comunidades de Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. No obstante, existieron diferencias en cuanto a la concepción, usos y funciones del parque, por lo cual el trabajo

conjunto resulta fragmentado (Suna Hisca, 2003). En 1996 se conformó CORPOPEN (Suna Hisca, 2003; Santafé, 1998) que constituyó al parque como Parque Ecológico Entre Nubes (Anexo J).

La comunidad propone dividir el Parque Entrenubes en tres sectores: el primero como zona de conservación (Cerro Guacamayas hasta Cerro Juan Rey); el segundo como parque ecológico (Cerro Juan Rey hasta quebrada Bolonia); y el tercero, una zona destinada a economía sostenible e investigación científica (desde quebrada Bolonia hasta la Cuchilla del Gavilán). Se harían convenios con la comunidad para proteger el parque (Santafé, 1998). En 1998, el parque se consolida como proyecto. Sin embargo, comparando los límites de entonces con los de la actualidad, el sector tres prácticamente ha desaparecido, se emplazaron allí proyectos de vivienda. Los otros dos sectores también se han ido urbanizando informalmente dado que no hay apropiación del parque como zona de protección.

En este periodo se dio inicio a la construcción de la Nueva vía al Llano como vía de dos calzadas proyectándose desde El Tunal por la Avenida Boyacá, y con la construcción del túnel El Boquerón. Esta obra fue financiada por el gobierno Distrital y el Ministerio de Obras Públicas (Sandoval, Svenson, Morales, Suescún (s.f.). Desde entonces se proponía como ruta estratégica nacional e internacional para conectar con el Llano y Venezuela (Ver Anexo P). La expansión urbana en Usme se iba legitimando a través de este conector vial, en detrimento de las zonas rurales. La ampliación de las vías históricamente ha conllevado a la urbanización a lo largo de ellas, consolidándose luego como barrios propiamente dichos (Ver anexos T y U). Este tema se ampliará en un apartado posterior.

El manejo de los bordes se hará de manera integral con las áreas rural, suburbana y urbana, priorizando en impedir emplazamientos urbanos informales y en zonas de alto riesgo, además de la recuperación ambiental de estas zonas. Así, este decreto establece y materializa los planes de ordenamiento físico de borde (esbozados someramente en la zonificación del Acuerdo 6 de 1990) lo cual constituye un avance en materia ambiental y de riesgos. No obstante, continúa la controversia entre las áreas suburbanas a incorporar que generan crecimiento urbano desordenado. Lo anterior evidencia la variedad de usos del suelo y la fragilidad del mismo por lo cual se toman acciones de recuperación de este en la IPU de Usme (Anexo G).

3.3.2 El Plan de Borde Sur Oriental

Por medio del Acuerdo 2 de 1997 se adopta el Plan de Ordenamiento Físico del Borde Sur Oriental para Bogotá y se instauran normas urbanísticas y pautas de preservación, protección y uso apropiado de las áreas del borde suroriental con la participación de actores públicos y privados. También se enfoca en la incorporación de zonas desarrolladas y desarrollables a usos urbanos por medio de infraestructura de servicios públicos y reserva de terrenos para la implementación de servicios metropolitanos y de transporte en áreas suburbanas. La línea de acción se encauza hacia los emplazamientos ubicados en zonas de alto riesgo y su respectiva reubicación.

El artículo 4 de este acuerdo, caracteriza las 4597 ha totales de la localidad, en cuatro zonas divididas en 3249.72 ha (63.36%) correspondientes a área no desarrollable, 435.23 ha (8.48%) área de afectaciones, 491.72 ha (9.59%) correspondiente a área desarrollada o reglamentada y finalmente un 420.62 ha (18.57%) de área neta urbanizable.

El primer nivel de zonificación equivale al sistema hídrico y al sistema orográfico. Se conforma el Parque Distrital Entre Nubes, Serafín y Parque Corredor Ecológico (Cerros Orientales). Por otro lado, este primer nivel de zonificación también obedece a los corredores viales a los que se les debe prestar atención especial dado su alto impacto ambiental. Como vías regionales se consideran la vía a Choachí, la vía a Sumapaz, la carretera a Oriente y la Nueva vía al Llano (la de mayor anchura entre estas).

El segundo nivel de zonificación delimita las áreas suburbanas (Art. 3 y 16) de preservación del sistema orográfico de los Cerros Orientales, Cerro de Guacamayas, Cerro Juan Rey, Cerro Doña Juana, Cuchilla del Gavilán, áreas suburbanas de accesos viales Vía al Llano, Corredor vial Choachí, Corredor vial a Pasquilla, áreas suburbanas de expansión (incorporación) sectores oriental y occidental de la Cuchilla del Gavilán, sector occidental y sur del Cerro de Juan Rey (Anexos J y U).

Desde la década de los años 70 ha sido constante el crecimiento urbano legitimado por la instalación de servicios públicos y desarrollos viales. Agudelo (2012) lo resume de la siguiente manera:

Cuando ocurre una implantación urbana en el territorio, es decir, cuando se instalan usos típicamente urbanos en el suelo suburbano, periurbano o rural, es porque una serie de requisitos mínimos se han cumplido. Estos pueden resumirse en dos grupos: accesibilidad y servicios públicos. Ambos servicios se instalan como resultado de planeamiento o por el solo desarrollo de dinámicas de expansión de la urbanización ajenas a los planes formales (p.560).

Según cifras de la SDP, a partir del año 1996, se legalizan gran parte de los barrios establecidos desde la década del 80, aledaños en su mayoría, a la Nueva vía al Llano (Ver anexo Q).

En 1997 el Relleno Sanitario Doña Juana colapsa afectando a las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. Los efectos ambientales generados por el relleno sanitario se relacionan con problemas de salud derivados de olores, gases y contaminación de los productos agrícolas procedentes de sus cercanías. Al respecto, los productores se ven afectados por el incremento de insumos necesarios para el mantenimiento de sus cultivos y la conservación de los productos. Así, surgen conflictos entre los actores involucrados: la comunidad vs. instituciones que deberían controlar el manejo adecuado del relleno y otras instituciones que legitiman su uso. Se considera lo anterior, como un evento simbólico, puesto que aumentó la desconfianza en las instituciones por parte de la comunidad y generó movimientos a favor del cierre del relleno en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. En la actualidad está a punto de colapsar de nuevo y no se han obtenido respuestas oportunas pese a las denuncias de la comunidad.

Se observa que este acuerdo sigue los mismos lineamientos del Acuerdo 6 de 1990 y el acuerdo 2 de 1997, y que más allá de lo planteado sobre los sistemas hidrográfico y orográfico y su preservación, realmente se busca justificar la expansión urbana en estas zonas. Los organismos encargados de gestionar las aguas y reservas, como la CAR, no han hecho uso de su autoridad para evitar los emplazamientos, por tanto, la expansión ilegal y loteos aumentan. La urbanización formal legitimada por los gobiernos no es accesible para la población que ya ocupa zonas de expansión informal y atrae más población (Anexo G). Se observa que la fragmentación institucional es constante sumado a factores de pobreza que llevan a los habitantes de la IPU a ubicarse donde pueden, incluso sometiéndose a situaciones de riesgo.

3.3.3 Eje de Integración Llanos/Nuevo Usme

En el Decreto 190 de 2004, se amplía lo relacionado con la Nueva Centralidad “Eje de integración Llanos/Nuevo Usme”, el cual busca desarrollar un proyecto integral de vivienda, servicios y actividades productivas, que promuevan el comercio con la región oriental del país, por medio de la Nueva vía al Llano y estructurar el eje de integración Caracas- Bogotá-Quito. Bajo esta misma premisa se encuentra el Plan Zonal para Usme (art. 48 y el Decreto 252 de 2007) y claro está, lo concerniente a la Operación Estratégica Nuevo Usme (Art. 26, 63 y 71).

En cuanto a lo ambiental, el objetivo es consolidar el sistema de áreas protegidas y rurales. Se enfatiza en los Planes de Ordenamiento Minero Ambiental (que deben ser ecoeficientes) determinando el futuro uso urbano de las áreas mineras, correspondiente a parques o la función que dicte el Plan Zonal. También establece el Pacto de Bordes, Planes de Manejo Ambiental, ecosistemas estratégicos, manejo agropecuario sostenible y las Unidades de Planeamiento Rural, entre otros. La extensión de las escombreras aparentemente disminuye limitándose a la zona de Cantarrana, y el Relleno Sanitario Doña Juana se amplía en 300 ha (art. 214 y 216).

El artículo 394, indica que se busca integrar social, cultural y económicamente la zona rural. No obstante, es claro que este artículo se opone al fin principal del POT, lo cual se ha visto reflejado en el aislamiento de la zona rural y los desarrollos que van en detrimento de la misma.

En cuanto a la centralidad urbana Danubio, se pretende recuperar ambientalmente la zona del Río Tunjuelo dedicado anteriormente a minería, mediante la integración de equipamiento urbano y de servicios (Art. 71).

Los Planes Parciales (Art. 31, 32 y 33) integran políticas de urbanización legal en el marco del cuidado de la Estructura Ecológica Principal, y están dirigidos principalmente a las zonas de expansión urbana, zonas de desarrollo urbanizable, zonas de renovación urbana y zonas con operaciones urbanísticas definidas en el correspondiente Plan Zonal. La delimitación de estas zonas tendrá en cuenta la topografía, características locales, económicas, la EEP y la división predial (Ver Anexo K).

De acuerdo con el cuadro comparativo (Anexo G) y teniendo en cuenta los procesos históricos descritos en cada norma, se halla frecuencia en algunos eventos,

principalmente los económicos como la minería y la urbanización legal e ilegal, principales causantes de conflictos por el uso del suelo y riesgos. Por otro lado, entre los eventos estructurales, las políticas de zonificación mantienen el objetivo de frenar los desarrollos urbanos ilegales, por medio de la delimitación de zonas de protección. No obstante, lo anterior, la expansión sigue aumentando y legitimándose por medio de la instalación de servicios públicos. Claramente el POT sigue los lineamientos del Acuerdo 6 de 1990, el Decreto 320 de 1992 y el Acuerdo 2 de 1997, donde se legitiman los procesos de expansión urbana bajo la premisa de la “conservación”, lo cual denota contradicciones en las políticas de planeación y protección de las reservas ambientales y de las zonas rurales.

Otra de las constantes, es la unidad comunitaria, urbana y rural. Esta última se ha mantenido, mientras que la primera al conseguir la legalización de sus barrios y la implementación de servicios públicos se ha ido desintegrando. Así mismo, las dos olas de migración hacia la localidad sumado a la construcción de vías de comunicación han generado patrones conurbados lineales.

A continuación, se describen las dinámicas de la IPU, desde el contexto de la localidad de Usme, identificando sus problemas y oportunidades, el papel de la globalización y los enfoques de planificación aplicables a la IPU.

4 La IPU en el contexto de Usme

Los problemas presentes en la IPU son complejos por su configuración territorial y entrelazamiento entre ellos. Por ejemplo, la fragmentación institucional trae consecuencias reflejadas en la falta de control en algunas actividades como las mineras, que a su vez generan degradación ambiental, pobreza y expansión urbana. En cuanto a las oportunidades, la cercanía a la ciudad ofrece algunos beneficios en el aspecto social. Los problemas primordiales en la IPU corresponden a la fragmentación institucional y la pobreza, estrechamente relacionados, ya que la falta de control y superposición o ausencia de jurisdicciones genera situaciones de degradación ambiental y limita la caracterización adecuada de los habitantes y elementos cambiantes de la IPU, lo que conlleva a la elaboración de diagnósticos superficiales y políticas que no ofrecen soluciones a dichas problemáticas. Las figuras 4-1 y 4-2 representan la complejidad de la IPU.

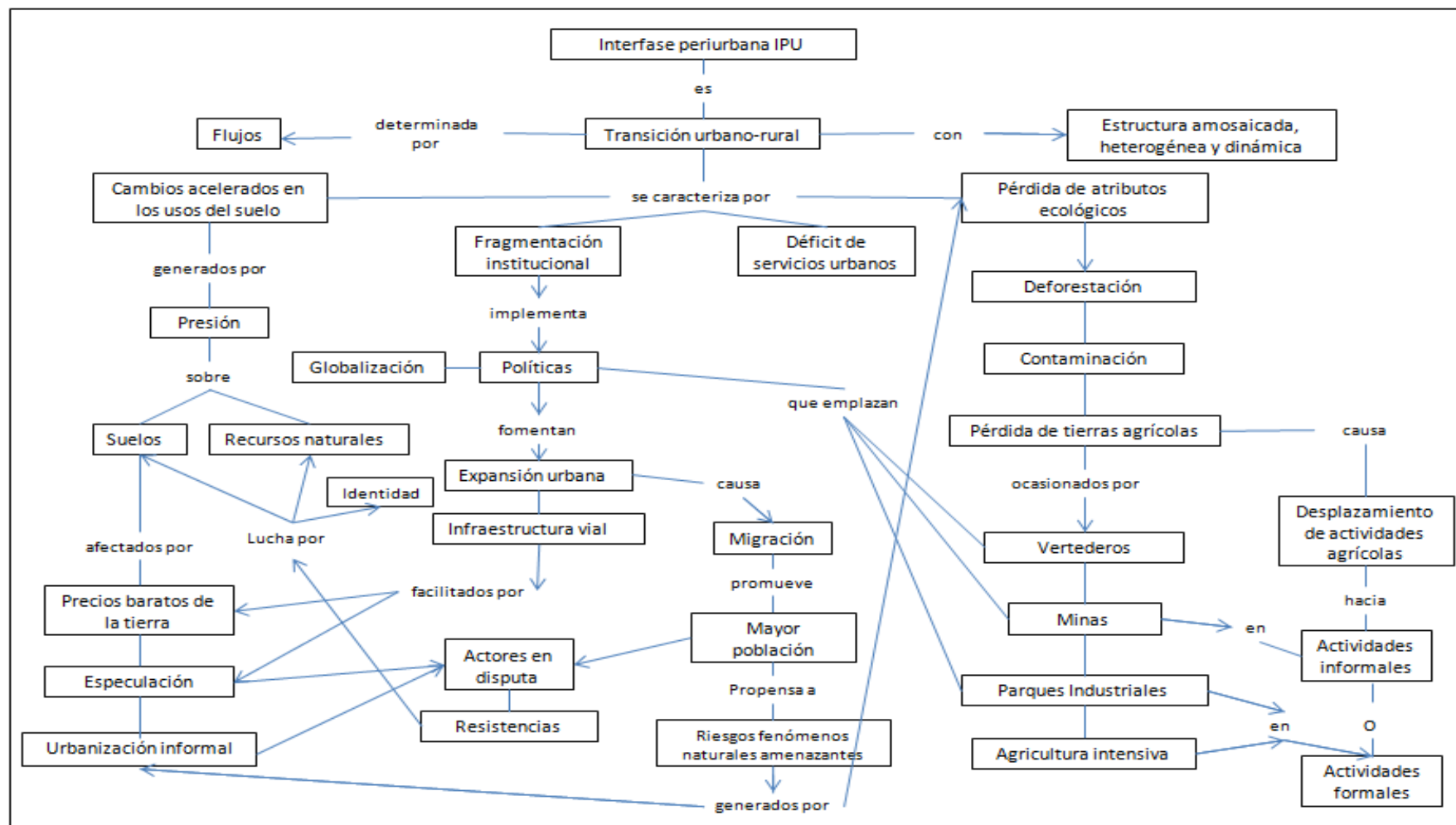


Figura 4-1 Características de la IPU. Fuente. Elaboración Propia a partir de Allen (2003b); Aguilar y Escamilla (2011)

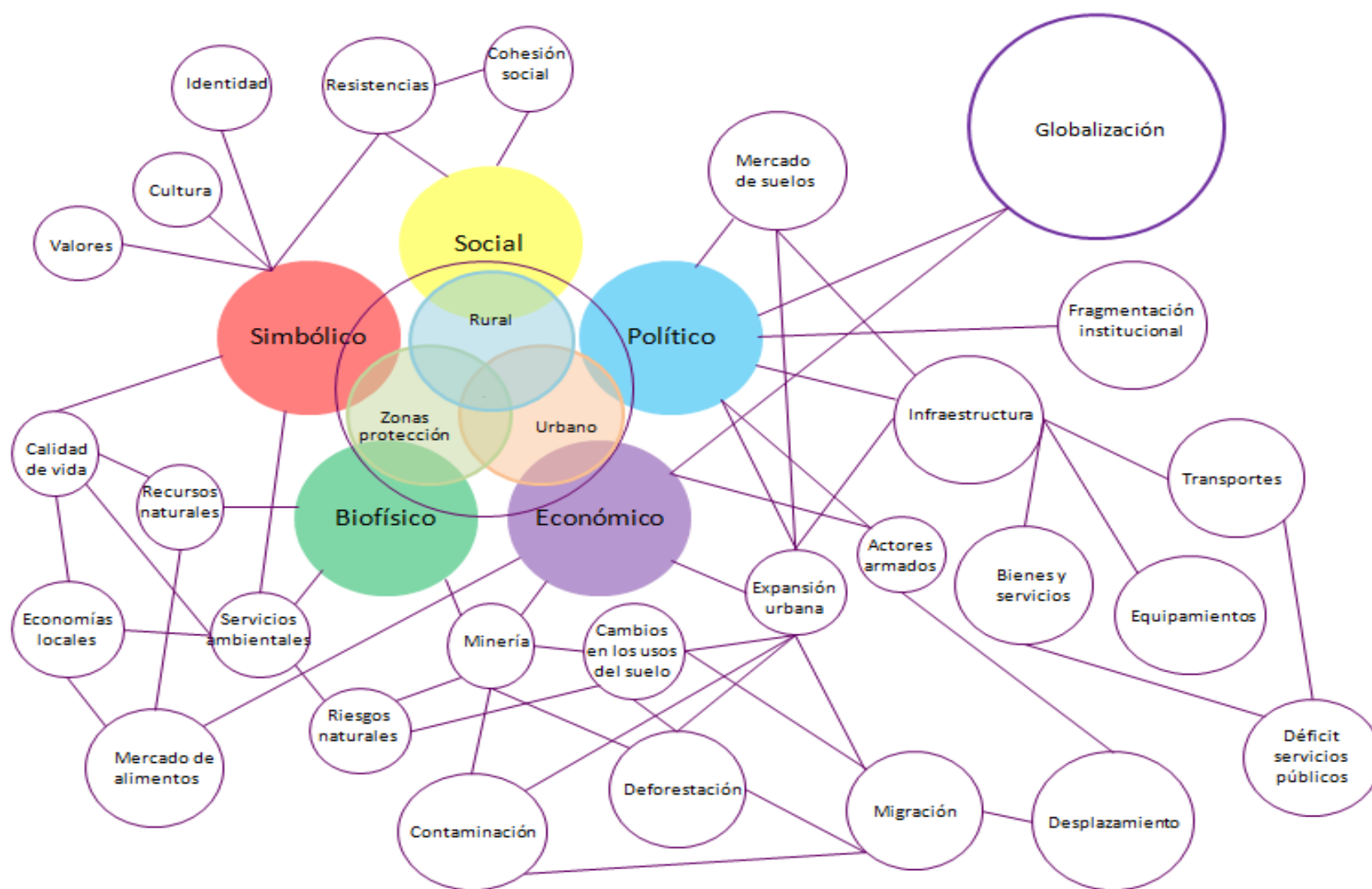


Figura 4-2. Complejidad de la IPU de Usme. Fuente: Elaboración propia a partir de rizoma (Noguera, 2004) y red de relaciones (Capra, 1996)

4.1 Problemas y oportunidades en la IPU

Los cambios de uso del suelo, flujos y dinámicas que se producen en la IPU afectan el ambiente y por tanto la calidad de vida de los pobladores. Allen (2003b) plantea que los problemas y oportunidades en la IPU radican principalmente en dos aspectos: calidad de vida y sustentabilidad con base en recursos naturales. Ambos aspectos parten de la premisa del ambiente como soporte de toda forma de vida. En el primer conjunto, destaca la homogeneidad de la población que habita allí y su vulnerabilidad ante los impactos ambientales generados, incluidos los riesgos naturales, de salud, económicos y laborales, tratados en la agenda marrón¹⁶. En cuanto al segundo aspecto, se enfoca en la explotación de recursos, competencia por el suelo y costos ambientales trasladados allí desde los sistemas rural y urbano, presentados en la agenda verde¹⁷ (Allen, 2003b). Es importante resaltar los efectos del cambio climático que agudizan los efectos adversos presentes en la IPU que afectan a la población más pobre (Aguilar y Escamilla, 2011).

En ese sentido, los problemas en la IPU de la localidad de Usme se reflejan principalmente en el aspecto ambiental, dada la presión sobre el suelo, los recursos renovables (maderas y alimentos) y no renovables (agua y material de construcción). Esta presión es causante de deforestación, erosión y degradación ambiental provocadas además por el establecimiento de infraestructura, como la Nueva vía al Llano y la proyectada Av. Usminia, el Parque Minero Industrial de Usme y el Relleno Sanitario Doña Juana. Estos problemas son usualmente causados por decisiones externas, dejando una huella ecológica urbana que conlleva directamente al cambio de valores hacia la apropiación, uso de la tierra, generando especulación y problemas con la tenencia de la misma, conflictos entre diversos actores (campesinos, propietarios, el Distrito, entre otros) que además denotan condiciones desiguales de calidad ambiental (Figura 4-3).

¹⁶

¹⁷ Agenda verde y agenda marrón: en la agenda verde se contemplan los problemas ambientales a nivel global, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad; la agenda marrón se enfoca en problemas ambientales locales que afectan la calidad de vida. Sin embargo, no hay una articulación entre ambas agendas (Allen, 2003b).

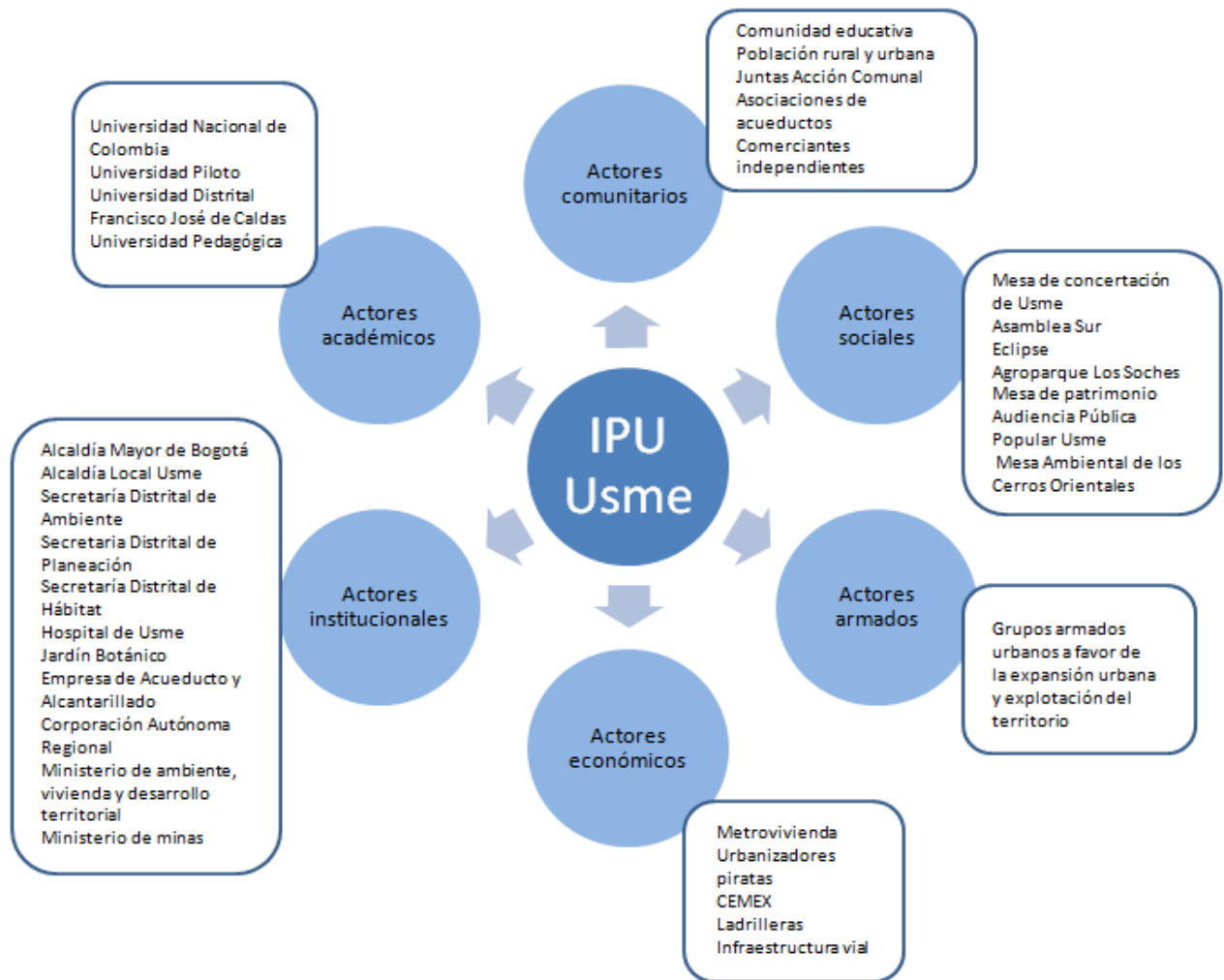


Figura 4-3. Actores incidentes en la IPU de Usme. Fuente: Elaboración propia a partir de Lozano Ducuara (2005) y Alcaldía Mayor (2009).

También se origina un viraje desde actividades agrícolas tradicionales o su abandono total, hacía actividades económicas ligadas al contexto urbano, como el comercio de productos no agrícolas, la dependencia de arriendos, empleos en la zona urbana, etc. Igualmente, al depender la ciudad de productos provenientes de regiones lejanas, en vez de los producidos en espacios adyacentes a ella, las oportunidades para la producción de la IPU disminuyen significativamente, sirviendo esta como simple enlace con dichas regiones (Allen, 2003b). En este caso, Usme no es gran productor, se constituye como nexo con la región del los Llanos orientales para el transporte de productos y mercancías (Ver anexo R).

La expansión urbana conlleva a la pérdida de tierras agrícolas, que se van desplazando hacia las reservas o áreas naturales, causando deforestación y disminución de fuentes de agua, la cual debe provenir de fuentes cada vez más lejanas, como sucede actualmente en las zonas adyacentes a los páramos y bosque alto andino de la localidad de Usme y Sumapaz y la cuenca del Río Tunjuelo. Así mismo, las fuentes existentes en la IPU habitualmente son contaminadas principalmente por los efectos de la agricultura intensiva y por vertimiento directo de aguas residuales, debido al déficit de saneamiento adecuado. Lo anterior sumado a la demanda creciente por el uso del agua, tiene repercusiones negativas tanto en el sistema ecológico como sobre los habitantes más pobres que no tienen acceso a infraestructura de abastecimiento y saneamiento, generando problemas de salud pública (Allen, Da Silva y Corubolo, 1999).

Al respecto, Lefebvre es un poco más radical y afirma:

En la actualidad la relación ciudad-campo se transforma, y esta transformación constituye un aspecto importante de una mutación general. En los países industriales, la antigua explotación del campo circundante por la ciudad, centro de acumulaciones de capital, cede lugar a formas más sutiles de dominación y explotación, convirtiéndose la ciudad en centro decisión y, aparentemente, de asociación. Como quiera que fuese, la ciudad en expansión ataca al campo, lo corroe, lo disuelve. Y ello no está exento de los paradójicos efectos antes señalados. La vida urbana penetra en la vida campesina desposeyéndola de sus elementos tradicionales: artesanado, pequeños centros que desaparecen a beneficio de los centros urbanos (comerciales e industriales, retículos de distribución, centros de decisión, etc.).” (Lefebvre, 1968, p 88)

Para Lefebvre, las decisiones que transforman a la IPU provienen directamente de la ciudad y de sus modos de vida y formas de habitar, lo cual ocurre en la IPU de Usme.

La creciente urbanización también se manifiesta por medio de las constructoras que fomentan la extracción de materiales de construcción. Sumado a lo anterior, el emplazamiento de vertederos mal gestionados en la IPU afecta en gran parte la calidad de vida de los habitantes causando focos de enfermedades gastrointestinales por el consumo de agua sin tratar y enfermedades respiratorias en zonas aledañas al relleno

sanitario y a las zonas de actividad extractiva. En cuanto a los desechos, tampoco existe aún una cultura de reutilización y reciclaje que ayude a disminuir los efectos de los residuos.

La IPU es ideal para estos intereses ya que su ubicación cercana a la ciudad disminuye costos de transporte, producción y distribución. La pérdida de tierras agrícolas, forestales, erosión de suelos, contaminación de agua son algunos de los problemas que se traducen en enfermedades y riesgos de deslizamientos e inundaciones, además de costos ambientales indirectos que conlleva el alto uso de combustibles requeridos para la producción (Allen et al., 1999). En la actualidad, existen barrios aledaños a las zonas mineras con amenaza de deslizamiento, principalmente en las UPZ Gran Yomasa y Danubio.

Para Allen et al. (1999), las oportunidades obedecen más a oportunidades económicas (laborales): la población de la IPU obtiene nuevas formas de sustento, trabajando en la actividad minera, la industria o las plantaciones, que además se encuentran cercanas a sus lugares de vivienda. También mejora el acceso a transporte, a mejores fuentes de energía, salud, educación y servicios varios, ya que la infraestructura donde se prestan se ubica más cerca. En Usme, sin embargo, pese a que existe cercanía a servicios que antes no se tenían, la calidad de los mismos es regular.

No obstante, para efectos de este trabajo se considera que las oportunidades se hallan en el contexto social a nivel local, ya que ante el panorama de los problemas, surgen movimientos comunitarios que buscan reivindicar sus identidades e imaginarios y conectarse con el entorno ecológico, a través de sus propios principios de organización espacial, generando nodos particulares y nuevas realidades territoriales dentro de la gran red del sistema macro, enmarcadas en los sistemas complejos de *auto-organización* y *autopoiesis* (Dematteis, 1996).

4.2 Pobreza y población en la IPU

La población de la IPU es también diversa y homogénea, sujeta a intensos flujos de migración. Usme se ha caracterizado por ser receptora de población, en su mayoría, correspondiente a familias desplazadas. Los factores “atrayentes” hacia la localidad, han

sido los bajos precios de lotes o la facilidad de emplazar barrios de invasión. Dada esta variedad de pobladores, entre los rurales, urbanos “antiguos” y nuevos habitantes, la caracterización de estas poblaciones es compleja.

Satterthwaite (2000) y Rigg (1998) citados por Allen (2010), exponen varios de los problemas que impiden una caracterización fidedigna de la población de la IPU: 1) Variaciones y retrasos en los censos, dificultando comparaciones nacionales e internacionales; 2) Falta de datos desagregados y generalización de conceptos; 3) Fracaso en definiciones estadísticas para rastrear la movilidad de la población entre zonas urbanas y rurales, así como la conformación de los hogares; y 4) Entrelazamiento de fronteras físicas urbanas y rurales. Ejemplos claros de lo anterior son los diferentes diagnósticos que se han realizado en la localidad, los cuales en su mayoría toman la zona rural o la urbana, sin brindar una perspectiva compleja que integre las dinámicas de ambas unidades territoriales como un todo.

Por otro lado, Pérez (2001) afirma que la medición y valoración de la pobreza no debe basarse solamente en los indicadores de producción, empleo e ingresos que se comparan con estándares internacionales no ajustables a contextos locales. Así, la idea de desarrollo en las zonas rurales (que también aplica a la IPU) debe propender por la equidad territorial, social, de género, etc., orientada a la disminución de la pobreza. A este respecto, la percepción de las poblaciones campesinas no se enfoca en la pobreza material, pues se sienten bien con su vida campesina, consideran que afecta mayormente la falta de participación.

Satterthwaite (2000) citado por Allen (2010), establece las diferencias existentes entre la población pobre periurbana y la población pobre urbana. Así, los habitantes periurbanos se caracterizan por: 1) Mayor dependencia de los mercados de trabajo de los sectores producción, fabricación o ventas; 2) Dependencia del dinero en efectivo para el pago de bienes, transporte y servicios; 3) Limitado acceso a la vivienda y a la tierra; 4) Dificil acceso a infraestructura y servicios. Lo anterior conlleva a la ilegalidad de sus viviendas, lo cual impide el acceso a servicios formales. Estas situaciones fueron más evidentes en las décadas del 70 y 90, cuando tuvieron lugar las dos olas migratorias hacia Usme, que se reflejaron en el emplazamiento de barrios informales sin acceso a servicios o con

servicios precarios. Si bien, estas situaciones han disminuido por la posterior legalización de dichos barrios, continúan presentándose principalmente con la población desplazada.

Los efectos de la expansión urbana como la presión sobre el suelo, la competencia entre actividades agrícolas y no agrícolas, la degradación del sistema ecológico, entre otros, producen mayores impactos sobre la población pobre de la IPU. Grandes agricultores, especuladores, y desarrolladores de proyectos urbanos, acaparan las oportunidades sobre la propiedad del suelo en la IPU por lo cual, al habitante pobre no le queda más remedio que vender sus tierras y abandonar la actividad agrícola como medio de sustento (Rakodi ,1998 citado por Allen, 2010). La venta de las tierras en el caso de Usme obedece a la presión que ejerce la empresa urbanizadora del Distrito sobre estas, manipulando sus precios, desvalorizándola y empleando maniobras administrativas para arrebatar los terrenos a las familias.

Los habitantes periurbanos se enfrentan además a ambientes marginales sujetos a ocupación ilegal de la tierra, externalidades negativas, acceso limitado al agua en contextos donde la misma abunda, o donde está contaminada, acceso limitado al saneamiento, situaciones que por lo general conllevan a los habitantes de la IPU a instalar conexiones clandestinas inseguras que pueden amenazar la salud pública (Allen, 2010). No obstante, los proyectos urbanísticos propuestos por el Distrito para Usme, a pesar de contar con la instalación de servicios legales, también generan situaciones semejantes.

En cuanto a la actividad agrícola, la decreciente disponibilidad de tierra genera que los pequeños agricultores deban producir las mismas cantidades de alimento en parcelas más reducidas, para lo cual deben acudir a los agroquímicos y a métodos de cultivo intensivo, lo que conlleva a largo plazo, a la pérdida de la fertilidad y contaminación de suelo y aguas (Allen et al., 1999). Esta problemática es muy evidente en la zona rural de Usme, ya que la tendencia apunta hacia el monocultivo de papa, que requiere uso intensivo de agroquímicos para obtener una rentabilidad media.

Los habitantes más pobres, también suelen ubicarse en zonas susceptibles a deslizamientos, inundaciones, suelos inestables propensos a licuación, rondas de ríos y quebradas, zonas adyacentes al relleno sanitario y minas, mientras los especuladores, grandes agricultores y urbanizadores autorizados por el gobierno, se asientan en las

mejores zonas (Allen et al., 1999). Sin embargo, en la localidad, se está emplazando urbanización formal en este tipo de suelos y en las rondas inmediatas al Río Tunjuelo y las quebradas, como se puede observar con la urbanización Ciudadela Nuevo Usme (Ver anexos K y W).

Para Rakodi, (1998) citado por Allen et al., (1999), las comunidades pobres de la IPU son más vulnerables al encontrarse expuestas a los rápidos cambios que la expansión urbana conlleva. Estos efectos de las presiones se traducen en prácticas de subsistencia que deben estudiarse para formular estrategias que se ajusten a sus necesidades. Es importante indagar a las comunidades periurbanas sobre los efectos de los cambios bruscos en la IPU, si estos han sido positivos o negativos con el fin de determinar cómo los hogares han obtenido beneficios (o no) de las nuevas oportunidades generadas por los cambios en la IPU, e identificar las áreas en las cuales es preciso intervenir para garantizar medios de vida sostenible enfocados a la planificación, gestión, acciones y tecnologías alternativas. Para los habitantes periurbanos ubicados en la zona urbana de Usme, una de las formas de sustento ha sido el comercio, fortalecido por la constante expansión. En cuanto a los habitantes rurales, ven amenazadas sus actividades agrícolas por la misma causa.

4.3 Fragmentación institucional

Otro aspecto fundamental en la caracterización de la IPU es la fragmentación institucional, expresada por la ausencia de instituciones, o superposición de las jurisdicciones existentes, por lo cual no hay articulación ni coordinación entre ellas. Esto conlleva a que no se apliquen políticas efectivas y se limite el poder de toma de decisiones sobre la IPU, produciendo incertidumbre en cuanto a la administración de las IPU y sus servicios urbanos y ecológicos, además de la falta de certeza sobre la propiedad de las tierras (Allen, 2003b; Allen, 2010).

De acuerdo con lo anterior, se encuentran en este dilema instituciones como la CAR y la Secretaría de Planeación Distrital, principalmente por el conflicto de tenencia de tierra e invasión de áreas protegidas. Esto genera situaciones de desalojo sin soluciones efectivas para los pobladores. Es evidente la tensión por la propiedad y derechos sobre los terrenos entre personas naturales y las instituciones. Incluso la normativa se

contradice a si misma al establecer usos que en la práctica son incompatibles, como las urbanizaciones sobre la EEP. Igualmente sucede con la no continuidad de los acuerdos concertados con las comunidades de una administración a otra. Por ejemplo, en el POZ, las veredas El Uval y La Requilina pertenecen a UPR (Unidades de Planeamiento Rural), por lo cual no debería permitirse la urbanización allí, pero están destinadas ahora al emplazamiento de la OENU.

Así mismo, hay poco control sobre la actividad minera, situación concerniente a la CAR, al Ministerio de Medio Ambiente, a la SDP y al Ministerio de Minas. El POT se limita a solicitar Planes de Manejo Ambiental, pero ninguna de estas entidades garantiza la no expansión de esas actividades o la cesión de las mismas. Una situación parecida ocurre con el Relleno Sanitario: las instituciones “se tiran la pelota” unas a otras y no ofrecen soluciones óptimas ante las problemáticas ocasionadas.

Sumado a lo anterior, los enfoques de planificación suelen ser divididos, toman lo rural y lo urbano por separado (Douglas s.f., citado por Toro et al., 2005) sin un carácter complejo y articulador. Para Lynch (1976) los planificadores usualmente no coinciden con los grupos que tienen interés en la calidad del ambiente, lo cual aplica para los demás aspectos de la IPU. Están indirectamente ligados a estos grupos únicamente por el mecanismo del voto o en su defecto, por el de las ventas.

Dávila (2003) por su parte, distingue las políticas y estrategias que intervienen la IPU de la siguiente manera: 1) Políticas con dimensión espacial que influyen directa e indirectamente sobre la IPU, son poco comunes; y 2) Políticas sectoriales que carecen de dimensión espacial y pueden tener impactos intencionales o no sobre el ambiente de la IPU. En su mayoría son políticas facilitadoras que obedecen a intereses privados o comunitarios y dependen de diferentes niveles gubernamentales que se circunscriben a los límites administrativos, los cuales no están bien definidos en la IPU. Igualmente, son estas políticas sectoriales las que controlan o gestionan los recursos y el uso de las tierras, y no los gobiernos locales. Adicionalmente, estas no tienen un enfoque de integración regional. Por otro lado, las intervenciones locales cada vez adquieren más fuerza en la toma de decisiones sobre los territorios y recursos.

Entre las políticas espaciales más frecuentes, están las dirigidas al cambio del uso del suelo, incorporadas en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los Planes de Ordenamiento Zonal (POZ) y otros mecanismos de planificación. También se hallan las

que definen actividades funcionales como el relleno sanitario y actividades extractivas. En cuanto a las sectoriales, las más comunes son las dirigidas al transporte que buscan generalmente una conexión con regiones lejanas, dejan de lado la integración local, y pueden obedecer a políticas macroeconómicas (Dávila, 2003), como IIRSA¹⁸ (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana). Ejemplos claros se muestran con la Nueva vía al Llano y la proyectada Av. Circunvalar del Sur. En este caso, la ciudad puede expandirse en un “desarrollo radial” (Zárate 1984, citado por Entrena, 2005, p. 69), esto es, a lo largo de las vías principales y de forma fraccionada (Entrena, 2005). En el anexo S, se resumen las causas y los impactos de dichas políticas sobre la IPU, y las posibles medidas aplicables, las cuales deben contar con un enfoque local sustentable.

A pesar de que las políticas abogan cada vez más por un enfoque sustentable, muchas veces no es más que una vaga idea, la cual se encauza en aspectos productivos y carece de articulación con objetivos sociales y económicos, indicadores, seguimiento y evaluación (Sánchez Rodríguez, 2008 citado por Aguilar y Escamilla, 2011), lo cual se refleja en los proyectos urbanísticos planteados para la localidad de Usme que están afectando directamente la EEP.

Así mismo, Aguilar y Escamilla (2011) hacen alusión a una gobernanza inclusiva, que promueva la descentralización de funciones y recursos, y establezca acuerdos entre el sector privado, las comunidades y los entes gubernamentales, en la búsqueda de la equidad ambiental en todas sus dimensiones.

4.4 Enfoques para la planificación de la IPU

El enfoque de la planificación para la IPU requiere una perspectiva integral de “bio-región urbana”, que incluya a la IPU en la planificación urbana y rural (Allen, 2003a y Dávila, 2003). Es importante y urgente que se incluyan planes intermunicipales para la gestión del agua, saneamiento, distribución, tratamiento, eficiencia de los sistemas y estrategias de ahorro y reutilización, construcciones y actividades de extracción en zonas de ribera,

¹⁸ Megaproyectos en infraestructura vial regional sudamericano que busca facilitar la explotación de yacimientos hidrocarbúricos, minerales, recursos genéticos, acuáticos y agropecuarios y su transporte

disposición y reutilización de aguas residuales y desechos (producción de biogás, compost, fertilizantes orgánicos, etc.) (Allen et al., 1999), al igual que políticas sobre riesgos naturales, áreas y población vulnerable.

Allen (2003a) enuncia tres enfoques de planificación que incluyen a la IPU: la planificación rural, urbana y regional. Sin embargo, los límites entre estas tres perspectivas son cada vez más difusos, dada la interacción entre los métodos y temas tratados. El enfoque rural, es dirigido hacia las comunidades, pero no involucra a los demás actores en el proceso. En el caso del enfoque regional, ofrece toda una gama de interrelaciones campo – ciudad, buscando el fortalecimiento y equidad de ambas entidades territoriales mediante flujos que se ajustan a las necesidades mutuas de cada una. Y finalmente el enfoque urbano, es también participativo, e incluye a los habitantes periurbanos con el fin de integrarlos, sin embargo, tampoco integra a los demás actores (Allen, 2003a). La Tabla 4.1 resume los enfoques referidos anteriormente. De acuerdo con lo anterior, el enfoque regional propone una planeación integral de la IPU que integra todos sus elementos y actores, que, en el caso de Usme, es una necesidad urgente para la integración y reconocimiento de las dinámicas y relaciones existentes en la localidad, en gran parte desconocidas por sus habitantes urbanos y rurales.

Tabla 4-1. Enfoques para la planificación de la IPU. Realizado a partir de Allen (2003a)

Enfoque	Característica	Métodos	Áreas de intervención	Acciones	Limitaciones
Rural	Acciones localizadas y discretas	Ordenación y planificación comunitaria de los recursos naturales Desarrollo rural	Acueducto y sanidad descentralizados Subsistencia basada en la tierra Gestión de recursos naturales Economía urbano rural Información sobre mercado urbano rural	Atención a las comunidades locales más marginadas Industrialización rural Perspectiva participativa	Usualmente no tienen dimensión regional y tampoco incorpora otros actores como el gubernamental y los privados Acciones a corto plazo
Regional	Presiones y flujos urbano-rurales	Desarrollo de vínculos urbano-rurales Soluciones integrales Creación y fortalecimiento de redes Políticas multisectoriales interrelacionadas Relaciones recíprocas de apoyo campo-ciudad Apoyo a la economía local	Abastecimiento y distribución de alimento para las ciudades Agricultura urbana y periurbana Impactos y huella ecológica urbana Sistemas urbanos de planificación y gestión	Fortalecimiento del transporte en zonas rurales y periurbanas Seguridad alimentaria	Enfoque muy amplio
Urbano	Transformación de los sistemas de planificación y sus instituciones	Gestión de la relación entre los sistemas urbanos y sus Hinterlands Calidad de vida de los habitantes periurbanos Asociados a la agenda 21 Ciudades sostenibles Infraestructura y servicios Integración de áreas periurbanas a la ciudad Visión a largo plazo	Transporte y uso del suelo Regulación de la tenencia de la tierra y la vivienda Infraestructura y saneamiento Salud y contaminación	Metodologías participativas Abastecimiento de agua a través de tecnologías de bajo costo	No incorpora otros actores como el gubernamental y los privados

Finalmente, en su análisis Allen (2003a), determina que el enfoque más adecuado es el regional. Sin embargo, concluye que sigue siendo muy amplio para la identificación de la IPU como entidad espacial. No obstante, desde la perspectiva ambiental éste enfoque articula aspectos económicos, sociales y biofísicos de manera sinérgica y propone criterios para la zonificación de la IPU, como la capacidad de carga del territorio, además de los ya conocidos como la densidad, la morfología, distancias y usos (Allen, 2010).

Esta idea, no está muy lejos de las propuestas de la comunidad como lo expresa un líder comunitario de Usme:

“Si nos vemos como elementos importantes para el desarrollo económico, social, cultural y ambiental, en iguales condiciones, seguramente vamos a tener una buena visión de ciudad. De todos los servicios que tiene el Distrito o que tienen las ciudades, deben ponerse en función de acceso a los campesinos y los campesinos debemos de, también colocar en función de las comunidades urbanas todo ese tesoro que hay allí, que es maravilloso, que nunca han terminado de descubrirlo. Entonces hay muchos elementos ambientales, sociales, culturales, de productividad, investigación, de todo. Si eso lo reconocemos y lo valoramos, cambiaría totalmente el desarrollo de ciudad” (Líder comunitario, comunicación personal, mayo 3 de 2017)

Allen (2003a), destaca además tres principios que se aplican a la gestión y planificación ambiental de la IPU:

- 1) Pensar y actuar estratégicamente: la planificación y gestión se centran en intervenciones ambientales con potencial sinérgico, que ajusten intervenciones de largo y corto plazo integrando y analizando los flujos urbano-rurales promovidos por los diferentes niveles gubernamentales, lo que permite la identificación de puntos estratégicos de entrada.
- 2) Construir un proceso participativo: el proceso debe contar con la participación de actores implicados en las problemáticas de la IPU, comunidades, instituciones, etc. para la construcción de un “foro ambiental integral” (p. 144) en el que se planteen objetivos y estrategias que conlleven a acciones concretas, mediante grupos de trabajo temáticos.
- 3) Trabajar de forma incremental: los procesos comienzan desde el ámbito local para dar respuesta a problemáticas específicas y poco a poco se irán articulando otros actores, al tiempo que se obtiene más información y experiencia (Ver anexo Z).

La planificación y gestión de la IPU, debe procurar trascender la dicotomía urbano-rural, y tener en cuenta los diferentes procesos generados en una escala más amplia, integrando necesidades urbanas y rurales, complementándose mutuamente, es decir, que lo rural supla necesidades urbanas y viceversa, además de incorporar iniciativas de corto y largo plazo. Así mismo, debe incluir una perspectiva que analice las consecuencias de las políticas que derivan en desigualdad espacial y ambiental. La participación de la

comunidad, en especial la más vulnerable, debe ser primordial y transversal a lo largo de todo el proceso de planificación (Allen, 2003a).

La visión compleja y sistémica, debe también incluir al sector institucional y gubernamental. Es indispensable la articulación adecuada de instituciones, políticas, programas y proyectos, y que mantengan la continuidad de ser necesario, así como la articulación de los sectores para brindar un enfoque integral de las políticas urbanas, rurales y ambientales: se debe establecer una visión integra incluyendo la otredad. Lo anterior garantiza un retorno al enfoque complejo de lo natural como parte del ser (Moreno, 2008)

De acuerdo con lo anterior en el contexto de Usme, estas propuestas integrales, se han concebido desde las comunidades, a partir de situaciones puntuales, como la calidad ambiental, la seguridad alimentaria, el hallazgo arqueológico, obteniendo respuestas no siempre positivas. Sin embargo, las propuestas se mantienen constantes fortaleciendo el movimiento comunitario garantizando la participación.

4.5 Realidades locales y globalización

Muchos de los cambios generados en la IPU, obedecen al proceso de globalización: la IPU está determinada en gran medida por procesos externos que modifican desde las dimensiones físicas de la IPU, la infraestructura ubicada, etc., hasta formas de habitar y los hábitos de consumo.

Neil (1999) citado por Jiménez y Novoa (2014), explica:

La globalización corresponde al despliegue de un proceso creciente de transformaciones espaciotemporales, que han dislocado los límites y las fronteras materiales y físicas existentes, desde la vida cotidiana hasta las escalas transnacionales. Las características e impactos de este proceso, por su magnitud, involucra un reordenamiento de las diversas dimensiones socio históricas de la vida interconectando de manera creciente y acelerada (más no integrada) todos los rincones del planeta, produciendo un complejo reescalamiento y traslape de las fronteras (p.26.)

Es así, como la integración de los habitantes de la IPU de Usme, no están completamente integrados a la ciudad ni a la región. El ejemplo claro es la Nueva vía al Llano que no ha significado mayor beneficio, ya que son pocos los productos agrícolas que salen de la localidad: “Nosotros vendemos el 80-90% de los productos aquí en la ciudad, en Bogotá, entonces realmente no es tan beneficioso. La relación con los municipios vecinos ha sido permanente pero no tan fuerte en temas de comercio. Entonces realmente no. No ha sido más negativa porque es el impacto ambiental que genera sobre el territorio” (Líder comunitario, comunicación personal, mayo 3 de 2017)

Es evidente entonces, la necesidad de analizar los flujos y redes existentes, siempre cambiantes y surgentes en la IPU. Estos flujos pueden provenir de áreas muy distantes, no necesariamente de zonas urbano-rurales cercanas, y operan en diferentes escalas (Allen, 2003a). De esta manera, el proceso globalizador suprime las distancias en detrimento de la historia, es decir, la globalización borra la historia (Bonnal, et al. 2003). Como explica Milton Santos (1996) citado por Blanco (2007), las redes provocan tanto homogeneización como heterogeneización, sin embargo, esta última es invisibilizada. De esta forma, la población campesina de la IPU de Usme considera que han surgido conflictos intergeneracionales por el cambio de hábitos de consumo, pérdida de identidad rural y la influencia de los medios de comunicación, como el internet y la televisión.

Con referencia a lo anterior, González Urruela (1987) afirma que los lazos de conexión próximos se han debilitado debido a las decisiones de los centros económicos y políticos mundiales, y la influencia de las multinacionales, reduciendo la capacidad de decisión de los grupos locales, por tanto, el modelo de urbanización actual es impuesto por el capital. De esta manera, se pierde la cohesión social debilitando la toma de decisiones conjuntas por parte de la comunidad. Aunque lo anterior, también tiene un efecto contrario, es decir, han surgido recientemente tanto en la comunidad rural como en la urbana, movimientos integrales comunitarios cada vez más comprometidos con la defensa de los intereses de los habitantes de la localidad.

Entrena (2005) lo considera lo anterior, como un principio de acción-reacción ante la globalización homogeneizadora que busca estandarizar y en contra parte, la respuesta de lo local se enfoca en la búsqueda de reafirmación y defensa de la diferencia, la singularidad e identidad de los territorios. Por otro lado, Dematteis (1996) afirma que las

redes e intercambios derivados del proceso globalizador no son exclusivos de los centros urbanos, “sino que están ya al alcance de los sistemas territoriales periféricos y de sus actores locales” (Sección IV, párr.6).

Dado el precio barato y la localización estratégica de las tierras metropolitanas o cercanas a la ciudad, las empresas inmobiliarias y constructoras han producido ganancias considerables. Los proyectos inmobiliarios, a menudo privados, gozan de beneficios gubernamentales para su fomento, causando desregulación del mercado y especulación inmobiliaria. Además del proceso de urbanización como tal, este requiere el emplazamiento y/o ampliación de obras de infraestructura que cumplan funciones de tipo vial, industrial, comercial, etc. originando conflictos por el uso del suelo con las comunidades rurales, las cuales usualmente son víctimas de expoliación de las tierras y el despojo de recursos (Rodríguez, 2014) como sucede actualmente con la OENU y la Nueva vía al Llano en relación con las comunidades campesinas.

Como se explicaba anteriormente, uno de los efectos de la globalización es el surgimiento de movimientos comunitarios que buscan reafirmar y reivindicar sus identidades y territorialidades (Jiménez y Novoa, 2014) que emergen como mecanismo de defensa ante la homogenización globalizadora, en pro de la protección de lo local, la diversidad y la diferencia (Entrena, 2005). De acuerdo con lo anterior, Lynch (1976) afirma que ese “*localismo*” (p. 36) funciona como advertencia ante las posibles aplicaciones de patrones homogeneizadores, y que las normativas que se apliquen deben estar de acuerdo con las diferencias entre territorios, es decir, deben ser diseñadas acorde a las condiciones de cada territorio.

De esta manera, surgen en Usme, diferentes movimientos comunitarios como el Agroparque los Soches, la Mesa de Concertación, Asamblea Sur, entre otros, los cuales se describen en el siguiente capítulo.

Continuando con lo anterior, para Jiménez y Novoa (2014):

El proceso de globalización implica una nueva geometría del poder, entre la reestructuración económica, las transformaciones político-institucionales y las resistencias sociales, que implican una reorganización del dominio y el mando

capitalista, pero igualmente es un nuevo escenario de retos y posibilidades que deben ser asumidos para las resistencias y propuestas sociales y políticas (p. 56)

La comprensión del espacio local implica abarcar la amplia gama de actores que confluyen en él y que se reproducen en escalas regionales, nacionales y globales (Pírez, 1995 citado por Blanco, 2007). En ese sentido, Taylor (1994) citado por Barros (2000) establece tres escalas en el espacio: economía-mundo, o escala de la realidad; Estado nación o escala de la ideología: y, por último, escala local o de la experiencia.

Por lo tanto, es importante establecer el diálogo constante entre todos los actores que habitan y/o que tienen incidencia en el territorio, tanto para la integración de los mismos, como para la planificación y participación conjunta.

4.6 El sector rural de la IPU de Usme y sus procesos de planificación

El sector rural de Usme también tuvo dos grandes flujos migratorios notables al igual que la zona urbana: uno en los años 50 a causa de la guerra bipartidista; el segundo flujo se presentó en los años 90, gracias a las redes sociales establecidas en la zona y ante la necesidad laboral de los campesinos, los cuales provenían en especial de Boyacá, Tolima y la Sabana de Bogotá. (Ruiz, Santana y Baquero, 2013) Así, existen familias que han habitado este territorio desde hace 50 o 60 años, que luego hicieron parte del proceso de fragmentación de las haciendas que había entonces (SDP, 2010)

El Diagnóstico Rural Participativo Operación Nuevo Usme (Metrovivienda, 2011), caracteriza las zonas rurales incluidas en los planes parciales en sistemas agropecuarios e incluye al subsistema agrícola (caracterizado por el monocultivo): cultivos de papa, arveja, haba, cilantro y zanahoria, y al subsistema pecuario, ganadería extensiva de carne y lechera (este no genera muchos empleos). En el caso de la zanahoria y el cilantro, son cultivos relativamente recientes, dada su buena adaptación a los suelos y el bajo costo de inversión a comparación de los otros cultivos susceptibles a enfermedades, inestabilidad de precios, causantes de baja fertilidad y erosión del suelo. En su mayoría, las actividades agrícolas son la base del sostenimiento económico de los habitantes de la zona. Los

métodos de producción combinan los tradicionales con los tecnificados (Metrovivienda, 2011).

Como actividades adicionales, se hallan la crianza de otros animales de granja, huertas caseras para autoconsumo, frutales de clima frío, tiendas de víveres, minería, arriendo de vivienda, microempresa, entre otros, además de los empleos fuera del predio. Las actividades agrícolas garantizan la alimentación de la familia, ya que, si la familia dependiera exclusivamente de actividades ciudadinas, tendrían que invertir al menos, un salario mínimo en la alimentación (Metrovivienda, 2011).

El Diagnóstico Rural Participativo (Metrovivienda, 2011), también halló que existen tres áreas con vocación específica que deben tener un manejo especial, estas son:

-Zonas de provisión de agua: se deben tomar medidas de conservación y cuidado por parte de la comunidad y las instituciones, como por ejemplo el aislamiento de zonas naturales, reforestación y manejos del suelo, implementación de sistemas agrícolas alternativos y manejo de desechos y aguas residuales. En esta caracterización el agua es la base para el sistema productivo.

-Zonas productivas: implementación de modelos agrícolas alternativos, participativos y comunitarios, encaminados a la diversidad y recuperación de cultivos y productos tradicionales que garanticen seguridad alimentaria.

-Zonas de mercado potencial: integración de las redes productivas al sector agroalimentario de la ciudad y la localidad.

De lo anterior, surge el conflicto entre lo productivo y lo protegido, evidenciando que, a pesar de la conciencia por el cuidado ambiental, la necesidad de generar ingresos a partir de la producción agrícola lleva a invadir zonas de protección como los páramos que poseen suelos de mejor calidad, contaminar las fuentes de agua por el exceso de insumos y vertimientos de aguas residuales, y en general el uso de prácticas inadecuadas de producción. En consecuencia, la normatividad e instituciones han tomado medidas en el asunto.

No obstante, algunas comunidades han realizado acciones concretas ante dicho panorama, las cuales son invisibilizadas por las instituciones, culpando siempre al campesino de los efectos negativos, desconociendo el papel de los terratenientes que no

tienen ningún sentido de pertenencia con el territorio, y causan daños al invadir las zonas protegidas (SDP, 2010).

Esta situación, también es causa de desplazamiento de campesinos hacia la zona urbana, generando rumores entre la comunidad sobre una posible privatización de esas áreas protegidas y sus recursos (SDP, 2010).

Según el POZ (DAPD, 2006), la propiedad de las tierras agrícolas está altamente fragmentada y ha disminuido considerablemente la productividad y calidad del suelo a causa de loteos y parcelaciones constantes a raíz de herencias, sucesiones, pagos con tierras, alianzas o trueques (Metrovivienda, 2011) ante este panorama, Metrovivienda argumenta que lo más rentable para estos propietarios es vender sus tierras al Distrito, con lo cual se obtendría un alto aprovechamiento del suelo a comparación de la desvalorización de la tierra si se conservara con aptitud de suelo rural.

El Diagnóstico Rural Participativo (Metrovivienda, 2011) caracteriza al habitante de la ONU como una persona que a pesar de que puede convertirse en ciudadano, no pierde el arraigo y la identidad campesina. Así, las influencias de la ciudad, las condiciones que implica ser pequeño agricultor y las presiones territoriales y normativas a las que se ve sometido, hacen del campesino de Usme único (Metrovivienda, 2011). La definición de campesino convenida en las concertaciones con la comunidad es la siguiente: “campesino es la persona que vive y trabaja en el campo en actividades agropecuarias”, el agricultor solamente practica la actividad agropecuaria pero no vive de ella (DAPD, 2006).

Existen sobre el campesino y el territorio destinado a la OENU, tres presiones: la de los Cerros Orientales, la de Sumapaz y claro está, la presión de la zona urbana de Bogotá. Simultáneamente, Usme ejerce presión sobre Sumapaz, rompiendo la conectividad ecológica entre el complejo de páramos hacia el norte, afectando a su vez las fuentes hídricas que abastecen al Distrito Capital (Metrovivienda, 2011).

La cercanía a la ciudad puede ser un arma de doble filo para la vida del campesino de Usme, generando problemas de inseguridad, cambios en los hábitos de consumo, pérdida de la cultura y valores campesinos, pérdida de la soberanía alimentaria, desacuerdos generacionales, entre otros; y oportunidades, que incluyen el acceso a servicios, transporte, mercados, educación, tecnologías, conectividad con la ciudad, oportunidades laborales, entre otros. El campesino de Usme ofrece un alto servicio en cuanto al cuidado

del ambiente. Por otro lado, pese a que la producción de la zona no es un aporte significativo a la población de la ciudad, es muy importante en la canasta familiar propia y de las zonas adyacentes, además de ser fuente de empleo local (Metrovivienda, 2011).

El Diagnóstico de las áreas rurales (SDP, 2010), confirma la presencia de conflictos de uso del suelo rural, clasificados en: suelos sin conflicto; sobreutilización ligera, asociados al emplazamiento de cultivos y pastizales en áreas productoras de fragilidad y de manejo especial; sobreutilización moderada, asociada con emplazamiento de cultivos transitorios, pastizales y zonas urbanas sobre áreas de manejo especial; sobreutilización severa, asociados a expansión urbana.

En el Diagnóstico de las Áreas Rurales (SDP, 2010), se aclara que las veredas de la localidad cuentan con una clasificación catastral y otra de tipo socio-territorial. Las veredas reconocidas bajo este segundo criterio son las siguientes: Agualinda Chiguaza, Arrayanes, Chisacá, Corinto Cerro Redondo, Curubital, El Destino, El Hato, El Uval, La Unión, Las Margaritas, Los Andes, Los Soches, Olarte, Requilina, Tibaque y Usme Centro.

De las anteriores veredas enunciadas, seis son las incluidas en la formulación de Pacto De Borde y la OENU, dada su ubicación en la zona de transición urbano-rural:

-Vereda el Uval: clasificada como área sostenible alta capacidad y alta fragilidad, con extensión de 403,89 ha, uso de suelo predominantemente agrícola, con cultivos de papa, arveja y cebolla. Predomina cobertura de cultivos-pastizales, vegetación natural y seminatural con bosque denso y matorral. El 32.41% del área no presenta conflicto y el 33.61 % se encuentra en conflicto severo, al año 2002. En 2007, los porcentajes más representativos son 59.04% de área sin conflicto y 20.52% con sobreutilización ligera. El principal conflicto de esta vereda concierne a la OENU, y la poca participación permitida a la comunidad al respecto, por lo cual reclaman su derecho de permanencia en el territorio. La comunidad también expresa la desarticulación entre sus líderes, lo cual impide la difusión y gestión de las propuestas.

-Vereda Corinto: Es reconocida socialmente pero no por las instituciones, con 744,47 ha, al igual que la vereda El Uval, los productos principales son papa, arveja y cebolla. Sobresalen suelos cultivados, seguida de áreas naturales, seminaturales, y algunos cuerpos de agua. En 2002, el 42.69% del área presenta conflicto severo y el 34.57%

conflicto moderado. Para 2007, 34.71% de área se encuentra con sobreutilización severa y 28,69% con sobreutilización ligera.

-Vereda La Requilina: clasificada como área productora con una extensión de 148,78 ha, uso agrícola. Predomina cobertura de cultivos-pastizales, vegetación natural y seminatural asociada a riparia. El 42.76% del área presenta conflicto severo y 56.76% moderado, para 2002. En 2007, 45,27% registra sobreutilización ligera y 33.12% sobreutilización severa.

-Vereda Chiguaza: considerada como área para producción sostenible de alta capacidad. Con extensión de 153,57 ha de uso agrícola, los productos principales son papa y cebolla. Predominan coberturas de matorral-pastizal con relictos de vegetación seminatural y riparia. El 58.31% del área no tiene conflictos de suelo, y el 34.07% se tiene conflictos severos de uso del suelo, para 2002. En 2007, se presenta el 56, 73% sin conflicto y el 27, 51% con sobreutilización severa. Esta vereda se ve afectada por el Relleno Doña Juana, la OENU y la legislación de zonas de protección.

-Vereda el Olarte: área productora con un área de 620,66 ha. Predominan en su cobertura pastizales, cultivos y vegetación riparia. En 2002, el 53, 52% del área se encontraba sin conflictos y el 20% con sobreutilización moderada. Ya en 2007, 57,70% de la zona no tenía conflicto por uso del suelo y 19,37% se encontraba con sobreutilización severa. Los cultivos de esta vereda se encuentran en suelos de protección, generando un conflicto notable. Otro conflicto presente obedece a que muchos de los predios son arrendados, por lo cual, la población se establece allí dependiendo de los ciclos de producción, por tanto, no es receptiva hacia los problemas de la vereda y no se integra con la comunidad, a esto se suma la fragmentación presente en el interior de la misma. Respecto al proyecto urbano, los habitantes de la vereda se sienten presionados y desinformados por parte de las instituciones. Lo anterior junto con el carácter de protección de la ronda del Tunjuelo, ha generado desplazamiento. También expresan que los propietarios de fincas no residentes en la zona atentan constantemente contra el ambiente quemando el bosque nativo para establecer cultivos.

-Vereda Los Soches: clasificada como área para la producción sostenible de alta capacidad, alta fragilidad y de manejo especial. Con extensión de 390,49 ha, se encuentra entre los 2800 y los 3200 msnm. Sobresalen cultivos y pastizales, vegetación natural y seminatural. Incluye tierras artificiales con explotación de canteras. En 2002, el 51.87%

presenta conflicto moderado y 25% sin conflicto. En 2007, 34, 09% aparece sin conflicto, y el 30, 71% con sobreutilización ligera.

Las cifras anteriores no aclaran por qué las zonas sin conflicto aumentan o los conflictos presentes disminuyen.

El POZ procura integrar a las comunidades rurales con la ciudad y con el proyecto, protegiendo a la vez el entorno ambiental garantizando la conectividad ecológica y social, fomentando los intercambios de productos y servicios en la comunidad, generando producción de bienes y servicios ambientales y agrícolas, cohesión social, participación de los campesinos, equipamientos colectivos, con veras a mejorar la calidad de vida para que los campesinos no vendan sus tierras a urbanizadores ilegales (DAPD, 2006).

Se establecen estrategias de reasentamiento productivo, agricultura urbana y periurbana que garanticen la seguridad alimentaria, y fortalezcan el pacto de borde para la cuenca del río Tunjuelo, integrando a la comunidad campesina en todo el proceso. De igual manera, se busca articular los corredores ecológicos, las quebradas con sus respectivas rondas, con los parques y zonas de alta pendiente (DAPD, 2006).

No obstante, la realidad muestra la seria afectación que este Plan Zonal ejerce sobre las estructuras ecológicas, y la forma agresiva como el Distrito reclama los predios destinados a la intervención urbanística.

La caracterización de la población realizada en el plan parcial 1, halló que, de los 308 predios, el 20.78% es habitado por agricultores; 15.58% está habitado por campesinos; el 8.77% habitado por ciudadanos; 7.47% estaba a cargo de jornaleros; y el 47.40% a cargo de rentistas (especuladores) (DAPD, 2006). Se distinguen aquí varias justificaciones para agilizar la compra de predios por parte del Distrito. Adicionalmente, las cifras respecto a los tres planes parciales restantes no son claras.

Por otro lado, según los habitantes rurales de la zona, la expansión urbana de tipo informal trae consigo “aculturación” en sus territorios, presencia de habitantes marginales (delincuencia común, drogodependientes) y otros individuos trasgreden con la cotidianidad de la población original. Adicionalmente, los efectos ambientales se agudizarían por las intervenciones para la instalación de los servicios públicos, en especial, lo concerniente al manejo de aguas residuales. También se generaría una ruptura en las redes comunitarias tradicionales ante la decisión de vender o no los predios

(SDP, 2010). Ante este panorama, la población toma la iniciativa de conformar una mesa de concertación que hace aportes significativos al POT y a la Política Pública de Ruralidad. No obstante, según la comunidad de la Mesa, no han tenido en cuenta su participación debido a la oposición ante el proyecto que lidera Metrovivienda (hoy Empresa de Renovación Urbana – ERU) (SDP, 2010).

Otro problema “globalizador” que preocupa a la comunidad rural de la zona, es la pérdida y desconocimiento de la identidad campesina por parte de los jóvenes, que están asumiendo costumbres citadinas, ya que tienen mayor acceso a medios de comunicación masivos, lo cual influye en sus hábitos de consumo y formación de la identidad, promoviendo la migración hacia la ciudad, abandonando las tradiciones rurales (SDP, 2010).

Los diagnósticos referidos, han producido conocimientos más profundos acerca del entorno rural de Usme a partir de caracterizaciones físicas y sociales, destacando el papel de la participación y la percepción de los habitantes de la zona. Los resultados prueban que estas áreas no deben ser intervenidas por los planes de expansión urbana propuestos, o al menos, estos deben ser consecuentes con el entorno y las necesidades reales de estas comunidades, más que obedecer a intereses externos.

4.7 Nueva vía al Llano (Eventos infraestructurales)

El papel de las vías en la transformación del territorio ha sido pocas veces analizado y usualmente invisibilizado. Al respecto Castaño (2004), explica:

Las vías -particularmente las terrestres o carreteras- tienen una serie de consecuencias que pueden ser medidas –objetivamente hablando- como positivas o negativas para la sociedad. La diferencia de peso para cada una de estas valoraciones depende de la planificación y la articulación de normas, recursos financieros y el fortalecimiento de los instrumentos de mitigación, o solo de las obras físicas sino también de las comunidades naturales y antrópicas que reciben el cambio el efecto a largo plazo de ellas (p. 398)

Castaño (2004) añade que las vías tradicionalmente han sido el eje de “desarrollo” en Colombia, actualmente ceñido al marco de la globalización y representan la materialización de la inversión estatal en los cambios de uso del suelo, alterando directa e indirectamente los ecosistemas, por medio de la explotación de los recursos naturales y el asentamiento creciente de pobladores que modifican el uso de la tierra y las formas de habitar en el territorio. Adicionalmente, las poblaciones aledañas y los usuarios se ven seriamente afectados por aumento en los cobros de valorización o peajes. Por otro lado, Castaño reconoce el papel de las vías en el sustento económico de amplios sectores de población, lo que influye además en aspectos culturales y de ordenamiento territorial.

Las vías también deben ser planificadas en conjunto con las comunidades locales y propender porque dichos proyectos coexistan en armonía con las estructuras ecológicas.

Dentro de los proyectos por desarrollar entre 2004 y 2007, se encuentra la Nueva vía al Llano, proyectándose desde la Av. Boyacá y la Av. Caracas hacia el sur hasta la Av. Circunvalar del sur, en diferentes etapas de ampliación y adecuación consolidándose como eje de integración internacional y regional (Dec. 190 de 2004 - Art.19, 64, 70 y 168) Esta vía hace parte del eje de integración y desarrollo grupo 3: Conexión Venezuela - Colombia (eje Orinoco – Apure - Bogotá); y grupo 4: Conexión Pacífico – Bogotá - Meta - Orinoco - Atlántico, incluidos en el Eje Andino propuesto por el IIRSA, cuyas funciones estratégicas se resumen en agilizar el transporte, conectar diversos nodos estratégicos regionales y fomentar el comercio internacional (IIRSA, (s.f).

En la década de los años 20, se inicia la construcción del carreteable Bogotá- Cáqueza, guiándose por el antiguo camino real y finalizando en Chipaque en 1928 y en Cáqueza en el año 1932 (Sandoval, et. al, (s.f.)) Sin embargo, esta vía no tenía conexión directa con el entonces municipio de Usme, donde llegaría posteriormente la vía que comunica a La Regadera (Ver Anexo P). La vía al Llano ha sido bastante controversial por sus atrasos, y continuos derrumbes, entre ellos el de Quebrada Blanca en 1974 y el de Chirajara en 1991.

Mediante el Contrato 444 de 1994 inicia la obra de la nueva vía Bogotá - Villavicencio, tramo Bogotá- Cáqueza que reemplazaría la Avenida al Oriente (Antigua vía al Llano, cuyo tramo atraviesa los Cerros Surorientales, por los actuales barrios de Juan Rey, La Flora, Juan José Rondón, etc.). Esta Nueva vía al Llano fue planteada por Juan Felipe Gaviria, ministro de obras públicas 1990-1992 y junto con la obra del túnel El Boquerón,

fueron financiadas por el gobierno Distrital y el Ministerio de Obras Públicas. Así, se realiza el trazado propuesto por la Av. Boyacá desde el parque El Tunal, con dos calzadas y cuatro carriles (DNP, 1993) y se consolida como la ruta estratégica nacional e internacional. Del desarrollo vial propuesto en el POT, solo se ha desarrollado la Nueva vía al Llano.

Desde la incipiente apertura de esta vía en los años 80, pero formalizada en los años 90, se refleja que la expansión urbana en la localidad se ha dado en gran parte por su influencia y la de la antigua vía al Llano o corredor de Oriente (actual circunvalar del sur), papel que ha sido invisibilizado. De esta manera se puede observar desarrollo urbano no solo adyacente a la Nueva vía al Llano sino también en algunos espacios ubicados en medio de ambos corredores viales (Barrio Nueva Gloria, El Curubo, etc.)

A finales del año 2002, se iniciaron las obras de ampliación entre el Barrio Yomasa y la calle 90 sur (IDU), que aun en el año 2010, no estaban conclusas, generando focos de inseguridad durante su construcción. La alta tasa de accidentalidad, focos de inseguridad, complicaciones en la movilidad de los peatones, entre otros, muestran que la vía se construyó pensando más en la conexión regional que en los propios habitantes rurales y urbanos de la zona, tanto que hasta el año 2016 semaforizaron algunos puntos, sin ser una medida suficiente frente a la accidentalidad. Por otro lado, se construye un puente peatonal en donde no hay tráfico de transeúntes considerable (Barrio Villa Alemania). El acceso vial hacía gran parte de la zona rural es precario y la conexión con los municipios como Choachí, Une y Fómeque se ha perdido (Alcaldía Mayor, 2009).

Según el DAPD (2006), esta vía no puede considerarse como eje articulador de desarrollo en la OENU y no puede tener contacto directo con el proyecto, funciona como mecanismo de fortalecimiento de vínculos económicos, comerciales y turísticos entre Bogotá y la región. Los ejes de conexión locales serán regidos por la terminal satélite de transportes y la zona industrial y logística Puerta al Llano. Se advierte que los propósitos de la operación van más allá del desarrollo urbanístico, y pretende crear una nueva centralidad, con la excusa de sacar del aislamiento a la nueva población residente, lo cual confirma el propósito exclusivamente regional de la vía.

La integración regional, impulsaría nuevas fuentes de empleo y comercio popular para los habitantes de la zona a través de la centralidad Puerta al Llano, dado el déficit en el mercado laboral que existe en la localidad. Lo anterior se contradice al establecer un

centro comercial provisionado con comercio y servicios privados que nada aportan a la localidad ni a sus habitantes, (centro comercial Altavista que incluye un almacén Éxito) (Ver anexos K y W).

La vía de acceso principal a la urbanización será la vía a Usme Pueblo, que contendría amplios andenes sin posibilidad de actividades comerciales o de servicios. La vía al Llano y la vía a Usme Pueblo-Sumapaz, representan ejes de crecimiento urbano en la localidad (Alcaldía Mayor, 2009). El déficit de suelos disponibles, la migración masiva y la falta de mecanismos institucionales sigue generando hasta la actualidad la expansión urbana incontrolable en la zona, legitimada incluso por los gobiernos y el POT. Al respecto Agudelo (2012) afirma:

A la mayor densidad de viviendas se suma un incremento de la densidad vial y una explosión de diferentes usos en nodos localizados a lo largo de los ejes viales principales. En este momento, el arreglo del paisaje rural agrario tradicional ha cambiado a un paisaje rural metropolitano (p. 563).

Lo anterior aplica al contexto del paisaje periurbano, y agrega que los factores que favorecen la transformación del paisaje rural agrario a uno rural metropolitano (o en este caso de un paisaje rural a un paisaje periurbano), se encuentran la cercanía al centro de la ciudad y sus equipamientos y servicios, y como esta cercanía aumenta por medio de las vías, que a su vez conectan grandes centros urbanos, puertos y aeropuertos (Agudelo, 2012).

Es así, como el papel de las vías (eventos infraestructurales) en la expansión urbana y en la transformación del paisaje, usualmente ha sido invisibilizado. Las instituciones no se plantean los efectos que estas vías tienen sobre el territorio, además de no contar con la participación de las poblaciones directamente afectadas para la planificación de estas obras. Tampoco se ha realizado este proceso para futuros proyectos como el de la Av. Usminia.

5 Imaginarios y percepciones sobre la IPU de Usme

La participación de las comunidades es uno de los pilares en la toma de decisiones para la construcción de espacios incluyentes. Sin embargo, no siempre las opiniones de los habitantes son tomadas en cuenta, por lo cual las comunidades se han organizado para que se garantice la participación generando resistencias que aúnan esfuerzos para el reconocimiento de la identidad y la defensa del territorio. Los imaginarios (eventos simbólicos) y las percepciones son importantes también en la construcción de ciudad, ya que la calidad de vida va más allá de lo económico: esta trasciende a los sentidos. Es importante aclarar, que, gracias a estas resistencias, los habitantes rurales han adquirido visibilidad.

En las zonas urbanas los movimientos son pocos, aunque cada vez tienen más fuerza. Los habitantes urbanos de la IPU son poco consultados y por ello mismo tienen un conocimiento limitado del territorio. Entonces, ¿qué tienen por decir los habitantes urbanos de la IPU sobre su territorio? En ese sentido la cartografía participativa es una herramienta de reconocimiento y empoderamiento del territorio.

5.1 Resistencias

La organización social en Usme cuenta con diversos grupos comunitarios que buscan el reconocimiento del territorio, la reivindicación de la identidad campesina, el empoderamiento, el reconocimiento y participación de las comunidades, y el diagnóstico adecuado de las necesidades de la población, proponiendo soluciones integrales y alternativas. Entre estas organizaciones, se encuentran la Plataforma Social Usme, conformada por jóvenes; la Mesa de Concertación y priorización campesina; la Mesa de Concertación para la no expansión urbana en Usme; la Unidad Local de Desarrollo Rural; el Comité ganadero, entre otros. Además, los acueductos veredales, se conforman como cohesionadores del tejido social de la población rural y reflejan la eficacia comunitaria ante el abandono del sector institucional.

Así mismo, las Juntas de Acción Comunal de las veredas, han aunado sus esfuerzos por mejorar las vías de comunicación para la distribución óptima de sus productos agrícolas,

fomentar un mercado dinámico de sus productos, promover el aprovechamiento del tiempo por medio de actos culturales y deportivos, gestionar proyectos rurales, recuperar tradiciones agrícolas, e impulsar la educación y el diálogo intergeneracional.

La organización más destacada de la localidad corresponde al Agroparque Los Soches, que se consolida como movimiento contestatario ante las políticas de expansión urbana establecidas por el Acuerdo 6 de 1990, que afectaban directamente a la vereda. Entre los años 1993 y 1995 el Distrito estableció un impuesto que presionaba a los habitantes de esta para que vendieran sus tierras, para lo cual se organizaron y se dirigieron al Concejo de Bogotá, con el fin de obtener la declaración de la vereda Los Soches, como zona rural. Finalmente, el Agroparque, se consolidó como iniciativa comunitaria encaminada a la conservación del ambiente, la reivindicación de la cultura campesina y la sensibilización de los habitantes urbanos de la ciudad por medio de actividades como el agroturismo, economías alternas, entre otros (Blog Agroparque Los Soches).

Las entidades que se han vinculado al Agroparque para el desarrollo de proyectos agrícolas han sido principalmente la Universidad Nacional de Colombia, y agroecológicos con la Corporación Suna Hisca, con la cual además se consolidó el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental para el Agroparque (Melgarejo, 2009)

De esta iniciativa se desprenden otras organizaciones como la Corporación Eclipse, que se enfoca en procesos de educación ambiental dirigido a los jóvenes de la localidad, vinculando luego a las JAC (Juntas de acción Comunal) y a diferentes organizaciones oficiales. La visión de la corporación es integrar las 14 veredas de la localidad en un agroparque (SDP, 2010). El Agroparque también se enfoca en la conservación y recuperación de flora nativa y suelos, y trabajo y fortalecimiento comunitario (Melgarejo, 2009). Otra propuesta es el Comité de mujeres de Los Soches, el cual se orienta a la búsqueda de alternativas productivas para las mujeres (SDP, 2010).

El proceso del Agroparque, se constituye como pionero y referente de trabajo comunitario y participación, en la búsqueda de la reivindicación de la identidad rural, la equidad social y el bienestar ambiental y económico. En alianza con entidades distritales y la Universidad Nacional, se realiza un diagnóstico de la zona. La comunidad propone metodologías que integran diferentes visiones y conocimientos sobre el territorio a partir de espacios de reflexión y debate (Lozano, 2015).

Posteriormente en 2004, con el proyecto Operación Nuevo Usme, que afecta directamente las veredas La Requilina, El Uval, Olarte, El Hato, El Destino y Corinto, la comunidad se organiza en la Mesa de Concertación de Borde Urbano Rural de Usme, exigiendo el derecho a la tierra, a la propiedad, a la vivienda y a la historia, ante la manera impositiva en la que el Distrito y los urbanizadores privados buscan apropiarse de los territorios, desconociendo esos derechos. La propuesta de la Mesa de Concertación es también frenar la expansión urbana, pero a diferencia de la propuesta del Distrito, esta propende por la conservación de los territorios rurales y de protección.

No obstante, la única respuesta que recibió la Mesa ante sus propuestas fue el ingreso de maquinaria para la construcción de la Av. Usminia, provocando la manifestación de la comunidad que se movilizó y bloqueó las vías para que se les escuchara. Inicialmente, los funcionarios enviados por la Alcaldía de Enrique Peñalosa no estaban interesados en negociar con las comunidades. A través de diálogos con Metrovivienda para la realización de un diagnóstico, se permitió acoger a otras organizaciones comunitarias, quienes plantearon una visión sistémica de la representación y apropiación del territorio, a partir del reconocimiento de la historia y la memoria para la preservación del ambiente (Lozano, 2015).

Otro de los logros de la comunidad, fue el descubrimiento del cementerio indígena en la Hacienda El Carmen, pues si no hubiera sido por su acción oportuna, posiblemente se hubiese perdido esta herencia ancestral. El hallazgo generó aún más sentido de pertenencia por el territorio, las raíces y proporcionó un motivo más para la defensa del mismo. Así, se propuso desde la Mesa generar un modelo incluyente y sistémico de todos los elementos culturales, ambientales y socioeconómicos de Usme, el cual pudo, desde el gobierno de Gustavo Petro, ceñirse a su plan de desarrollo y gobierno obteniendo reconocimiento y participación dentro del eje de cambio climático y agua como elemento ordenador del territorio y la reducción de la segregación socio espacial, por medio del modelo concentrado de ciudad (Lozano, 2015).

Este proceso, aportó al fortalecimiento de la Mesa, y generó cohesión social y comunitaria, materialización de propuestas reflejadas en la integración de actores, estrategias pedagógicas y diálogo en pro del reconocimiento de la cultura, el ambiente y la gobernanza. Lo anterior tuvo repercusiones normativas, al expedirse el Decreto 364 de 2013, en el cual se modifican las normas urbanísticas, reduciendo la extensión de la OENU a un solo polígono de los proyectados inicialmente. Esto garantiza la permanencia

de la comunidad rural en el territorio. No obstante, con el Auto CE 624 de 2014, se suspende el decreto citado anteriormente, lo que lleva a las comunidades a manifestarse nuevamente ante el desconocimiento del proceso. Mediante cabildos abiertos, se logró el reconocimiento del hallazgo arqueológico como Área de Conservación Arqueológica Distrital, en el terreno que corresponde al plan parcial Tres Quebradas (Lozano, 2015).

Adicionalmente, existen procesos específicos como la Zona de Reserva Campesina del Sumapaz; la Audiencia Pública Popular Usme enfocada en problemáticas de vivienda, uso del suelo, propiedad de la tierra y la incidencia de la expansión urbana sobre el ambiente; la Asamblea permanente por el cierre del Relleno Sanitario Doña Juana, que busca la compensación por daños ambientales y sociales mediante instalación de equipamientos, asistencia técnica y en salud.

Los movimientos comunitarios, han tomado fuerza creciente y generan vinculación e integración de sectores de la población que hace poco tiempo y por diferentes razones, no estaban presentes por falta de interés o desinformación. Al respecto un líder comunitario rural expresa:

“No podemos nosotros desconocer que existe la institución primaria que son las organizaciones comunitarias; esa es una institución, y esa institución es la que ha hecho más bien, que todas las entidades del gobierno volteen los ojos y cambien un poquito su percepción, su intención y su proyección, para intervenir de una manera más adecuada en las zonas rurales o en las zonas de borde, zonas de conflicto. Yo creo que la primera institución que ha hecho todo el gran trabajo ha sido la Mesa de Concertación referente a la exigencia de cómo se tienen que direccionar los recursos.

[...]

...hoy parece ser que la comunidad urbana está más interesada en la no expansión urbana que la misma comunidad rural, entonces la movilización urbana también ha estado a lado de esto, ya la gente de los barrios dice no a la expansión urbana” (Comunicación personal, mayo 3 de 2017)

Otros movimientos transversales han surgido, como el Proceso Popular Asamblea Sur, orientado a la cuenca del Río Tunjuelo (desde Sumapaz hasta Bosa) y propende por el derecho al agua, al territorio, y al fortalecimiento de políticas públicas en pro del ordenamiento ambiental y la población habitante en la cuenca; y la Mesa Ambiental de los

Cerros Orientales (desde Usaquén hasta Usme) a favor de la defensa de los derechos populares y la conservación ambiental (Mesa de Cerros. Wordpress).

5.2 Imaginarios y percepciones (Eventos simbólicos)

Al ser la Interfase Periurbana de Usme una localidad diversa en cuanto a usos, actores, costumbres, etc., es lógico que los imaginarios también sean diversos, a veces contradictorios, y que existan diferencias claras entre los actores urbanos y los rurales, dadas las diferentes experiencias y relaciones con el territorio. Así: “Resultará relevante, entonces, conocer la relación de los habitantes con los paisajes locales, su percepción, su relación directa con los espacios que cotidianamente ocupan y sus ideas y relación directa con la naturaleza” (Barrera-Lobatón, 2014, p. 35). Lynch (1976) añade: “Si una de las caras de la moneda es el comportamiento real de la gente en un lugar, la otra es la imagen que tienen hacia él, qué significa para ellos”. (p.119). Morín (1996) completa: “Creemos ver la realidad; en realidad vemos lo que el paradigma nos pide ver y ocultamos lo que el paradigma impone no ver” (p. 425)

De acuerdo con lo anterior, las percepciones y perspectivas sobre la IPU son diversas y también dependen de factores como la educación, la influencia de los medios de comunicación, las actividades económicas de las que se depende, el tiempo habitado en el territorio, las posibilidades de recorrerlo, entre otros. Es importante indagar acerca de los problemas, pero también sobre las potencialidades que tiene el territorio desde las percepciones de sus habitantes para identificar los campos de acción y participación con la comunidad, y establecer puentes de comunicación entre la comunidad y las instituciones y, sobre todo, entre la comunidad rural y la urbana, para la consecución de un mutuo reconocimiento y cooperación.

En esta parte, se indagó a líderes comunitarios sobre los diferentes aspectos de la IPU, como el proyecto OENU, la Nueva vía al Llano, minería, aspectos ambientales y sobre sus percepciones¹⁹. Adicionalmente, se realizó un cuestionario para los habitantes urbanos de la localidad.

Los aspectos representativos del paisaje de Usme para los consultados (Anexos AA y AB) se constituyen sobre todo en la cercanía al sector rural y al páramo, y otros elementos constitutivos del sistema ecológico como las quebradas. Asimismo, estos aspectos

¹⁹ Se reservan los nombres de los entrevistados por confidencialidad.

incluyendo la flora y fauna nativas, son los más amenazados por efecto de la contaminación de las aguas, la expansión urbana, la expansión de la frontera agrícola y el mal manejo de los desechos. También consideran que la ruralidad y la vida campesina están seriamente amenazadas. Otro factor que ha observado la comunidad es la incursión de habitantes urbanos que generan focos de inseguridad y consumo de sustancias psicoactivas.

En general, se reconoce que las transformaciones percibidas se deben a efectos interconectados entre sí, como las políticas institucionales y las constructoras privadas, el aumento de la población, el desplazamiento, causantes a su vez de expansión urbana, principal factor transformador del paisaje. Los recuerdos sobre Usme para muchos de los pobladores de la zona (Anexo Y) se remontan a cuando gran parte de la localidad no tenía espacios urbanos completamente definidos, como lo expresa un habitante del sector:

“Hacia Valles de Cafam habían unos potreros... eso era como una especie de vegetación como de páramo, porque en esa época era muy frío aún. Y vivían lagartijas, yo iba de niño a coger animales, especies rarísimas y estaban aquí no más en el barrio. Entonces ahí ya a eso le pusieron unos conjuntos encima y ya sepultaron las lagartijas y todo su ecosistema. Cuando miramos hacia arriba hacia La Flora, arriba de Yomasa, el Curubo, todo esto... cuando uno miraba hacia allá, se veía hermoso, se veía campo, se veían árboles, se veían bosques, se veía cómo la neblina tapaba todo eso... y nada, ya todo eso está arrasado, ya tenemos Bolonia, tenemos lo mismo, conjuntos, tenemos más construcción, más transporte, más gente y las mismas dos calles de siempre”. (Comunicación personal, abril 25 de 2017)

En cuanto a las percepciones sobre la Nueva vía al Llano, están algo divididas. Por un lado, se expresa que la vía se limita a un uso netamente utilitarista, para transporte de materiales y mercancías, pero no aporta un valor realmente social a la localidad y ha generado cambios drásticos en el paisaje, daños ambientales (contaminación por ruido y gases, afectación a flora y fauna, fragmentación en el ecosistema), desplazamiento y despojo en zonas como El Uval, además de limitar los mercados, aumentar el precio de la tierra y generar expansión urbana. Adicionalmente, la vía es un límite claro entre lo urbano y lo rural, que define las formas de habitar y la cultura (Ver Anexo AL).

Desde otra perspectiva, la vía sobresale como eje de conectividad con la región de los Llanos orientales y para los habitantes de la zona urbana, el crecimiento les ha beneficiado en cuanto al aspecto económico, ya que pueden depender del comercio en los barrios nacientes, y ha facilitado el acceso al transporte público a las personas de las veredas. También se reconoce la Presa de Cantarrana como un aspecto positivo.

Respecto al proyecto OENU, este ha generado desplazamiento y desconocimiento de las condiciones de los campesinos, trasladando a estos de sus tierras a un pequeño apartamento, lo cual va en detrimento de su identidad rural y sustento económico. Por parte de los habitantes urbanos, existe información muy vaga (basada en rumores) o desconocida acerca de este proyecto. Otro aspecto crítico respecto a los proyectos urbanísticos es el deterioro ambiental que comienza mucho antes de emplazarlos:

“...un ejemplo es lo que ha pasado con el parque Entrenubes, que mientras las comunidades que estamos ahí pues hemos intentado recuperar frailejones, recuperar especies que les llamamos “llamadores de agua”, pues en el proyecto Bolonia, lo que han hecho es arrasar con todas estas especies nativas y conservar especies nocivas como el pino y el eucalipto para usarlos como recurso maderable. También para preparar el suelo para que el suelo se erosione, se seque, y cuando ya no hay especies nativas por recuperar pues pueden legalmente urbanizar” (Líder comunitario. Comunicación personal, abril 25 de 2017)

Adicionalmente, las consecuencias sociales de los proyectos urbanísticos, generan intranquilidad ya que los habitantes que no están dispuestos a vender e irse de sus tierras, viven temerosos de las represalias que el Distrito tome frente a esa decisión, además de la descapitalización que les genera, ya que sus predios se encuentran con derechos de preferencia para el Distrito, es decir, no hay posibilidad de venderlos a terceros, ni solicitar préstamos o créditos que estén respaldados por dicha propiedad.

Las actividades mineras tienen mayor presencia en el sector urbano, sin embargo, ya hacen parte de la cotidianidad de las personas, del paisaje rutinario:

“La visión es que no hay visión. La visión es que eso está ahí, y es una cotidianidad que está todos los días y ya no lo vemos, eso se vuelve invisible. Entonces...uno se puede

subir aquí arriba a esta rampa aquí arriba del colegio, y allí en la montaña, detrás de este bosque y ya tú ves la montaña pelada y encima la máquina, sáquele... ¡las máquinas! es una cosa habitual, cotidiana e invisible que ya nadie ve. ... O sea, la gente vive en su cotidianidad, pero no se problematiza qué es lo que están viendo sus ojos, y lo que ven todos los días. Entonces va uno a trabajar con los chicos y les dice:

-Bueno, ¿qué opinan de la extracción de ladrillo?

- ¿Cuál extracción de ladrillo?

-Pues aquí a dos cuadras hay una ladrillera...

-Ah sí, pero no, normal, esa es la fábrica y listo.

Entonces no hay un análisis del impacto de lo que ven nuestros ojos, no estamos viendo. La gente no tiene conciencia". (Habitante del sector. Comunicación personal, abril 25 de 2017)

A pesar del movimiento creciente de las comunidades, los líderes manifiestan que las actividades de concienciación y movilización son complicadas de llevar a cabo porque no hay facilidades para recorrer y conocer el territorio, por ejemplo, con los estudiantes. Sin embargo, existen varios grupos comunitarios que promueven el cuidado ambiental, aunque son poco conocidos, sobre todo en el ámbito urbano. Algunos de estos grupos tienden a ser esporádicos y fugaces dadas las necesidades de trabajar o estudiar para los jóvenes que los lideran desde el ámbito urbano. Los grupos provenientes del sector rural son más perseverantes y han persistido por la necesidad de conservar su calidad de vida sujeta directamente al entorno ecológico en el cual viven.

Los habitantes rurales tienen poca confianza en las instituciones porque no se sienten incluidos en los procesos de planificación, además consideran que las entidades están muy fragmentadas, no invierten eficazmente los recursos, no tienen una visión real de la ruralidad, y se considera que no ha realizado una gestión pertinente ni consecuente en el área rural. También opinan que la regulación de las normas y programas ambientales no son efectivas, ya que no hay control por parte de las instituciones que las promueven. Otras de las preocupaciones son la minería, los sistemas productivos insostenibles y por otro lado la pérdida de su cultura campesina (Metrovivienda, 2011).

Sin embargo, se reconoce el papel de la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Económico, en sus esfuerzos por generar participación de la población rural

con programas de asistencia técnica, investigación y concienciación ambiental. Por otro lado, la Secretaría de Cultura jugó un papel importante en cuanto al hallazgo arqueológico y la reivindicación y reconocimiento de la cultura campesina de Usme. Por último, la Secretaría de Planeación Distrital, se ha esforzado por realizar diagnósticos de la zona y se ha prestado al diálogo con las comunidades.

No obstante, los campesinos muchas veces temen el despojo de sus tierras, incluso temen por su vida, lo cual genera que estas comunidades desistan de exigir sus derechos por miedo. Aquí surge un nuevo actor que los diagnósticos no han nombrado y son los actores armados contratados para adquirir territorios en caso de que las medidas “legales” no sean efectivas. Sin embargo, en la zona de la OENU, a pesar de las estrategias coercitivas que ha empleado el Distrito, no se han manifestado por medio de actores armados y en cierta forma ha habido diálogo. No obstante, se manifiesta que la actual administración (Enrique Peñalosa), ha desconocido los acuerdos previos con las comunidades establecidos en la administración anterior.

En cuanto a percepciones sobre la calidad de vida, economía, e institucionalidad, el Diagnóstico de las Áreas Rurales (SDP, 2010), determina que la mayoría de los habitantes de la zona rural se sienten satisfechos con su vida, en cuanto a necesidades básicas. No obstante, se refleja un descontento generalizado respecto a lo económico, pues consideran que las actividades agrícolas no son rentables, y los mercados, el acceso a créditos y opciones laborales son limitados. También manifiestan que no existe un contexto favorable para el progreso de las veredas.

La calidad de vida se relaciona usualmente con lo económico y la satisfacción de las necesidades básicas. No obstante, para los habitantes rurales las negociaciones sobre su territorio no solo se basan en aspectos económicos o de subsistencia, al sustento y el acceso a servicios dignos, también mencionan aspectos de calidad de vida, factores subjetivos que incluyen, por ejemplo, la tranquilidad, el aire puro, la distancia considerable del caos de la ciudad, entre otros, que se consolidan como elementos no cuantificables que forman parte importante de su arraigo con el territorio. Estos factores están relacionados con la calidad sensible: “La calidad sensible se refiere a la apariencia, al sonido, al olor y a las impresiones que produce un lugar” (Lynch, 1976 p. 16) y a cómo esta, influye en el bienestar, las acciones, los sentimientos y la comprensión (Lynch, 1976).

Estos elementos están presentes también en las comunidades urbanas que dependen de actividades citadinas, pero reconocen la importancia de los aspectos ambientales para su calidad de vida. En general los consultados afirman que el paisaje y la cercanía del espacio rural son los rasgos de la localidad que más les gustan, ya que se facilita el desplazamiento hasta esas zonas para realizar actividades deportivas, recorridos y esparcimiento en general. Las personas padecen menores niveles de estrés, la calidad del aire es mejor, hay sensación de tranquilidad sobre todo cerca y dentro de la zona rural. Se reconoce la afinidad y conexión con el páramo de Sumapaz, el paisaje de montaña y la abundancia de fuentes de agua como elementos representativos de la zona.

Otro aspecto de la calidad sensible es la posibilidad de contemplar el paisaje:

Tales vistas con frecuencia son consideradas como uno de los rasgos más característicos y apreciados de una región [...] Los panoramas particulares pueden tener un profundo significado simbólico [...] También se puede hacer referencia a la fisiología del ojo que “descansa” con paisajes distantes, y a las satisfacciones psicológicas dadas por la orientación, la identidad y los panoramas completos (Lynch, 1976, p 186).

El paisaje de Usme por sus diferentes unidades ecológicas y geomorfológicas ofrece además de las cualidades ambientales ya descritas, la posibilidad de visibilizar un paisaje que genera sensaciones de tranquilidad y sosiego:

“... además hace un buen vivir a la gente cuando sale y hace contemplación. No solamente ver los árboles o decir que tenemos muchos árboles, significan que coayudan a una mejor vida. Si Ud. tiene una disponibilidad de territorio para hacer observación, sobre todo la gente de la ciudad eso le va a generar una calidad de vida. Mucha gente sale solo a darse un paseo porque es que es tan chévere esto y no es tan lleno de carros, ni de gente, ni nada. Si eso lo sabemos aprovechar estaremos generando una mejor calidad de vida” (Líder comunitario, comunicación personal, mayo 3 de 2017)

Lo simbólico e histórico juega un papel muy importante en cuanto al reconocimiento del pasado precolombino, y la herencia ancestral inherente al territorio, lo cual se ha reforzado con el hallazgo arqueológico, que ha permitido revalorar las raíces indígenas y

el patrimonio cultural. Igualmente se reconocen la diversidad cultural y los valores campesinos como elementos constitutivos del paisaje. Al respecto Lynch (1976) explica:

La calidad sensible está claramente asociada a la historia de un lugar. El carácter de lugar es el resultado de su evolución política y una manera de encontrar cómo conservar o realzar ese carácter es averiguando cómo llegó a ser así y qué fuerzas históricas aún lo siguen sosteniendo (p. 80)

El carácter histórico de Usme es un factor subjetivo de identidad y pertenencia con la localidad. No solo la historia ancestral, también lo han sido los procesos comunitarios que han configurado los espacios existentes, como los barrios y veredas de la localidad.

La calidad sensible es de gran importancia para la planificación, ya que, si bien no son aspectos medibles, contribuyen a la calidad de vida de las personas, garantizando el derecho a vivir en un ambiente sano. Lynch (1976) lo explica de la siguiente manera:

A menudo se descuida la calidad sensible cuando se toman decisiones públicas porque se piensa que es “subjetiva” y demasiado variable para aceptar formulaciones comunes, en contraste con patrones de salud, seguridad y costo firmemente sustentados. Si bien es cierto que la calidad sensible es subjetiva en tanto se ocupa de la manera como la gente percibe y siente, también hay que reconocer que la mayoría de los patrones de cualquier importancia también son subjetivos: los bienes materiales calificados como necesarios para el bienestar, el riesgo de muerte o accidente considerado razonable, el grado de tensión mental que puede soportar, etc. La razón que le confiere “objetividad” a estos patrones es el hecho de estar tan explícitamente codificados (p. 78)

El taller de cartografía participativa (Anexo AC) se planteó con la comunidad urbana y líderes del Barrio el Progreso, UPZ Alfonso López, de la localidad de Usme, cercano a la vía al Llano y a la zona rural. Se formaron cuatro grupos: dos conformados por adultos y dos por niños. Uno de los grupos conformados por adultos realizó una representación gráfica de la zona rememorando la época de arribo al barrio (Anexo AH). El otro grupo elaboró una representación gráfica sobre las afectaciones ambientales actuales. Al final ambos grupos hicieron consensos sobre sus mapas y elaboraron una representación conjunta, sobre las perspectivas o condiciones deseables de la localidad a futuro. Los

grupos de niños realizaron representaciones sobre lo que conocen de la localidad (Anexo AD).

Como se observa en el Anexo AH el primer mapa resultante, giró en torno a la conformación de los barrios, representada con áreas de loteo y casas autoconstruidas, lo cual refleja el constante crecimiento urbano de la localidad.

En el segundo mapa (Anexo AI), se identificaron varias de las problemáticas actuales, como la contaminación por basuras en quebradas y calles (producto de la poca conciencia de los habitantes del barrio), la extracción de suelo (tierra negra), tala y la construcción de barrios de invasión en cercanía al Parque Entrenubes.

La tercera representación se basó en palabras que constituyen la visión ideal representada en las necesidades que tiene la localidad, entre ellas: educación, calidad de vida, justicia social, paz, salud, igualdad, sentido de pertenencia, oportunidades y conciencia social (Anexo AJ). Las representaciones que realizaron los niños reflejaron lo que conocen de su barrio, mostrando principalmente la escuela, los parques y la iglesia, espacios que identifican como propios e identitarios. Esto evidencia del reconocimiento del barrio como el lugar donde se vive y se convive con los demás. Se tiene arraigo con sus lugares representativos donde confluyen las relaciones comunitarias (Anexos AF y AG).

De acuerdo con Lynch (1976), se menciona que “La estructura del paisaje real puede ser comparada entonces con esas estructuras mentales, para ver el grado en que aquella es usada, ignorada o distorsionada” (p.120). Así, se logra identificar en las representaciones que lo rural es poco o nada conocido para la comunidad urbana, sobre todo entre los niños, que representaron su entorno inmediato, el de la cotidianidad de su barrio. En la representación del pasado, también estuvo ausente este aspecto, a pesar del que los límites eran más difusos y el carácter rural era más evidente en esos años, a comparación del momento actual. Esto se reflejaba también en los equipamientos de la época, por ejemplo, el actual IED Estanislao Zuleta sede B, el cual tenía por nombre Escuela Distrital Rural “La Alborada”. A pesar de este desconocimiento u olvido de lo rural, el sentido de pertenencia hacia el barrio y sus lugares es notable (Ver anexos AD y AE).

Por lo anterior, es urgente realizar actividades que integren las comunidades rurales y urbanas, en las que exista diálogo de saberes, y se implementen actividades de concienciación y educación ambiental.

Es importante tener en cuenta este tipo de instrumentos orientados hacia una planificación participativa que se materialice en acciones colectivas:

El concepto global de imágenes ambientales parece hasta ahora haber tenido más incidencia sobre la investigación que sobre la acción. No obstante, estoy convencido de que los estudios de las imágenes que la gente tiene son un elemento tan esencial en la planeación de su ambiente, como son los estudios sobre su actuación real en un lugar (Lynch, 1976, p.178)

Así, las representaciones e imaginarios deben tener grandes repercusiones en los procesos de planificación, y en la identificación de necesidades, responsabilidades institucionales y corresponsabilidades de la comunidad.

A partir de los instrumentos de entrevista, cuestionario y la cartografía participativa, la comunidad de la localidad, también plantea posibles acciones que se podrían llevar a cabo para la solución o atenuación de algunas de las problemáticas de la IPU de Usme.

En general, la comunidad solicita campañas de sensibilización y educación ambiental. También solicitan acciones y control desde lo institucional, respecto al cuidado del ambiente, generando acciones concretas para frenar la expansión urbana y cerrar el Relleno Sanitario Doña Juana. Estas acciones, o las que se tomen respecto al territorio, deben ser concertadas con las comunidades. Así mismo, se propone promover proyectos autosostenibles y turismo rural. Adicionalmente, se solicita una integración más activa por parte de la comunidad académica, para que además de los proyectos autosostenibles, se estimule la investigación en diversos temas en la localidad, como cultura, educación ambiental, economía y a su vez, la formación de las comunidades en los mismos temas, enfocándolos en centros de aprendizaje comunitario donde el diálogo de saberes sea constante, y se rescaten las técnicas y el saber hacer campesinas.

La visión que prima en la IPU es la de implementar economías solidarias, mercados alternativos autosostenibles compatibles con el entorno ecológico. Así, lo que se plantea

es generar estrategias de turismo rural, huertas urbanas, investigación, entre otros. La visión general de la comunidad es una proyección ambientalmente sostenible de la localidad. Al respecto, uno de los líderes comunitarios comenta algunas de las propuestas que ya están en marcha en la localidad:

“Desde hace años se ha venido construyendo con las comunidades algo que le llamamos planes de vida y ecobarrios que son orientados a defender esa economía campesina, recuperar el medio ambiente y a que nuestros barrios no pierdan las características ambientales que han tenido por el hecho de urbanizar y estamos buscando la manera de desarrollar estos ecobarrios en la práctica. [...] nos hemos reunido alrededor de los pactos de vida, que prácticamente es un plan de desarrollo del territorio, del barrio en el que se asamblea la comunidad y pues ellos toman decisiones para digamos acceder a energías renovables o hacer prácticas agrícolas, o plantear un desarrollo territorial armónico con el medio ambiente. Esa es una de nuestras formas de posicionar el derecho de vivir ahí sin afectar el medio ambiente”. (Líder comunitario, comunicación personal, abril 25 de 2017)

Propuestas y planes provenientes desde las comunidades, como las descritas en el párrafo anterior, se constituyen en un gran avance para las comunidades en el reconocimiento y cuidado de su entorno. Lo ideal es implementarlos y extenderlos al resto de la localidad e incluirlos en la planificación o mejora de los barrios y las veredas de la localidad.

6 Conclusiones y recomendaciones

6.1 Conclusiones

La complejidad es inherente a la IPU. Existe un reconocimiento de la IPU desde las instituciones desde el concepto de Franjas Urbano rurales, pero no es suficiente si las políticas no son eficaces y consecuentes con las dinámicas de la IPU.

Las políticas han generado expansión acelerada de la frontera urbana y ha dejado a Usme a la deriva de las decisiones de privados e instituciones coartando la participación de las comunidades. A pesar de las políticas enfocadas a lo ambiental, a bordes y al cuidado de la EEP, la desarticulación entre instituciones y políticas causa desregulación y

relegación de dichas estructuras. Adicionalmente, los objetivos de las políticas, planes y proyectos urbanísticos no son consecuentes con el entorno ambiental y social de la zona. La comunidad reclama participación en la toma de decisiones ya que las políticas también ejercen cambios en la manera de habitar y percibir el territorio. Uno de los objetivos es integrar a las comunidades al proyecto en el marco de una planificación conjunta, no obstante, acciones concretas al respecto se llevaron a cabo únicamente, en la administración de Gustavo Petro.

Desde los entes institucionales se margina el carácter caótico de la urbanización informal en el imaginario, antagónica a los proyectos “planificados”. No obstante, estos proyectos tienen las mismas consecuencias nefastas de la urbanización informal. Es ahí donde se cuestiona la relación de las políticas ambientales y de vivienda en relación con las necesidades, la toma de decisiones y la participación de las comunidades que habitan el territorio. De esta manera, la normativa hace mención enfática e insistente en que se deben frenar este tipo de desarrollos urbanísticos informales, desconociendo los eventos simbólicos resultantes de dichos procesos, como por ejemplo la cohesión social y la identidad de las comunidades.

De acuerdo con la percepción de las personas, la expansión urbana es el factor más influyente y causante de deterioro de la IPU. Adicionalmente, la migración por desplazamiento sigue siendo un factor trascendental en el crecimiento urbano de la localidad.

En el campo de los riesgos naturales las políticas dejan mucho que desear, puesto que los planes se contradicen a sí mismos en este aspecto: por ejemplo, el POT propone no construir en zonas de riesgo ni en las riberas de los ríos, pero los Planes Parciales están diseñados para emplazar vivienda formal en estas zonas. La tendencia en todas las escalas institucionales respecto a los riesgos es la de reparar y mitigar y no la de planificar. Tal como sucede con los riesgos y amenazas “naturales”, sucede en la planificación.

La integración a la ciudad de los habitantes actuales y futuros de Usme, que se pretende mediante estos planes no garantiza una verdadera integración, desconociendo aspectos que influyen en la calidad de vida de las personas como el derecho al ambiente sano y a

la vivienda digna (que no se limita al hecho de poseer una casa), se orienta también a tener una buena calidad de vida, que el transporte y los servicios se ajusten a diferentes necesidades (para las personas discapacitadas por ejemplo), que los mercados integren a la comunidad campesina, etc.

La Interfase Periurbana solo es contemplada como despensa de material, como contenedora de los pasivos ambientales de la ciudad o como proveedora de vivienda para la población pobre, pero no es visibilizada como elemento histórico, cultural y ambiental en la configuración del territorio.

Gran parte de los actores urbanos desconocen los procesos de la localidad y la coexistencia con la zona rural. Esto se ve reflejado en el rompimiento de la cohesión social y la falta de comunicación entre las comunidades por lo cual los movimientos en el sector urbano son frágiles. Así mismo, los procesos de concienciación son difíciles de implementar, por la influencia de patrones de consumo, medios de comunicación y la falta de tiempo, ya que priman las actividades laborales. Sin embargo, el interés en la participación por parte del sector urbano es creciente.

Se ha generado dependencia de las instituciones, por tanto, se debe abordar un diálogo de responsabilidades y corresponsabilidades entre estas y las comunidades. Por otro lado, los proyectos a veces no funcionan ya que la academia o instituciones imponen sus formas de hacer y no tienen en cuenta las técnicas y saberes campesinos, ante lo cual estos últimos desisten por falta de los recursos que las técnicas de la academia exigen.

Por otro lado, es difícil adaptar a las personas a nuevas formas de construcción, o alternativas sostenibles de consumo, reciclaje, etc., lo cual puede ser causa y consecuencia de la falta de identidad con el territorio. También se evidencian posiciones encontradas, en cuanto a los beneficios o perjuicios de la infraestructura establecida y proyectada, al desconocer procesos históricos o ambientales de la localidad.

Ante el proyecto OENU, surgen algunos interrogantes: ¿Por qué no reubicar a los habitantes de los barrios informales dentro del proyecto? ¿Para qué seguir atrayendo más población que aumentaría expansión urbana ocasionado efectos negativos sobre el entorno? ¿Por qué no se aplican todos recursos y planes a la mejora de barrios y sectores que ya están constituidos? (por ejemplo, intensificando la agricultura urbana y el

fortalecimiento de los equipamientos existentes, o generando fuentes de empleo alternativas que disminuyan las actividades mineras).

6.2. Recomendaciones

La planificación de infraestructura y equipamientos, programas y proyectos debe contar siempre con la participación de la comunidad. Así mismo, es importante la perspectiva del pensamiento complejo y la calidad sensible. Esta debe propender por economías sostenibles que involucren a los habitantes urbanos y rurales fomentando un ambientalismo que sea rentable para las personas del común, que les permita no solo subsistir, sino mejorar su calidad de vida.

Es urgente buscar mecanismos de corresponsabilidad desde la misma comunidad que generen integración y diálogo entre las comunidades rurales y urbanas, que fortalezcan el intercambio de saberes materializándolo en acciones conjuntas y alternativas para el mejoramiento de la vivienda, la preservación ambiental, la reivindicación de la identidad, el reconocimiento del territorio y sus dinámicas, integrando a los diferentes actores y habitantes de la localidad. Asimismo, es necesario difundir las acciones de los grupos comunitarios existentes para que obtengan mayor alcance y reconocimiento entre la comunidad.

Desde la academia y las instituciones, es importante que los estudios medioambientales incluyan los riesgos naturales y antrópicos los cuales a pesar de la normatividad (Decreto 1809 de 2014) no han recibido la debida atención y relevancia que requieren. La aplicación de este decreto generaría grandes aportes en la disminución de la segregación para las comunidades más pobres que suelen ocupar los terrenos susceptibles a este tipo de fenómenos.

7 Referencias bibliográficas

Acto Legislativo número 1 de 1945 (febrero 6) Reformatorio de la Constitución Nacional
Recuperado de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13470>
Consultado diciembre 15 de 2017.

Acuerdo 2 de 1997 (enero 16) por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Físico del Borde Suroriental de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., se establecen las normas urbanísticas y las medidas para la preservación, protección y adecuado uso de las áreas que conforman dichos sistemas y se dictan otras disposiciones. Recuperado de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=610>. Consultado enero 15 de 2017.

Acuerdo 6 de 1990 (mayo 8) por medio del cual se adopta el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá, y se dictan otras disposiciones. Recuperado de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=540>
Consultado enero 16 de 2017.

Acuerdo 26 de 1972 (diciembre 9) por el cual se crean unas Alcaldes Menores, se reglamenta su funcionamiento y se autoriza al Alcalde Mayor para delegar unas funciones. <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2028>

Acuerdo 7 de 1979 (noviembre 20): Plan General de Desarrollo integrado y se adoptan políticas y normas sobre el uso de la tierra en el Distrito Especial de Bogotá Recuperado de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=902> Consultado enero 15 de 2017.

Acuerdo 26 de 1996 (mayo 8) por medio del cual se adopta el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá, y se dictan otras disposiciones. Recuperado de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=540>
Consultado Enero 30 de 2017.

Acuerdo 31 de 1996 (diciembre 10) por el cual se adopta el plan de ordenamiento físico del borde norte y nororiental de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., se establecen las normas urbanísticas y las medidas para la preservación, protección y adecuación uso de las áreas que conforman dichos sistemas y se dictan otras disposiciones. Recuperado de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2087> Consultado Enero 27 de 2017.

Agudelo Patiño, L. C. (2012). Ruralidad metropolitana. Entre la tradición rural y el «brillo» urbano. Una interpretación. *Bulletin de l'Institut français d'études andines*, (41 (3)), 555-571.

Aguilar, A. G., y Escamilla, I. (2011). Introducción. En Periurbanización y sustentabilidad en grandes ciudades (pp 5 - 23) UNAM.

Agroparque Los Soches Recuperado de: <http://soches.blogspot.com.co/p/descripcion.html>. Consultado: 1 de abril de 2017

Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía Local de Usme (2013). Plan Ambiental Local -PAL-.

Alcaldía Mayor de Bogotá, DAMA, Universidad Nacional de Colombia Instituto De Estudios Ambientales – IDEA (1994) Agenda local ambiental localidad 5, Usme.

Alcaldía Mayor De Bogotá. Secretaría de Ambiente. Universidad Nacional de Colombia. (2007).Capítulo 9 Actividades conflictivas. En: Plan de Manejo y Ordenamiento de Cuencas - Río Tunjuelo.

Alcaldía Mayor de Bogotá, UN Hábitat, Universidad Nacional de Colombia Instituto De Estudios Ambientales – IDEA. (2009) Agenda ambiental Localidad 5 Usme. Recuperado de: http://oab2.ambientebogota.gov.co/apc-aa-files/a65cd60a57804f3f1d35afb36cfcf958/5_AA_Usme_1.pdf. Consultado febrero 2 de 2017

Allen, A. (2003a). Environmental planning and management of the peri-urban interface: perspectives on an emerging field. *Environment and urbanization*, 15(1), 135-148.

Allen, A., Da Silva, N., & Corubolo, E. (1999). Environmental problems and opportunities of the peri-urban interface and their impact upon the poor.

Allen, A. (2003b) "La interfase periurbana como escenario de cambio y acción hacia la sustentabilidad del desarrollo". *CDC* [online]., vol.20, n.53 pp. 7-21. Disponible en: <http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082003000200002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1012-2508.

Allen, A. (2010). Neither rural nor urban: service delivery options that work for the peri-urban poor. In *Peri-urban Water and Sanitation Services* (pp. 27-61). Springer Netherlands.

Auto 624 de 2014 Consejo de Estado. Recuperado de: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=570740>. Consultado Abril 23 de 2017.

Ballén-Velásquez, L. M. (2014). "Desbordando" la categoría de borde. Reflexiones desde la experiencia bogotana. *Bitácora Urbano Territorial*, 2(24).

Barrera Lobatón, S. (2014) Consideraciones teóricas para el análisis del paisaje: la metodología de los eventos relacionales. En Barrera, S., Monroy, J., (Ed.), *Perspectivas sobre el paisaje*. (pp. 29 – 54) Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Barros, C. (2000). Reflexiones sobre la relación entre lugar y comunidad. *Documents d'analisi geografica*, (37), 0081-94.

Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Embalse de Chisacá. Recuperado de: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/colecciones-especiales/embalse-chisaca>

Blanco, J. (2007) Espacio y territorio: elementos teórico-conceptuales implicados en el análisis geográfico. En: Fernández Caso, M. V. & Gurevich, R. *Geografía. Nuevos temas, nuevas preguntas. Un temario para su enseñanza*. (p. 37-64) Buenos Aires: Biblos.

Blog Campesinos de Usme (2010) Recuperado de: http://campesinosdeUsme.blogspot.com.co/2010_12_01_archive.html Consultado: 2 de abril de 2017

Bonnal, P., Bosc, P. M., Díaz, J. M., & Losch, B. (2003). Multifuncionalidad de la agricultura y nueva ruralidad. Reestructuración de las políticas públicas a la hora de la

globalización. *Ponencia presentada en el Seminario Internacional El Mundo Rural: Transformaciones y Perspectivas a la luz de la Nueva Ruralidad. Universidad Javeriana.*

Capra, F. (1996) La emergencia del pensamiento sistémico. En *La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos.* (pp. 37- 89) Barcelona: Anagrama

Cardoso, M. M., & Fritschy, B. A. (2012). Revisión de la definición del espacio rururbano y sus criterios de delimitación. *Contribuciones Científicas, GAEA: Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, Buenos Aires, 27-39.*

Castaño Uribe, C. (2004). Vías, bosques y conflicto social en Colombia. *Guerra, sociedad y medio ambiente. Bogota: Foro Nacional Ambiental, 397-454.*

Colectivo Antorcha Libertaria (2010) Recuperado de: <http://antorchalibertaria.blogspot.com.co/2010/08/la-ciudadela-nuevo-Usme-vivienda-digna.html> Consultado: 2 de abril de 2017

Contraloría de Bogotá (2012) Informe final de visita fiscal. Seguimiento a los cronogramas de actividades de la Operación Estratégica Nuevo Usme. Recuperado de http://www.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/AuditoriaGubernamental/Control_Urbano/PAD_2012/CicloIII/Operacion%20estrategica%20Nuevo%20Usme.pdf Consultado 30 de abril de 2017

Dávila, J. D. (2003). Enfoques de intervención en la interfase periurbana. Publicado en Cuadernos del CENDES, No. 53, mayo-agosto 2003, pp. 17-32. ISSN 1012-2508

Decreto 190 de 2004 (Junio 22) Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 Recuperado de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935> Consultado Enero 20 de 2017.

Decreto 252 de 2007 (junio 21) Por medio del cual se adopta la Operación Estratégica Nuevo Usme - Eje de integración Llanos y el Plan de Ordenamiento Zonal de Usme. Recuperado de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25478> Consultado enero 20 de 2017.

Decreto 320 de 1992 (mayo 29) por el cual se adopta el plan de ordenamiento físico del Borde Oriental, suroriental, suroccidental y las zonas de Preservación del Cerro de Suba Norte y Sur, del Cerro de la Conejera, los Sistemas Orográfico e Hídrico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C.; se establecen las normas para la preservación, protección y adecuado uso de las áreas que conforman los sistemas y se dictan otras disposiciones. Recuperado de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2106> Consultado enero 19 de 2017.

Decreto 364 de 2013 (agosto 26) Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C., adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004. Recuperado de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55073> Consultado febrero 14 de 2017.

Decreto 619 de 2000 (Julio 28) Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital. Recuperado de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769> Consultado febrero 14 de 2017.

Decreto 3640 de 1954 (diciembre 17) Por el cual se organiza el Distrito Especial de Bogotá. <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1563> Recuperado de Consultado enero 20 de 2017.

Dematteis, G. (1996). Suburbanización y periurbanización. Ciudades anglosajonas y ciudades latinas. Perspectivas geográfico-urbanísticas. *Actas de “La ciudad dispersa. Suburbanización y nuevas periferias”.* Barcelona, febrero-abril. [www. cccb.es/atlas/debate/ciudadispersa](http://www.cccb.es/atlas/debate/ciudadispersa).

Departamento Administrativo de Planeación Distrital DAPD. Alcaldía Mayor de Bogotá (2006) Plan de ordenamiento zonal operación estratégica nuevo Usme - Eje de integración Llanos. Un modelo integral de gestión del suelo para el distrito capital y la región. Documento técnico de soporte. Informe final – Contrato PNUD 509 – 2004- Gerencia Operación Nuevo Usme. Ajustado y actualizado Mayo a diciembre 2006 – Consultoría 278 de 2006 – Gabriela Niño Sicard. Recuperado de: <http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Operaciones>

Estrategicas/PLANES%20%20ZONALES/PLAN%20DE%20ORDENAMIENTO%20ZONAL%20USME/POZUSMU/DTS%20DOCUMENTO%20T_311POZ%20USME.pdf
Consultado febrero 16 de 2017.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE Censo de Población de 1951. Departamento de Cundinamarca. Recuperado de: ftp://ftp.colombiastad.gov.co/books/LD_809_1951_V_1.pdf Consultado: Abril 10 de 2017

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Censo de Población 9 de mayo de 1951. Decreto ley 1905 de 1954. ftp://ftp.colombiastad.gov.co/books/LB_896_1951.pdf Consultado 15 septiembre de 2017.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Evolución de la población 1985-2005, Bogotá D.C. Población ajustada de Bogotá D.C. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/ecvb/1.xls Consultado: abril 10 de 2017

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. XIII Censo Nacional de población y II de edificios y viviendas. Julio 15 de 1964. Bogotá D.E. ftp://ftp.colombiastad.gov.co/books/LB_808_1964.pdf Consultado 15 septiembre de 2017.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Población del país según el censo 1964. <ftp://ftp.colombiastad.gov.co/books/> Consultado 15 septiembre de 2017.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. División político administrativa de Colombia. Julio de 1985. ftp://ftp.colombiastad.gov.co/books/LD_4360_1985_EJ_4.PDF Consultado 15 septiembre de 2017.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Edición de información por localidades de Santa Fe de Bogotá Censo 1993. <ftp://ftp.colombiastad.gov.co/books/> Consultado 15 septiembre de 2017.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Sistema de Consulta de Información Estadística (REDATAM) <http://systema59.dane.gov.co/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN=WebServerMain.inl> Consultado: 10 de abril de 2017

Departamento Nacional de Planeación DNP (1993) Carretera Bogotá – Villavicencio. Documento MINTRANSPORTE – DNP- 2654-UIINF-DITRAN. Santafé de Bogotá, D.C., abril 29 de 1993. Recuperado de: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/CONPES/Econ%C3%B3micos/2654.pdf> Consultado: 11 de marzo de 2017

Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA, Corporación Suna Hisca (2003) Plan de Ordenamiento y Manejo – Poma Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes. Recuperado de: <http://oab.ambientebogota.gov.co/es/con-la-comunidad/ES/iii-br-plan-de-ordenamiento-y-manejo-poma-br-parque-ecologico-distrital-de-montana-entrenubes-br> Consultado: 20 de marzo de 2017

Díaz, M. E. C. (2005). La anexión de los 6 municipios vecinos a BOGOTÁ en 1954" un hecho con antecedentes". *Bitácora Urbano Territorial*, 1(9), 122.

Díaz, M. E. C. (2006). *La anexión de los 6 municipios vecinos a Bogotá en 1954*. Universidad Nacional de Colombia.

Entrena Durán, F. (2004). Los límites difusos de los territorios periurbanos: una propuesta metodológica para el análisis de su situación socioeconómica y procesos de cambio. *Sociologías*, 61(11), 28-63.

Entrena Durán, F. (2005). Procesos de periurbanización y cambios en los modelos de ciudad. *Papers: revista de sociología*, (78), 0059-88.

Fernández, E. (2008) "La sociedad rural y la nueva ruralidad" en El campo uruguayo. Cap. 3. Recuperado de: http://www.fagro.edu.uy/~ccss1/Libro_El%20campo%20uruguayo/03-La%20sociedad%20rural%20y%20la%20nueva%20ruralidad.pdf Consultado 5 de abril de 2017.

Ferrando Acuña, F. (2008). "*Santiago de Chile: antecedentes demográficos, expansión urbana y conflictos*". En: Revista de Urbanismo, N°18, Santiago de Chile, publicación electrónica editada por el Departamento de Urbanismo, F.A.U. de la Universidad de Chile, junio de 2008, I.S.S.N. 0717-5051. Recuperado de: <http://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/viewFile/249/211>

Frolova, M., Bertrand, G. (2006) Geografía y paisaje. En Lindón, A., Bertrand, G., & Hiernaux, D. (2006). *Tratado de geografía humana* (pp. 254-268) Anthropos Editorial.

Gómez, S. (2013). ¿Nueva ruralidad? Un aporte al debate. *Estudios Sociedade e Agricultura*, 1.

González-Plazas, J. L. (2009). Estado actual de la periurbanización y el hábitat periurbano en Manizales (Colombia). *Cuadernos de Vivienda y Urbanismo*, 2(3), 92-123.

González Urruela, E. (1987) *La evolución de los estudios sobre áreas periurbanas Anales de Geografía de la Universidad Complutense. Núm. 7. EJ. Univ. Complutense.*

Google Earth (2017) Mapa de Usme (Bogotá, Colombia) en Google Earth. Recuperado el 3 de abril de 2017.

Hernández-Gómez, A., Rojas-Robles, R., & Sánchez-Calderón, F. V. (2013). Cambios en el uso del suelo asociados a la expansión urbana y la planeación en el corregimiento de Pasquilla, zona rural de Bogotá (Colombia). *Cuadernos de Geografía*, 22(2), 257.

Instituto de Desarrollo Urbano. IDU. Autopista al Llano IDU. http://www.idu.gov.co/web/guest/construcciones_obras_llano Consultado: marzo 20 de 2015

Instituto de Desarrollo Urbano. IDU. *BOGOTA SOLIDARIA Una ciudad sin indiferencia*. Contrato IDU-DTC-116-2005 Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Autopista al Llano entre el CAI Yomasa y el inicio de la Concesión Bogotá - Villavicencio, en el tramo comprendido entre el K1+575 AL K5+324 en Bogotá D.C. https://www.idu.gov.co/web/guest/presentacion_salida_llano_dic_07a Consultado: marzo 20 de 2015

Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC (1987). Aerofotografías digitalizada No. 000127, 000128, 000129 del vuelo C-2323. Escala aproximada 1:24900. Departamento de (l) Bogotá D.C., Municipio de Bogotá D.C.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. (1991). Aerofotografías No. 000193, 000194 y 000195 del vuelo C-2435 Departamento de Bogotá D.C., Municipio de Bogotá D.C.

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana. IIRSA
Ordenamiento de la cartera de proyectos por eje de integración y desarrollo. III.1 Eje
Andino (s.f) Recuperado de:
http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/lb09_seccion3_eje_andino.pdf
Consultado: 31 de marzo de 2016

Jiménez, C. Novoa, E. (2014). *Producción social del espacio: El capital y sus luchas sociales en la disputa territorial*. Ediciones Desde Abajo.

Knox, P. y Pinch, S. (2010). *Estructuras para provisión de edificaciones y la producción social del ambiente urbano*. En: *Urban social geography: an introduction*. New York, Pearson Prentice Hall. Págs. 120- 149.

Lefebvre, H. (1968). Ciudad y campo. En *El derecho a la ciudad* (pp. 87-90). Ediciones Península.

Ley 88 de 1947 (diciembre 15) Sobre fomento del desarrollo urbano del municipio y se dictan otras disposiciones. Recuperado de
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8226> Consultado 15 marzo de 2017.

López-Barrera, F. (2004). Estructura y función en bordes de bosques. *Revista Ecosistemas*, 13(1).

Lozano Ducuara, V. (2015) Aportes para el Análisis de la Construcción Social del Hábitat. El caso de la Mesa de Concertación de Usme en el proceso del borde Urbano Rural del sur de Bogotá (Tesis de maestría) Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. Recuperado de: www.bdigital.unal.edu.co/51177/1/1110174525.2015.pdf Consultado 15 marzo de 2017.

Lynch, K. (1976) *Administración del paisaje*. Grupo editorial Norma.

Melgarejo, V. (2009) Diagnóstico social y ambiental participativo del Agroparque los soches, localidad de Usme, Bogotá D.C. y alternativas de desarrollo rural sostenible. (Tesis de Maestría) Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/142/eam9.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Consultado 15 marzo de 2017.

Mesa ambiental de los Cerros Orientales. Recuperado de: <https://mesacerros.wordpress.com/> Consultado 15 marzo de 2017.

Metrovivienda, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente, Corporación Suna Hisca (2011) Diagnostico rural participativo –DRP- de la Operación Nuevo Usme – ONU- Recuperado de: <http://oab2.ambientebogota.gov.co/apc-aa-files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/Diagnostico%20Rural%20Participativo.pdf> Consultado 20 marzo de 2016.

Metrovivienda <http://www.metrovivienda.gov.co/index.php/2013-04-02-16-45-18/2013-04-09-15-25-20> Consultado: 30 de marzo de 2017

Moreno Jaramillo, C. I. (2008). La conurbación: rizoma urbano y hecho ambiental complejo.

Morín, E. (1996). Epistemología de la complejidad en Dora Fried Schnitman, Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad (pp 421 – 446). Editorial PAIDOS. Buenos Aires.

Noguera, A. P. (2004). El reencantamiento del mundo. *Manizales: Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente. Universidad Nacional de Colombia IDEA.*

Observatorio Rural http://observatorioruralbogota.gov.co/ficha_tecnica.shtml?apc=fj,-,-,-,1,-,-,267 Consultado: enero 21 de 2015

Odum, E. (2006) El ecosistema. Gradientes y ecotonos. En Barret, G. W., y Odum, E. Fundamentos de ecología. (pp. 17-21). Thomson.

Orellana, Arturo. (2012). Periurbanización y sustentabilidad en grandes ciudades. *EURE (Santiago)*, 38(115), 247-251.

Pérez, E., (2001). *Hacia una nueva visión de lo rural*. En La nueva ruralidad en América Latina. *Comp. N Giarraca. Colección grupos de trabajo Desarrollo Rural (pp 17-29). Buenos Aires. CLACSO.*

Ramírez, A. (2009). Análisis de los conflictos ambientales en interfases urbano-rurales. *Revista nodo*, 3(6).

Reina, M. y Rojas, H. (2004). *Protocolo Distrital de Pactos de Borde*. Santafé de Bogotá: Departamento Administrativo del Medio Ambiente.

Resolución 0071 de 1984 (6 de agosto) Por la cual se adscribe el Proyecto Experimental de Desarrollo Regional de Usme y Convenios Adicionales al mismo, a los Departamentos de Desarrollo Rural y Fisiología de Cultivos. Recuperado de <http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=75690> Consultado 20 enero de 2017.

Rodríguez Wallenius, C. (2014). Relaciones campo-ciudad y la construcción de alternativas al desarrollo en Latinoamérica. *Agriculturas campesinas en Latinoamérica. Propuestas y desafíos Quito: IAEN*, 199-216.A

Ruiz, D. Santana, D. y Baquero, A. (2013) Explorando las condiciones geodemográficas del área rural de Usme, Bogotá D. C. En Duque, I. *Historiografía y Planificación Urbana* Págs. 383 – 399. Universidad Nacional de Colombia.

Sánchez, H., (2015). *El proceso de Suburbanización*. Sociedad Geográfica de Colombia ISBN: 978-958-58411-6-1.

Santafé, G. (1998) *Usme y su historia*. Santafé de Bogotá Departamento Administrativo de Acción Comunal y Alcaldía Mayor de Bogotá.

Santos, M. (1996). *Metamorfosis del espacio habitado*. Barcelona. *Oikos-Tua*.

Secretaría Distrital de Planeación SDP. Alcaldía Mayor (s.f.) Caracterización y delimitación final de las franjas de transición urbano rural de los bordes sur, oriente y pre delimitación y caracterización de la franja de transición urbano rural del borde norte. Recuperado de: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPolíticas/políticaRuralidad/MetasPlanDesarrollo/Proyecto_No803_Meta_No9_Dic8_borde.pdf Consultado 25 de septiembre de 2016.

Secretaria Distrital de Planeación SDP, Secretaria Distrital de Ambiente, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Secretaria Distrital de Hábitat y Universidad

Distrital. (2010). Diagnóstico de las áreas rurales Bogotá D.C. Tomo IV. Vol. 2. Área rural localidad Usme, UPR Tunjuelito. Convenio Interadministrativo de Cooperación 017 de 2009 y 234 de 2009.

Secretaría Distrital de Planeación SDP. Barrios legalizados Usme Recuperado de http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/LegalizacionBarrios/Legalizaci%F3n%20de%20Barrios/Barrios%20Legalizados/QueEs/LEGALIZADOS%20LOCALIDAD%20No%2005%20USME.XLS_0.pdf Consultado 19 de abril de 2017

Secretaría Distrital de Planeación. Plan parcial Ciudadela Bolonia. Recuperado de: http://www.sdp.gov.co/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/PlanesParciales/PlanesParcialesDesarrollo/PPD_Ciudadela_Bolonia Consultado 19 de abril de 2017

Secretaría Distrital de Planeación. Plan parcial Hacienda El Carmen. Recuperado de: http://www.sdp.gov.co/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/PlanesParciales/PlanesParcialesDesarrollo/PPD_Hacienda_El_Carmen Consultado el 19 de abril de 2017

Secretaría Distrital de Planeación. Proyecciones de población UPZ - De 2005 a 2015 Recuperado de [http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/ProyeccionPoblacion/Poblaci%F3n%20por%20UPZ_2006-2015_convenio%20SDP-DANE%20\(1\).xlsx](http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/ProyeccionPoblacion/Poblaci%F3n%20por%20UPZ_2006-2015_convenio%20SDP-DANE%20(1).xlsx) Consultado el 20 de abril de 2017

Silveira, M. L. (1995, January). Totalidad y fragmentación: el espacio global, el lugar y la cuestión metodológica. Un ejemplo argentino. In *Anales de Geografía de la Universidad Complutense* (Vol. 14, p. 53).

Soijet, M., y Mantovani, G. (2005). Los procesos y tendencias de la ciudad crecimiento y exclusión. En Bertuzzi, M. L., & Arroyo, J. (Ed.), *Ciudad y urbanización: problemas y potencialidades*. (pp. 91-97). Santa Fe, Argentina: Universidad Nacional del Litoral.

Sandoval, O., Svenson, G., Morales, R., Suescún, F. (s.f.) La vía Bogotá – Villavicencio. Un camino muisca que 500 años después sigue siendo un camino muisca Recuperado de <http://partnerccv.com/Publico/13.3%20HISTORIA%20SOBRE%20LA%20VIA%20BOGOT%A%20-%20VILLAVICENCIO.pdf> Consultado: marzo 20 de 2015

Toro, C., Velasco, B., y Niño, A. (2005). "El borde como espacio articulador de la ciudad actual y su entorno". *Revista de Ingenierías*, 4 (7): 55-65.

Urrea, T., Del Castillo, J., Cuéllar, J., & Ramos, A. (2011). *Usme; Historia de un Territorio. Metrovivienda*. Alcaldía Mayor de Bogotá.

Webster, D., & Muller, L. (2009). Peri-urbanization: Zones of rural-urban transition. *Human Settlement Development*, 1, 280.

Zambrano Pantoja, F. R. (2004). *Historia de la localidad de Tunjuelito: el poblamiento del valle medio del río Tunjuelo*. Bogotá D.C.: Guadalupe.

Zambrano Pantoja, F.R. (2005). Usme: Urbanización y cambios en la vida urbana. *Pasado, presente y futuro de la localidad de Usme* (9-40).

Zambrano, B. C. (2013). Lineamientos para el ordenamiento ambiental del borde sur de la ciudad de Bogotá y para consolidar un área de reserva ambiental. *Revista Mutis*, 3(1), 46.

ANEXOS

A. Anexo: Caracterización Interfase Periurbana contexto mundial

Interfase periurbana en el mundo

África



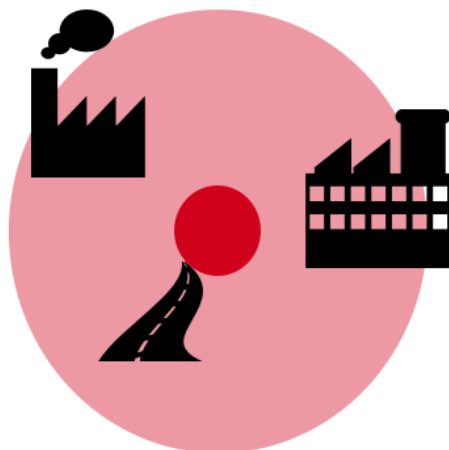
Predomina área urbana monocéntrica.
IPU con suelos y actividades rurales.

América Latina



Población vulnerable. Urbanización informal.
Ciudad policéntrica.

Asia



IPU con emplazamientos industriales o
exurbanización.

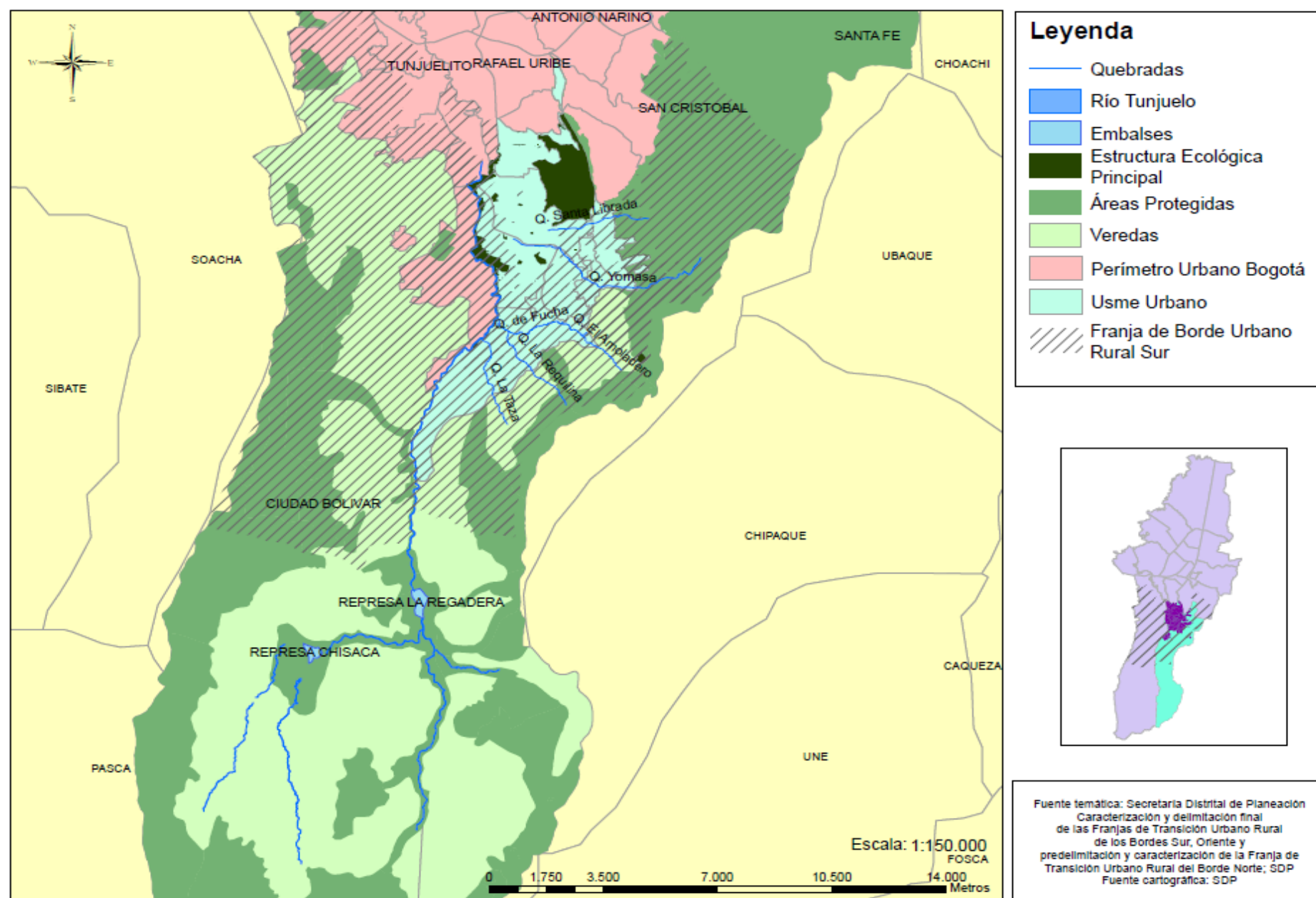
Europa y Estados Unidos



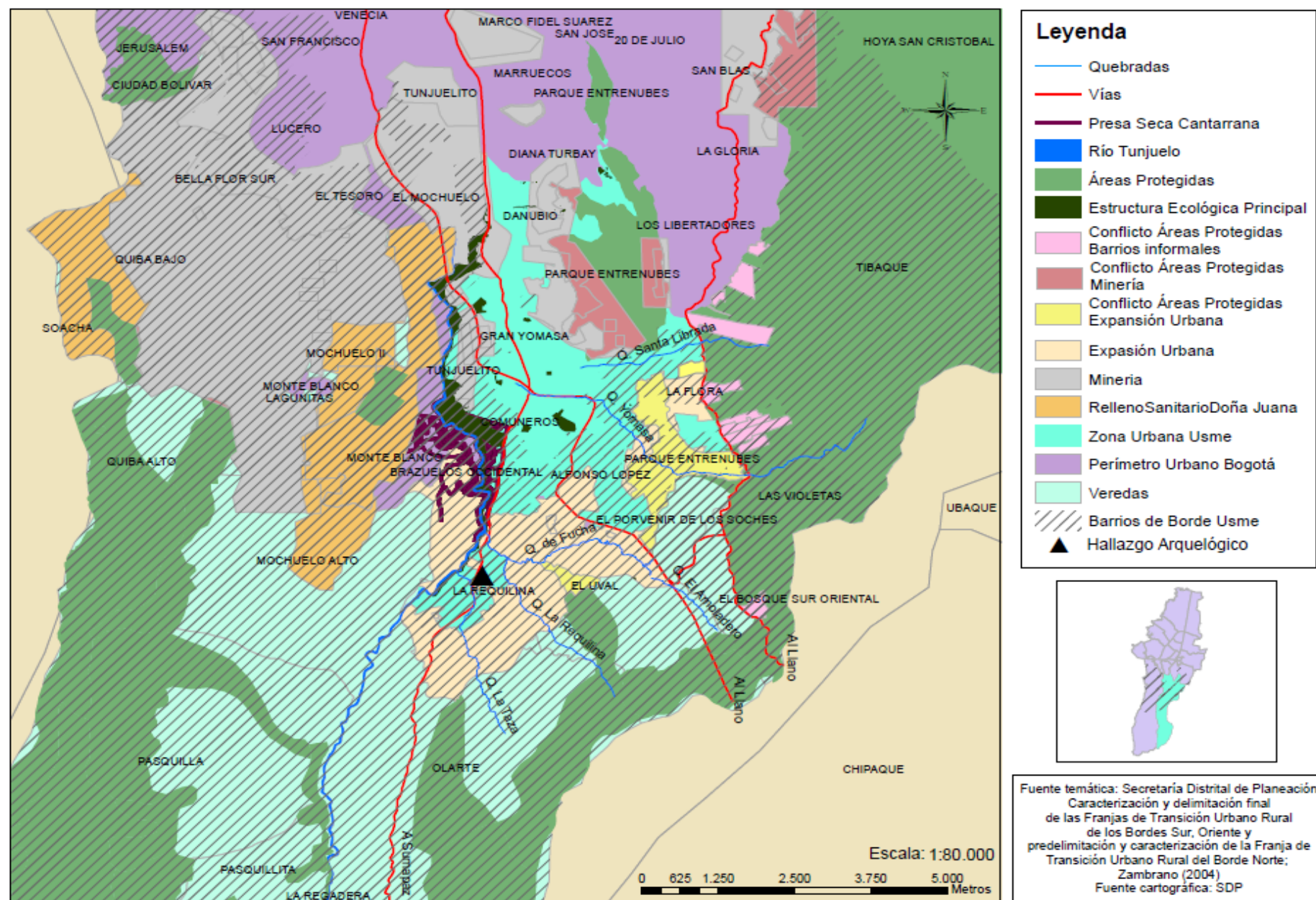
Habitantes de clase media - alta.
Urbanizaciones privadas -miniciudades-

Realizado a partir de Webster & Muller 2009 y Allen, 2010

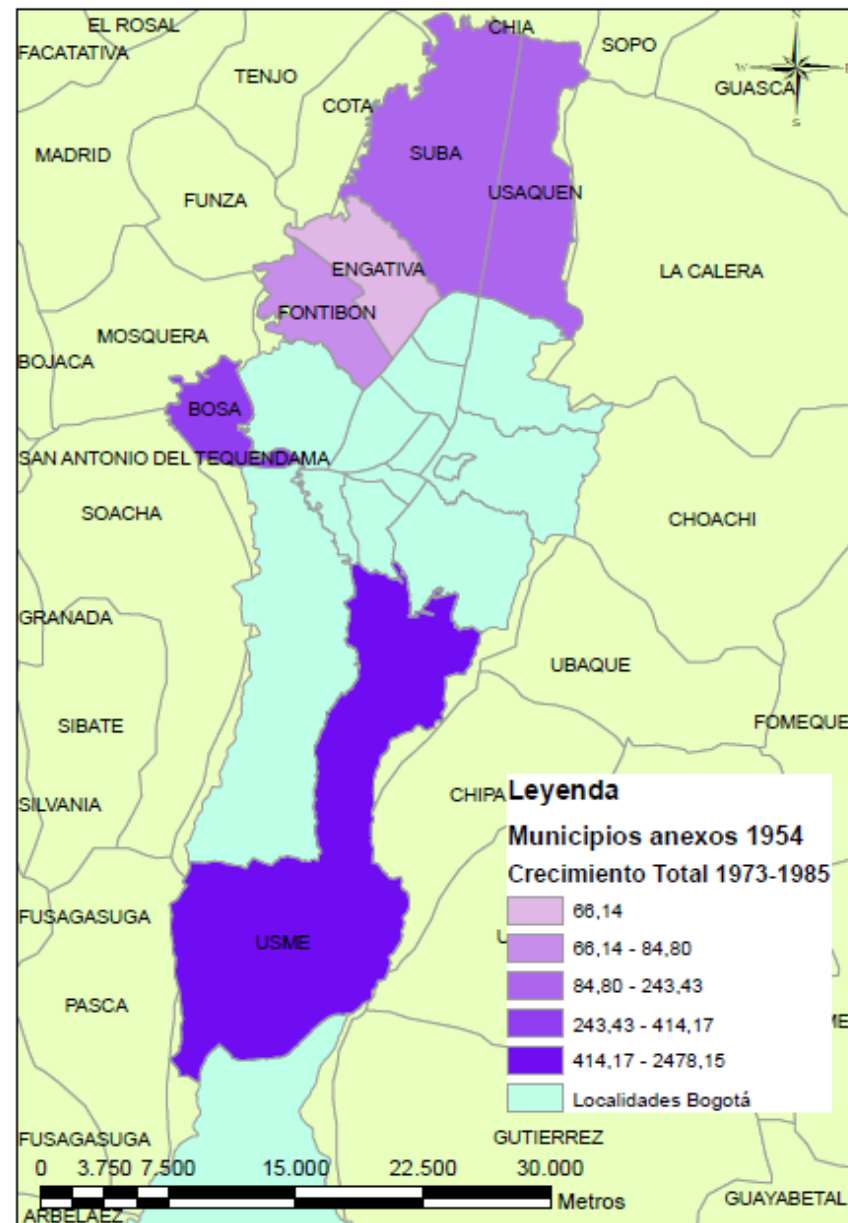
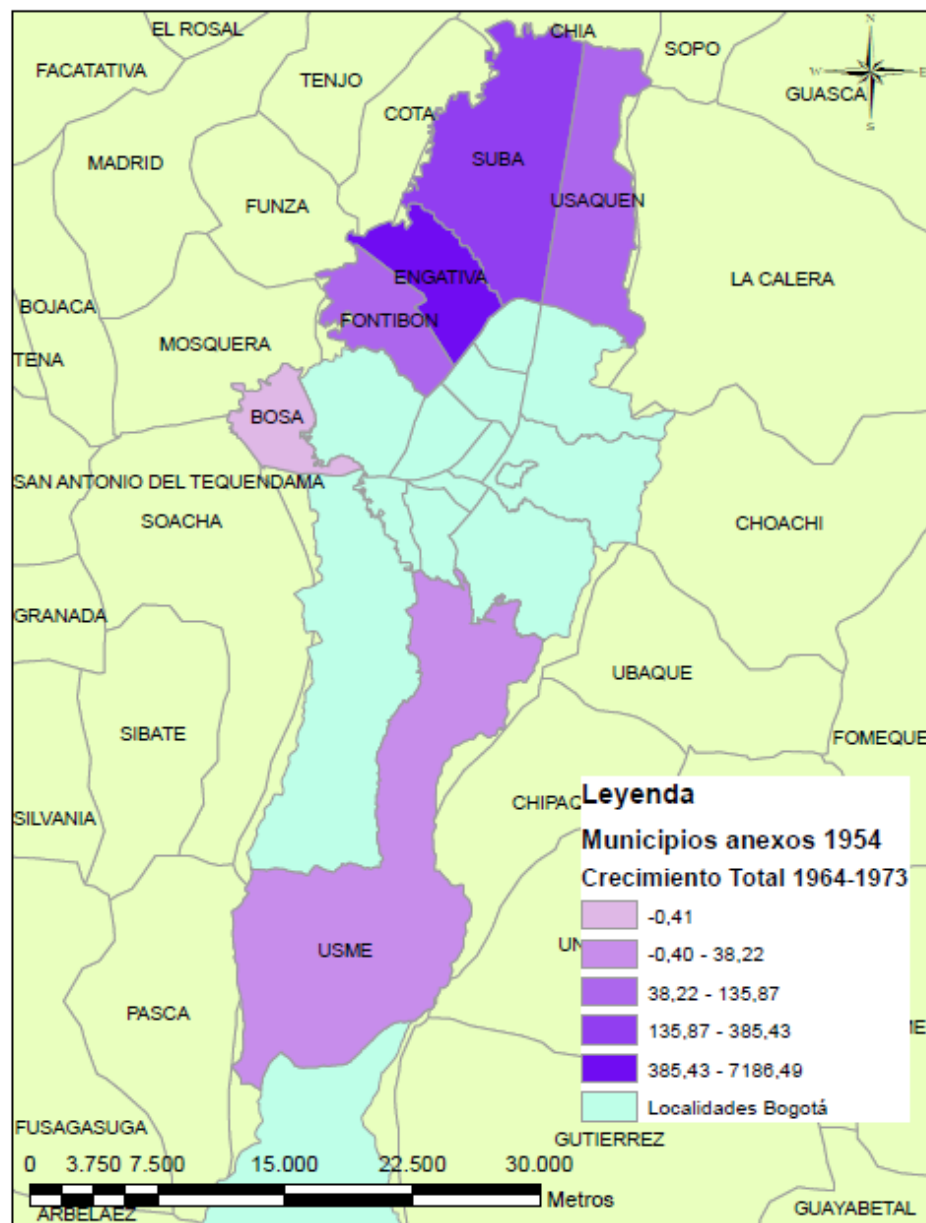
B. Anexo: Localidad de Usme



C. Anexo: Usos del suelo de la Interfase Periurbana de Usme

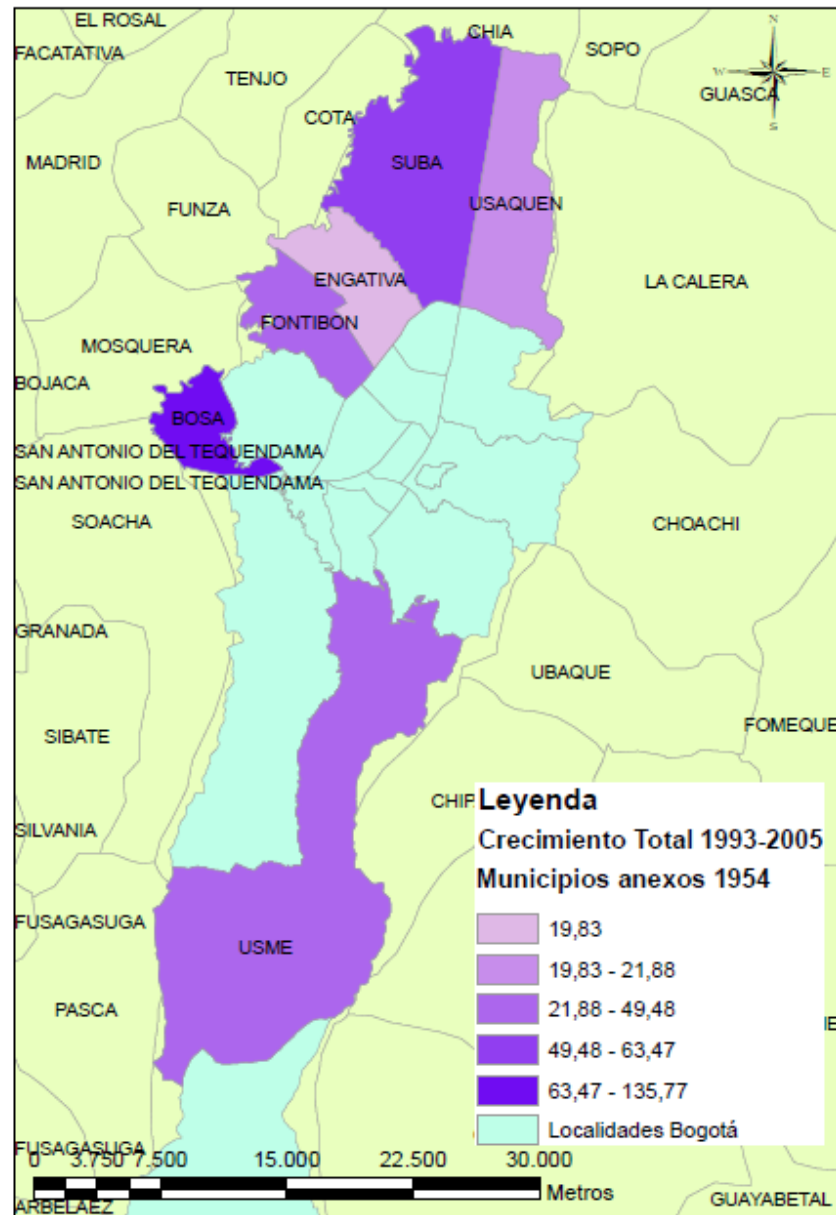
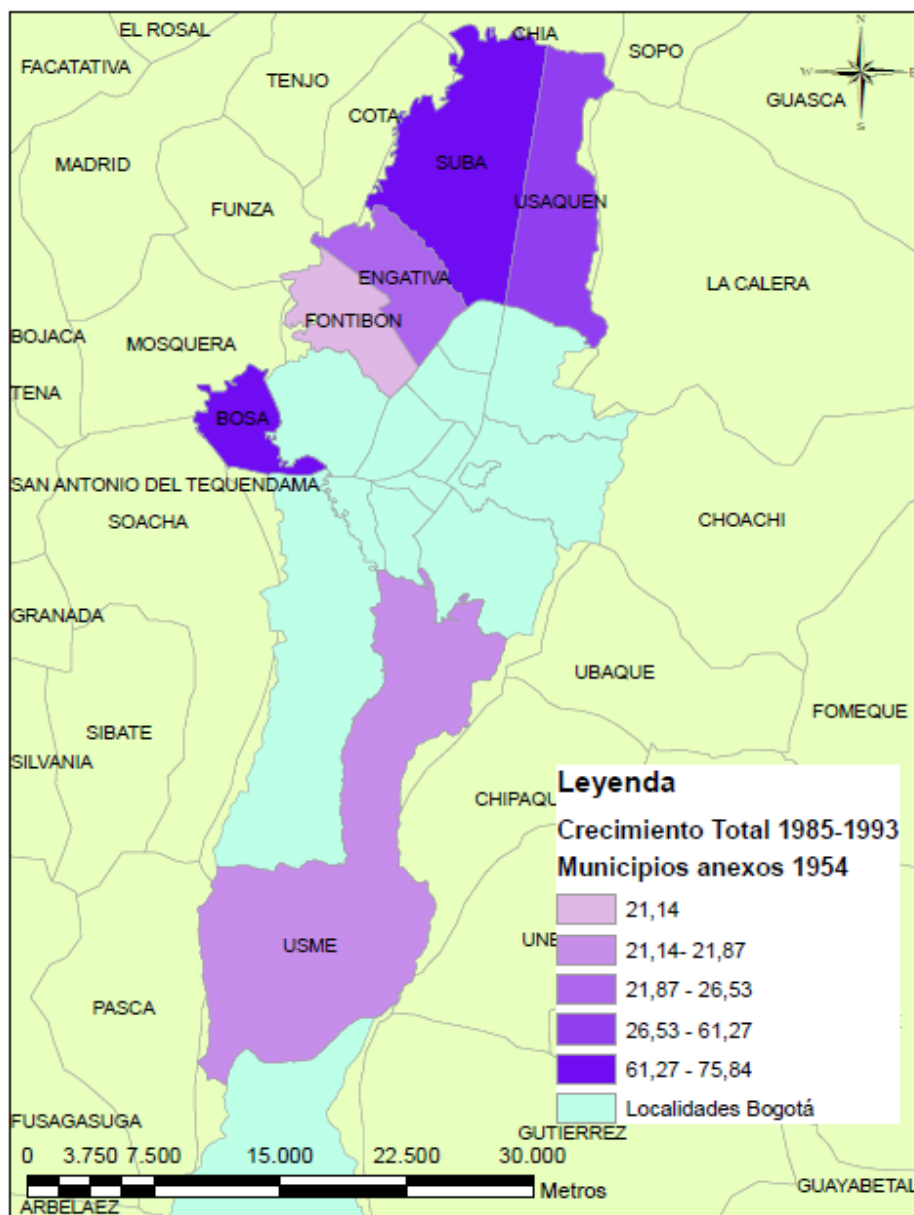


D. Anexo: Crecimiento poblacional municipios anexos 1954 (1964-1973 y 1973-1985)



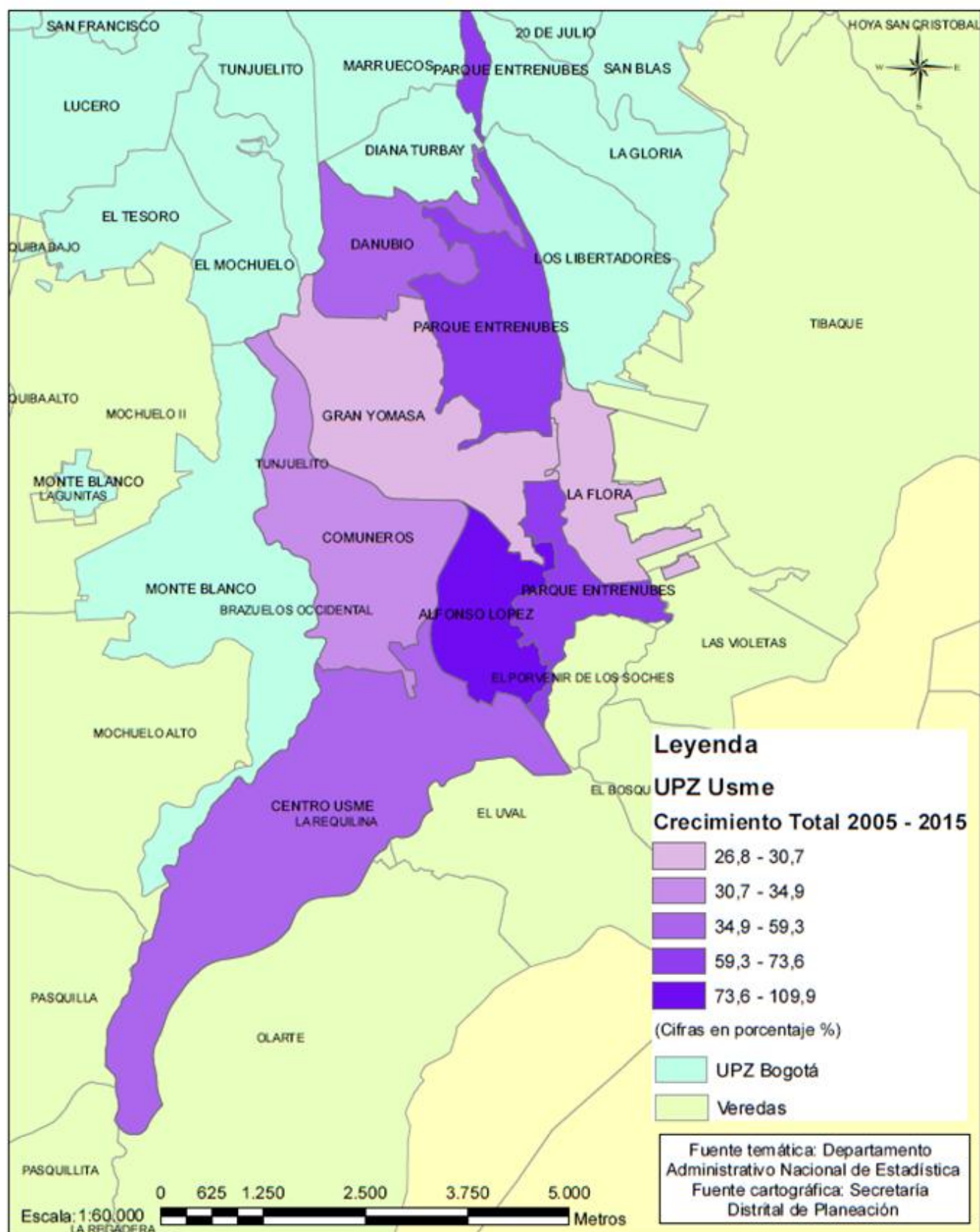
Fuente temática: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Fuente cartográfica: Secretaría Distrital de Planeación

E. Anexo: Crecimiento poblacional municipios anexos 1954 (1985-1993 y 1993-2005)



Fuente temática: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Fuente cartográfica: Secretaría Distrital de Planeación

F. Anexo: Crecimiento poblacional UPZ Usme 2005-2015



G. Anexo: Metodología de Eventos Relacionales para el Análisis del Paisaje MERAP aplicada a la normativa histórica para la IPU de Usme

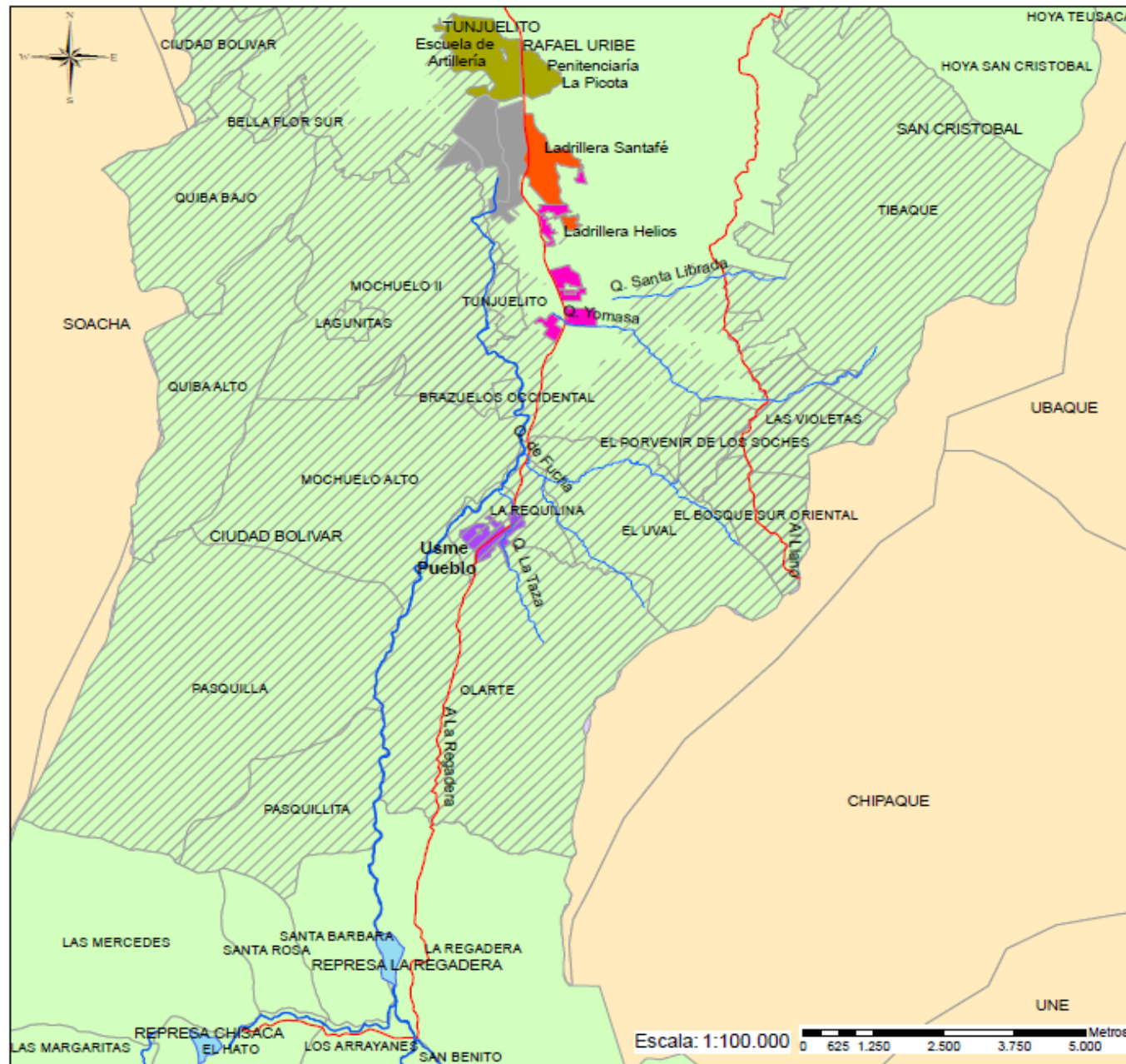
Año	Eventos regulatorios (Norma)	Eventos infraestructurales	Eventos económicos	Eventos estructurales	Eventos simbólicos
—	Políticas, programas y proyectos, materializan la regulación por la que se rige un área determinada.	Medios de comunicación y transporte, flujos de información, conocimiento e insumos, redes de servicios públicos.	Medios de sostenimiento económico derivados del trabajo sobre el entorno natural, concebido como proveedor de bienes y servicios. Puede estar determinada por fuerzas externas.	Acción política e institucional de delimitar, y sus efectos sobre las formas de apropiación y formas de habitar de las comunidades.	Imaginarios, creencias, instalación de objetos o acciones simbólicas que modifican la relación y el entendimiento de los y las habitantes sobre el espacio habitado
1954	Decreto Legislativo 3640 de 1954: anexión Usme al DC	Represa La Regadera Embalse Chisacá (Planta de tratamiento Vitelma) Prolongación de la Av. Caracas hacia el embalse La Regadera Avenida a Oriente: conexión regional pero no local Estación experimental y Penitenciaría La Picota Batallón antiaéreo y Escuela de Artillería Ladrillera Helios Ladrillera Santafé Central de Mezclas	Haciendas como sector productivo Inicio de explotación minera Urbanización de usos duros: industrial y de servicios Desvalorización del suelo rural	Usme como localidad, integrada con Sumapaz, constituían el sector rural del sur de Bogotá Usme como zona administrativa Plan piloto y planes reguladores para contención de urbanización no se llevaron a cabo. Municipios anexados se conforman como nuevas centralidades que generan conurbaciones Urbanizadores piratas Estado de sitio	Haciendas como despensa y fuente de trabajo Trabajo comunitario para la adquisición de servicios públicos Deterioro del modelo de hacienda Conflicto armado Zona proveedora de agua Nulo desarrollo urbano
1972	Acuerdo 26 de 1972: se incorpora el municipio de Usme a Bogotá	Escuela Santa Librada 1977 Tanque Tenerife 1978 Acueductos comunitarios (mangueras)	Urbanización residencial Producción agrícola	Usme como Alcaldía menor: Zona administrativa descentralizada Definición de límites y nomenclatura de la localidad Parcelación y loteo de haciendas Loteo ilegal Urbanización pirata Legalización de barrios Formalización de servicios públicos	El barrio como unidad urbana Migración masiva hacia Usme Capital social y humano

Año	Eventos regulatorios (Norma)	Eventos infraestructurales	Eventos económicos	Eventos estructurales	Eventos simbólicos
1979	Acuerdo 7 de 1979: Plan General de Desarrollo integrado y se adoptan políticas y normas sobre el uso de la tierra en el Distrito Especial de Bogotá	Centro salud Yomasa 1980 Pavimentación vía a Usme 1983 Colegios Miguel de Cervantes y Gran Yomasa 1985 Relleno Sanitario Doña Juana 1988 Autoconstrucción	Minería Producción agrícola	Crecimiento urbano hacia el sur y el occidente Áreas de desarrollo o susceptibles de ser incorporadas a la ciudad Zonas de reserva ambiental (cerros) Definición perímetro para prestación de servicios públicos Barrios informales (ilegales) Legalización de barrios Formalización de servicios públicos	Organización de la comunidad para la consecución de los centros educativos y la obtención y recopilación de información poblacional de la localidad Consolidación de las primeras cooperativas comunitarias
1990	Acuerdo 6 de 1990: ley de reforma urbana	Implementación de servicios públicos como factor de incorporación automática de las áreas suburbanas a las urbanas Crecimiento urbano acelerado	Minería Mercado de suelos	Zonificación áreas suburbanas, urbanas rurales y de reserva agrícola Zonificación Sistema Hídrico, Sistema orográfico y de parques Reconocimiento de áreas en riesgo (deslizamientos e inundaciones) Planes sectoriales y planes zonales (prioritario para Usme) Incorporación de zonas suburbanas a las urbanas Legalización de barrios: automáticamente declarados zonas urbanas Reconocimiento de Cerros Juan Rey, Guacamayas, Entre Nubes como Parques naturales Distritales	Inicio de movimiento campesino en respuesta a la expansión urbana Segunda ola de migración hacia Usme
1992	Decreto 320 de 1992 (mayo29): Plan de ordenamiento físico de bordes.	Planta El Dorado Tanque La Laguna Tanque El Uval Inicio construcción Nueva vía al Llano Barrios ilegales Centros de salud insuficientemente dotados Conexiones clandestinas a servicios públicos Precaria cobertura en transporte público y vías secundarias Inicio construcción Túnel de El Boquerón	Producción agrícola Mataderos Minería Mercado de suelos	Sistema hídrico: zonas de ríos y quebradas Sistema orográfico parques y zonas verdes Reservas forestales y ecológicas en sectores suburbanos y rurales Zonas de preservación ambiental e incorporación puntual de usos urbanos Áreas de incorporación por legalización Áreas objeto de habilitación Reconocimiento de Cerros Juan Rey, Guacamayas, Entre Nubes como Parques naturales Distritales Legalización de barrios	Disolución de la organización social urbana Contaminación de quebradas Contaminación por el relleno sanitario

Año	Eventos regulatorios (Norma)	Eventos infraestructurales	Eventos económicos	Eventos estructurales	Eventos simbólicos
1997	Acuerdo 2 de 1997: Plan de Borde Sur Oriental	La Nueva Vía al Llano como estructurante del suburbio en Usme Redes de servicios públicos	Minería Urbanización ilegal	Sistema hídrico y orográfico Zonas no desarrollables Áreas de afectación Áreas desarrolladas reglamentadas Área neta urbanizable Áreas suburbanas Legalización de barrios	Colapso del relleno sanitario
2000	Decreto 619 de 2000 - Plan de Ordenamiento Territorial (POT)	Nueva vía al Llano (Eje de integración Caracas-Quito-Bogotá) Operación Estratégica Nuevo Usme VIS y VIP Centralidad Danubio Parque minero industrial Escombreras Presa seca Cantarrana	Eje de integración regional e internacional Minería Urbanización legal Urbanización ilegal Especulación inmobiliaria	Plan de Ordenamiento Territorial Estructura ecológica principal Unidades de Planeación Zonal Usos del suelo rural Centralidad Danubio y Puerta al Llano Expansión urbana mediante proyectos urbanísticos y Planes parciales Planes Ordenamiento Zonal Zonas de riesgo, microzonificación sísmica	Participación sesgada Concentración de la propiedad Deterioro ambiental Desarticulación institucional
2004	Decreto 190 de 2004 (compilación Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003)	Disminución área escombreras Ampliación del Relleno Sanitario Doña Juana		Pacto de Bordes Planes de manejo ambiental y zonas de restauración Planes de manejo minero ambiental Plan de mejoramiento integral de barrios Unidades de Planeación Rural Manejo agropecuario sostenible IIRSA Organizaciones comunitarias campesinas	

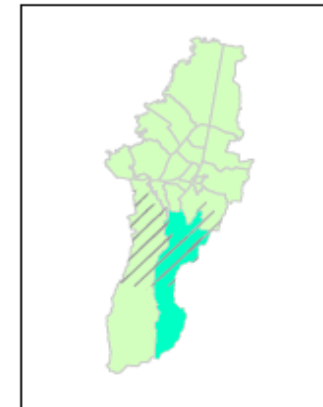
Año	Eventos regulatorios (Norma)	Eventos infraestructurales	Eventos económicos	Eventos estructurales	Eventos simbólicos
2007	Decreto 252 de 2007 Plan de Ordenamiento Zonal Usme, Macroproyecto Río Tunjuelo y Operación Estratégica Nuevo Usme	Urbanización planificada Equipamientos de transporte y mercado	Urbanización legal Mercado de suelos (avalúos comerciales y de referencia) Minería Recursos agropecuarios Agroturismo Agricultura urbana y periurbana	Contención de la expansión urbana Construcción del Borde Urbano Rural Zonas protegidas Macroproyecto del Río Tunjuelo Cuatro planes parciales Gestión de suelo Estrategia de hábitat y vivienda	<p>Participación sesgada Desplazamiento de campesinos Concentración de la propiedad Deterioro ambiental Poca confianza en las instituciones Pérdida de valores campesinos Ruptura de redes comunitarias Desarticulación institucional Urbanización informal estigmatizada</p> <p>(DESDE LAS COMUNIDADES) Hallazgo arqueológico Ancestralidad Diversidad Cultural Patrimonio cultural material e inmaterial Reivindicación de los valores y la identidad campesina Procesos comunitarios Sentido de apropiación y cuidado con el entorno natural Agua como eje integrador del territorio y base del sistema productivo</p>

H. Anexo: Contexto Usme década 1950



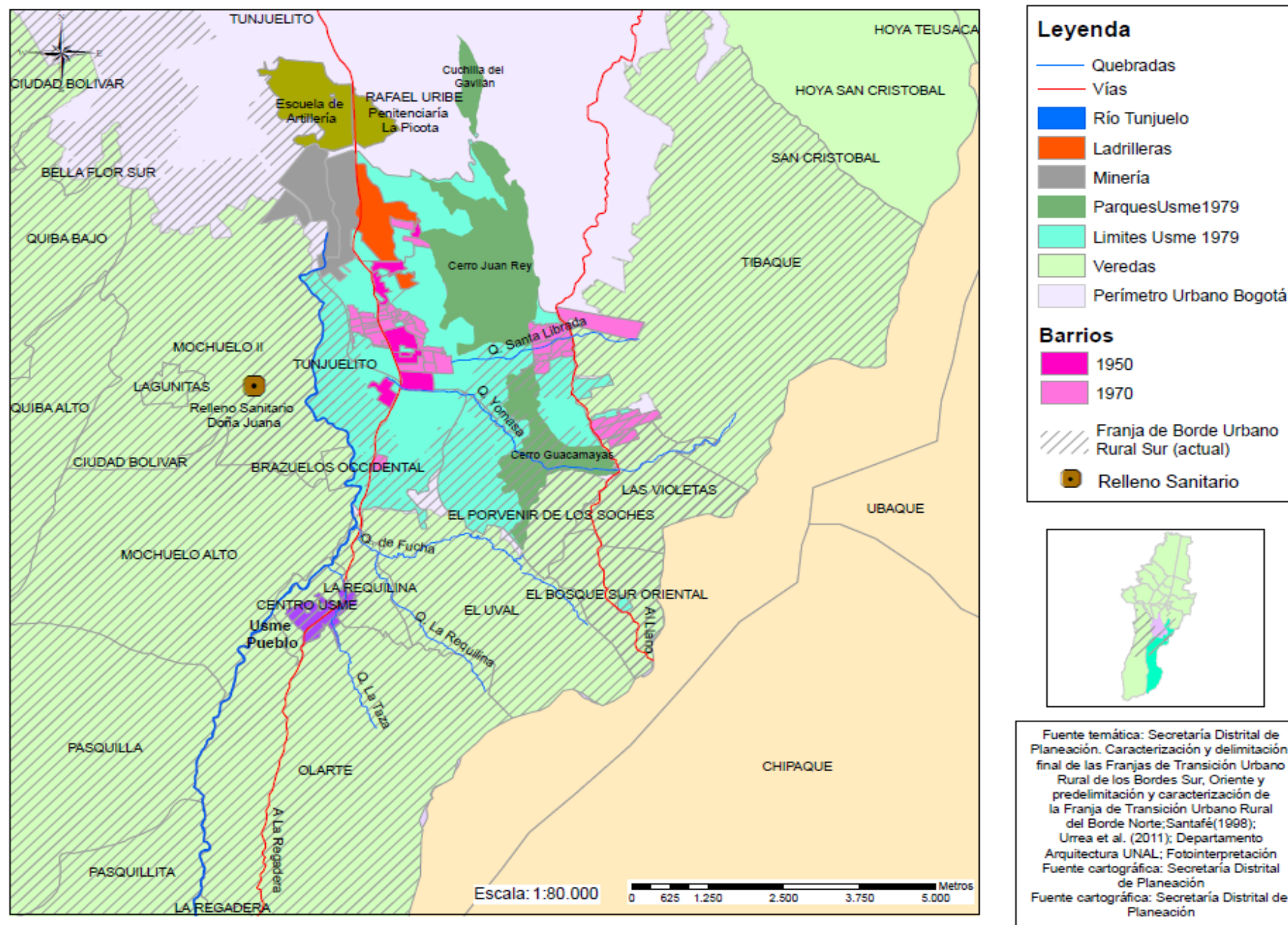
Legenda

- Quebradas
- Vías
- Río Tunjuelo
- Embalses
- Ladrilleras
- Minería
- Barrios
- Veredas
- /// Franja de Borde urbano Rural Sur (Actual)

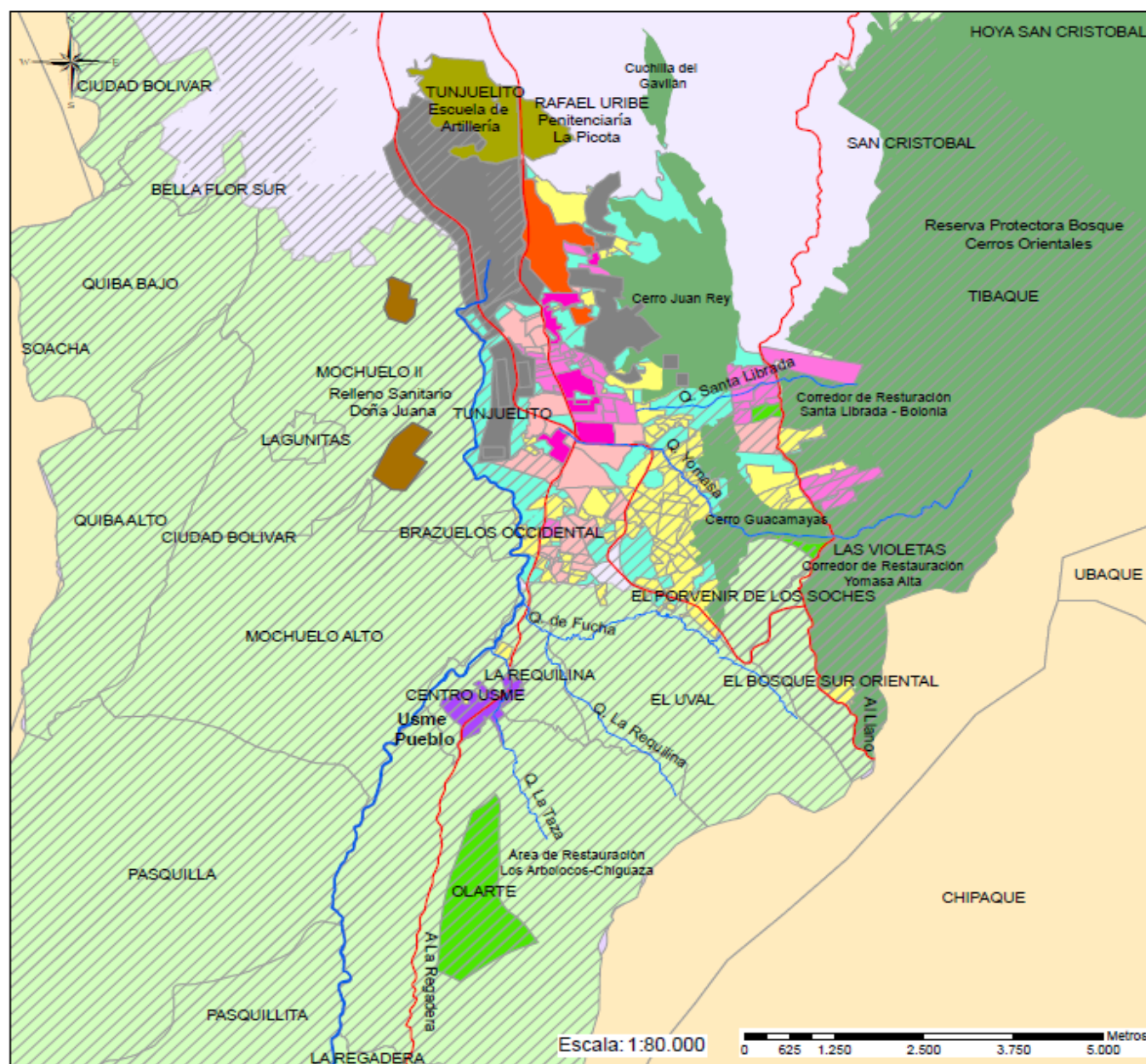


Fuente temática: Secretaría Distrital de Planeación. Caracterización y delimitación final de las Franjas de Transición Urbano Rural de los Bordes Sur, Oriente y predelimitación y caracterización de la Franja de Transición Urbano Rural del Bordo Norte; Santafé(1998); Urrea et al. (2011)
Fuente cartográfica: Secretaría Distrital de Planeación

I. Anexo: Contexto Usme 1970



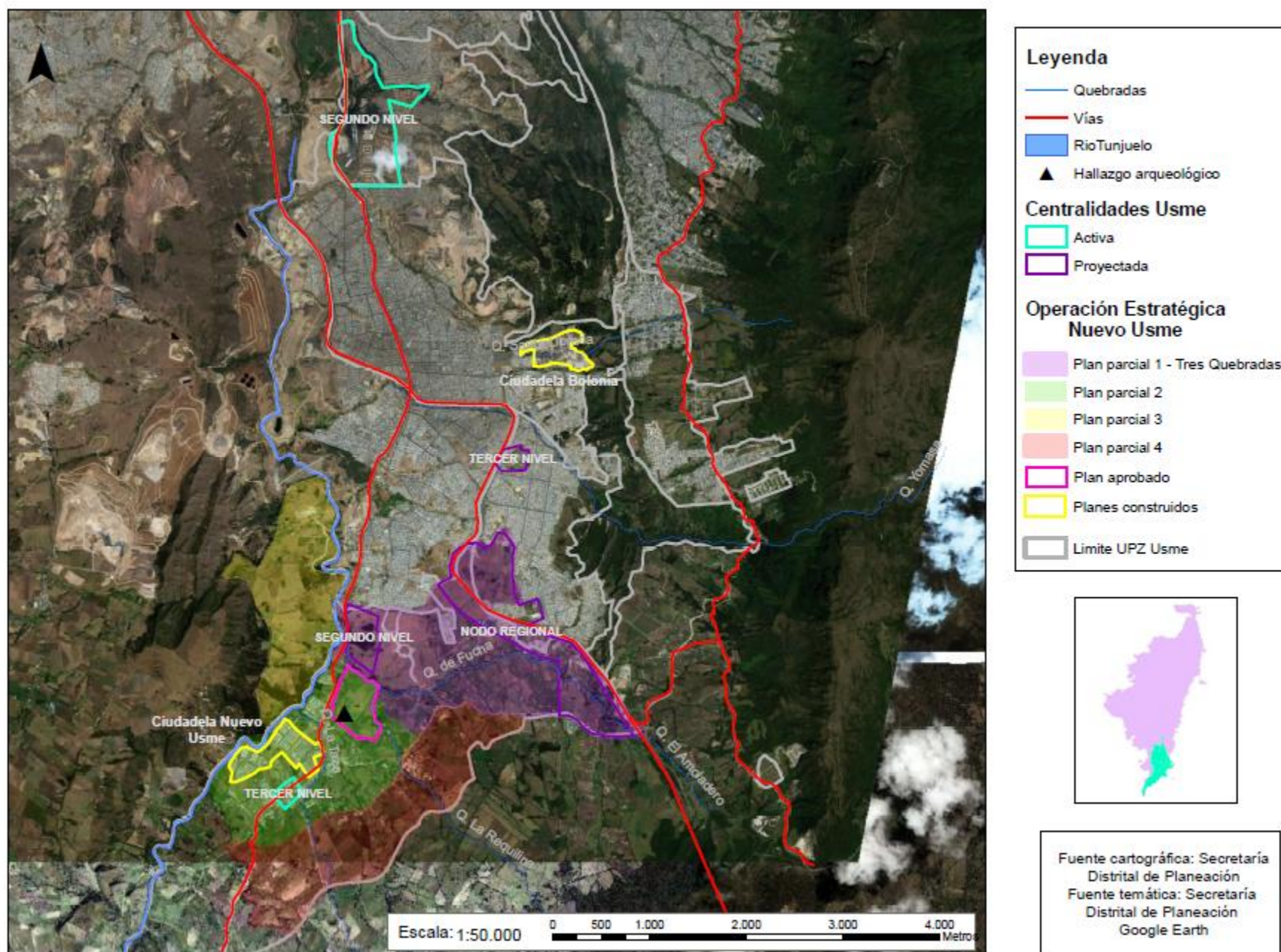
J. Anexo: Contexto Usme 1990



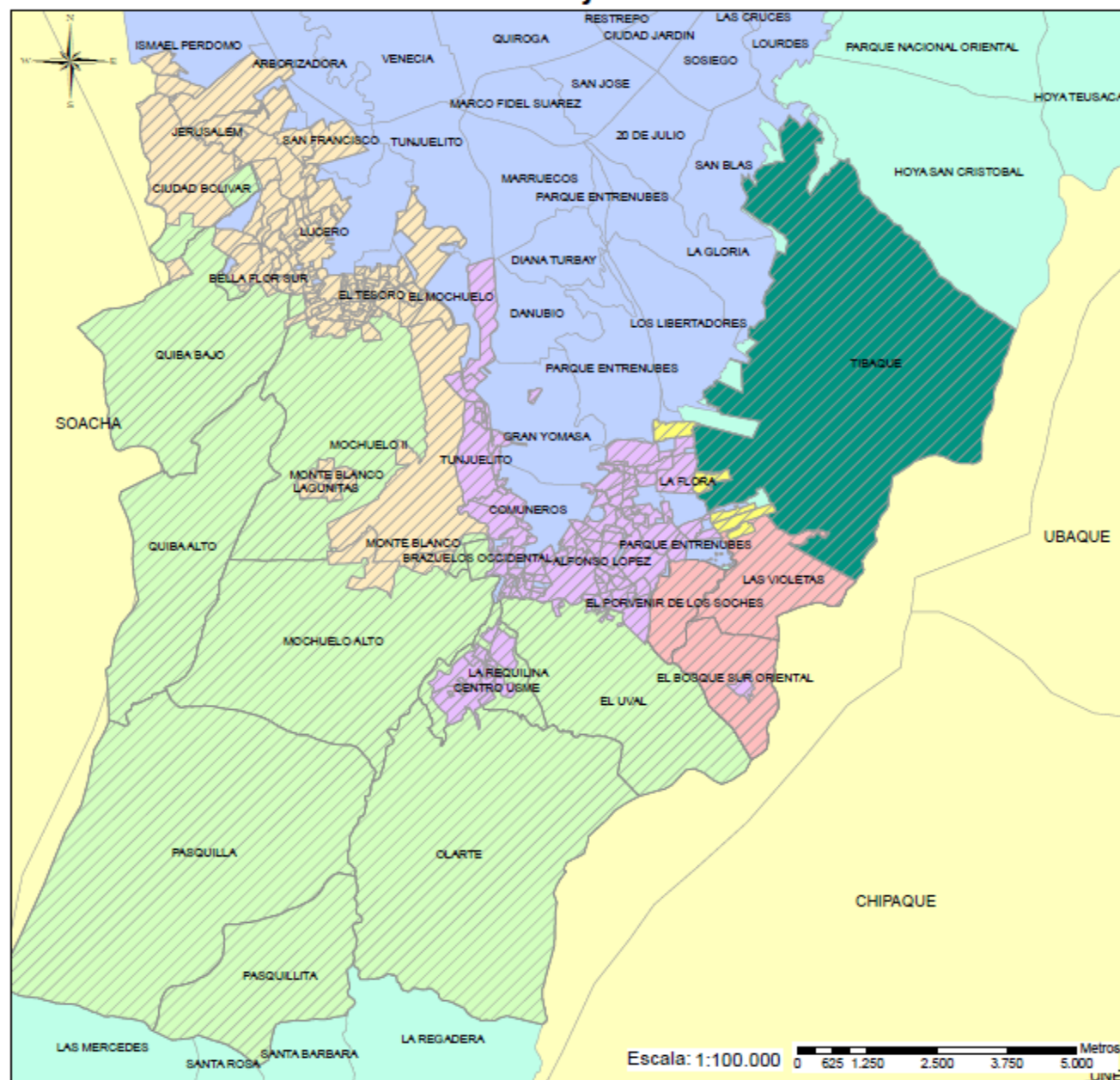
Fuente temática: Secretaría Distrital de Planeación. Caracterización y delimitación final de las Franjas de Transición Urbano Rural de los Bordes Sur, Oriente y predelimitación y caracterización de la Franja de Transición Urbano Rural del Bordo Norte; Santafé (1998); Urea et al. (2011); Departamento Arquitectura UNAL; Fotointerpretación

Fuente cartográfica: Secretaría Distrital de Planeación

K. Anexo: Plan de Ordenamiento Zonal Usme y Operación Estratégica Nuevo Usme

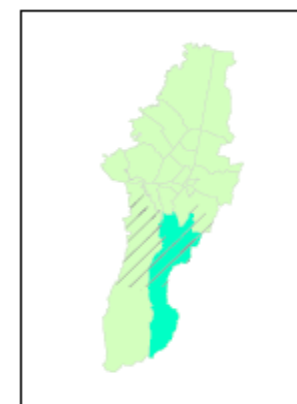


L. Anexo: Franja de Borde Urbano Rural Sur



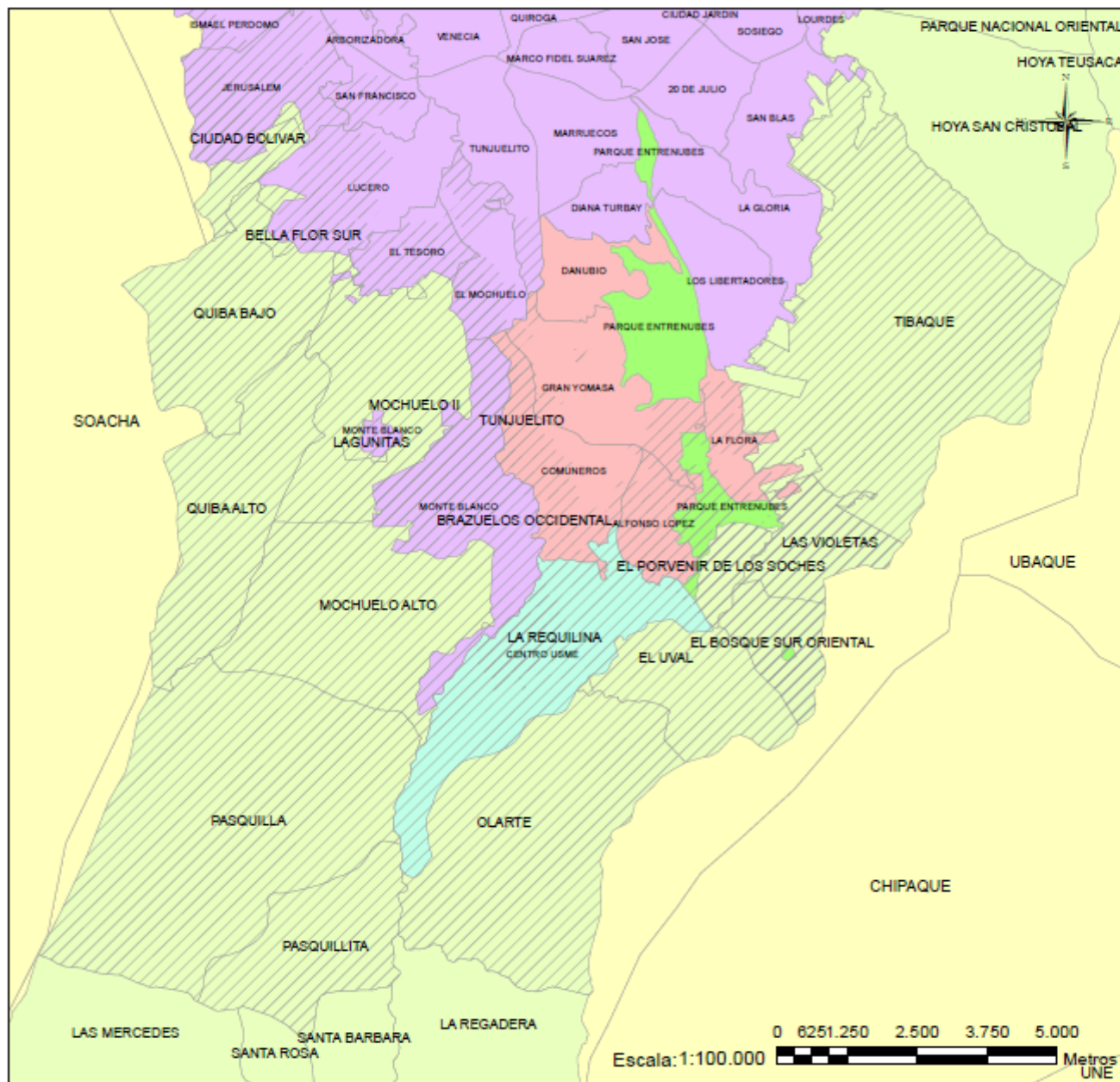
Leyenda

- Barrios de Borde Ciudad Bolívar
- Barrios de Borde Usme
- Barrios de Borde Cerros Usme
- Veredas de Borde Cerros
- Veredas de Borde Sur Cerros
- Veredas de Borde Sur
- Franja de Transición Urbano Rural Sur
- UPZ
- Veredas



Fuente temática: Secretaría Distrital de Planeación Caracterización y delimitación final de las Franjas de Transición Urbano Rural de los Bordes Sur, Oriente y predelimitación y caracterización de la Franja de Transición Urbano Rural del Bordo Norte
Fuente cartográfica: Secretaría Distrital

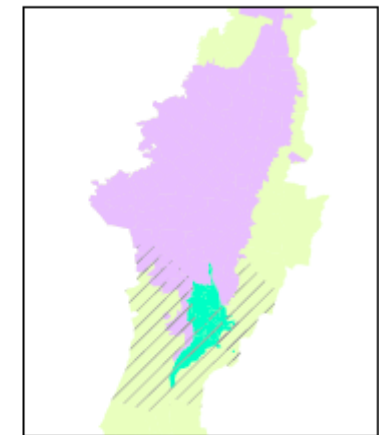
M. Anexo: Usos del suelo UPZ Usme



Leyenda

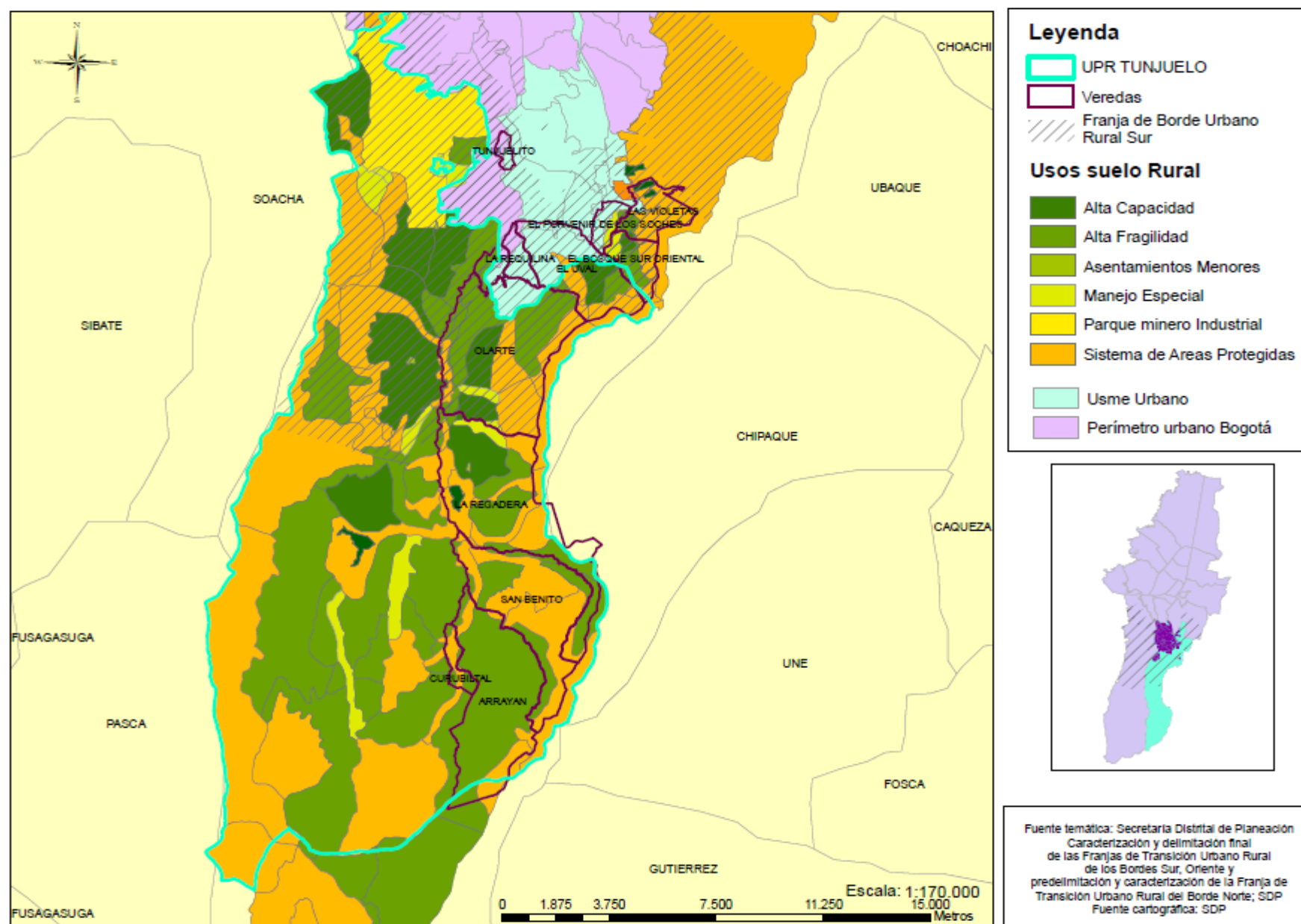
Uso del Suelo UPZ Usme

- Expansión
- Protección
- Urbano
- Veredas
- Municipios
- UPZ Bogotá
- Franja de Borde Urbano Rural Sur

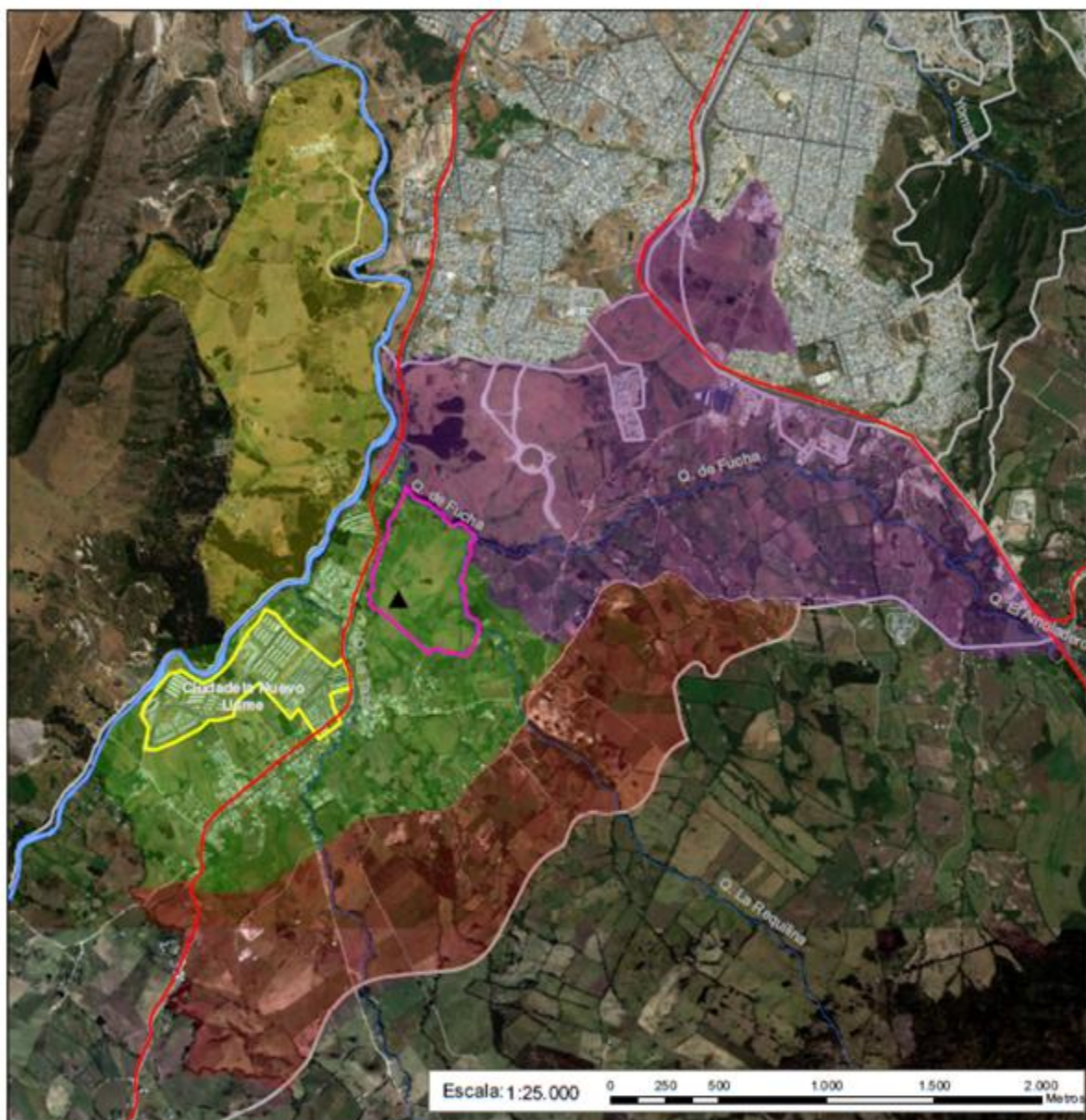


Fuente temática: Departamento Administrativo de Planeación Distrital
Fuente cartográfica: Secretaría Distrital de Planeación

N. Anexo: Usos del suelo rural Usme

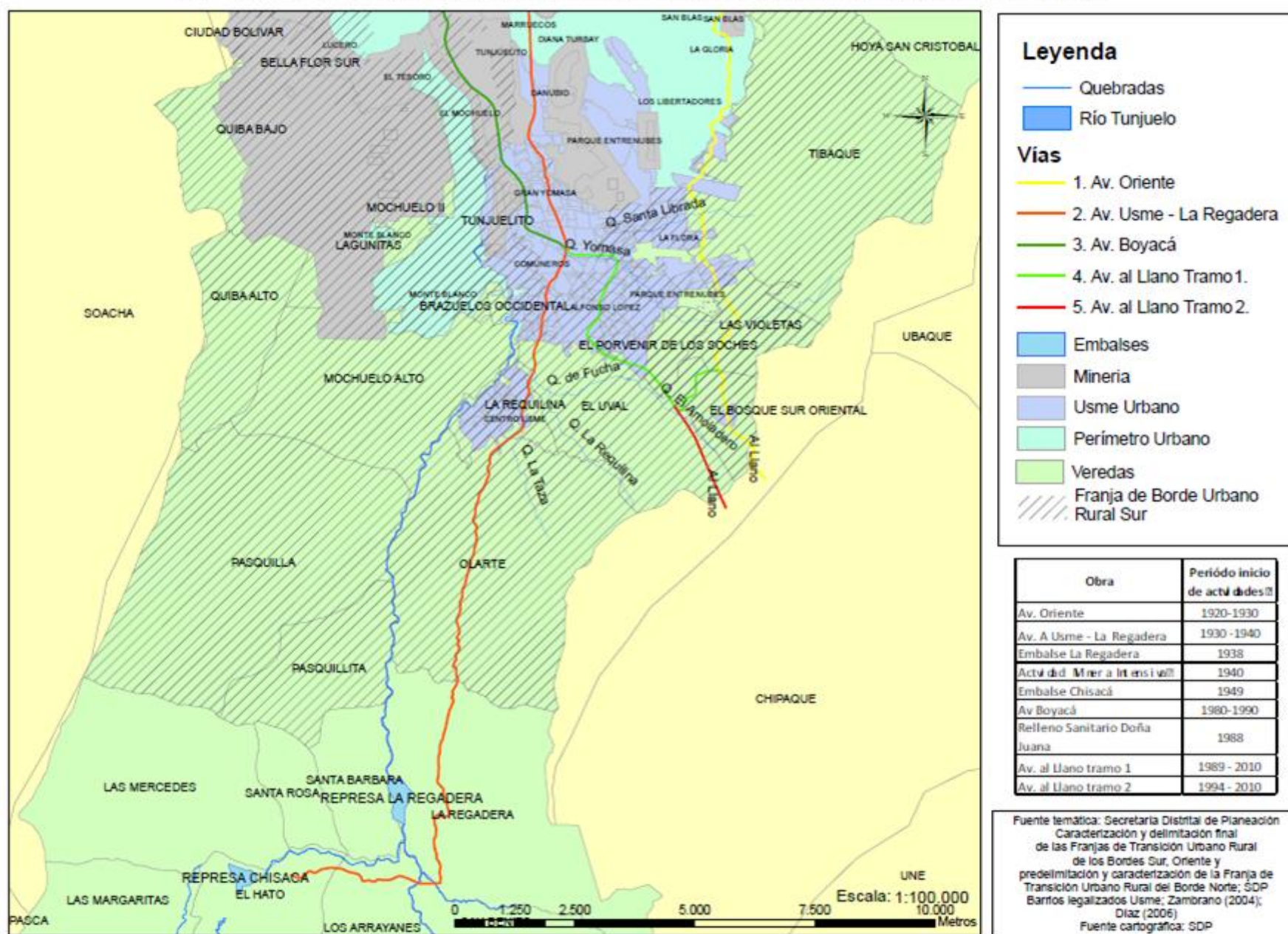


O. Anexo: Planes Parciales Operación Estratégica Nuevo Usme

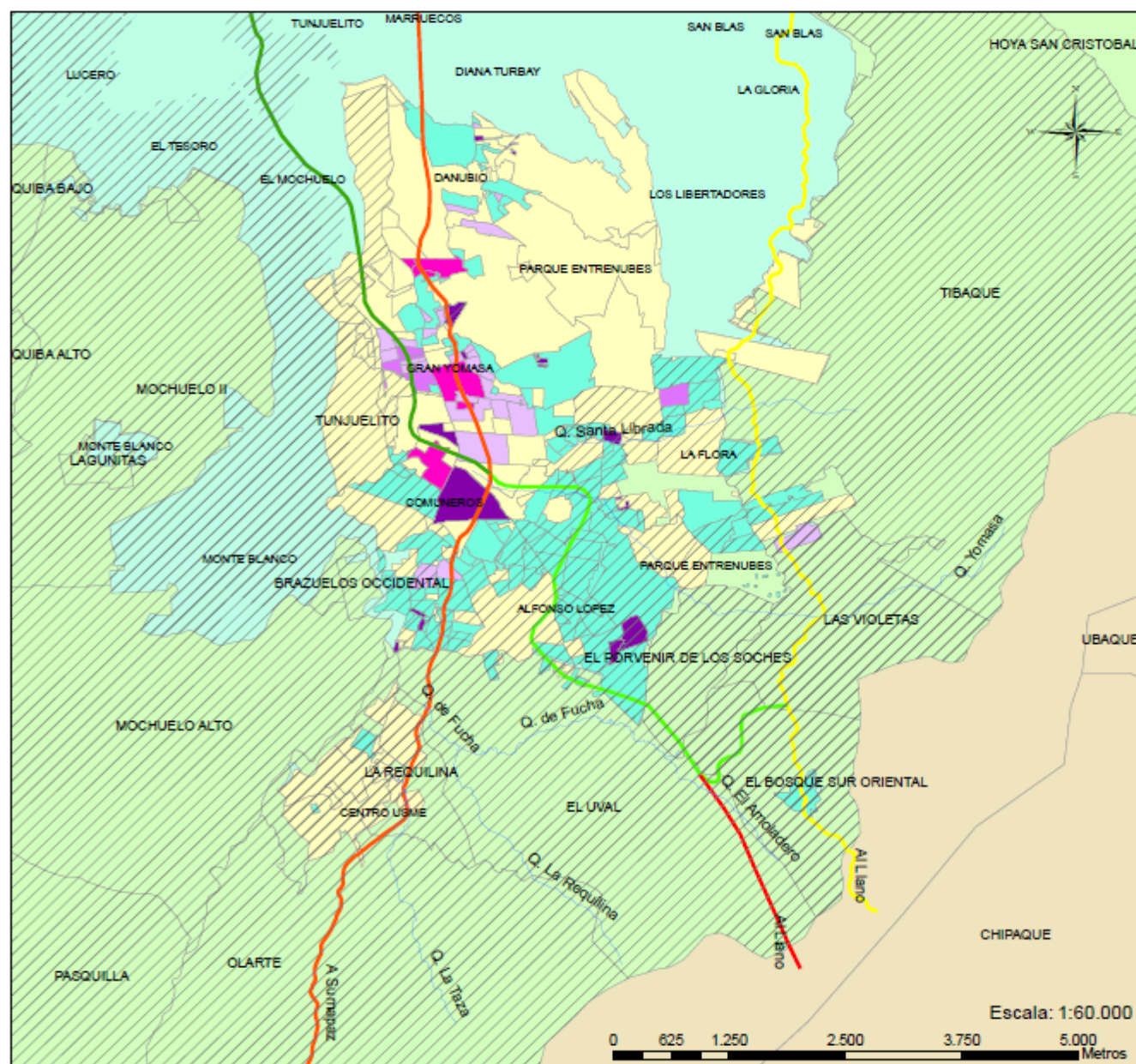


Fuente cartográfica: Secretaría
Distrital de Planeación
Fuente temática: Secretaría
Distrital de Planeación
Google Earth

P. Anexo: Eventos infraestructurales en la Interfase periurbana de Usme

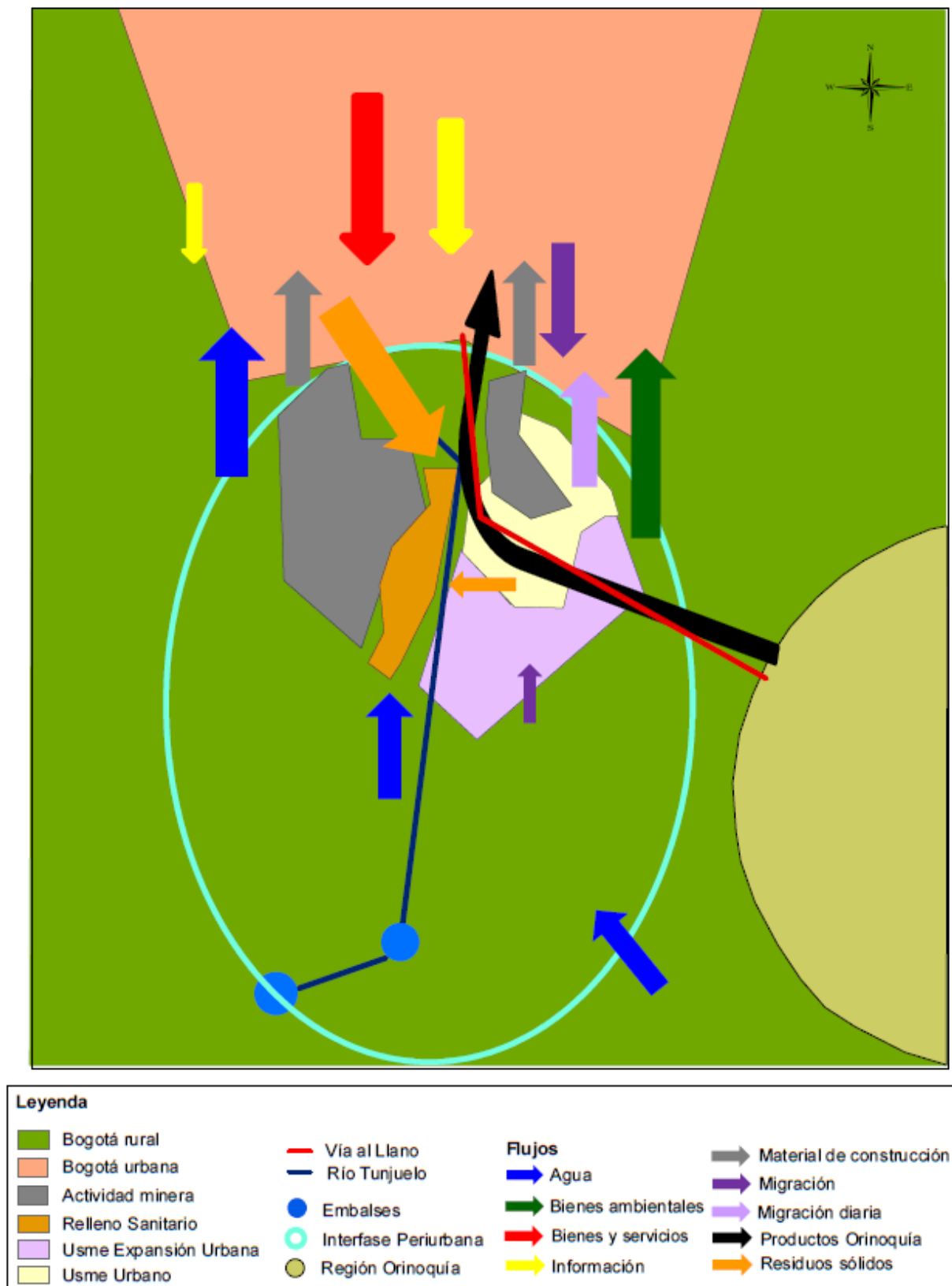


Q. Anexo:Relación vías - legalización de barrios



Fuente temática: Secretaría Distrital de Planeación
Caracterización y delimitación final
de las Franjas de Transición Urbano Rural
de los Bordes Sur, Oriente y
predelimitación y caracterización de la Franja de
Transición Urbano Rural del Bordo Norte; SDP
Barrios legalizados Usme; Zambrano (2004);
Díaz (2006)
Fuente cartográfica: SDP

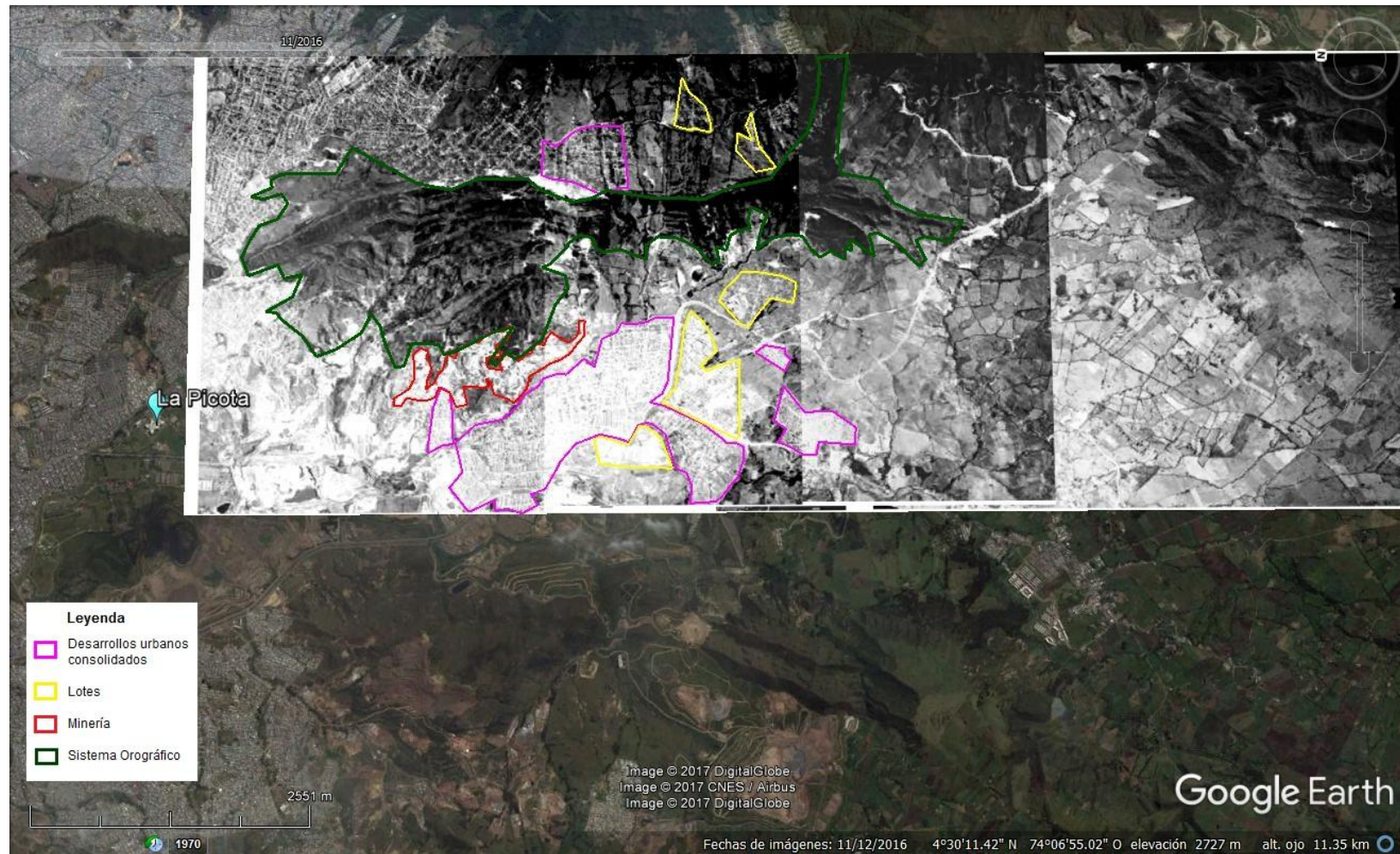
R. Anexo: Flujos Interfase Periurbana de Usme



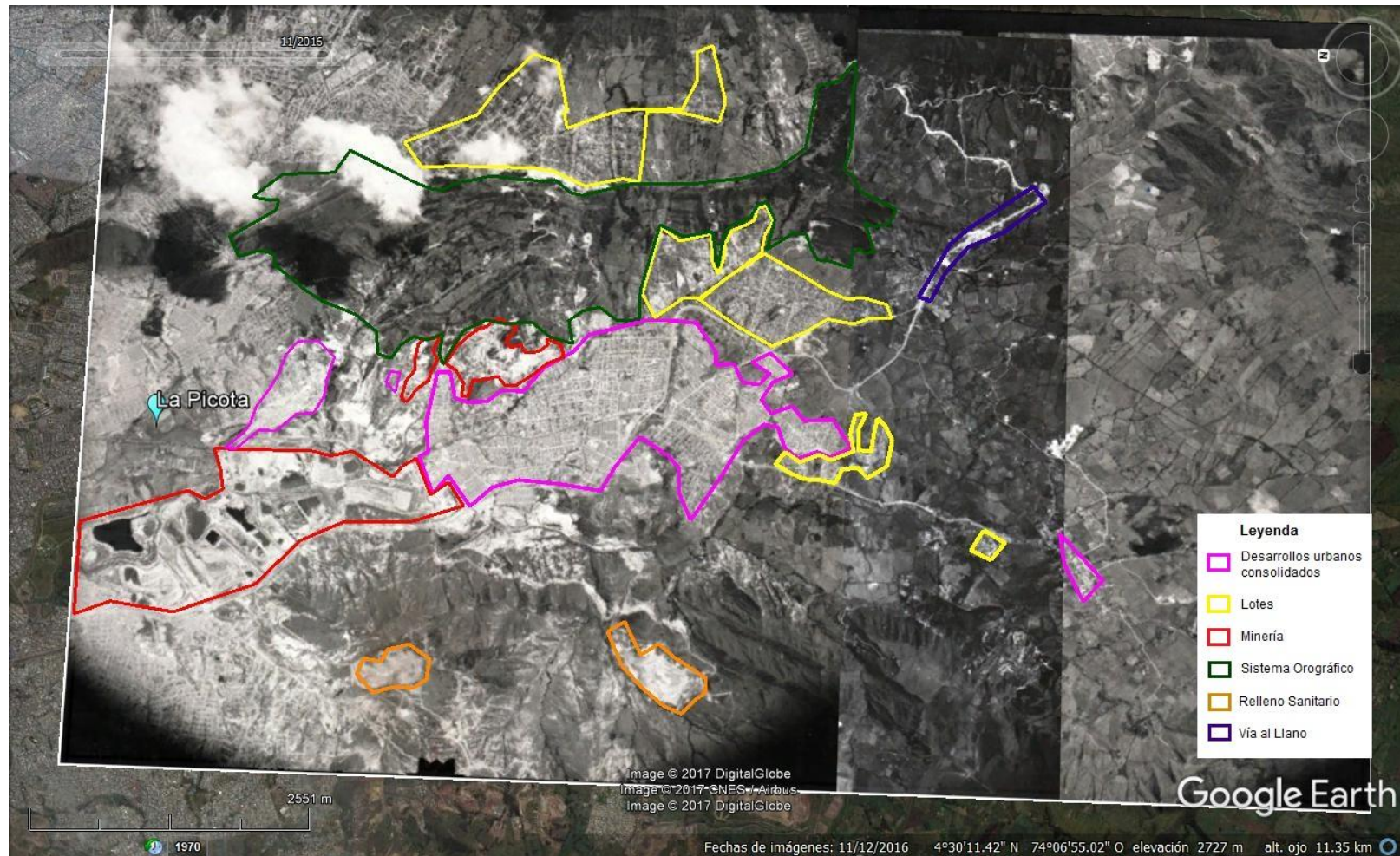
S. Anexo: Enfoque y alcance de las políticas espaciales y sectoriales. Realizado y modificado a partir de Dávila (2003)

Políticas	Enfoque	Factor	Causas	Efectos	Medidas
1. Espacial	Explícito: directamente sobre la IPU	Cambios en el uso del suelo	Infraestructura vial Urbanización Explotación forestal y agrícola	Pérdida tierras de interés agrícola o ecológico Especulación inmobiliaria	Concertación con las comunidades Planificación participativa
		Uso de recursos renovables y no renovables	Captación, tratamiento y distribución de agua Explotaciones mineras Deforestación	Agotamiento, desabastecimiento y privatización de acuíferos Pérdida de suelos Pérdida de cobertura vegetal	Políticas locales y regionales de protección
		Contaminación y generación de desechos	Vertimientos sanitarios Rellenos	Contaminación del agua y suelo Enfermedades	Concienciación Control ambiental
		Integración Espacial y Equidad Ambiental	Falta de acceso a vivienda y tierras Pocos vínculos regionales	Ocupación de áreas susceptibles a riesgos naturales por parte de la población más pobre Ocupación de las mejores tierras por parte de especuladores Falta de integración regional	Reconocimiento de la desigualdad espacial e incorporación en la planificación territorial Incorporación de zonas marginadas Mayor atención riesgos naturales
		Descentralización	Administración local directa de los recursos y funciones Administración local precaria vs. Administración privada macro fuerte	Mayor control sobre la gestión de recursos Apropiación privada de suelos y recursos Expulsión de agricultores	Políticas, planes y proyectos participativos
2. Sectorial	No tienen dimensión espacial (impactos no intencionales, incluye políticas macroeconómicas)	Transporte	Construcción de infraestructura vial que no fortalece el transporte público ni mejorar el acceso a los habitantes locales	Dstrucción directa o indirecta de hábitats protegidos y tierras agrícolas Conversión de tierras adyacentes a usos urbanos Contaminación del aire Uso del transporte individual	Participación de las comunidades en la planificación de infraestructura
		Energía	Aumento de la demanda energética	Contaminación por emisiones	Control de emisiones
		Agricultura	Liberalización de mercados Agricultura para exportación	Debilitamiento de la agricultura y mercados locales	Agricultura orgánica y urbana Cooperativas
		Recursos naturales y servicios ambientales	Explotación y contaminación	Menos acceso de las poblaciones pobres a los servicios y recursos ambientales Disminución del turismo como fuente alternativa de ingresos	Protección de bosques y fuentes de agua Regulación de la actividad minera

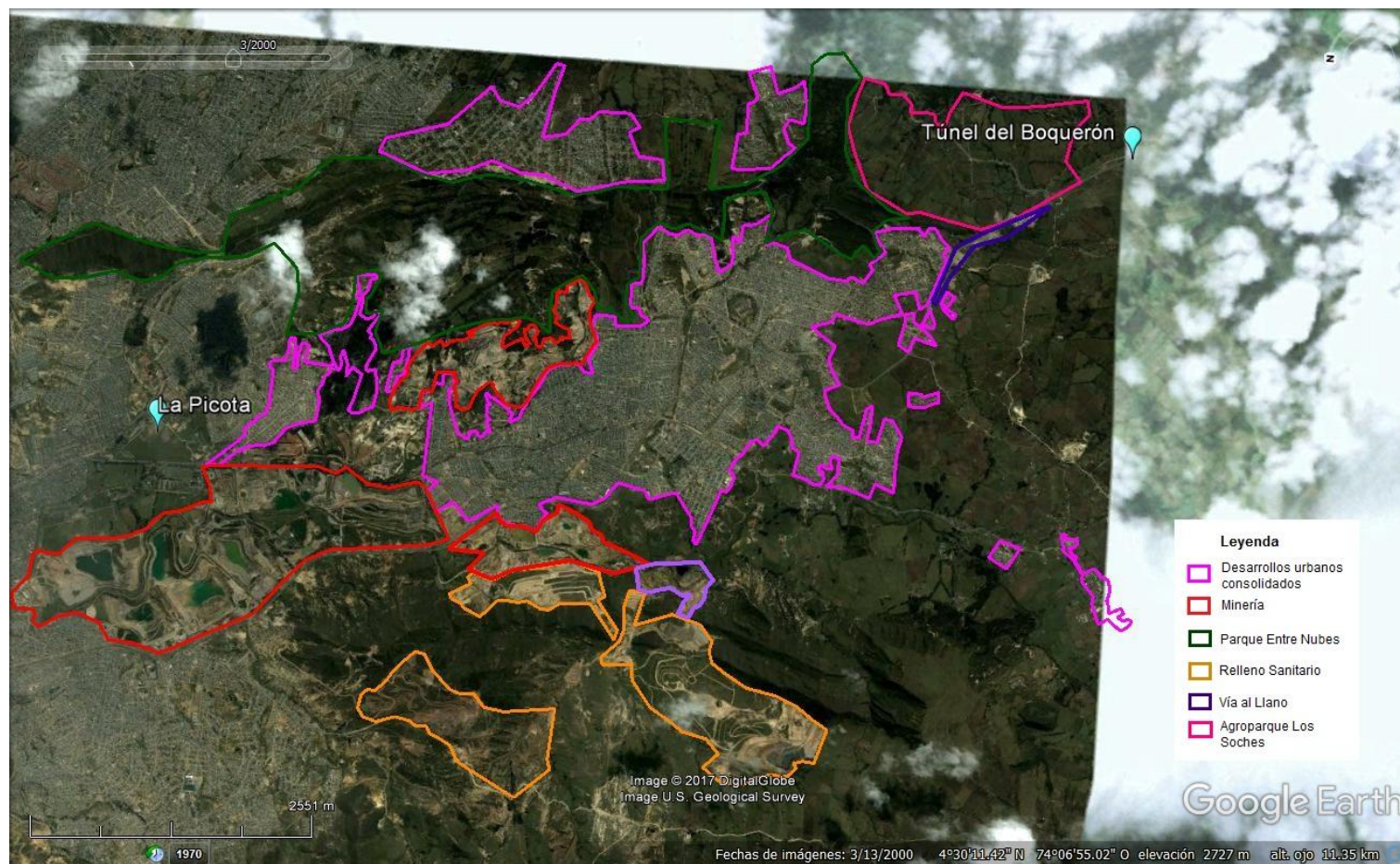
T. Anexo: Usos del suelo Usme 1987



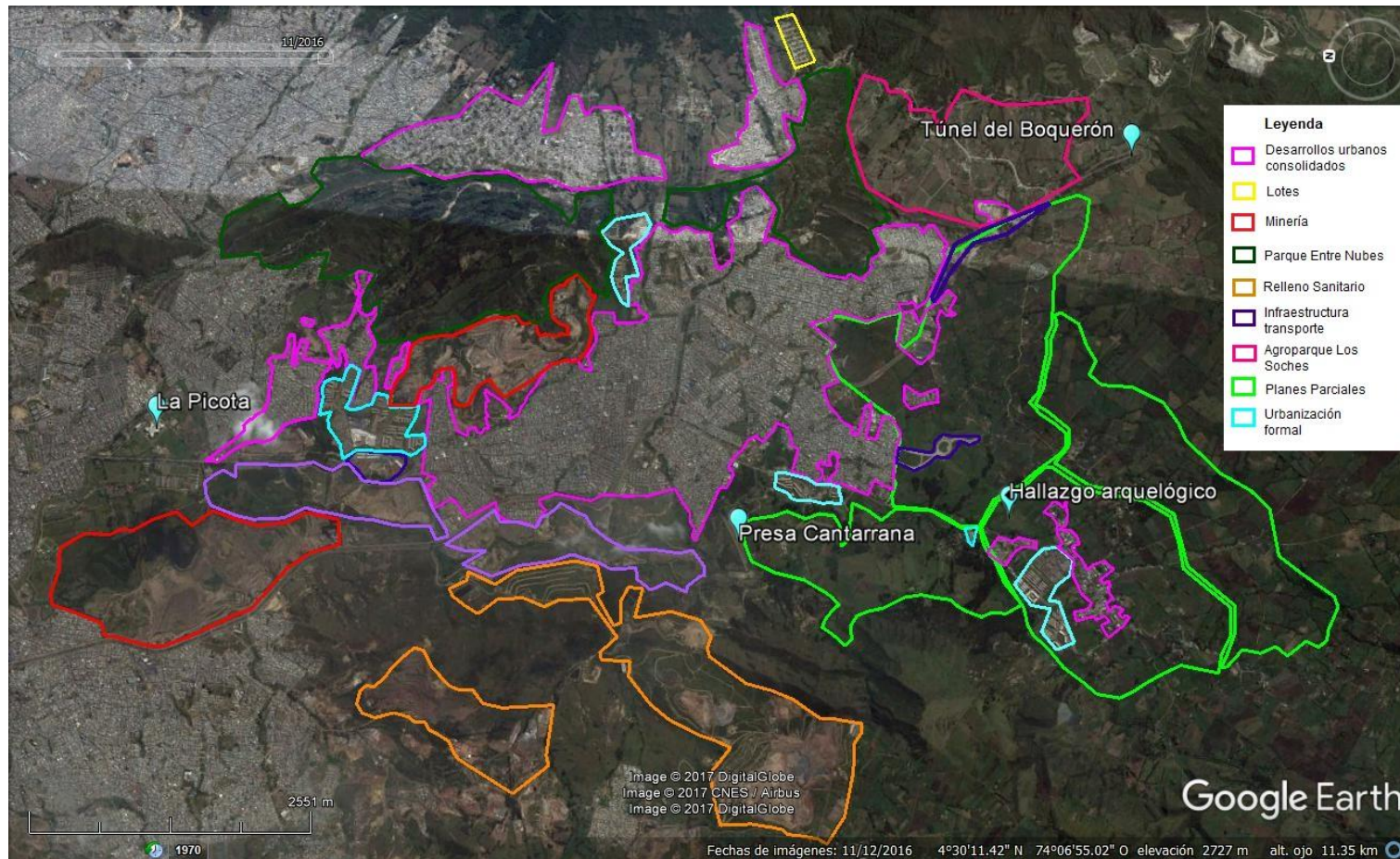
U. Anexo: Usos del suelo Usme 1991



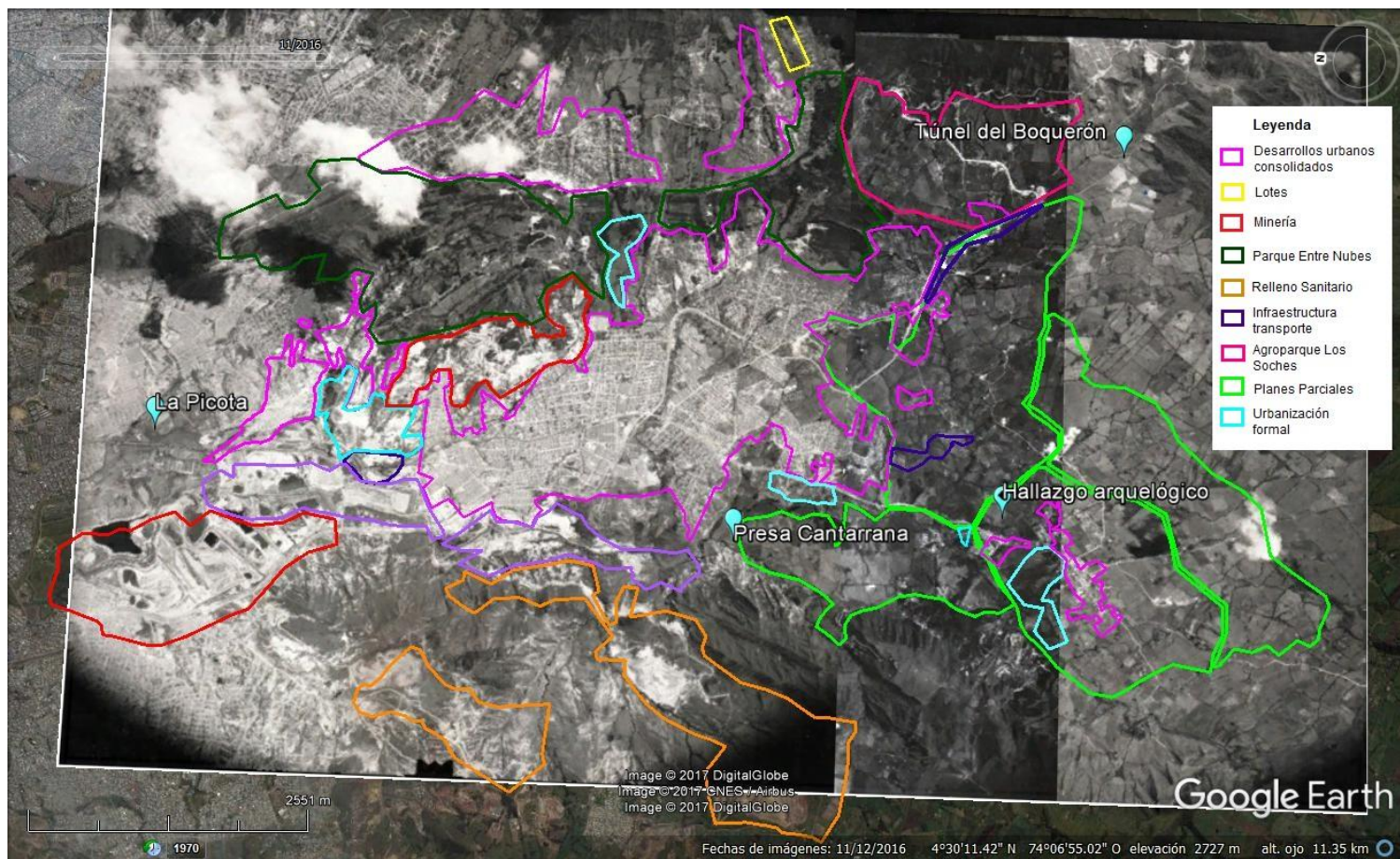
V. Anexo: Usos del suelo Usme 2000



W. Anexo: Usos del suelo Usme 2016



X. Anexo: Comparación usos del suelo Usme 1991 y 2016



Y. Anexo: Comparación paisaje periurbano de Usme 1990 y 2017



Z. Anexo: Enfoques de planificación para la IPU

Enfoques de planificación para la IPU



Los niveles pueden o no corresponder a jurisdicciones gubernamentales. A partir de Allen (2003a)



1. Concienciación, movilización, creación de capacidades, planificación de acciones a pequeña escala.



2. Concienciación y planificación paso a paso por medio de participación pública.



3. Vinculación de las iniciativas comunitarias/subregionales. Adaptación de las prioridades departamentales y municipales a la planificación regional. Orientar las iniciativas comunitarias hacia el desarrollo sostenible a escala regional.



AA. Anexo: Formato entrevista semiestructurada

1. ¿Qué vinculación tiene con la localidad?
2. ¿Cuál cree que ha sido el factor que más cambios ha generado en el paisaje de Usme?
3. ¿Cuál cree que ha sido la influencia de la vía al Llano en la expansión urbana?
4. ¿Qué transformaciones bruscas ha visto en el paisaje en los últimos años?
5. ¿Qué opina sobre el proyecto Operación Estratégica Nuevo Usme?
6. ¿Qué consecuencias sociales y ecológicas tiene este proyecto?
7. ¿Qué acciones gubernamentales, institucionales, distritales han sido realmente efectivas en la mejora de la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas en Usme?
8. ¿Cómo considera el papel de la participación de la comunidad?
9. ¿Qué elementos del paisaje cree que han desaparecido, surgido o están amenazados?
10. ¿Cuál es la visión que tienen los habitantes rurales (urbanos) acerca del paisaje de Usme?
11. ¿Qué es lo más representativo del paisaje de Usme?
12. ¿Cuál es la visión de los habitantes urbanos como de los rurales?
13. ¿Cuál es la visión a futuro de lo ambiental en Usme?
14. ¿Cómo conciben la calidad de vida desde su cotidianidad?
15. ¿Qué visión o percepción mutua tienen los habitantes urbanos de los rurales y viceversa?
16. ¿Qué le gusta del paisaje de Usme?

AB. Anexo: Cuestionario de percepción sobre la IPU de Usme

Cuestionario - Percepción sobre el paisaje de Usme

El objetivo del siguiente cuestionario es identificar cambios ambientales y la percepción que los habitantes de Usme tienen sobre el paisaje de la localidad.

1. ¿Qué elementos considera representativos del paisaje de Usme?
2. ¿Qué elementos del paisaje considera amenazados?
3. ¿Cuál cree que ha sido el factor que más cambios ha generado en el paisaje?
4. ¿Cuál cree que ha sido la influencia de la Nueva Vía al Llano en la localidad y sus habitantes?
5. ¿Conoce movimientos comunitarios que trabajen por el reconocimiento ambiental de la localidad?
6. ¿Conoce acerca del Hallazgo arqueológico de la localidad?
7. ¿Conoce acerca de la Operación Estratégica Nuevo Usme?
8. ¿Qué cambios cree que se seguirán generando en el paisaje?
9. ¿Qué sugeriría para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes urbanos y rurales de Usme desde lo ambiental?
10. ¿Qué le gusta de Usme?
11. Defina a Usme en una palabra

AC. Anexo: Taller cartografía participativa en la Interfase Periurbana de Usme

¿Qué había antes? ¿Qué hay ahora? ¿Cuál es la visión a futuro?

1. Objetivos

Identificar daños ambientales actuales y determinar cuáles han sido sus causas históricas.

2. Categorías de análisis:

A. Grupo adultos

- Actual: Percepción daños ambientales

¿Cuáles daños ambientales identifican en la localidad?

- Histórico:

¿Cómo era el barrio cuando llegaron a vivir aquí?

- Futuro: oportunidades y potencialidades

¿Cuál es la proyección que tienen de Usme?

B. Grupo niños

- ¿Qué conocen de la localidad de Usme?

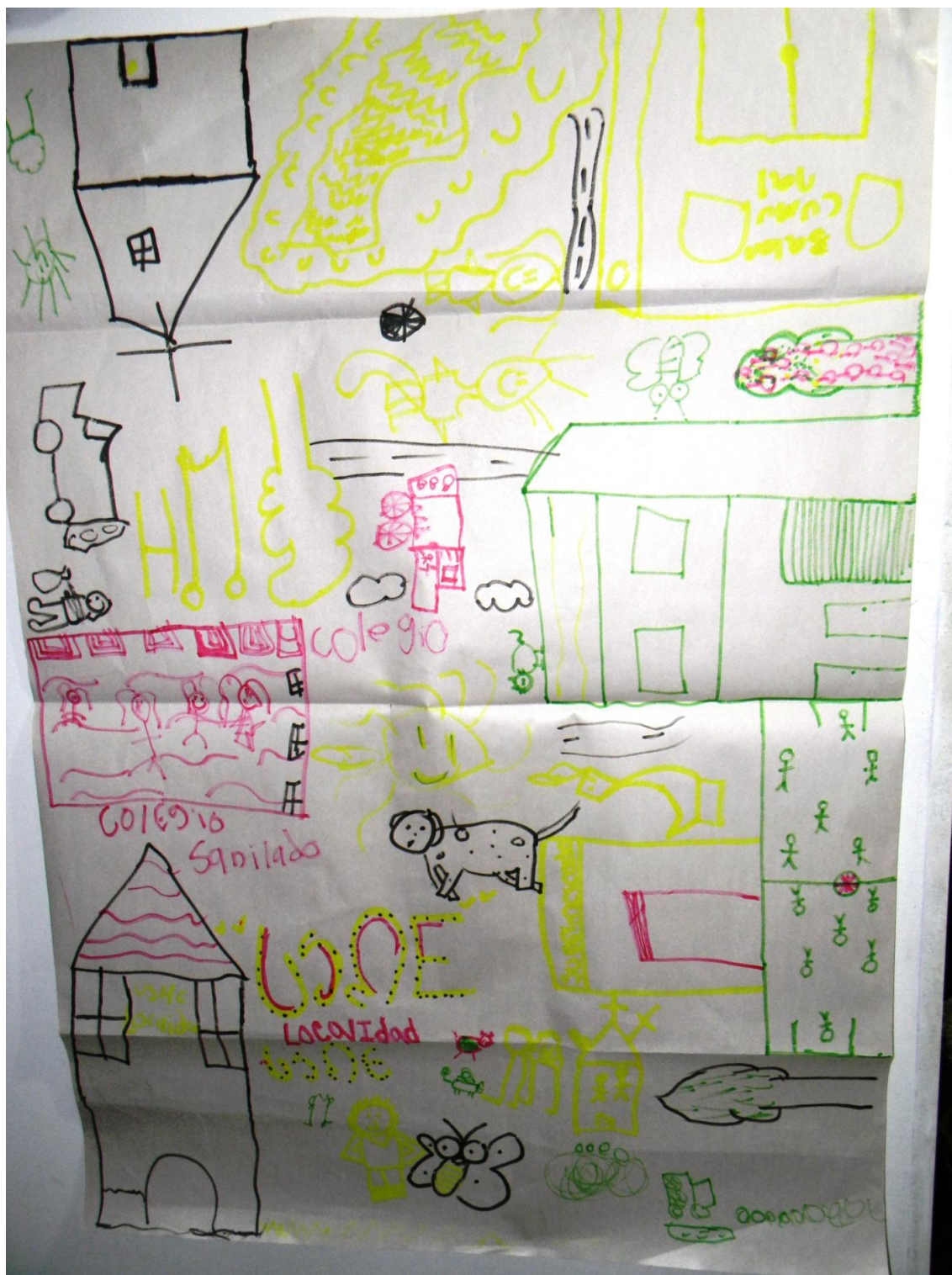
AD. Anexo: Taller de cartografía participativa



AE. Anexo: Taller de cartografía participativa



AF. Anexo: Representación de la localidad niños



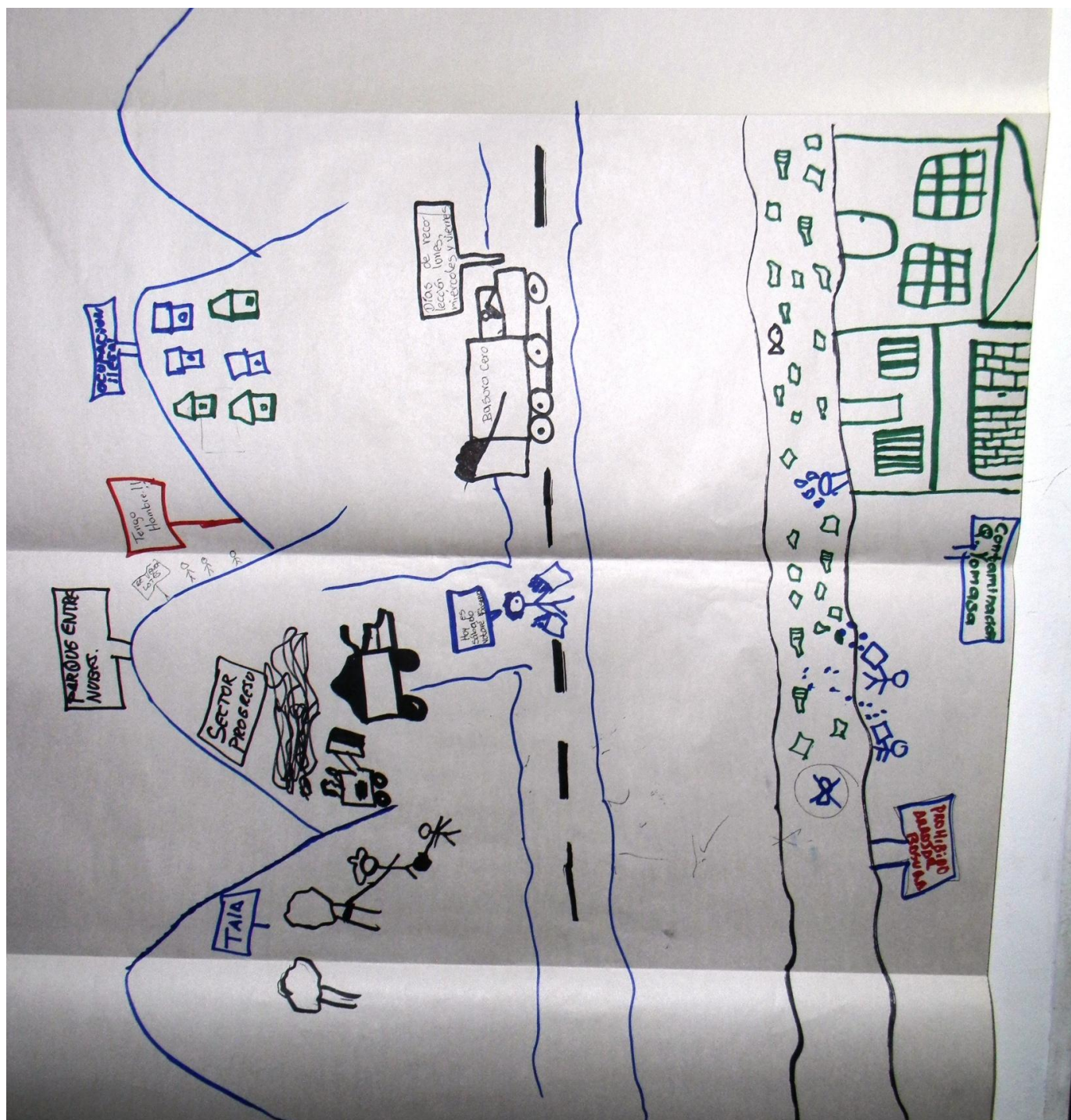
AG. Anexo: Representación de la localidad niños



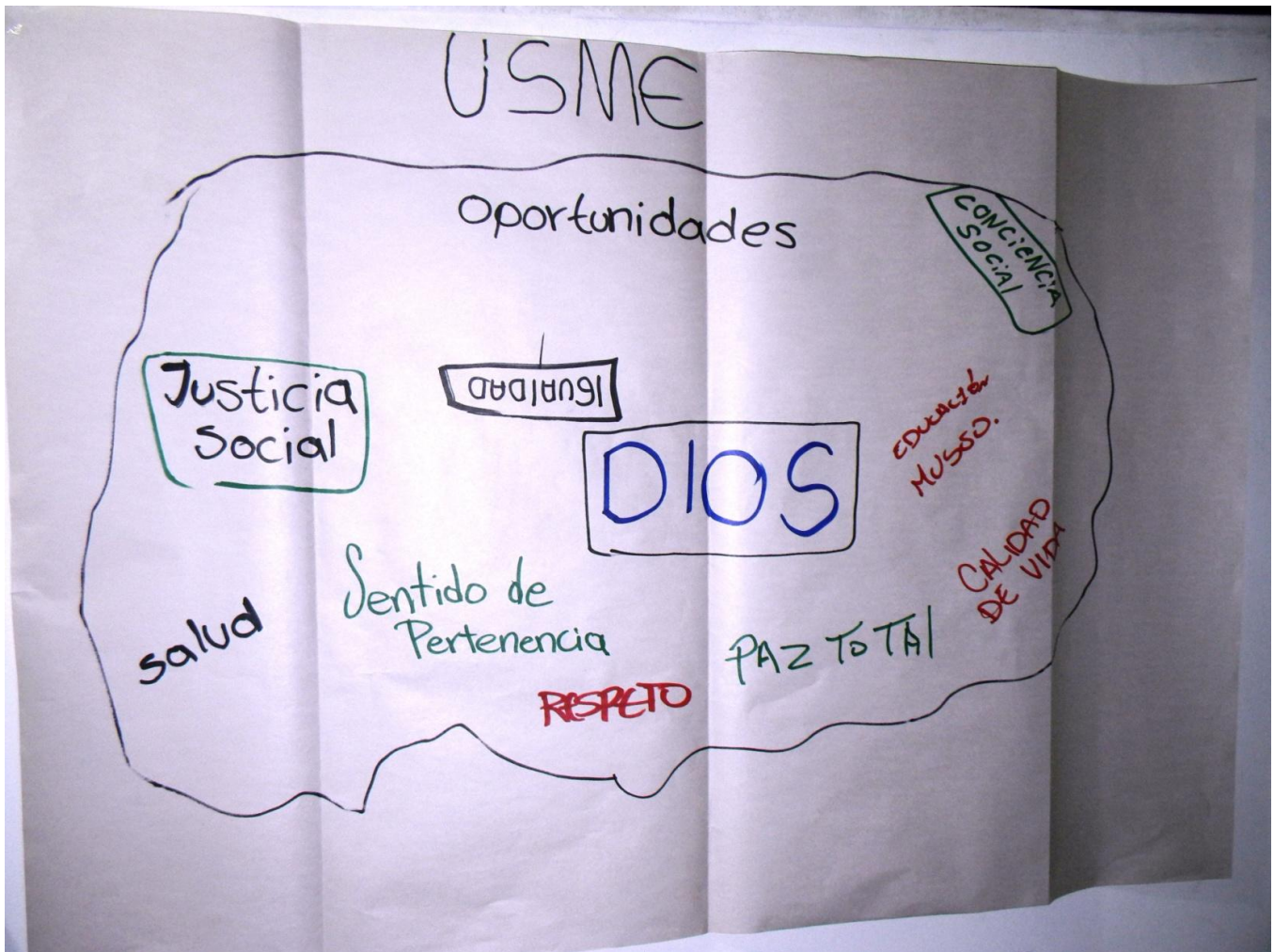
AH. Anexo: Representación del barrio en el pasado.



Al. Anexo: Representación afectaciones ambientales actuales en la localidad de Usme.



AJ. Anexo: Representación visión futura de la localidad de Usme.



AK. Anexo: Imaginarios Usme



AL. Anexo: Nueva vía al Llano. Vista de la Vereda el Uval y Barrios Portal del Divino y El Uval.



AM. Anexo: Ciudadela Bolonia y Entrenubes



AN. Anexo: Vista panorámica de Usme.



AO. Anexo: Barrio Tocaimita Oriental: susceptible a deslizamientos

